REVISTA VENEZOLANA DE ECONOMIA Y CIENCIAS SOCIALES

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Universidad Central de Venezuela

Tema central:

Resistencia popular y cambio político en América Latina

CARACAS, ENERO-ABRIL
1 / 2004

Universidad Central de Venezuela

RECTOR
Giuseppe Giannetto

VICERRECTOR ACADÉMICO
Ernesto González E.

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
Humberto García Larralde

SECRETARIA
Elizabeth Marval V.

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

DECANO
Víctor Rago

COORDINADORA ACADÉMICA
Flérida Rengifo

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Rafael Arias

COORDINADOR DE EXTENSIÓN
Iván Zambrano

COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN
José Rafael Zanoni

REVISTA VENEZOLANA DE
ECONOMÍA Y
CIENCIAS SOCIALES

Caracas, enero-abril
vol. 10, nº 1, 2004

REVISTA VENEZOLANA DE ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES
enero-abril, 2004
vol. 10, n° 1

Directora: Margarita López Maya

Comité Editorial: Catalina Banko, Enzo Del Bufalo, Edgardo Lander, Luis E. Lander, Dick Parker, Víctor Rago, Nydia Ruiz, Francisco Javier Velasco.

Comisión Asesora: Gioconda Espina (Venezuela), Daniel Mato (Venezuela), Haydée Ochoa (Venezuela), Sergio Chejfec (Venezuela), Clövis Cavalcanti (Brasil), Lidia Girola (México), Aníbal Quijano (Perú), Fernando Robles (Chile), Carlos Vilas (Argentina).

Secretario de Redacción: Ardly Oswaldo Crespo Díaz
Corrector Arte Final: Pedro Moreno

ISSN-1315-6411
Depósito Legal: 199502DF21

La *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* es una publicación cuatrimestral. Es una edición de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela.

Indizada en bases de datos: Clase, Redinse, Latindex, Base de Datos Cepal, Revencyt, Catálogo Biblioteca University of Texas at Austin UTNetCAT y Catálogo Biblioteca E. Peltzer BCV, entre otras.

Fundada en 1958 como *Economía y Ciencias Sociales*, el actual nombre se adoptó en 1995.

Manuscritos, correspondencia, suscripciones, etc., deben dirigirse a:
Reveciso. Ciudad Universitaria, Edificio Faces-UCV, Piso 6, Oficina n° 635, o Módulo UCV, Código Postal 1053-A, Caracas, Venezuela.

Canje al Centro de Documentación "Max Flores Díaz", apdo. 47703,
Los Chaguaramos, Caracas 1041. Dirección electrónica: cdmf@yahoo.com

Teléfono Fax: 605-26-29. Dirección electrónica: reveciso@faces.ucv.ve

Versión electrónica: www.revele.com.ve; www.ucv.ve/humanitas.htm; www.clacso.edu.ar y www.ucv.ve/saidainforma.

Expresamos nuestro agradecimiento al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la UCV y al Fonacit por su apoyo financiero de esta edición

---

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2004, vol.10, nº 1 (ener.-abr.), pp. 5-6

ÍNDICE

EDITORIAL 7

ARTÍCULOS

Hugo Chávez y Alberto Fujimori: análisis comparativo
de dos variantes de populismo 13
Steve Ellner

¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Entre categorización y estigma.
¿Cómo gestionan sus identidades los venezolanos damnificados? 39
Sandrine Revet

Estados Unidos y la Doctrina Bush en política exterior.
Visión desde América Latina 59
Franklin Molina

TEMA CENTRAL
RESISTENCIA POPULAR Y CAMBIO POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA

El laberinto de América Latina: ¿hay otras salidas? 75
Aníbal Quijano

Exclusión y resistencia: sendas mexicanas 99
Raquel Sosa Elízaga

El silencio como forma de resistencia civil. Análisis del discurso
del EZLN, 1997- 2001 109
Luisa Ortiz Pérez

Protesta popular y cooptación de masas en Guatemala 129
Carlos Figueroa Ibarra

Las luchas sociales en Colombia: resistencia frente a la guerra 155
Martha Cecilia García Velandia

Movimiento indígena, democracia, Estado
y plurinacionalidad en Ecuador 175
Pablo Dávalos

Movimientos sociales y cambio político en Bolivia 203
Javier Sanjinés C.

La CUT en la encrucijada: impactos del neoliberalismo
en el movimiento sindical combativo brasileño 219
Andréia Galvão

Más allá de la crisis. Acerca de la naturaleza del cambio
político en Argentina 241
Ana Cecilia Dinerstein

ÍNDICE ACUMULADO 2003 271

RESÚMENES/ABSTRACTS 273

COLABORADORES 283

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 287

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2004, vol. 10, nº 1 (ener-abr.), pp. 7-9

EDITORIAL

Con este número arribamos a los diez años de publicación ininterrumpida. Para el Comité Editorial este acontecimiento es motivo de orgullo y congratulación, pues representa el resultado más claro de un esfuerzo que ha sido continuo por parte tanto del colectivo como de la institución misma de Faces. Ciertamente, no ha sido un camino suave. Hemos tenido tropiezos, dificultades y equivocaciones. Aún no nos sentimos totalmente consolidados y sabemos que podemos aprender y mejorar más. Hoy por hoy, la revista se ha convertido en una referencia estable entre académicos y estudiantes de Venezuela, de América Latina y aun de otros países, que tienen interés o buscan comprender nuestros procesos sociales. En estos diez años, con nuestra sociedad envuelta en procesos de crisis y transformación profunda, y más recientemente en medio de una brutal polarización social y política, y con innumerables obstáculos materiales, hemos logrado seguir saliendo puntualmente y presentando trabajos con el necesario rigor académico. Tal y como nosotros lo vemos, este aniversario es también un logro institucional, pues autoridades de la Facultad a lo largo de estos años han apoyado continuamente a la revista, haciendo posible en algunos momentos críticos su supervivencia. Muchos docentes-investigadores también nos han sido fieles. En fin, cumplimos diez años gracias al esfuerzo de muchos. Desde este espacio expresamos nuestro agradecimiento a miembros del Comité Editorial que estuvieron con nosotros en el pasado, asesores nacionales e internacionales, traductores, colaboradores, el equipo de edición, nuestro impresor y autoridades decanales. También es propicio el momento para desearnos a nosotros mismos los mejores deseos para llegar a alcanzar una mayor solidez en el futuro, lo cual en mucho dependerá del compromiso de docentes-investigadores que han de relevarnos en esta importante tarea, así como de autoridades de Faces por venir.

A sabiendas de la cercanía de este aniversario, este año hemos planificado con especial atención los temas centrales. Para este primer número del año 2004 presentamos uno dedicado a los procesos de "Resistencia popular y cambio político en América Latina". Lo hemos estado preparando desde bastante tiempo atrás, sensibilizados por la creciente ola de revueltas populares y sacudidas políticas de los años 90 y principios de este siglo. Desde Venezuela este es un tema de especial interés, habida cuenta que uno de los acontecimientos más dramáticos y tempranos de resistencia a los planes de reestructuración económica de orientación neoliberal del planeta se dio justamente acá en 1989, el tristemente célebre "Caracazo".

Como ha señalado el profesor Aníbal Quijano, quien abre el tema con un estudio panorámico de América Latina, son ya tres décadas de desenvolvimiento de gobiernos neoliberales en la región. Los resultados están a la vista: nunca la región fue más homogénea en procesos de retroceso económico y

social. En los años más recientes, también se ha apoderado de la región, una galopante inestabilidad política, a la que se añade, desde el contexto internacional, la emergencia creciente de EEUU como imperio militar que amenaza la soberanía e integridad territorial del resto de las naciones del continente. Una perspectiva en verdad que deja poco lugar al optimismo.

Ante esta situación, que llega a ser en muchos aspectos límite –de ello darán cuenta varios artículos de este tema central–, desde hace ya algunos años han comenzado a emerger las luchas de resistencia y cambio. Fragmentadas y dispersas en una primera fase que abarcaría los años 80 y principios de los 90, desde mediados de esa década –es de recordar como momento de inflexión la irrupción en Chiapas del movimiento zapatista en enero de 1994– los sectores excluidos comenzaron a hacerse visibles en una lucha cada mes más densa y compleja. Con un mensaje que crecientemente trasciende el rechazo a las políticas neoliberales para pronunciarse por propuestas alternativas que contemplan la "dignidad" y el respeto a los derechos humanos, una convivencia pacífica y de respeto a la diversidad cultural y ecológica del planeta, se entró a partir de entonces en una espiral movilizadora que poco a poco ha venido ampliando objetivos y aliados. Hacia finales de la década, las luchas locales o nacionales de resistencia se empalman con las movilizaciones antiglobalizadoras que empezaron a hacerse visibles en el escenario internacional durante la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Seattle en 1999. Al cerrar el siglo XX se despertaba la empecinada esperanza de un mundo mejor.

Para revisar estos procesos de movilización popular que han venido desarrollándose en las distintas sociedades latinoamericanas, y establecer sus impactos sobre las relaciones del poder en cada una de las naciones, hemos contado con la colaboración de un grupo altamente calificado para la materia. Abrimos, como ya se señaló, con nuestro profesor y asesor internacional, Aníbal Quijano, quien da una precisa visión general de los estragos del neoliberalismo y las formas que han venido tomando las luchas que se le oponen, así como las opciones políticas que actualmente se debaten. Con este trabajo, que proporciona las referencias básicas de lo que ocurre en la región, seguimos luego con análisis de país a país. Se comienza con México (con artículos de Raquel Sosa Elízaga y Luisa Ortiz Pérez), se sigue con Guatemala (Carlos Figueroa Ibarra), se toma luego la ruta de los fuertemente convulsionados países andinos: Colombia, Ecuador y Bolivia (Martha Cecilia García Velandia, Pablo Dávalos y Javier Sanjinés respectivamente). Se cierra con un trabajo sobre la Central Única de Trabajadores del Brasil (Andréia Galvão) y otro sobre el singular caso de Argentina (Ana Dinerstein). Nuestros lectores habrán obtenido al final del recorrido un mapa con las coordenadas principales de la situación sociopolítica de la región.

En nuestra sección de artículos abrimos con un trabajo del profesor Steve Ellner, de la Universidad de Oriente, que retoma el tema del populismo examinado en nuestra revista el año pasado en un trabajo de Carlos Vilas, y en 2001

en otro elaborado por Dick Parker. Este tema del populismo ha recibido mucha atención académica en los últimos años, por ello resulta pertinente presentar ahora este estudio que es un análisis comparativo entre Alberto Fujimori y Hugo Chávez Frías. Es sabido que varios analistas en distintos momentos han considerado a estos líderes y sus estilos de gobierno como similares o análogos. Lo interesante del examen de Ellner, sin embargo, son más bien las diferencias. Este autor observa en el liderazgo y gobierno de Chávez elementos del populismo clásico, que lo dota de mayor habilidad política para organizar sus bases y diseñar estrategias que le den una mayor perdurabilidad política, en contraste con los liderazgos efímeros de la mayoría de los populistas recientes.

Seguidamente presentamos un trabajo de Sandrine Revet, donde se examina el proceso de construcción de identidades por parte de los afectados por las inundaciones ocurridas en la cordillera y costa central de Venezuela en diciembre de 1999. Es un trabajo sugestivo, que registra e interpreta los términos con los cuales o bien fueron percibidos o bien fueron identificándose los individuos, familias y grupos sociales que atravesaron esta dramática experiencia. El artículo es un primer resultado de una investigación de dos años con familias del estado Vargas, que afectadas por los deslaves fueron trasladadas a Villa Baralt en el estado Zulia.

Finalmente, está el artículo del profesor Franklin Molina, de la Escuela de Estudios Internacionales de nuestra Facultad. Su artículo caracteriza la diplomacia de la Casa Blanca orientada por la Doctrina Bush, y sus repercusiones tanto para el Consejo de Seguridad de la ONU, como en la OTAN y la Unión Europea. Asimismo, examina la visión actual de Washington sobre la América Latina y las relaciones que de ella se derivan.

Como es costumbre, al final se insertan la hoja de suscripción, la lista de colaboradores y resúmenes, y por ser número inicial de año, el índice acumulado de 2003. El Comité Editorial los invita a estar atentos a algunas actividades extra que estaremos organizando a propósito de nuestro aniversario, y los anima a seguir colaborando con nosotros a los fines de mantener abierto el debate de ideas que nuestra sociedad tanto necesita.

ARTÍCULOS

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2004, vol. 10, n° 1, (ener.-abr.), pp. 13-37

HUGO CHÁVEZ Y ALBERTO FUJIMORI: ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS VARIANTES DE POPULISMO

Steve Ellner

Durante los años 90, el Perú de Alberto Fujimori y la Argentina de Carlos Menem fueron los dos principales éxitos políticos del populismo en América Latina. Ambos líderes pudieron concluir dos períodos presidenciales sucesivos, logro único en este continente, y superar la inestabilidad política que había plagado a sus respectivas naciones. Los analistas políticos que investigaron estos regímenes y otros contemporáneos concluyeron que el populismo latinoamericano hoy en día es lo suficientemente flexible y maleable como para adaptarse a un ambiente radicalmente diferente del que prevalecía en los años 30 y 40, cuando surgió como una fuerza importante. Algunos analistas le dieron el nombre de "neopopulismo" a esta novedosa variante de populismo en el contexto de la globalización y el auge de políticas neoliberales. Estos escritores destacaron dos características sobresalientes del neopopulismo que contrastaban con el "populismo clásico" de los años 30 y 40: su base social, formada por miembros de la economía informal, en vez de la clase obrera organizada; y la implementación de políticas neoliberales, en vez del modelo de sustitución de importaciones y de intervencionismo del Estado en la economía (Weyland, 1996; Roberts, 1995).

Sin embargo, desde la perspectiva de los primeros años del siglo XXI, el neopopulismo aparece menos viable políticamente y menos útil como categoría analítica que 10 años antes. Al contrario del populismo clásico de medio siglo atrás, el neopopulismo no ha podido producir dirigentes y movimientos que sirvan de punto de referencia política en sus respectivas naciones durante un período significativo de tiempo. Así, el gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela y el de Fernando Collor de Mello en Brasil terminaron con su destitución, mientras que Carlos Salinas de Gortari tuvo que exiliarse poco después de dejar el poder en México. Posteriormente, Fujimori y Menem cayeron en desgracia a consecuencia de acusaciones de comportamiento antiético. Fujimori tuvo que renunciar y el candidato presidencial de su movimiento recibió un triste 1,3% de la votación en las elecciones de abril de 2001. La popularidad de Menem se redujo también a porcentajes de una sola cifra.

Poco después del inicio de la publicación de la literatura original sobre el neopopulismo, el dirigente populista de Venezuela Hugo Chávez fue electo Presidente, inyectándole nueva relevancia al fenómeno del populismo latinoamericano. Chávez –en contraste con Fujimori, Menem y otros neopopulistas– logró crear un movimiento que se identificaba con él y con los lemas, símbolos y metas que él adoptaba. Chávez fue comparado a menudo con Fujimori por los analistas y actores políticos, desde el ex presidente Clinton hasta los periodistas norteamericanos y venezolanos. La mayoría de estas comparaciones no académicas eran poco profundas, por cuanto se enfocaron solamente en la demagogia y las tendencias autoritarias. Pasaban por alto las características esenciales que tenían en común Chávez y Fujimori (aún más que Menem) y que los definían como populistas: atracción especial sobre los sectores marginales de la población (los que pertenecen a la economía informal), discurso antielitesco, imagen de una persona que no pertenecía a la política tradicional, y carisma. Este artículo intenta determinar si este denominador común incluía también las políticas, el discurso y los factores contextuales. Específicamente, propone una comparación sistemática de ambos dirigentes y de sus gobiernos para identificar semejanzas y posiciones antitéticas que puedan aclarar si el concepto neopopulista se puede aplicar al caso venezolano.

En un sentido más general, este artículo se dedica a examinar la proposición formulada por ciertos analistas políticos a mediados de los años 90, en el sentido de que unos cambios fundamentales en el continente han conducido a un sistema democrático de un tipo nuevo. Para este propósito, los analistas han desarrollado los modelos de "neopopulismo", "democracia delegativa" (O'Donnell, 1994), y "neopluralismo" (Oxhorn, 1998). Estos tres modelos coinciden en poner de relieve el surgimiento de Ejecutivos nacionales fuertes en el marco de un sistema democrático (llamado "hiperpresidencialismo") y el debilitamiento correspondiente de instituciones incluyendo el poder legislativo, el sistema judicial, los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil.

Cada modelo, y de igual forma sus componentes individuales, puede localizarse en algún punto de un espectro. En un extremo de éste se coloca la afirmación optimista de la eficiencia de los recientes jefes de Estado latinoamericanos y de la posibilidad de que sus movimientos permanezcan en los años venideros como puntos de referencia importantes en un marco democrático. Los analistas que afirman esto ponen de relieve la "creatividad" de los presidentes a la hora de enfrentar los desafíos de la globalización, el apoyo popular a sus políticas y las doctrinas adoptadas por ellos que sirven de antídoto al personalismo (Mettenheim y Malloy, 1998). Las políticas y las alianzas de clase que conducen a la inestabilidad y ponen en peligro las normas democráticas se colocan en el extremo opuesto del espectro. Según estas evaluaciones pesimistas, la nueva generación de presidentes incluye verdaderos caudillos que no tienen una sólida base de apoyo en su país. Además, sus tendencias

autoritarias amenazan con chocar con la comunidad internacional que, más que en el pasado, está comprometida con la defensa de la democracia.

El siguiente artículo localiza en este espectro las posiciones políticas, estrategias y apoyo de clase de los movimientos de Chávez y Fujimori. El objetivo prioritario es determinar si los dos regímenes son predominantemente personalistas y autoritarios, o si, al contrario, han adoptado estrategias y políticas que correspondan con su base social y representen nuevos modelos con posibilidades a largo plazo. Seguramente, la credibilidad de las pretensiones de Fujimori y Chávez de representar a los sectores marginales incide en la capacidad de ambos movimientos (independientemente de su duración en el poder) de mantener el apoyo de esta clase por un período significativo. Además, la novedad de los modelos enérgicamente defendidos por ambos dirigentes, y la habilidad de éstos para convencer a sus seguidores de que ellos representan una diferencia clara con el pasado, determina si los movimientos conservarán su cohesión y si sus activistas seguirán comprometidos con su causa por mucho tiempo.

El espectro pesimista-optimista

Los analistas políticos de los 90 coincidieron en que un nuevo tipo de democracia estaba surgiendo en América Latina, con Fujimori como ejemplo sobresaliente. Uno de los denominadores comunes de estos gobiernos era la adopción de políticas económicas neoliberales. Sin embargo, estos mismos analistas estaban en desacuerdo en cuanto al grado en que estos gobiernos eran democráticos y estables. Guillermo O'Donnell y otros insistían sobre el atraso y la falta de complejidad de las instituciones, y sobre la asunción desmesurada del poder por parte de los Ejecutivos nacionales. Atribuían este desequilibrio a factores estructurales y culturales, y advertían que el estancamiento político podía durar indefinidamente. Sobre todo, la legitimidad de estos regímenes estaba socavada por la ausencia de un mandato popular para implementar fórmulas neoliberales, que no tenían defensores entre los sectores organizados de estas naciones (O'Donnell, 1994; Oxhorn, 1998).

El punto de vista optimista de los cambios de régimen fue presentado en forma persuasiva por Kurt von Mettenheim y James Malloy. Elogiaron la "creatividad" de los dirigentes latinoamericanos que respondían audazmente a los imperativos de la globalización al aceptar el costo político de las políticas neoliberales, preservando a la vez la soberanía nacional y la democracia. En sus escritos de la misma orientación, Karen Remmer (1998) consideraba que las reformas neoliberales eran una estrategia política viable y no una imposición por parte del FMI o los tecnócratas gubernamentales, y que tampoco dependían de una usurpación de autoridad por parte de los Ejecutivos nacionales. Según Remmer los éxitos electorales de Menem, Fujimori y otros demostraban la validez de esta tesis. Finalmente, David Leaman (1999, 99-102) argumentaba que los dirigentes como Menem iban más allá del simple personalismo al

desarrollar una doctrina amplia que justificaba el neoliberalismo pero fundamentada en la tradición populista de transformación radical. Al mismo tiempo, criticaba a O'Donnell por poner demasiado énfasis en las prácticas antidemocráticas de las jóvenes democracias latinoamericanas.

El modelo de neopopulismo desarrollado por Kurt Weyland (1999, 190) y otros analistas puede ser ubicado entre los dos extremos. Por una parte, estos analistas reconocían la debilidad institucional de los regímenes neopopulistas y el conflicto entre las exigencias neoliberales y populistas. Por otra parte, Weyland elogiaba a los neopopulistas por su habilidad para forjar alianzas. Argumentaba que al ganarse un segmento amplio de las clases populares los neopopulistas lograban legitimidad para sus gobiernos y para las políticas neoliberales que implementaban. También afirmaba que el neopopulismo iba más allá de los argumentos retóricos y descansaba sobre una base material. Los sectores marginales de la población, habiendo sido perjudicados a consecuencia de las antiguas políticas de sustitución de importaciones, respondían positivamente al discurso neopopulista. Weyland concluyó aplaudiendo al neopopulismo por haberse enfrentado a intereses establecidos, por haber implementado políticas neoliberales difíciles pero necesarias, y, en el proceso, por haber fortalecido la democracia (Weyland, 1999, 190).

Fujimori y Chávez en perspectiva comparativa

Visión general

El fallido golpe de Estado de Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992 lo proyectó al centro del escenario político venezolano. Seguidamente, su Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) promovió una política de abstención electoral hasta abril de 1997, cuando cambió su nombre a Movimiento Quinta República (MVR) y presentó a Chávez como candidato presidencial para las elecciones de diciembre de 1998. Durante casi un año, Chávez quedó atrás en un campo abierto de candidatos, pero en el comienzo de 1998 se convirtió de forma inesperada en el candidato favorito según las encuestas. En respuesta, los dos partidos más importantes, Acción Democrática (AD) y Copei, dejaron de apoyar a sus propios candidatos con el fin de dar un espaldarazo al principal rival de Chávez. La polarización política también se manifestó en las elecciones presidenciales especiales que tuvieron lugar en julio de 2000 cuando la votación para Chávez subió de 56% a 60% mientras su rival principal recibía 38%. La polarización fue también evidente durante el golpe fallido de abril de 2002, el cual fue inicialmente apoyado por todos los partidos de la oposición, y en los meses sucesivos cuando concentraron sus esfuerzos para obligar a Chávez a renunciar por medios legales.

Fujimori también parecía una apuesta perdida de antemano en las elecciones de 1990. Fujimori atrajo a las clases populares oponiéndose al programa económico neoliberal de su principal rival, Mario Vargas Llosa. Al mismo tiem-

po, Fujimori vituperó en contra de los partidos políticos tradicionales del país. Para evitar tener que hacer concesiones a los partidos tradicionales que apoyaban a Vargas Llosa, Fujimori rehusó la oferta del conocido escritor de conceder la derrota por acuerdo mutuo. En 1992, los altos rangos militares colaboraron con Fujimori para llevar a cabo un autogolpe que suspendió el Congreso, la Corte Suprema y las garantías constitucionales. En respuesta al repudio internacional, Fujimori llamó a elecciones para una Constituyente que reemplazó la Constitución de 1979. Como en el caso de Chávez en 1999 y 2000, Fujimori enfrentó una oposición débil y triunfó en una serie de elecciones durante los años 90, incluyendo el referéndum por la Constitución en 1993 y las elecciones presidenciales en 1995. Tanto Vargas Llosa en 1990 como el candidato presidencial Javier Pérez de Cuéllar en 1995 eran de raza blanca e identificados en forma estrecha con la elite de la nación; ambos salieron del país después de su derrota electoral, privando así a la oposición de un dirigente extrapartido. La polarización política también caracterizó las elecciones presidenciales de 2000, cuando Fujimori y Alejandro Toledo monopolizaron los resultados electorales. En los meses siguientes, Toledo representó a la oposición entera al acusar al gobierno de fraude electoral, al oponerse a la toma de posesión presidencial de Fujimori, y al exigir la destitución de Montesinos. En noviembre de 2000, Fujimori renunció durante un viaje a Japón.

El ascenso al poder

Varios acontecimientos en Venezuela al comienzo de los años 70 explican el surgimiento de un grupo de oficiales de rango medio encabezados por Chávez y comprometidos con el activismo político y con cambios radicales. En primer lugar, con el apaciguamiento de las actividades guerrilleras en los años 60, el gobierno implementó el Plan Andrés Bello que facilitaba la inscripción de jóvenes oficiales en las universidades venezolanas como una alternativa a las instituciones militares, incluyendo la Escuela de las Américas. La experiencia de interactuar con estudiantes universitarios y de escoger materias en ciencias sociales politizó a muchos oficiales en sus años formativos. Un segundo factor, aunque menos importante, fue la estrategia seguida en los años 60 por un grupo de dirigentes guerrilleros encabezados por Douglas Bravo, que consistía en acometer trabajo político en las Fuerzas Armadas para ganar jóvenes oficiales a la causa revolucionaria (Garrido, 1999, 8-18). Un tercer factor para explicar la radicalización fue la experiencia del grupo de Chávez dentro de las Fuerzas Armadas al organizar un movimiento clandestino en 1982 (MBR-200), y el intento de golpe en 1992. Este prolongado esfuerzo de organización entre los oficiales de rango medio no tenía precedente en América Latina y sirvió para reforzar el compromiso a largo plazo de los originales seguidores de Chávez (Chávez, 1998, 123-127).

En las elecciones de 1990, Fujimori también atrajo a las clases populares al llamar la atención de su posición como "outsider" y otras cualidades contrarias a las de la clase política, que era predominantemente blanca, próspera, enve-

jecida y limeña. De hecho, Fujimori se veía más ajeno a la elite política tradicional que cualquier otro neopopulista latinoamericano. Fujimori no se presentó como el candidato de un partido político con apoyo de las masas y con una influencia dominante en el movimiento sindical (como lo hizo Menem), no estaba apoyado por un grupo mediático (como era el caso de Collor de Mello), ni contaba con organizaciones bien establecidas a escala regional o con poderosos intereses económicos.

Sin embargo, había más razones para considerar a Chávez un "outsider" que Fujimori, quien era ajeno a la elite desde un punto de vista étnico y político, pero no socioeconómico. Fujimori y sus padres antes de él habían tenido éxito en sus profesiones respectivas, en contraste con Chávez que había llegado a los rangos medios del Ejército un poco antes del golpe de 1992, y luego vio su carrera militar terminada. Los rasgos físicos de Chávez, su personalidad y su estatus social estaban más acordes con los de las clases populares que el caso de los líderes populistas desde Perón y Haya de la Torre hasta Fujimori, que tenían sus raíces en las clases media y media alta.

Las candidaturas presidenciales de Fujimori y Chávez desataron una polarización política, pero el proceso fue más intenso en Venezuela. Chávez asustó a la elite por su pasado como rebelde militar y por los planteamientos radicales de su candidatura. Muchos miembros de la clase política peruana se sintieron menos amenazados por Fujimori. De hecho, los líderes del partido APRA decidieron apoyar su candidatura en la segunda vuelta de las elecciones de 1990, pensando que podrían tener influencia sobre su gobierno debido a su falta de experiencia política.

Estas trayectorias diferentes en el momento en que Fujimori y Chávez llegaron al poder son significativas. Sustentan la tesis según la cual el movimiento político de Fujimori era más personalista que el de Chávez al momento de sus respectivas llegadas al poder. Las experiencias compartidas por los seguidores de Chávez durante un período de 20 años, su mayor compromiso hacia cambios de gran alcance y la mayor polarización en Venezuela a partir de 1998 llevaron al surgimiento de un movimiento político con superior capacidad para durar y con sentido de identidad propia. En estos aspectos, el *chavismo* se parece más al populismo clásico de los años 30 y 40 que al fenómeno populista de corta duración de los años 90.

Discurso y estilo

Algunas características comunes del discurso de Chávez y Fujimori caben en la rúbrica del populismo latinoamericano moderno. Ambos vituperaban en contra de la "elite", específicamente la clase política. Además, captaron los sectores marginales de la población, que los políticos tradicionales habían en gran parte ignorado en su discurso. Ambos abogaban por la "democracia participativa" como un correctivo al poder excesivo de las elites de los partidos

políticos, que no habían sabido representar los intereses populares. Fujimori encarnaba ciertas cualidades con las cuales se identificaron las clases populares, en su inmensa mayoría de origen indígena. Además, Fujimori se aprovechó de su imagen (y de la de sus padres) de profesional levantado por sus propios esfuerzos para ganar la simpatía de los miembros de la economía informal, quienes se veían a sí mismos como "independientes" que no gozaban del apoyo de las instituciones del Estado ni de las elites económicas. Chávez, por su parte, enfatizaba en sus rasgos y sus antepasados indígena y negro, y al mismo tiempo usaba el término de "soberanos" al referirse a la gran mayoría de la población en una forma que evocaba la imagen de "las masas".

A pesar de sus temas comunes, algunos aspectos del discurso adoptado por Fujimori y Chávez diferían de forma fundamental. Más que todo, Fujimori defendía una visión tecnocrática e hizo hincapié en: trabajo duro, iniciativa individual, honestidad y capacidad, valores asociados con su origen japonés. La preferencia de Fujimori por las nociones tecnocráticas era consistente con su extrema retórica antipolítica, que se reflejaba en su falta de interés en construir un partido político o en promover movimientos sociales como sustituto al moribundo sistema de partidos. Otro aspecto del discurso de Fujimori que no tenía equivalente en el movimiento chavista era su determinación para extirpar el terrorismo y su firme apoyo a la pena de muerte (que fue incorporada en la Constitución de 1993). Como es común entre los dictadores latinoamericanos, Fujimori glorificaba megaproyectos nacionales (como hizo Chávez también) y enfatizaba en el papel de la tecnología y de las inversiones privadas.

El discurso de Chávez, más que el de Fujimori, comunicaba la noción que su gobierno estaba más preocupado por el bienestar de las clases populares que por el de otros sectores. No solamente afirmaba que los pobres necesitaban su ayuda y atención más que los demás sectores, sino que veía a veces las relaciones de clase como una confrontación de intereses (*zero-sum game*). Además, los símbolos y lemas tecnocráticos, que atrajeron más que todo a la clase media, estaban ausentes del discurso de Chávez. En contraste con la fe de Fujimori en el papel constructivo de las inversiones privadas, Chávez atacaba frecuentemente el neoliberalismo, cuya aceptación en Venezuela se correlacionaba con niveles de ingresos y posiciones de privilegio (Roberts, 2003, 64). Mientras Fujimori ponía énfasis en la guerra contra el terrorismo, Chávez ganaba apoyo popular al declarar que nunca le daría al Ejército la orden de "dispararle al pueblo". De hecho, afirmaba que el golpe de 1992 representaba una reacción a la experiencia traumática de los disturbios masivos de la semana del 27 de febrero de 1989, cuando los soldados mataron a centenares de civiles durante el denominado "Caracazo". Finalmente, más que Fujimori, Chávez se veía a sí mismo como perteneciendo al "pueblo", relación que describía en términos metafóricos como la de "un pez en el agua". Para resumir, el discurso de Chávez estaba más dirigido a los sectores menos privilegiados de la población, que llegaron a representar su base social de apoyo exclusiva.

Tendencias autoritarias y comportamiento antiético

A mediados de los años 90, al momento del inicio de la literatura sobre el neopopulismo, el régimen de Fujimori parecía cumplir con los requisitos mínimos para ser considerado democrático. Las acusaciones de violación de los derechos humanos se concentraban generalmente en la represión "de baja intensidad". Estos "trucos sucios" incluían la infiltración de las manifestaciones de los candidatos de oposición, la amenaza de cobrar impuestos atrasados para presionar a los medios de comunicación social y el uso de tabloides sensacionalistas ligados con el gobierno para desacreditar a sus adversarios. Además, los analistas consideraban a Fujimori menos corrupto que sus equivalentes neopopulistas en otros países, ya que su mayor control del Estado supuestamente obvió la necesidad de obtener dinero con el fin de financiar estructuras paralelas sin estatus oficial (Weyland, 1998, 121).

Los acontecimientos que llevaron a la salida de Fujimori del poder y los posteriores demostraron que los abusos cometidos durante los años 90 habían sido más graves de lo que se pensaba previamente. Es más, el siniestro Vladimiro Montesinos consolidó su control después de la destitución de su rival Nicolás Hermoza del puesto de comandante en jefe del Ejército en 1997, y es posible que hacia el final haya tenido más poder que el propio Presidente. El récord del Perú en materia de lucha contra el narcotráfico, que previamente había fortalecido la imagen del gobierno, fue seriamente cuestionado después de la afirmación del hermano de Pablo Escobar de que el narcodinero había financiado la campaña de Fujimori en 1990. También, centenares de videos incautados, que habían formado parte del *modus operandi* de Montesinos para sus extorsiones, demostraron que una compleja red de corrupción había penetrado las grandes instituciones del país. Docenas de libros exponen los detalles de este bajo mundo (Dammert, 2001). Una publicación contenía los resultados de una investigación llevada a cabo por un comité del Congreso sobre el previamente elogiado programa de privatizaciones de Fujimori (Congreso Nacional, 2001). La corrupción revelada en la venta de las compañías estatales arrojó dudas sobre la supuesta política de Fujimori de asignar la mitad de los ingresos provenientes de las privatizaciones a los programas a favor de los sectores menos privilegiados, una práctica considerada básica para la estrategia social y electoral del neopopulismo.

Además, unos informes del Centro Carter, y otras investigaciones realizadas durante el último año de Fujimori en el poder, señalaron la falta de autonomía de la Comisión Electoral Nacional y la falta de credibilidad de los procesos electorales. Estos reportes pusieron en duda no solamente el conteo de votos de las contiendas presidenciales de 2000, sino los resultados electorales durante todo el gobierno de Fujimori, particularmente en el caso del referéndum constitucional de 1993.

Finalmente, la comisión de la verdad que investigó las violaciones de los derechos humanos demostró que la gran mayoría de las víctimas de la campaña en contra de la rebelión de Sendero Luminoso (SL) no estaban involucradas en el terrorismo. Durante la presidencia de Fujimori, el gobierno justificó las acciones secretas y represivas aludiendo a la afirmación de SL de que "el partido tiene mil ojos y oídos". El asesinato de Pedro Huillca, secretario general de la Confederación General de Trabajadores Peruanos (CGTP), del que se había culpado previamente al jefe de la organización de Sendero Luminoso en Lima, se atribuía ahora al tristemente famoso escuadrón de la muerte de Montesinos, el Grupo Colina (Gorriti, 2002). En retrospectiva, sea cual haya sido el grado de amenaza planteado por Sendero Luminoso, el programa antiterrorista del gobierno tenía una agenda secreta, específicamente la eliminación de centros autónomos y críticos en la sociedad civil y política, e incluso en las Fuerzas Armadas. Donde más éxito tuvo la represión fue contra los movimientos sociales y las organizaciones sindicales, que habían llegado a ser progresivamente más combativos en los 20 años anteriores (desde el gobierno del general Juan Velasco Alvarado). Así, la sociedad civil en Perú fue el blanco de una represión estatal de tipo tradicional, la cual era por lo menos tan significativa como la fragmentación social y otras características asociadas con el neopopulismo y otros modelos de democracia latinoamericana en la era de la globalización (Hagopian, 1998, 99-141).

Fujimori, que al comienzo no gozaba de las simpatías de los oficiales del Ejército, adoptó una estrategia para ganárselos como aliados y al mismo tiempo tomar el control de la institución armada. La alianza militar fue sellada gracias a la política neoliberal de Fujimori, a su negativa a investigar las violaciones de derechos humanos, y a su complacencia en otorgar a los militares autoridad total sobre las provincias montañosas donde había más actividad guerrillera. El apoyo de los militares durante los primeros meses del gobierno de Fujimori compensó la posición aislada del Presidente en el mundo político, particularmente en el Congreso Nacional. Una ley aprobada en 1991 le dio al Presidente libertad total para nombrar al comandante en jefe y para destituir a los oficiales. La ley señaló el comienzo del esfuerzo por parte de Fujimori y Montesinos por penetrar la institución y eliminar la disidencia. Poco tiempo después, el autogolpe facilitó la investigación entre los oficiales para identificar los miembros de varios círculos militares que querían defender las instituciones. Estos grupos no se oponían a Fujimori, pero criticaban a Montesinos y a su Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), se oponían al Grupo Colina y a las atrocidades de la guerra contra Sendero Luminoso, y se resentían de las preferencias dadas a los incondicionales del Presidente en las Fuerzas Armadas (Obando, 2002, 31-36). En resumen, en los primeros años del régimen, las Fuerzas Armadas estaban divididas entre los "institucionalistas" y los partidarios de Fujimori. Posteriormente, Fujimori y Montesinos se apoyaron en el SIN para conseguir el control absoluto de la institución.

Los adversarios de Chávez consideraron los esfuerzos de su gobierno por reconstruir el sistema político como pasos hacia un gobierno autoritario. De hecho, las críticas en contra de Chávez por concentrar demasiados poderes se parecían a las denuncias en contra de Fujimori. Las nuevas Constituciones diseñadas por ambos gobiernos (en 1993 en Perú y en 1999 en Venezuela) adoptaban la "democracia directa" como correctivo al dominio partidista. Pero en el proceso de debilitar los partidos políticos y el Congreso Nacional dominado por ellos, las Constituciones reforzaron al Ejecutivo, contribuyendo así al hiperpresidencialismo. Ambos presidentes también invirtieron la tendencia hacia la descentralización de los años anteriores, socavando así otro contrapeso a la autoridad del Ejecutivo. Además, según encuestas de opinión, muchos de los seguidores de ambos presidentes tenían valores democráticos cuestionables (Canache, 1997, 80). Finalmente, comparada con la Constitución previa de 1961, la Constitución venezolana de 1999 le daba a las Fuerzas Armadas un grado peligroso de autonomía. Con el nombramiento de un gran número de oficiales militares en los altos cargos del gobierno y de su partido, Chávez corría el riesgo de transformar a las Fuerzas Armadas en una institución dominante, como ocurrió en Perú después del autogolpe de 1992.

Los críticos de Chávez insistían sobre los actos arbitrarios "de baja intensidad" del gobierno y sobre la corrupción generalizada. Este artículo no pretende determinar la veracidad de estas acusaciones. Sin embargo, la represión por parte del gobierno no se acercó de ninguna manera a la represión en Perú en los años 90. Al momento de escribir este artículo en febrero de 2003, Chávez no ha encarcelado a ningún representante de la prensa, a pesar de que los medios de comunicación social reproducen a menudo declaraciones que plantean la destitución e inclusive el derrocamiento del Presidente. De igual forma, el gobierno ha evitado la represión violenta de las movilizaciones de calle que también han exigido la salida de Chávez. Finalmente, la afirmación por parte de la oposición de que el gobierno ha anulado el sistema de contrapesos y equilibrios perdió mucha relevancia cuando la tendencia chavista dirigida por Miquilena se separó del MVR a comienzos de 2002. Posteriormente, los seguidores de Miquilena en el Tribunal Supremo y en el Consejo Nacional Electoral apoyaron decisiones que favorecían a la oposición.

Al comienzo de la presidencia de Chávez, el movimiento chavista rechazó definitivamente el modelo de caudillo militar inspirado por los ejemplos de Gamal Abdul Nasser, Muammar Qaddafy y Saddam Hussein, y promovido por el teórico argentino Norberto Ceresole. En aquel tiempo, el canciller José Vicente Rangel (subsiguientemente nombrado Ministro de la Defensa, luego Vicepresidente) prácticamente declaró a Ceresole persona no grata, después de lo cual este último regresó a Argentina y empezó a criticar fuertemente al gobierno de Chávez. El origen de la confrontación entre Rangel y Ceresole remonta a los primeros años del MBR-200, cuando la organización se definió a sí misma como un "movimiento cívico-militar" más que como un logia militar (Rangel, 1999). Al declarar esto, el grupo de Chávez estaba rechazando una orien-

tación militarista. Refiriéndose a esta decisión algunos años más tarde, Chávez declaró que la alianza cívico-militar era "la mejor demostración de que no andábamos buscando una dictadura militar" (Chávez, 1998, 127).

Las Fuerzas Armadas bajo Chávez estaban más divididas internamente que su contraparte peruana bajo Fujimori. Esta mayor complejidad se puso en evidencia durante el intento de golpe de abril de 2002, cuando se manifestó una división de la institución en tres facciones. Los enemigos militares de Chávez enfrentaron a sus seguidores mientras una tercera corriente "institucionalista" apoyó la destitución del Presidente el 11 de abril y su regreso dos días después. En contraste, la tendencia "institucionalista" en el Ejército peruano fue eliminada después del autogolpe. A diferencia del apolítico Fujimori, Chávez promovió la participación militar en la política al cumplir con la demanda del MBR-200, formulada al momento del golpe de 1992, de otorgar el derecho al voto a los militares. Para resumir, mientras el gobierno de Fujimori se parecía al modelo caudillo-masas en ciertos aspectos, la dimensión política del fenómeno Chávez es más compleja, al coexistir tendencias autoritarias y personalistas conjuntamente con un impulso democrático.

Apoyo de clase

Un componente fundamental de los movimientos neopopulistas en los años 90 era su atractivo especial entre la clase marginal, que no se había beneficiado de las políticas intervencionistas del Estado y se sentía ignorada en gran medida por los partidos tradicionales. Mientras tanto Fujimori como Chávez contaban con el apoyo de estos sectores, el gobierno de este último estableció lazos más sólidos y exclusivos con ellos. El apoyo de clase de Fujimori cambió durante sus 10 años en el poder, aunque logró mantener una simpatía considerable por parte de la clase baja durante todo el tiempo de su permanencia en el poder.

Ni Fujimori ni Chávez tuvieron influencia dominante entre los sectores organizados de la clase obrera. El movimiento sindicalista chavista no logró atraer a ningún veterano líder sindical importante o desafiar con éxito el control de los dirigentes tradicionales de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). El atractivo potencial de Chávez entre los sectores industriales sindicalizados estaba socavado por su política inicial de mantener la divisa sobrevaluada, que beneficiaba a la clase marginal, entre otras, a expensas de los trabajadores industriales. Fujimori, por su parte, no logró ningún tipo de apoyo dentro del movimiento sindical peruano.

Fujimori triunfó en las elecciones de 1990 como el candidato de las clases populares. La clase marginal, al contrario de los grupos económicos influyentes, estaba representada en la plancha electoral del Cambio-90 de Fujimori. Además, Fujimori propuso la legalización de la buhonería y la creación de un banco especial para los buhoneros. Sin embargo, con la aplicación por parte

de su gobierno de políticas neoliberales que controlaran la inflación, y con sus éxitos en la guerra contra Sendero Luminoso, Fujimori ganó un apoyo en las clases media y alta, al tiempo que perdía algo de apoyo en las clases bajas. Este cambio se manifestó en el referéndum de 1993 sobre la nueva Constitución, que Fujimori ganó con apenas 52% de la votación (Degregori, 2000, 71). Este pobre resultado convenció a Fujimori de la necesidad de hacer un esfuerzo con el fin de atraer votantes de clase baja. Con este propósito en mente, Fujimori implementó un programa social masivo administrado por el Ministerio de la Presidencia con los ingresos de las privatizaciones, que habían excedido las expectativas. Estas asignaciones fueron diseñadas con propósitos electorales para ganar el voto de los pobres en aquellas provincias donde los partidos de oposición habían tenido éxito en las elecciones municipales de 1993. El resultado fue que unos independientes (pero no el partido de gobierno) desplazaron a los partidos de oposición en todo el país, al mismo tiempo que Fujimori fue reelecto presidente en las elecciones nacionales de 1995 (Graham y Kane, 1998, 67-104). Así, el gasto social generó lealtad personal hacia Fujimori, pero no hacia su partido. Este apoyo continuó durante las elecciones de 2000, cuando, según las encuestas, el Presidente mantuvo un alto grado de popularidad entre los pobres.

Sin embargo, durante su presidencia, a Fujimori le faltó el apoyo activo de los sectores marginales cuyos votos le habían beneficiado al momento de su elección en 1990. Las encuestas de opinión demostraban que los pobres votaban por él debido a sus cualidades personales y su discurso, pero desaprobaban sus políticas neoliberales y no llegaban a autodenominarse como "fujimoristas" (Stokes, 1997, 222). La simpatía que las clases bajas le tenían a Fujimori era en gran parte consecuencia del fracaso de la oposición en hablar el lenguaje del pueblo o en defender causas populares. La popularidad de Fujimori entre los pobres dependía también de los ingresos del Estado para los programas sociales. Sin embargo, por su propia naturaleza esta actividad era de corto plazo. Se redujo cuando los ingresos se acabaron al terminar las privatizaciones y cuando empezó la contracción económica después de 1997. Según el periódico *La República*, los programas sociales se diseñaron como unos "paños calientes", término particularmente aplicable a la estrategia electoral de Fujimori (Kay, 1996-1997).

Al contrario del caso de Fujimori en Perú, la polarización caracterizó a la política venezolana desde el comienzo de la presidencia de Chávez y se agravó profundamente durante su mandato. Las movilizaciones de 2002 a favor y en contra de Chávez pusieron en evidencia la distancia que existía entre la clase media y la clase baja en el plano político. Las frecuentes marchas y manifestaciones que exigían la salida de Chávez antes y después del intento de golpe del 11 de abril, se llevaron a cabo en las prósperas urbanizaciones del este de Caracas, pero movilizaron pocos habitantes de los barrios. En contraste, las marchas a favor del gobierno frecuentemente comenzaron en la zona más pobre ubicada en el oeste de la capital. La reacción de un gran número

de los habitantes de los barrios al golpe del 11 de abril demostró que Chávez podía contar con un apoyo activo considerable, y no solamente con un apoyo pasivo o electoral. El 13 de abril, una multitud de pobres, algunos de los cuales habían caminado 15 o 30 kilómetros por la ausencia de transporte público, rodearon el palacio presidencial y las bases militares en Caracas y en otras ciudades para exigir la liberación de Chávez. La naturaleza pacífica de estas movilizaciones y el peligro personal que enfrentaron los manifestantes a causa del silencio de los medios de comunicación, reflejaban un alto grado de compromiso entre los seguidores de Chávez y cierta capacidad de organización de parte del movimiento chavista.

El éxito de Chávez en mantener el apoyo de la clase baja estaba fundamentado en la credibilidad de su antineoliberalismo. Sus críticos pertenecientes a la izquierda y al movimiento sindical denunciaban su discurso antineoliberal como retórica vacía y demagogia, y también argumentaron que nunca formuló un verdadero programa antineoliberal. Si el pueblo las hubiera aceptado como válidas, estas acusaciones habrían sin duda socavado el apoyo de los sectores no privilegiados, que según las encuestas desaprobaban las fórmulas neoliberales. Aunque es innegable que el presidente Chávez no tenía un programa económico coherente, puso fin a 10 años de privatizaciones (en contraste con Fujimori, a pesar de que a veces afirmaba ser "antineoliberal"). Así, la Constitución de 1999 prohíbe la venta de acciones de la compañía petrolera estatal Pdvsa y garantiza el control por parte del Estado sobre el sistema de seguridad social. Además, Chávez anunció que iba a favorecer las "asociaciones estratégicas" por encima de las privatizaciones, específicamente en el caso de la industria del aluminio y el astillero Dianca.

En un aspecto importante, el apoyo de clase al movimiento chavista puede terminar pareciéndose al populismo clásico de los años 30 y 40 más que al neopopulismo de los años 90. Los analistas han señalado al apogeo del populismo clásico y al inicio de las políticas de sustitución de importaciones como una coyuntura crítica (Collier y Collier, 1991). Los partidos populistas promovieron la participación de los sectores excluidos de la población, específicamente los campesinos y los trabajadores, en las estructuras de sindicatos, partidos y Estado. Esta incorporación aseguraba que los partidos populistas conservarían la lealtad de un gran número de estos seguidores durante su vida entera, y en muchos casos durante la de sus hijos. El movimiento chavista ha logrado atraer a los miembros de la clase marginal que en su mayor parte no estaban incorporados. Como resultado, estos militantes chavistas han superado el sentido de exclusión que tenían desde tiempo atrás al participar activamente en la defensa del régimen y al vincularse con estructuras incipientes –aunque mucho más frágiles que el movimiento sindical naciente durante la época del populismo clásico (Ellner, 2003b). Si la experiencia del populismo clásico es instructiva, hay buena posibilidad de que el movimiento chavista conservará la lealtad de estos sectores durante los años venideros.

El sistema de partidos políticos

El sistema político venezolano virtualmente bipartidista empezó a fallar en los años 90 cuando los partidos relativamente pequeños empezaron a ganar terreno, particularmente a escala local. Después de la elección de Chávez en 1998, AD, Copei y otros partidos identificados con el *establishment* empezaron a perder presencia en el escenario político. Las organizaciones empresariales, la CTV y los medios, más que los partidos de oposición, tuvieron el papel más importante para definir y canalizar el descontento cuando la popularidad de Chávez empezó a decaer en 2001. Sin embargo, el partido de gobierno no logró llenar el vacío creado por el debilitamiento de los partidos tradicionales. Desde sus comienzos, el MVR fue concebido como un frente electoral y no como una organización disciplinada con vínculos con la sociedad civil (López Maya, 2003, 82). Además, el MVR prácticamente no tuvo representantes durante la primera presidencia de Chávez (1999-2000) ni en el gabinete ni en las gobernaciones. Convencido de que el MVR había sucumbido a prácticas clientelares y que carecía de fervor revolucionario al momento de la radicalización del gobierno en 2001, Chávez anunció su intención de crear estructuras paralelas y con ese fin reactivó el MBR-200. En 2002, Chávez impulsó la formación de los "círculos bolivarianos", aunque no estaba claro si estaban diseñados para servir de células del MVR o de organizaciones comunitarias autónomas.

La inestabilidad del sistema de partidos políticos peruanos fue puesta en evidencia por las grandes fluctuaciones en los votos obtenidos por los grandes partidos en las siete elecciones que tuvieron lugar entre 1980 y 1990. Después de 1990, los partidos políticos perdieron todavía más credibilidad porque concentraron sus esfuerzos en disputar la legalidad de la candidatura de Fujimori en 1995 y 2000, mientras que descuidaron los problemas socioeconómicos. Durante este período, los partidos tradicionales de masas fueron desplazados por partidos provisionales diseñados para avanzar las candidaturas presidenciales de Alejandro Toledo (Perú Posible), Luis Castañeda (Solidaridad Nacional) y Alberto Andrade (Somos Perú), además de Fujimori. La fragilidad de la lealtad partidista se reflejó en el Congreso cuando en 1999 el grupo de la oposición unificada ("Unión para Perú") perdió 10 de sus 17 miembros. Al igual que en Venezuela, el partido que gobernaba a Perú no supo llenar el vacío creado por el debilitamiento de los partidos de oposición. El partido de Fujimori no solamente no tenía presencia en las instancias locales, sino que no las tomaban en consideración al momento de repartir los cargos importantes de gobierno. De hecho, Montesinos prefería mantener el partido al margen para evitar que surgiera un centro de poder rival (Cotler, 2000, 37). Cuando el protegido de Fujimori, Jaime Yoshiyama, fue derrotado en las elecciones para la alcaldía de Lima en 1996, los partidarios a favor del gobierno no tenían ningún dirigente destacado que presentar en las elecciones presidenciales de 2000, aparte del Presidente mismo.

Por lo tanto, un sistema débil de partidos políticos caracterizó igualmente a Perú y Venezuela y explicó la facilidad relativa con que Fujimori y Chávez llevaron a cabo importantes cambios políticos al comienzo de su gobierno. En ambas naciones, los partidos políticos habían perdido vitalidad en el decenio previo. En los años siguientes, la oposición siguió perdiendo credibilidad porque no supo formular políticas socioeconómicas alternativas, ni se sometió a autocrítica sobre sus errores pasados.

Sin embargo, el declive del sistema de partidos políticos durante los 10 años de gobierno de Fujimori fue más pronunciado que en Venezuela bajo Chávez. Solamente el partido APRA volvió a surgir de forma algo sorprendente en Perú después de la salida de Fujimori. En contraste, los partidos políticos de Venezuela empezaron progresivamente a recuperarse después de sus derrotas electorales de 2000. Como resultado de los errores cometidos por los líderes de la sociedad civil que encabezaron el golpe fallido de abril de 2002 y el paro de diciembre y enero de 2002-2003, los partidos insistieron en tener un papel más central en la lucha por sacar a Chávez. Tres tipos de organizaciones políticas desempeñaron un papel central: los partidos tradicionales como AD, Copei y el MAS; nuevos partidos con nuevos dirigentes como Unión y Primero Justicia; y partidos formados por antiguos dirigentes de AD y Copei como Antonio Ledezma (ex gobernador de Caracas), Manuel Rosales (gobernador del Zulia), Carlos Navarro (ex secretario general de la CTV) y Agustín Berrios (ex dirigente de Copei). En contraste con el movimiento sindical peruano que fue prácticamente diezmado bajo Fujimori, la CTV, bajo el mando de dos sindicalistas de AD (Carlos Ortega y Manuel Cova), desempeñó un papel preponderante en la lucha en contra de Chávez.

El partido MVR en Venezuela era más complejo e institucionalizado que sus equivalentes peruanos. Mientras el MVR de Chávez tenía corrientes internas con orientaciones programáticas distintas (Ellner y Rosen, 2002), los partidos de Fujimori eran completamente personalistas y carecían de debate ideológico y de dirigentes prominentes. Finalmente, las movilizaciones a favor del gobierno en Perú consistían generalmente en manifestaciones con objetivos electoralistas y en inauguraciones de proyectos de obras públicas incluyendo discursos del Presidente. Esto no fue siempre el caso en Venezuela, como se demostró el 13 de abril de 2002 cuando los chavistas rodearon Miraflores y las bases militares para exigir el regreso de Chávez al poder. Otras movilizaciones estaban vagamente relacionadas con el MVR. Así, por ejemplo, la toma estudiantil de la Universidad Central de Venezuela al comienzo de 2001, las protestas violentas en contra de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en agosto de 2002 de exonerar a los jefes del golpe militar, y varias invasiones de tierras fueron justificadas o incitadas por algunos dirigentes chavistas, mientras otros (incluyendo a Chávez mismo) aconsejaron prudencia o expresaban oposición abierta. Para resumir, la esterilidad institucional peruana bajo Fujimori se parecía a lo que existía bajo los caudillos tradicionales. En contraste, el escenario institucional más complejo en Venezuela incluía varias corrientes

organizadas dentro del MVR y una mayor capacidad de movilización tanto por parte de los partidarios del gobierno como de la oposición.

Relaciones con Estados Unidos

Estados Unidos mantenía una actitud crítica y a veces hostil a Chávez desde el momento en que presentó su candidatura presidencial para las elecciones de 1998 y le negó su solicitud de visa. De hecho, Washington tenía buenas razones para oponerse al gobierno de Chávez y ver con buenos ojos el golpe del 11 de abril de 2002. Para empezar, Chávez tuvo un papel activo en la OPEP con el objetivo de fortalecer los precios del petróleo, y para esto visitó Irak, Irán y Libia en varias oportunidades. Su gobierno se opuso también a unas resoluciones presentadas por Estados Unidos en los cuerpos internacionales, y por ejemplo votó contra las mociones de censura propuestas contra China, Cuba e Irán por sus violaciones a los derechos humanos. Además, la retórica de Chávez en favor de un mundo "multipolar" implicaba un rechazo de la hegemonía estadounidense, incluyendo el plan de Washington por una unión hemisférica conocida como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Finalmente, su férrea defensa de la soberanía nacional lo llevó a negarse ante la solicitud de Estados Unidos de usar el espacio aéreo venezolano para misiones aéreas en contra del narcotráfico, y también a rehusar la oferta de Washington de mandar el Cuerpo de Ingenieros del Ejército a raíz de las devastadoras lluvias en el estado Vargas en diciembre de 1999.

El discurso de Chávez a favor de un mundo multipolar y en oposición al Consenso de Washington de inspiración neoliberal coincidió con el crecimiento rápido del sentimiento internacional contra la globalización. Su posición sobre estos asuntos representaba un posible punto de referencia futuro en América Latina. Sin duda, la política exterior de Chávez hubiera sido menos atractiva 10 años antes, cuando la aceptación mundial del neoliberalismo estaba en su punto más alto, como lo era la hegemonía de Estados Unidos a raíz del colapso sorpresivo del bloque soviético. Aunque las posiciones nacionalistas de Chávez significaban un regreso al movimiento del Tercer Mundo de los años 60 y 70, eran únicas en el escenario latinoamericano de los años 90. Esta novedad contribuyó a la noción de que Chávez estaba apuntando hacia direcciones nuevas, reforzando así la posibilidad de que el chavismo retuviera su atractivo sea cual fuera la duración de su gobierno.

Al contrario de la consistencia relativa de su actitud hacia el gobierno de Chávez, Washington cambió completamente de posición dos veces en sus relaciones con Fujimori; estos cambios reflejaban las orientaciones contradictorias del régimen neopopulista de Fujimori más que un cambio de criterio por parte de Washington. Como resultado de sus políticas neoliberales, Fujimori se aseguró el apoyo de las agencias internacionales de crédito después del autogolpe de 1992, cual fue fuertemente condenado por las naciones del mundo, incluyendo Estados Unidos. Fujimori defendió el golpe, argumentando

que Estados Unidos no podía entender las circunstancias en las que se encontraba Perú como resultado del terrorismo fomentado por Sendero Luminoso, que hacía necesaria la suspensión de las garantías constitucionales. Posteriormente, Fujimori autorizó las misiones aéreas de vigilancia llevadas a cabo por Estados Unidos en la región amazónica para combatir el narcotráfico (en contraste con el rechazo por parte de Chávez de los vuelos propuestos por la DEA), y en consecuencia las exportaciones de coca fueron reducidas en gran parte. Las políticas neoliberales, la guerra a muerte en contra del terrorismo y la colaboración con la DEA explican las relaciones armoniosas con Estados Unidos durante el resto del primer período presidencial de Fujimori y gran parte del segundo.

Sin embargo, después de la reelección de Fujimori en 1995, Montesinos reforzó su control del Estado peruano, al mismo tiempo que varios casos de corrupción, complicidad con los narcotraficantes y violaciones de derechos humanos empezaron a hacerse públicos. Estos incidentes culminaron en 2000 con el escándalo en torno a la venta de armas, provenientes de Jordania, a las guerrillas colombianas. Otra fuente de irritación para Estados Unidos era la forma como Fujimori se alejaba de su compromiso con las reformas de mercado, y sus críticas explícitas al neoliberalismo con propósitos electorales durante la campaña presidencial de 2000. Algunos comentaristas atribuyen la salida de Fujimori a la presión de Estados Unidos más que a la resistencia de los partidos políticos de la oposición o a las movilizaciones populares, que de todas maneras no estaban bien organizadas (Cotler, 1999).

La reconsideración por parte de Estados Unidos de sus relaciones con Fujimori puso en evidencia los componentes contradictorios de los gobiernos neopopulistas: el camino electoral al poder, el amplio apoyo popular inicial, la implementación de fórmulas neoliberales, el populismo y el hiperpresidencialismo. Las características populistas del gobierno de Fujimori se hicieron más notorias hacia el final de su gobierno e incitaron a Estados Unidos a revertir su posición. Estas tendencias incluían el intervencionismo del Estado en la economía y el clientelismo, que conducían a la corrupción y a la duplicidad en la guerra contra el narcotráfico. Otra dimensión que Estados Unidos no podía ignorar eran las tendencias del gobierno de Fujimori hacia el autoritarismo. Para resumir, el neopopulismo (aún más que el populismo clásico) estaba sujeto a contradicciones internas agudas, explicando así la reformulación por parte de Washington de su política hacia Fujimori y la duración limitada del fenómeno fujimorista.

Conclusión

La publicación hacia la mitad de los años 90 de los primeros estudios sobre el resurgimiento del populismo latinoamericano empezó un debate conceptual entre los analistas políticos. La discusión teórica se centró en determinar si la definición del populismo debía abarcar una amplia diversidad de característi-

cas que iban desde el apoyo de clase y la política económica hasta las cualidades de liderazgo. Los escritores que defendían la posición afirmativa argumentaban que no se podía aplicar el concepto de populismo a los gobiernos contemporáneos en América Latina, ya que distaban de cumplir con este conjunto de requisitos (Quijano, 1998). Aunque ciertos regímenes, como los de Fujimori y Menem, se parecían al populismo clásico de los años 30 y 40 en algunos aspectos, les faltaban varias características esenciales, tales como un programa económico popularmente aceptado y una estrategia de movilización. Una segunda escuela, que tildaba de populistas a los gobiernos de Fujimori y Menem, rechazó esta posición por ser "conceptualmente conservadora" y purista. Kurt Weyland, uno de los representantes principales de esta escuela, propuso una definición del populismo de "procedimiento mínimo" que se había revelado fructífera para el análisis de la emergencia de los regímenes democráticos durante el decenio anterior. Weyland y otros consideraban el populismo como una estrategia predominantemente política, y por lo tanto descartaban los factores socioeconómicos por ser extrínsecos a la definición del fenómeno (Weyland, 2001, 8-9).

El presente artículo evita este tipo de debate y en su lugar usa un enfoque comparativo para determinar la importancia del neopopulismo como modelo seguido por los dirigentes latinoamericanos. Ha examinado los acontecimientos desde la publicación de las obras originales sobre el neopopulismo a mediados de los años 90 para evaluar la viabilidad no solamente de los gobiernos neopopulistas sino también de los movimientos neopopulistas y sus estrategias. El contraste entre Fujimori, quien no contaba con un movimiento de seguidores comprometidos con metas determinadas, y Chávez, quien encabezó tal movimiento, está diseñado para arrojar luz sobre los prospectos a largo plazo del neopopulismo y la continuada relevancia de ciertos aspectos del populismo clásico.

A mediados de los años 90, los analistas señalaron que no era probable que los gobiernos neopopulistas fueran estables, pero se notó que por lo menos los casos de Menem y Fujimori demostraban un potencial a largo plazo. El presente análisis concluye que la posición de los dirigentes neopopulistas era todavía más frágil de lo que los analistas reconocieron en aquel tiempo. Por ejemplo, la crisis económica argentina de 2001-2002 se ha atribuido a la irresponsabilidad fiscal del régimen de Menem, incluyendo los programas sociales que representaban un pilar básico de la estrategia neopopulista. Además, las revelaciones acerca del gobierno de Fujimori durante sus últimos años en el poder y desde entonces han puesto en tela de juicio de forma pronunciada sus credenciales democráticas. Estas deficiencias y fallas ponen en duda el futuro político de ambos dirigentes y también el impacto a largo plazo del neopopulismo.

El verdadero problema no es la duración de los gobiernos neopopulistas sino la duración del apoyo popular a los dirigentes neopopulistas. El hecho de que Fujimori, el dirigente neopopulista que se mantuvo por más tiempo en el

poder, haya perdido toda presencia política, una vez obligado a dejar el poder, sugiere que el modelo neopopulista es menos importante de lo que aparecía ser previamente. En este sentido el contraste con el populismo clásico no podría ser mayor. Los dirigentes populistas clásicos podían ufanarse de haber iniciado un modelo económico que tendría consecuencias de las más importantes, de haber incorporado un gran número de trabajadores a la vida política nacional a través del movimiento sindical, y de haber creado unos partidos que también durarían decenios. Como señala Weyland (2001, 14), la mayor parte de estos partidos abandonarían eventualmente sus objetivos a largo plazo, aceptarían el clientelismo como *modus operandi* y se institucionalizarían por completo, dejando así de ser "populistas". Sin embargo, este proceso fue gradual, a lo largo de varios decenios. Si el neopopulismo no puede reivindicar un conjunto parecido de logros, entonces difícilmente se le puede atribuir la misma importancia que se le da al populismo clásico.

La toma de decisiones y las estrategias puestas en práctica por Fujimori obedecían invariablemente a consideraciones de corto plazo. Esto resultó exitoso en un período de expansión económica y de logros en el campo político, pero era contraproducente cuando empezó la contracción económica. Algunas fallas y desventajas de esta forma de actuar se hicieron evidentes a mediados de los años 90 y fueron identificadas por los analistas que escribían sobre el neopopulismo, mientras otras se hicieron más y más conspicuas con el resultante declive político de Fujimori. La orientación a corto plazo de las estrategias de Fujimori se manifestó en muchos frentes. Primero, el programa social de su gobierno fue financiado con el ingreso de las privatizaciones, que se redujo durante su segundo período presidencial. Estas asignaciones, atribuidas por consideraciones electorales, al igual que los programas sociales compensatorios y focalizados promovidos por los neoliberales y apuntados en contra de la pobreza crítica, eran de corto plazo por su misma naturaleza. Segundo, Fujimori, cuyas acciones siempre se calculaban sobre la base de encuestas de opinión, hizo uso de trucos para inflar su popularidad en momentos clave (Crabtree y Thomas, 1999, 63). Esta consideración puede haber influenciado acontecimientos como el conflicto con Ecuador en 1995 y la captura de los máximos dirigentes guerrilleros de Sendero Luminoso. A pesar de su éxito inicial en mejorar la posición de Fujimori en las encuestas de popularidad, estas acciones fueron eventualmente percibidas por un gran número de peruanos como manipuladoras. Tercero, Fujimori no hizo ningún esfuerzo para construir un partido político que le hubiera asegurado al neopopulismo una presencia a largo plazo en Perú. Como resultado, los beneficios políticos del clientelismo, que eran la base de los programas sociales del gobierno, fueron minimizados. El personalismo extremo que sustituyó a la autoridad partidista estaba propenso a generar corrupción, y por lo tanto a desacreditar a Fujimori y poner en duda su discurso que insistía en la honestidad personal. Un partido político cohesivo hubiera podido organizar e incorporar los miembros de la clase marginal para convertir la vaga simpatía que tenía hacia Fujimori en un apoyo firme a largo plazo.

A pesar de sus semejanzas con los demagogos y caudillos latinoamericanos tradicionales, Fujimori hizo gala de habilidad y de originalidad políticas. Su política lo distinguía claramente de los dictadores como Pinochet, quien era un autócrata sin calificaciones, defensor a ultranza del neoliberalismo y apoyado principalmente por las clases privilegiadas. Sobre todo, Fujimori mantuvo un apoyo considerable por parte de las clases bajas, a pesar de las políticas neoliberales de su gobierno. Este apoyo explica la asistencia masiva a sus reuniones electorales durante la campaña presidencial de 2000 y su posición de favorito según varias encuestas confiables (Grompone, 2000, 125). Además, Fujimori se alejaba del neoliberalismo en forma más que nominal. Sus programas sociales, que llegaron hasta las regiones montañosas lejanas, crearon tensiones con las agencias multilaterales de crédito que hubieran preferido usar el dinero para pagar la deuda externa (Manrique, 1996, 42-43). Apelar al sentimiento antineoliberal también deterioró las relaciones de Fujimori con ciertos tecnócratas como su ministro de Hacienda Carlos Boloña (quien se comparaba con su homólogo argentino Domingo Cavallo, cuyas diferencias con el gobierno de Menem lo llevaron a formar su propio partido político) (Boloña, 2002, 18).

Para resumir, la estrategia impuesta por Fujimori se alejaba de los regímenes autoritarios tradicionales que imponían medidas económicas austeras a la población. Aquellos analistas que tildan al fenómeno neopopulista de demagogia no aprecian los aspectos novedosos de la gestión de Fujimori. Aunque la importancia a largo plazo del fenómeno neopopulista no debe ser exagerada, no se puede negar ni el carácter novedoso de las estrategias políticas de Fujimori ni lo apropiado del uso del término neopopulismo.

Es probable que el movimiento político encabezado por Hugo Chávez, como los de los populistas clásicos de los años 30 y 40, deje una marca imborrable sobre la vida política nacional en Venezuela. Sobre todo, un gran número de miembros de la clase marginal consideran el movimiento chavista como suyo, y se identifican con sus objetivos declarados y su visión. Si la experiencia de los trabajadores organizados durante el auge del populismo clásico puede servir de modelo, la incorporación de estos sectores excluidos en estructuras activistas, aunque rudimentarias, puede garantizar apoyo político a largo plazo. Además, Chávez ha creado un partido político y una coalición que probablemente formarán parte del panorama político nacional por algún tiempo. Sin embargo, el alto grado de polarización en Venezuela es una espada de doble filo. Genera lealtad hacia Chávez y su movimiento, pero al mismo tiempo intensifica el rechazo hacia él entre los sectores influyentes, limitando así sus opciones y la posibilidad de lograr la estabilidad política y social en el país.

Los analistas políticos y los actores han denunciado las tendencias demagógicas y autoritaristas del movimiento de Chávez, su negativa a promover la institucionalización, y sus acciones que le quitaban a la sociedad civil su autonomía. Estas características pondrían en tela de juicio la capacidad de los

chavistas de participar eficazmente de acuerdo con las reglas del juego establecidas por el sistema democrático durante un período largo. Sin embargo, cuando se compara la versión chavista del populismo con el neopopulismo, y con el régimen de Fujimori en particular, estas tendencias parecen menos severas. A pesar de un grado peligroso de autonomía militar y de casos de represión "de baja intensidad", el gobierno se abstuvo en general de usar la fuerza en contra de una oposición sumamente agresiva. Al mismo tiempo, los chavistas redactaron la Constitución de 1999 con el propósito de profundizar la democracia. Finalmente, el movimiento chavista no era del todo monolítico. Las movilizaciones realizadas en su nombre no eran siempre controladas exteriormente; y las corrientes internas, como por ejemplo el movimiento laboral chavista, a veces adoptaban posiciones que el resto del movimiento no respaldaba oficialmente (Ellner, 2003a, 224-228). Estas características indican un grado de complejidad que es más compatible con el sistema democrático que con el personalismo extremo que caracteriza al neopopulismo. De la misma forma, los movimientos populistas clásicos de los años 30 y 40 mantenían vínculos estrechos con sectores dentro de las Fuerzas Armadas y eran frecuentemente acusados de demagógicos, antidemocráticos y antiinstitucionalistas, pero sin embargo dieron contribuciones duraderas a la democracia de sus países respectivos.

La principal característica común de los fenómenos Fujimori y Chávez es su seducción particular hacia la clase marginal. En contraste con el caso Fujimori, la base social exclusiva de Chávez eran los sectores marginales, que le brindaron el apoyo activo que le era crucial para su posibilidad de sobrevivir políticamente. La capacidad de movilización de la clase marginal, y específicamente su respuesta al golpe del 11 de abril de 2002, no tuvo equivalente durante el gobierno de Fujimori.

Los analistas políticos necesitan explorar en detalle las relaciones entre los sectores marginales, por una parte, y Chávez y Fujimori, por la otra. Las características específicas que merecen exploración incluyen las prácticas paternalistas, las actitudes de la base hacia las posiciones mantenidas por ambos dirigentes, y los grados de participación e incorporación (como por ejemplo los altamente polémicos, pero mal conocidos, "círculos bolivarianos"). El enfoque metodológico "de abajo hacia arriba" de los historiadores del sindicalismo que han explorado la reacción de los trabajadores sindicalizados a los movimientos populistas clásicos de los años 30 y 40 debe ser aplicado ahora a los sectores marginales en América Latina (James, 2000). Este tipo de investigación enfocada en la era de la globalización pondría a prueba la vigencia de los viejos estereotipos que retratan a la clase marginal como dispuesta a relaciones paternalistas y autoritaristas (Germani, 1978, 153-208), políticamente volátil y revolucionaria (Fanon, 1963). Dada la independencia política de la clase marginal frente a los trabajadores de la economía formal en años recientes, y dada la importancia que ha asumido bajo Chávez, Fujimori y otros gobiernos populistas en América Latina, tal estudio es de importancia capital.

Bibliografía

Ames, Rolando, Enrique Bernales, Sinesio López y Rafael Roncagliolo (2001): *Situación de la democracia en el Perú (2000-2001)*, Lima, Editorial P.U. Católica del Perú.

Atwood, Roger (2001): "Democratic Dictators: Authoritarian Politics in Peru from Leguía to Fujimori", *SAIS Review*, vol. 21, n° 2, verano-otoño, pp. 155-176.

Bergquist, Charles (1986): *Labor in Latin America: Comparative Essays on Chile, Argentina, Venezuela, and Colombia*, Stanford, Stanford University Press.

Boloña Behr, Carlos (2002): *De Paniagua a Toledo: de la confusión al* caos, Lima, Instituto de Economía de Libre Mercado.

Cameron, Maxwell A. (1994): *Democracy and Authoritarianism in Peru: Political Coalitions and Social Change*, Nueva York, St Martin's Press.

Canache, Damarys (2002): *Venezuela: Public Opinion and Protest in a Fragile Democracy*, Florida, Coral Gables, North-South Center Press.

Chávez, Hugo (1998): *Habla el comandante*, Caracas, Imprenta UCV.

Chávez, Hugo (2002): "Alo Presidente", *Venezolana de Televisión* TV, 11:00 am, 23 de junio de 2002.

Chávez, Hugo [entrevista por Agustín Blanco Muñoz] (2000): *Habla el comandante*, Caracas, Imprenta UCV.

Collier, Ruth Berins y David Collier (1991): *Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America*, Princeton, Princeton University Press.

Congreso Nacional (2002): *Comisión Investigadora sobre los delitos económicos y financieros cometidos entre 1990 y 2001*, Lima, junio.

Cotler, Julio (1999): *Drogas y política en el Perú: La conexión norteamericana*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos.

_____ (2000): "La gobernabilidad en el Perú: entre el autoritarismo y la democracia" en Julio Cotler y Romeo Grompone, *El fujimorismo: ascenso y caída de un régimen autoritario*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos.

Crabtree, John y Jim Thomas (1999): *El Perú de Fujimori*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos.

Dammert, Manuel (2001): *El Estado mafioso Fujimori-Montesinos: El poder imagocrático en las sociedades globalizadas*, Lima, Ediciones El Virrey.

Degregori, Carlos Iván (2000): *La década de la antipolítica: auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos.

Drake, Paul W. (1982): "Conclusion: Requiem for Populism?" en Michael L. Conniff (ed.), *Latin American Populism in Comparative perspective*, Albuquerque, Nuevo México, University of New Mexico Press.

Ellner, Steve (1999): "The Radical Potential of Chavismo in Venezuela: The First Year-and-a-Half in Power", *Latin American Perspectives*, vol. 28, n° 5, septiembre, pp. 5-32.

Ellner, Steve (2003): "Organized Labor and the Challenge of Chavismo" en Steve Ellner y Daniel Hellinger (eds.), *Venezuelan Politics in the Chávez Era: Class, Polarization and Conflict*, Boulder Colorado, Lynne Rienner Publishers.

Ellner, Steve y Fred Rosen (2002): "Chavismo at the Crossroads: Hardliners, Moderates and a Regime under Attack", *Nacla: Report on the Americas*, vol. 35, n° 6, mayo-junio, pp. 8-12.

Esteves, Carlos (asesor de la comisión del Congreso) (2002): Entrevista personal, 11 de julio, Lima, Perú.

Fanon, Frantz (1963): *The Wretched of the Earth*, Nueva York, México: Fondo de Cultura Económica.

Freidenberg, Flavio (1977): "Actitudes hacia la democracia de las elites parlamentarias argentina y peruana", *América Latina Hoy*, n° 16, agosto, pp. 65-82.

Garrido, Alberto (1999): *Guerrilla y conspiración militar en Venezuela*, Caracas, Fondo Editorial Nacional José Agustín Catalá.

Germani, Gino (1978): *Authoritarianism, Fascism, and National Populism*, New Brunswick, New Jersey, Transaction Books.

Gorriti, Víctor (Secretario de Organización de la Confederación General de Trabajadores del Perú) (2002): Entrevista personal, 9 de julio, Lima, Perú.

Graham, Carol y Cheikh Kane (1998): "Opportunistic Government or Sustaining Reform? Electoral Trends and Public Expenditure Patterns in Peru, 1990-1995", *Latin American Research Review*, vol. 33, n° 1, pp. 67-104.

Grompone, Romero (2000): "El fujimorismo como proyecto inconcluso" en Julio Cotler y R. Grompone, *El fujimorismo: ascenso y caída de un régimen autoritario*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos.

Hagopian, Frances (1998): "Democracy and Political Representation in Latin America in the 1990s: Pause, Reorganization, or Decline?" en Felipe Aguero y Jeffrey Stark (eds.), *Fault Lines of Democracy in Post-Transition Latin America*, Coral Gables, pp. 99-141, North-South Center Press.

James, Daniel (2000): *Doña María's Story: Life, History, Memory and Political Identity*, Durham, North Carolina.

Kay, Bruce H. (1996-1997): "'Fujipopulism' and the Liberal State in Peru, 1990-1995", *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, vol. 38, n° 4, invierno, pp. 55-98.

Leaman, David E. (1999): "Populist Liberalism as Dominant Ideology: Competing Ideas and Democracy in Post-Authoritarian Argentina 1989-1995", *Studies in Comparative International Development*, vol. 34, n° 3, otoño, pp. 99-102, pp. 98-118..

Levitsky, Steven (1999): "Fujimori and Post-Party Politics in Peru", *Journal of Democracy*, vol. 10, n° 3, julio, pp. 78-92.

López Maya, Margarita (2003): "The Movement and Presidency of Hugo Chávez Frías" en Steve Ellner y Daniel Hellinger (eds.) en *Venezuelan Politics in the Chávez Era: Class, Polarization and Conflict*, Boulder Colorado, Lynne Rienner Publishers.

Manrique, Nelson (1996): "The Two Faces of Fujimori's Rural Policy", *Nacla: Report on the Americas*, vol. 30, n° 1, julio-agosto, pp. 39-43.

Mettenheim, Kurt von y James Malloy (1998): "'Introduction' and 'Conclusion'" en K. Mettenheim y J. Malloy (eds.), *Deepening Democracy in Latin America*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.

Miquilena, Luis (2000): Entrevista personal, 29 de marzo, Caracas.

Obando, Enrique (1996). "Fujimori and the Military: A Marriage of Convenience", *Nacla: Report on the Americas*, vol. 30, n° 1, julio-agosto, pp. 31-36.

O'Donnell, Guillermo (1994): "Delegative Democracy", *Journal of Democracy*, n° 5, enero, pp. 55-69.

Oxhorn, Philip D. (1998): "Is the Century of Corporatism Over? Neoliberalism and the Rise of Neopluralism" en Philip D. Oxhorn y Graciela Ducatenzeiler (eds.), *What Kind of Democracy? What Kind of Market? Latin America in the Age of Neoliberalism*, University Park, Pennsylvania, Pennsylvania State University Press..

Palmer, David Scott (2000): "Democracy and its Discontents in Fujimori's Peru", *Current History*, vol. 99, n° 634, febrero, pp. 60-65.

Quijano, Aníbal (1998): "Populismo, representación y menemismo" en Felipe Burano de Lara (ed.), *El fantasma del populismo*, Caracas, Nueva Sociedad.

Rangel, José Vicente (1999): Entrevista personal, 12 de septiembre, Caracas.

Remmer, Karen L. (1993): "The Political Economy of Elections in Latin America 1980-1991", *American Political Science Review*, vol. 87, n° 2, julio, pp. 393-407.

Remmer, Karen L. (1998): "The Politics of Neoliberal Economic Reform in South America 1980-1994", *Studies in Comparative International Development* 33, n° 2, verano, pp. 3-29.

Roberts, Kenneth (1995): "Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin America: The Peruvian Case", *World Politics*, vol. 48, n° 1, octubre, pp. 82-116.

_____ (2000): "Populism in Latin America", Carter Center, *Challenges to democracy in the Americas,* octubre.

_____ (2003): "Social Polarization and Popular Resurgence in Venezuela" en Steve Ellner and Daniel Hellinger (eds.) *Venezuelan Politics in the Chávez Era: Class, Polarization and Conflict*, Boulder, Colorado, Lynne Rienner Publishers.

Roberts, Kenneth y Moises Arce (2000): "Neoliberalism and Lower Class Voting Behavior in Peru", *Comparative Politics*, abril, pp. 217-246.

Rocharbrún, Guillermo (1996): "Deciphering the Enigmas of Alberto Fujimori", *Nacla: Report on the Americas*, Vol. 30, n° 1, julio-agosto, pp. 16-24.

Sánchez, Doris (Secretario de Organización del partido Perú Posible) (2002): Entrevista personal, 10 de julio, Lima.

Schmidt, Gregory D. (2000): "Delegative Democracy in Peru? Fujimori's 1995 Landslide and the Prospects for 2000", *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, vol. 42, n° 1, primavera, pp. 99-132.

Stokes, Susan C. (1997): "Democratic Accountability and Policy Change: Economic Policy in Fujimori's Peru", *Comparative Politics*, vol. 29, n° 2, enero, pp. 209-226.

Tanaka, Martín (2001): "Perú, 1980-2000: Crónica de una muerte anunciada? Determinismo, voluntarismo, actores y poderes estructurales", Conferencia "Advances and Setbacks in the Third Wave of Democratization in Latin America", Notre Dame University, 23-24 de abril.

Weyland, Kurt (1996): "Neopopulism and Neoliberalism in Latin America: Unexpected Affinities", *Studies in Comparative International Development*, vol. 35, n° 1, primavera, pp. 3-31.

_____ (1998): "The Politics of Corruption in Latin America", *Journal of Democracy*, vol. 9, n° 2, abril, pp. 108-121.

_____ (1999): "Populism in the Age of Neoliberalism" en Michael L. Conniff (ed.), *Populism in Latin America*, Alabama, Tuscaloosa, University of Alabama Press.

_____ (2001): "Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics", *Comparative Politics*, vol. 34, n° 1, octubre, pp. 1-22.

Zago, Ángela (1998): *La rebelión de los ángeles: reportaje*, Caracas, Warp Ediciones (tercera edición).

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2004, vol. 10, n° 1, (ener.-abr.), pp. 39-57

¿QUIÉN SOY? ¿QUIÉNES SOMOS? ENTRE CATEGORIZACIÓN Y ESTIGMA. ¿CÓMO GESTIONAN SUS IDENTIDADES LOS VENEZOLANOS DAMNIFICADOS?[1]

Sandrine Revet

Introducción

En diciembre de 1999, una catástrofe "natural" afectó varios estados de Venezuela y un sector de su capital, Caracas. El estado costero de Vargas fue golpeado con una intensidad particular. La montaña que lo separa de Caracas fue literalmente barrida por las intensas y continuas lluvias, arrastrando a su paso habitantes, construcciones e infraestructuras que toneladas de barro enterraron. Tres años luego del evento, el balance en cifras de esta catástrofe todavía está en discusión. Se estima entre 30.000 y 50.000 el número de muertos y 200.000 el de personas damnificadas.

Luego del drama, el gobierno ubicó refugios para acoger a los sobrevivientes en la zona afectada y en otras áreas del país. En dichas carpas, cuarteles militares u otros locales provisionales, ciertos damnificados permanecieron hasta un año en condiciones, a veces, más que precarias[2]. En esas circunstancias estas personas debieron aprender a cohabitar entre vecinos que a menudo solo tenían en común la memoria de la catástrofe.

---

[1] Este artículo fue publicado en los *Cahiers des Amériques Latines*, n° 40, 2002, Iheal, París. Se realizó a partir de mi trabajo de investigación para el DEA (Diploma de Estudios Avanzados), equivalente a Maestría, Estudios de las sociedades latinoamericanas en el Iheal (París), Instituto de Altos Estudios de América Latina, "Crisis, ruptura y tácticas de reconstrucción. Catástrofe natural y desplazamiento de población en Venezuela", bajo la dirección de Christian Gros y Odile Hoffmann, 2002, 150 pp. Gracias a mi colega y amigo doctor Carlos Agudelo por la traducción y el apoyo en el trabajo de relectura. Las citaciones de textos teóricos han sido traducidas a partir de las versiones francesas de los mismos.

[2] Según las estimaciones oficiales 120.000 personas transitaron por los refugios.

Entre el 12 y el 15 de noviembre de 2000, nuevas lluvias abaten la región del litoral central y las corrientes de lodo causan nuevas víctimas. El gobierno decide entonces evacuar los refugios y desplazar los damnificados hacia otras regiones del país, poniendo a su disposición viviendas para que se instalen definitivamente.

De las 16.000 familias reubicadas[3], 1.700 fueron conducidas al estado Zulia. Este estado fue el que recibió el número más importante de personas desplazadas. Los demás fueron reubicados en otros 18 estados de los 23 que componen el país. El trabajo que presentamos se desarrolla a partir de la situación de las familias que fueron desplazadas al estado Zulia.

En sus nuevos lugares de residencia, la situación general es actualmente de una relativa inestabilidad. Del conjunto de barrios visitados en diciembre de 2001, no permanecían en promedio entre 30% y 40% de las familias damnificadas. Los recién llegados a los barrios que les había atribuido el gobierno se vieron confrontados con situaciones de rechazo y de estigmatización particularmente significativas. En estos procesos que permitieron el surgimiento o la construcción de una "alteridad peligrosa", algunos factores encuentran su origen en el evento mismo, otros parecen anclados más profundamente en la historia social e identitaria del país. Estos fenómenos evocan de manera más general las situaciones de confrontación que surgen de la cohabitación entre "establecidos" y "marginales", retomando la terminología de Norbert Elias (1965).

El objetivo del presente artículo es examinar el proceso de construcción del estigma que rodea a los damnificados sobrevivientes de la catástrofe. Esta estigmatización, en la cual la prensa ha jugado un papel esencial, nace en los días y semanas que siguieron a la catástrofe para incrementarse después con el desplazamiento de gran parte de los damnificados a distintas zonas del país. El estudio de las diferentes categorías surgidas en ese contexto permitirá interrogarse sobre los mecanismos que a partir de esas situaciones impulsan la construcción de nuevas "identidades" y sobre su apropiación o no por los actores concernidos. A partir de la nivelación brutal operada por la catástrofe, se ha asistido, en efecto, a un encogimiento de la base social, económica, y tal vez igualmente de la base identitaria. Durante un tiempo, la identidad de estas personas pareciera reducida a un solo marcador, el de damnificado. ¿Se puede decir entonces que se está ante el surgimiento de una "nueva identidad", con la aparición de un nuevo grupo en el seno de la sociedad venezolana?

El estigma

Situaciones de crisis tales como las catástrofes naturales constituyen un prisma particularmente pertinente para el estudio de mecanismos sociales ya

[3] Cifras oficiales del Fondo Único Social (FUS), organismo dependiente del gobierno nacional.

existentes pero que en circunstancias críticas dejan de estar escondidos por las normas sociales comunes. Las situaciones de rechazo y estigmatización con las cuales son confrontadas las personas desplazadas no encontrarían solamente sus raíces en los eventos ligados directamente a la catástrofe natural, sino que podrían revelar aspectos del funcionamiento de la sociedad venezolana.

Los griegos utilizaban la palabra *estigma* para designar "marcas corporales destinadas a exponer lo que era inhabitual y detestable del estatuto moral de la persona así señalada" (Goffman, 1975, 11). Esta noción atañe entonces a dos aspectos fundamentales: el cuerpo y la moral. A partir de estos dos aspectos es que se desarrollan, por lo demás, sentimientos ligados con el miedo al mancillamiento y la contaminación (Douglas, 1971) que están inscritos en los comportamientos de rechazo implementados por todos los actores que son llevados a cohabitar en los nuevos barrios del estado Zulia que hemos estudiado. En efecto, la estigmatización, debiendo evocarse en términos de relación y no de atributos (Goffman, 1975, 13), permite constatar que estos procesos han sido desplegados tanto por aquellos que llegan al estado Zulia como por quienes les han "acogido". Para evitar el escollo de un análisis que consistiría en separar unos y otros en grupos diferenciados e inmutables, recordemos con Goffman (1975, 160) que:

> La noción de estigma no implica tanto la existencia de un conjunto de individuos concretos separables en dos columnas: estigmatizados y normales, como la acción de un proceso social omnipresente que conduce a cada uno a cumplir los dos papeles, al menos en ciertas relaciones y en ciertas fases de la vida. El normal y el estigmatizado no son dos personas sino dos puntos de vista.

Damnificados, luego ¿peligrosos?

Si se busca comprender los mecanismos ligados a la creación del estigma que afecta a los damnificados, hay que subrayar primero aquellos que están directamente ligados a la catástrofe. Ésta, en tanto que evento trágico que marcó la memoria del país como una ruptura a partir de la cual "ya nada será como antes", constituye en parte el punto de partida de la existencia de un grupo que vive, desde el evento, a la deriva del conjunto de la sociedad. Los damnificados, sobrevivientes de un evento impactante, son también los portadores de una memoria que se quisiera ocultar. "El 'portador de memoria' puede estar dotado de prestigio si aquello que hace recordar está valorizado (es el que sabe) o estigmatizado cuando la imagen del pasado que él vehicula es rechazada por toda la sociedad (es aquel del cual no se quiere saber nada)" (Candau, 1996, 68).

Hay que destacar el papel de la prensa como actor del proceso de estigmatización. En efecto, en las zonas devastadas por el lodo y mientras las operaciones de salvamento se desarrollaban, se cometieron saqueos y actos de violencia difíciles de evaluar cuantitativamente. Mientras la naturaleza se des-

encadena, ciertas personas ejecutaron actos de una violencia que marcarán al país durante largo tiempo. Como en los relatos del "fin del mundo" el *rumor*[4] movilizado por la prensa habla de ajustes de cuentas, de linchamientos, de beneficios logrados sobre los muertos y heridos, de violencias de los militares, de violaciones, de asesinatos y numerosos saqueos de las casas de los barrios acomodados que fueron destruidos por el barro.

La prensa presenta entonces titulares sensacionalistas tales como "Mil jóvenes violadas, 15.000 viviendas saqueadas" (*Puerto* [Vargas], 28-1-2000). Desde ahí se comienza a hablar de la inseguridad que reina en Vargas y los titulares del tipo: "Reclaman mayor seguridad en Vargas" (*El Universal*, 7-2-2000) no abandonarán la primera plana de los diarios en los meses siguientes.

La relación "gentes de Vargas = delincuentes" marcó y marca todavía los discursos. Ella es retomada actualmente tanto por las personas que cohabitan con los "desplazados" como por aquellos que trabajan con ellos. Dicha relación es también establecida por los propios damnificados que recuperan el discurso, cuando dicen que han sido asimilados, a su pesar, a una pequeña minoría que serían, según ellos, verdaderamente delincuentes.

Para visualizar de manera más precisa lo que abarca el estigma que es asociado al hecho de ser damnificado, podemos escuchar lo que dice Ana Flores, desplazada a San Benito en el Zulia. Ella tiene 35 años y vive con su madre y uno solo de sus seis hijos. Ana quiere vender su casa y partir a Yaracuy, entre Valencia y Barquisimeto. Allá ella no tiene familia ni amigos. Le preguntamos entonces si ella no se sentirá también rechazada y extraña como en el Zulia. Esta fue su respuesta:

> Yo quiero vender la casa y llegar [ella hace el gesto de despegarse algo de la frente] quitándome de la frente la etiqueta de *damnificada*. Llegar allá y no contar que yo he vivido la tragedia. Decir que me instalo en Yaracuy porque me gusta el sitio, no sé, cualquier cosa... (Entrevista, 22-12-2001)

Estamos frente a lo que Gofmann llama la "información social" (1975, 58), esencial en la medida en que permite distinguir entre los individuos estigmatizados, el "desacreditado" del "desacreditable" (57). Teniendo la posibilidad de manejar la información que concierne a su vivencia de damnificada, Ana Flores se coloca del lado de los "desacreditables". Ella identifica claramente el origen del estigma con la catástrofe natural. Su táctica consiste en disimular su vivencia con el fin de evitar la estigmatización. Para evitar el ámbito peyorativo de la identificación con el grupo de los *damnificados*, ella proyecta utilizar "de-

---

[4] Con la utilización del término "rumor" no se trata de negar la realidad de las violencias que se desataron, pero sí de señalar la forma como las informaciones sobre el tema se propagaron.

sidentificadores" (Goffman, 1975, 114), es decir, implementar tácticas que le permitan construir un relato que oculte la relación con la fuente del estigma.

¿Peligrosos en tanto que diferentes?

Una parte del estigma corresponde bien con el evento en sí mismo. Pero hay otros factores que le dan un sentido o permiten la construcción de esta categorización negativa. Se trata de ciertos marcadores referentes al modo de vida, los hábitos, las costumbres, a los zócalos culturales reales o atribuidos. Algunos proponen una lectura étnica de la catástrofe natural, poniendo el acento en el hecho de que la mayoría de la población del estado Vargas es "afro-venezolana" (García, 2000). Aunque buena parte de las personas contactadas no evocan explícitamente el color de la piel, las apariencias fenotípicas o la terminología "étnica" para intentar explicar las dificultades encontradas por los desplazados, sí se hará alusión a su manera de comportarse o de vivir.

De esa forma, se dirá que las gentes de Vargas son "alegres, activas, negras, viven en el 'día a día', aman los tambores"[5] o también que "Vargas es un estado costeño con una tradición afro-latina, ellos son alegres, parranderos, con tradición de tambores, de cerveza, de música"[6]. Mientras la gente del Zulia son más "convenidos, cuidadosos"[7] o más "conservadores, menos abiertos"[8]. Se escucha decir igualmente que porque ellos vienen de un estado costero "los de Vargas" no saben trabajar sino en lo informal, que no son calificados. "Si se hiciera un estudio económico de cada uno de ellos, se vería que muchos son lo que uno llama 'toeros' en cuanto a trabajo, personas que hacen de todo"[9].

Todos estos marcadores que asocian el origen regional, las "tradiciones culturales" y ciertos "comportamientos" nos inclinan a reflexionar sobre las manifestaciones de un racismo latente e inconfesado en Venezuela a pesar de los discursos construidos sobre el "mestizaje armónico" y la "democracia racial" promulgada desde el siglo XIX por el presidente Guzmán Blanco (Pollak-Eltz, 1993). Este "racismo vergonzante" (Briceño León, 1992, 150) que permite ocultar la existencia de una relación proporcionalmente inversa entre capital y negritud (151) es una construcción colectiva implementada por el conjunto de la sociedad venezolana.

Por su carácter vergonzante, este fenómeno no es asumido. Es así como en el curso de las entrevistas, cuando nuestros interlocutores evocan problemas de "culturas" que serían incompatibles, y pedimos precisiones o detalles,

---

[5] Entrevista con responsable de una ONG en Zulia, 13-12-2001.
[6] Entrevista con diputado de la Asamblea Nacional, representante de Vargas.
[7] Ibíd.
[8] Ibíd.
[9] Entrevista con el responsable del FUS en el Zulia 12-12-2001.

a menudo explicaciones más estructurales son destacadas: las diferencias de formación o de profesión, lo que permite hablar en términos de diferencias de clases sociales, preferibles que movilizar ciertos propósitos racistas.

La estigmatización a la que asistimos se articula entonces claramente con la catástrofe natural, pero los mecanismos utilizados recurren a construcciones anteriores. Es así como, a lo largo de las narraciones y las entrevistas, alusiones a las fracturas implantadas en la sociedad venezolana, entre "ricos" y "pobres", "negros" y "blancos", "costeños" y "andinos", resurgen con la fuerza que les imprime el ser explicitadas por el desasosiego de la crisis. Todos los marcadores del "sentido común", como la manera de hablar, de vestirse, la música y hasta la alimentación, intervienen entonces participando del sentimiento de amenaza y de malestar expresados por unos y al rechazo y distanciamiento de los otros.

Categorizaciones, identificaciones

Es necesario detenerse sobre los procesos de construcción de categorías en ese contexto para comprender cómo ellos han podido participar en el mecanismo de estigmatización, pero igualmente por qué visibilizan las estrategias o las tácticas desarrolladas por los actores protagónicos.

Las inundaciones de diciembre de 1999 en Venezuela afectaron sin distinción poblaciones pobres o precarias y poblaciones de clases medias y acomodadas. En efecto, la zona del litoral se caracterizaba por la mezcla y proximidad de viviendas de grupos sociales diferentes. Las casas e inmuebles de vacaciones de habitantes de la capital estaban rodeadas por numerosas construcciones más o menos irregulares situadas en los flancos de la montaña y en los cuales habitaba una población de condición más precaria. Sin embargo, y el caso venezolano no es una excepción, la catástrofe afectó más fuertemente y de forma más prolongada a las poblaciones que eran ya más vulnerables.

Es difícil atribuir a los damnificados un origen social, cultural, "racial" e incluso geográfico común. No podemos pues calificar la población afectada por el desplazamiento como homogénea. Tampoco podemos afirmar que el grupo de *damnificados* y luego de *desplazados* constituye una identidad o identidades nuevas en Venezuela, aun si intentáramos "suavizar" dicho término y extraerle la acusación de esencialismo que pesa sobre él, estipulando que las identidades son "construidas, fluidas y múltiples" (Brubaker, 2001, 66).

No obstante, en ciertos casos, la identificación como grupo de damnificados parece aportar un sentido al igual que el término desplazados que se moviliza en ciertas interacciones. La cuestión de la pertenencia a un grupo oscila entonces entre la constitución de una categoría "utilizada para la acción" (Barth, 1969) y una forma de categorización cuyos mecanismos se relacionan con la construcción del "estigma" (Goffman, 1975). El todo se juega en escenas dife-

rentes que sin embargo se cruzan, y al centro de las cuales los actores principales parecen a veces perdidos entre las diferentes apuestas que representan tales categorías.

El caso extremo estudiado nos revela mecanismos identitarios más generales. Los individuos, tal como se observan aquí, evolucionan entre diferentes categorías móviles y situacionales, que pueden movilizar una por una o simultáneamente. Los ires y venires entre las asignaciones exteriores y su apropiación no se realizan fuera de las relaciones de poder y revelan procesos sociales construidos a la vez históricamente y en constante renegociación.

"Damnificados", "dignificados", "constructores de nuevos horizontes"

Inmediatamente después de las inundaciones nos encontramos frente a una sucesión de construcciones en materia de términos. De "damnificados" devienen "dignificados", luego "desplazados" y hasta "constructores de nuevos horizontes". Se trata entonces de comprender cómo dichos términos han sido escogidos, y por quién utilizados o asimilados con el fin de descifrar el impacto que han tenido y tienen aún hoy sobre el reposicionamiento de estas poblaciones en la palestra social, económica, política e incluso cultural.

Juego de palabras entre la prensa y el gobierno

Para designar las personas que sufrieron las inundaciones y sobrevivieron, el término genérico utilizado a la vez por la prensa y las instituciones, gubernamentales o no, encargadas de atender la catástrofe y sus consecuencias es el de *damnificados*.

El verbo "damnificar" viene del latín *damnificare* que significa: causar daño que, a su vez está relacionado con la raíz latina *damnare* que significa: condenar, censurar, culpar, reprender, criticar. Dicho verbo hace alusión a un daño material cuya raíz evoca sin embargo aspectos "morales". Esta dualidad de sentido pone de manifiesto, en el caso que nos ocupa, el desfase existente entre el origen "natural" de la catástrofe que nos remite a una responsabilidad "divina" y la necesidad de su humanización a través de la búsqueda de un culpable. Si la palabra *damnificado* es un término casi "técnico", sin connotaciones *a priori*, uno se percata que dicha palabra, estudiando los usos que de ella se hacen, está en el centro de diferentes juegos de poder.

Hay que recordar que, en el contexto en el cual se desarrollan los eventos aquí presentados, se asiste a un enfrentamiento particularmente significativo entre el presidente Chávez y el sector privado. Los medios de comunicación, y notablemente la prensa escrita, juegan en este enfrentamiento un papel no deleznable, en la medida en que el conjunto de la prensa escrita nacional, con contadas excepciones, se ubica claramente en oposición al Presidente. La catástrofe natural constituye una ocasión particular de observar cómo se desa-

rrolla este enfrentamiento. Ese ir y venir entre las declaraciones del presidente Chávez y la utilización de términos por la prensa es lo que nos interesa en primera instancia.

La prensa utiliza mayoritariamente el término "damnificados" acompañándolo a menudo de la precisión: "damnificados del estado Vargas" o "damnificados de Vargas". Recordemos que, sin embargo, todos los damnificados no provienen de dicho estado, pero parece que la identificación regional es en este caso portadora de sentido[10]. Poco a poco, el término no designará sino a aquellas personas que han sido damnificadas durante las inundaciones y que viven en los refugios, es decir que son asistidas por el Estado.

El presidente Chávez parece comprender rápidamente el interés que tendría una estrategia de comunicación basada en la construcción de una identificación positiva a partir de la catástrofe. Es así como enseguida después del 15 de diciembre él pronuncia una alocución televisada en la cual promete que:

> Las personas que han perdido sus viviendas por la tragedia serán enviadas al interior para que hagan despegar polos de desarrollo y serán *dignificados,* no *damnificados* (Rivas, 2000, 369).

Esta promesa tiene un impacto extremadamente importante sobre el conjunto de la sociedad venezolana. Como lo analiza Eloy Rivas (2000), esta proposición de "hacerlos dignos" debe ser puesta en paralelo con un proceso que toca la sociedad venezolana en su conjunto y que fue una de las puntas de lanza de la campaña de Chávez en 1998. Se trata de reintroducir la moral en el corazón de la República. En efecto, la dignidad hunde sus raíces en la modernidad. Ella misma impone el humanismo y coloca al individuo en el centro del nuevo cosmos social contra el orden de la sociedad holista. La modernidad marca igualmente la aparición de una filosofía jurídica de derechos humanos. Así, luego del pasaje del estado de naturaleza a la condición humana, el descubrimiento de la dignidad conduce a la dignidad igual de los hombres entre sí (Pavia, 1999, 3). El anuncio de una voluntad de "dignificación" nos impone entonces considerar ésta no solamente en el ámbito individual, sino igualmente en el colectivo. En el plano individual la "dignificación" podría reunirse con la explicitación de la libertad individual. En el plano colectivo ella escenifica el espacio social en el cual la implementación de políticas debe asegurar los derechos sociales y fundamentales que garanticen dicha dignidad igualitaria. Nos situamos aquí en el corazón de la relación Estado-ciudadano. En el centro de

---

[10] Los mecanismos relativos a esta construcción son objeto de un capítulo de nuestro trabajo de investigación en el marco del diploma de DEA (ver nota 1). En efecto, la relación entre identidad y territorio requiere de una prudencia muy particular, tanto más en el caso que nos ocupa cuando un fuerte estigma es igualmente asociado al grupo de *damnificados.*

este proceso o de esta voluntad afirmada, se encuentra el presidente Chávez, colocándose como figura emblemática de este "combate" por la dignidad.

La aparición de este término se acompaña, en el uso que hace el presidente Chávez, de la voluntad de recordar que las víctimas de las inundaciones de 1999 no son si no la parte más visible, en ese momento preciso, de una tragedia más general que afecta el país: la exclusión de la gran mayoría de sus miembros. Si se trata de darles a las víctimas de las inundaciones su dignidad, Chávez no dejará de ligar este evento con los fenómenos de exclusión que existen en el país. Es así, por ejemplo, que el 6 de octubre de 2000, cuando el gobierno organiza el "Primer encuentro de familias damnificadas", Chávez recuerda que:

> La labor gubernamental no sólo busca beneficiar a las víctimas de la tragedia del litoral central, sino que es una consigna que es bien válida para todo el pueblo venezolano, porque el pueblo está damnificado: sin vivienda, sin trabajo, sin escuela, sin salud (*El Nacional*, 7-10-2000).

El término *dignificados* lanzado por el presidente Chávez será enseguida reutilizado por la prensa pero para denunciar el incumplimiento de las promesas del Presidente. Casi sistemáticamente entre comillas o seguido de un signo de interrogación, los diarios utilizarán esta expresión para ilustrar artículos que denuncian la situación precaria de las víctimas de las inundaciones. Se encontrarán así en la prensa nacional titulares tales como:

> Vargas afronta su segunda tragedia. Estudiantes y damnificados tomaron la avenida Soublette por falta de soluciones habitacionales (*El Nacional*, 22-2-2000).
> Refugiados. No sólo hay en Chechenia o Timor Oriental. Nuestro país también tiene sus propios desplazados: los "dignificados" del presidente Chávez (*Tal Cual*, 6-4-2000).
> Los olvidados de Vargas. Sembrados en el desarraigo. Las mismas calamidades se repiten en casi todas las comunidades a donde el FUS envió a los "dignificados": Maracaibo y Guanare sirven de ejemplo (*La Nación*, 13-6-2000).

En orden cronológico, el término *dignificados* aparece entonces justo después de *damnificados*. Sin embargo los dos términos casi siempre han cohabitado. Los retos que la expresión "dignificados" porta giran alrededor de las promesas del presidente Chávez de transformar el drama en una ocasión de reducir las desigualdades en el país. Este término crea entonces a la vez esperanzas y decepciones, y uno puede preguntarse hasta qué punto él no dio nacimiento en el imaginario colectivo a una población que iba a ser particularmente aventajada por el hecho de haber sobrevivido a la catástrofe natural de 1999. Este hecho habría participado en parte en la construcción del estigma que rodea hoy a las víctimas.

En el centro de esta polémica sobre los términos y los desafíos que ellos representan, encontramos enseguida otra expresión que nace luego del encuentro

de familias damnificadas del 6 de octubre de 2000 que acabamos de evocar. Se encuentra en la prensa de los días siguientes al encuentro de un aviso publicado conjuntamente por el Ministerio de la Salud, el de Desarrollo Social y el FUS titulado:

> Los afectados por la tragedia ocurrida en diciembre pasado, ahora "constructores de nuevos horizontes", a la opinión pública nacional (*El Nacional*, 12-10-2000).

Este aviso retoma los "acuerdos" concertados entre los "450 delegados provenientes de todos los refugios militares, civiles, solidarios y nuevos asentamientos", durante el encuentro. El primero de estos acuerdos es el siguiente: "Solicitar formalmente la no utilización de los términos peyorativos de damnificado, afectado o dignificado, que consideramos discriminatorios...".

El segundo "acuerdo" estipula: "A partir del día sábado 7-10-2000 exigir la denominación futurística de 'constructores de nuevos horizontes', para tal efecto se solicita al Gobierno Nacional la realización de una campaña de concientización".

Los objetivos no explícitos que están en juego con este encuentro organizado por el gobierno son importantes. Por una parte hay que señalar que en los refugios todavía emplazados y en los nuevos barrios en los cuales las primeras familias fueron desplazadas cierta movilización se había podido construir en torno a reivindicaciones referidas al empleo, el acceso a servicios y el cumplimiento de las promesas hechas por el presidente Chávez luego de las inundaciones. Los damnificados dispersos en el territorio adquirieron gracias al apoyo de ciertas ONG y a la formación recibida en los refugios, competencias organizativas que les permitían constituirse en verdaderos actores. La organización de este encuentro por el gobierno en 2000 puede ser que haya tenido por objetivo contener las capacidades o las voluntades de movilización de estos actores. Ella ha tenido en todo caso como efecto el desmantelar de forma eficaz buena parte del proceso organizativo implementado por diferentes grupos de damnificados en el país.

Uno es llevado entonces a dudar de la solidez de esos "acuerdos" y puede cuestionarse el hecho de que el término *constructores de nuevos horizontes* sea el resultado de una lógica de autoidentificación positiva que intentaría responder a la estigmatización encontrada desde la catástrofe natural. La construcción de esta expresión parece más bien provenir del gobierno que de los propios interesados. Es entonces importante subrayar la dimensión identitaria, territorial y temporal que porta dicha fórmula.

Esta expresión de *constructores de nuevos horizontes* tendrá al igual que *dignificados* una vida relativamente corta. Ella no será retomada por los mismos damnificados. En revancha, la prensa la recupera tratándola de la misma

manera que el término "dignificados", es decir entre comillas y para señalar el contraste que evoca con respecto a la situación real de las familias. Un ejemplo:

> Los "constructores de horizontes", como llaman en el FUS a los damnificados, aún no tienen horizonte (*La Nación*, 14-6-2001).

Finalmente, en la prensa otros términos vuelven con menos frecuencia y sirven igualmente para designar a los damnificados. Son términos como "sobrevivientes", "víctimas", "afectados", pero también "reubicados", "inmigrantes", "varguenses" y aun "olvidados". Estas apelaciones recurren a tres mecanismos centrales: los tres primeros designan las inundaciones como punto de partida en la existencia del grupo. El origen de su existencia colectiva es pues la catástrofe natural. Los tres siguientes acentúan el origen geográfico de esas personas y se acercan en ese sentido a las explicaciones en términos de desarraigo, léase culturalistas. Finalmente, el último "olvidados" destaca las carencias de un Estado que ha generado en torno de estas poblaciones muchas expectativas a las cuales no ha podido responder.

Estos "juegos de palabras" tienen entonces un impacto muy fuerte sobre la modificación del estatuto de las personas que designan. Al centro de las construcciones de categorías que inducen, el gobierno y la prensa juegan un papel fundamental. Pero otros actores utilizan también los mecanismos de categorización para desarrollar, por ejemplo, estrategias de movilización a partir de una apelación "colectiva".

ONG: Categorías y estrategias de movilización

Aquí nos basaremos en el análisis del trabajo de la ONG EFIP[11]. Su presencia en este contexto ha sido particularmente significativa en la medida en que ha trabajado en los refugios de Vargas durante todo el año 2000. Su trabajo con los damnificados ha sido básicamente de formación y acompañamiento del proceso de organización. Esta implicación ha perdurado luego del desplazamiento especialmente con la implementación de encuentros entre familias de desplazados y el intento de constituir una coordinación nacional.

La movilización que esta ONG ha efectuado en los refugios se construye en un primer momento en torno al término damnificados. Esto se afirma por ejemplo en el apoyo a la Constitución durante el año 2000 de Asodam: Asociación de Damnificados del Estado Vargas, que permitirá a las víctimas que viven en los refugios reivindicar su participación en las decisiones que les conciernen.

El término permitía ciertamente encontrar, de una parte, una denominación común para la multitud de situaciones y en cierta forma homogeneizar el grupo en torno a un fenómeno vivido por todos: la catástrofe natural. Por otra parte,

---

[11] Equipo de Formación, Información y Publicaciones.

la palabra *damnificados* permitía reagrupar el conjunto de reivindicaciones alrededor de una justificación común: el hecho de ser víctimas del siniestro.

En el momento de la evacuación de los últimos refugiados en diciembre de 2000, EFIP acompañó algunos grupos a sus nuevos lugares de instalación. Enseguida, luego de visitas realizadas en seis regiones del país y constatando las dificultades afrontadas por las familias, la asociación vislumbró organizar, con los líderes de los grupos de desplazados a los nuevos sitios, un "encuentro nacional que les permitiese no sólo intercambiar informaciones y experiencias, sino dinamizar alternativas para fortalecer el proceso de formación y organización" (EFIP, 2001).

Desde entonces, en los documentos de la ONG, el término *desplazados* aparece. Este no reemplaza totalmente al de *damnificados* pero va a ser particularmente útil en el momento en que el rechazo de las poblaciones víctimas que llegan en las diversas regiones del país está en el centro de las preocupaciones. Es en torno del término *desplazados* que la EFIP logrará implementar un plan de acción nacional que conducirá a la organización de varios encuentros regionales y luego de uno nacional del 27 al 29 de julio de 2001 en el estado Portuguesa. Este encuentro es oficialmente organizado de manera conjunta entre EFIP y Asodam.

La prensa retomará esta denominación, pues, enseguida de este encuentro del mes de julio 2001, se encuentra por ejemplo:

> Mesa nacional de negociaciones proponen damnificados de Vargas. Los llamados "dignificados" por el presidente Hugo Chávez o "constructores de nuevos horizontes" por el FUS prefieren ser conocidos como "familias desplazadas" (*Tal Cual*, 31-7-2000).

El término desplazados permite tal vez también a la ONG EFIP y a los mismos damnificados trasladar el origen de los problemas encontrados por esas familias. Ya no es porque ellos han sido víctimas de la catástrofe natural (damnificados) que son rechazados, sino porque han sido desplazados de su lugar de "origen". Sin embargo las acciones realizadas y las tentativas de organización apoyadas por la ONG no se concentran en torno de la reivindicación de reasentamiento en Vargas, sino sobre acciones para apoyar a los grupos en su organización en los nuevos lugares de vida con el fin de facilitar su "integración". A pesar de todo, se debe resaltar que ese deslizamiento semántico permite adjudicar una causa social a la desgracia vivida por las víctimas y ya no más una causa natural –léase, divina–: la catástrofe.

Hay, por otro lado, que recordar la importancia creciente que el término "desplazados" ha tomado en el contexto vecino, en Colombia, con los desplazamientos forzados de población ligados a la violencia. No es anodino que éste haya sido retomado por una ONG sensibilizada con problemáticas inter-

nacionales y que tal vez ha intuido qué tanto la utilización de un término tan evocador en el contexto regional puede permitir hacer visible un proceso local.

Autoidentificación: apropiación de términos

Las lógicas de construcción de diferentes categorías son entonces manifiestamente inherentes a estrategias de actores exteriores (gobierno, prensa, ONG). Sin embargo, los mecanismos de apropiación o de rechazo de términos nos muestran el impacto que tienen las categorizaciones sobre las personas que ellas designan.

Como se ha visto, el término *damnificados* es retomado por los principales interesados, que hacen de él, durante el período de vida en los refugios, el punto de articulación de sus intentos de organización. Pero, de parte de las víctimas, el uso del término *damnificados* no puede reducirse a una utilización "instrumental". Este se encuentra en las primeras narraciones que nos hacen las personas desplazadas en Zulia para describir por ejemplo su nuevo barrio:

> La primera etapa es ésta, es para los damnificados. La segunda etapa, para las personas naturales, de aquí (Entrevista, 15-12-2001).

El término *damnificados* permite el nacimiento de un "nosotros" cuyo sustento colectivo es construido en torno de las dificultades encontradas y los sufrimientos compartidos:

> Pero mira, nosotros los damnificados pasamos humillaciones. Mira, con todo lo que nos ha pasado aquí, ¡hombre! Hemos llorado (Entrevista, 19-12-2001).

El carácter peyorativo del término es igualmente resentido. De esa manera Noemí nos explica por qué los *damnificados* fueron "echados" de sus casas por los "maracuchos":

> Sí, porque no quieren vivir con damnificados. No sé cuál es su mente, pero es así... (Entrevista, 15-12-2001).

Inversamente, el término *dignificados* lanzado por el presidente Chávez no fue el objeto de una reapropiación por los actores concernidos, de la misma manera que *constructores de nuevos horizontes*. Su utilización no ofrecía visiblemente la posibilidad ni de construir alguna reivindicación de mejoramiento de la situación, ni de entrar en el proceso de normalización deseado por algunos.

El proceso de apropiación del término *desplazados* por las víctimas que viven en el estado Zulia nos muestra por el contrario un aspecto particular del uso de categorías. Si éste es poco utilizado en las conversaciones corrientes, él aparece sin embargo en contextos precisos, como durante la entrevista con una de las líderes de las víctimas desplazadas a Villa Baralt en el estado Zulia, cuando nos explica que "la comunidad" está creando una asociación llamada

Aprobalt, que es, según sus términos: una "asociación para el desarrollo social, cultural, económico y humano de los desplazados del estado Vargas que residen en Villa Baralt" (Entrevista a Noemí, Villa Baralt, 15-12-2001). Cuando le preguntamos para qué sirve la asociación ésta es su respuesta:

> **Noemí**: Nosotros nos estamos encargando más que todo de la formación. De formarnos como nuevas personas, el desarrollo humano, del mejoramiento de la calidad humana nuestra para poder adaptarnos al sistema, pues. De aquí, de este estado. Y, de una manera legal, representarnos dentro de esa asociación. Ante la ley. Porque si tenemos eso, la ley, podemos ser un grupo. Y ese grupo, nosotros lo llamamos el grupo de los desplazados, hay que dar un carácter jurídico a eso.
> **Sandrine**: ¿Entonces se trata de defender los derechos de los desplazados?
> **Noemí**: Sí, de los desplazados. Por ejemplo nos dicen que si el presidente Chávez sale del gobierno, nos van a quitar las casas. Inclusive, eso es una amenaza que dice la gente (Entrevista, 15-12-2001).

Luego de la experiencia adquirida en los refugios y la movilización desarrollada en torno del colectivo de damnificados, los líderes comunitarios han comprendido por una parte lo que está en juego con respecto a una categoría movilizadora, y por otro lado la importancia de la existencia jurídica y formal de este grupo. Es para responder a las "amenazas" que el grupo debe existir jurídicamente. Así, evaluando el contexto y movilizando los saberes de fondo para ubicarse en la situación actual, los *desplazados* implementan estrategias que les permiten resistir a las presiones de la nueva situación.

El análisis de las diferentes denominaciones y sus usos nos confirma la importancia de la terminología en los procesos de identificación operados por los grupos y las personas. Las palabras utilizadas permiten descifrar las lógicas de los actores y las posturas sociales que les son inherentes. En esos procesos se cruzan designaciones exteriores y autodesignaciones, en movimientos complejos donde se confronta la construcción de una imagen de sí, valorizada o desvalorizada, tanto como su instrumentalización. Así como el hecho de vivir en un refugio ha podido permitir en un momento dado beneficiarse de ciertas ventajas, la constitución de un sujeto político *damnificado* o *desplazado* posee también fines prácticos.

"Nosotros" y "Ellos": ¿quiénes son los Otros?

Si podemos identificar, a través de procesos complejos de auto y heteroidentificación, el surgimiento de un "nosotros" que se articula, así sea caóticamente, en torno de los eventos de diciembre de 1999, y si, en tanto que ese "nosotros" no existe sin "ellos", es necesario, entonces, intentar saber cómo son percibidos los otros. Hemos escogido ubicarnos, para el estudio de esta cuestión, desde el punto de vista de los damnificados, para intentar comprender cómo estos últimos perciben a aquellos que no hacen parte de esta "comunidad" de víctimas y desplazados. Se trata pues de adoptar un ángulo diferente, aquel del otro, del "marginal" que deviene mayoritario.

La capacidad de "réplica" que se desprende de este análisis llega a mostrar, contrariamente a la posición defendida por Norbert Elias (1965), que en el caso que nos ocupa el grupo "marginal" que constituye los *damnificados* alcanza un grado de cohesión suficiente para utilizar a su vez los mecanismos verbales de creación del estigma y construir en torno de los "instalados" una alteridad amenazante y peligrosa. Estas construcciones coexisten por lo demás con la interiorización del prejuicio negativo atribuido a los *damnificados*.

El otro es localizado

Pareciera que se puede intentar organizar las alteridades construidas por los *damnificados desplazados* en el estado Zulia en función de las interacciones que las producen, pero igualmente del espacio físico en el cual estos últimos se desarrollan. Nos situaríamos entonces en lo que Barth llama una "perspectiva ecológica" (196, 219) que nos llamaría a explorar los diferentes "nichos culturales" en la búsqueda de espacios de articulación entre los "grupos". Pero también se podría tomar a Goffman quien analiza las diferentes estructuras en el seno de las cuales los contactos se producen y que constituyen otros tantos condicionamientos sobre los "roles". Estas estructuras que Goffman llama los "lugares de la acción" (1974, 158) en las cuales se puede observar la "separación de roles" (1974, 96) más o menos neta que operan los actores.

Se distingue primero un otro que se sitúa en el ámbito de la región. Se trata de los "zulianos" o de manera más recurrente los "maracuchos", aun si éstos no viven en la ciudad de Maracaibo. En esta denominación de un otro localizado se encuentran igualmente dos categorías: los "colombianos" y los "guajiros".

Los colombianos portan también un estigma bastante fuerte. Ellos son asimilados a inmigrantes ilegales, marginales, traficantes. En ciertos sitios donde los barrios vecinos son habitados fundamentalmente por colombianos, el estigma está muy presente en los discursos. Cuando Neida, damnificada que habita en Villa Baralt, nos habla de los problemas de seguridad en el barrio, nos explica: "Es por la zona, hay muchos marginales, hay colombianos". Y cuando la señora Gómez –ella misma indígena wayú– vio llegar "los de Vargas", ella pensaba que eran colombianos, "porque eran todos negros" (Entrevista, 26-12-2001).

El término "guajiro" es esencialmente utilizado para aquellos que no viven en presencia próxima de comunidades indígenas. En Villa Tamare, por ejemplo, donde los vecinos directos son indígenas de la comunidad wayú, se les llama "los wayú". Pero en los otros barrios que están en menor contacto se designan a los indígenas con el nombre genérico de "guajiro".

Parece entonces que existen mecanismos de jerarquización de la estigmatización, transformándose ésta en función de los actores que la construyen y la utilizan. La señora Gómez, por ejemplo, puede perfectamente encontrarse en ciertas circunstancias en posición de estigmatizada como indígena, pero ella

encuentra con el caso de los colombianos, y de una manera más general de "los negros", que ella no es tan estigmatizada. Neida, que viene de Vargas, vive a su turno situaciones de rechazo y estigmatización pero se protege construyendo a su vez una asociación estigmatizante hacia los colombianos.

De otra parte, hay que señalar que ninguna de estas construcciones es fija o definitiva ya que se observa cierta evolución. Mientras al comienzo la percepción de los otros se hace de manera indistinta, los otros serán todos esos que no forman parte del "nosotros". El paso de los meses ha permitido hacer la distinción entre los maracuchos, los colombianos, los guajiros y con esta diversidad se instalan otros niveles de relaciones.

El otro a la vez competidor y necesario

Un término que retorna a menudo para designar aquellos que no son *damnificados* es el de "compradores", lo que tiene una significación particular en la medida en que hace énfasis en los procesos relativos a la propiedad de las casas. En efecto, los damnificados, en el marco de una política social destinada a permitirles una integración más fácil en las regiones receptoras, han tenido un acceso particularmente fácil a la propiedad. Las casas les han sido "puestas a disposición" bajo el único criterio de ser *damnificado* y un sistema de crédito debía ser implementado con un acceso a la propiedad por un precio que cubre aproximadamente 10% del valor de la casa. En contraste, los "compradores" son las personas no damnificadas que han comprado las casas a precio fuerte, ya sea al Estado, o de manera ilegal a quienes dichas casas les habían sido asignadas. La lucha por el espacio está en el centro de la construcción de cierta alteridad y, en consecuencia, una cierta faceta de la identidad.

Pero las construcciones de categorías para designar al otro no operan todas en torno del conflicto. A veces, la complementariedad interviene también. En el marco de la interdependencia que se crea, el otro es entonces definido en función de la utilidad que puede tener para sí mismo o para el grupo.

Una ilustración de este fenómeno aparece en la entrevista con Noemí. Habiendo llegado a Villa Baralt hace un año, ella está montando una línea de transporte colectivo que une la urbanización con el barrio La Curva a unos quince minutos de allí. Noemí me cuenta de su proyecto:

> **Noemí**: El proyecto es nuestro, pero incluimos en el proyecto a personas de bajos recursos de aquí. Ellos tienen carritos en malas condiciones, y nosotros les dimos a ellos para que ellos comenzaran, antes que a nosotros nos apoyen en el proyecto. Parece que va a estar el año que viene, estamos en conversaciones para eso.
> **Sandrine**: ¿Entonces hay gente de aquí con los cuales se puede hablar y hacer cosas?
> **Noemí**: Si, nos ha costado. Son personas no exactamente de aquí, sino... contactos que hemos hecho, pues. Inclusive de la misma gente que nos rechazaba, pero hemos hablado con ellos.

Aquí estamos frente a un proceso que nos remite a lo estudiado por Barth quien analiza las situaciones entre los grupos étnicos en una perspectiva ecológica en términos de complementariedad:

> La relación positiva que une varios grupos étnicos en un sistema social englobante depende de la complementariedad de los grupos (...). Tal complementariedad puede hacer surgir una interdependencia o una simbiosis, y constituye las zonas de articulación (1995, 218).

El análisis de diferentes niveles de identificación y de construcción de la alteridad en el contexto que nos ocupa nos confirma que existen tantas imágenes de los otros como existen imágenes de sí. Son las interacciones las que determinarán esas diferentes construcciones. Éstas son entonces móviles, reversibles y pueden combinarse.

Conclusión

En este recorrido sinuoso en la búsqueda de diferentes representaciones de sí y de los otros, que se han construido en el curso de los dos años que separan el momento de nuestra investigación del evento representado por las inundaciones de 1999, ha surgido una tensión. Los procesos de identificación y de reconstrucción se hacen particularmente complejos. Hay tensión entre el hecho de buscar una "humanidad común" al tiempo que se reivindican los derechos particulares ligados al hecho de ser una "víctima".

Puede ser en torno de la dificultad de construirse una identidad propia y de reivindicarla que hay que buscar una pista de explicación. Como lo sugiere Michel Agier, debemos ciertamente detenernos en la dificultad de situarse frente a esta identidad de *damnificados* o de *desplazados*, "identidad dada en la coacción y sin comunidad, es decir, sin lugar y sin cultura que les sean propias y les den fundamento. Toda comunidad de interés, necesaria desde que el exilio perdura y hace que se deba actuar para sobrevivir, debe entonces concebirse en condiciones particularmente adversas, marcadas por la heterogeneidad étnica, social o política, y por la desvalorización de esta nueva identidad a ojos de los otros" (Agier, 2002, 56).

Entre otras, es probablemente en la gestión misma de la crisis, a la vez por las autoridades gubernamentales y por los actores "humanitarios" (internacionales y nacionales) que se deben buscar las raíces de un posicionamiento social en tanto que "víctima" que no facilita la emergencia de actores protagónicos. Así, las estrategias colectivas implementadas para superar los fenómenos de rechazo, estigmatización y dependencia, creados por la crisis, se apoyan, como se ha visto, en la utilización de ciertas categorías tales como la de *damnificados* o *desplazados*. Pero ellas se organizan en un contexto que no les favorece. Proponemos entonces hablar en ese caso de "tácticas" en la medida en que este término parece describir bien el universo en el cual se desarrollan

las prácticas descritas aquí y poner en evidencia el diferencial de poder existente entre los actores en acción. "Arte del débil, (...) la táctica es determinada por la *ausencia de poder*" (de Certeau, 1990, 61-62).

Es en el marco de esta ausencia, o más precisamente de ese desequilibrio de poder, donde se ubican el conjunto de procesos de identificación evocados aquí. El uso y apropiación de categorías asignadas por actores exteriores, tales como la prensa, el gobierno o las ONG, proceden todavía más de estas "tácticas" que se articulan en un universo coercitivo en el seno del cual detectan "rayas, resplandores, rasguños y descubrimientos en la cuadrícula de un sistema" (de Certeau, 1990, 62).

Hacer visibles esos mecanismos y esas tácticas parece tanto más importante en cuanto su existencia permite dar razón de fenómenos que se sitúan en los "márgenes" de la sociedad global donde la informalidad se codea con la creación de normas, donde los no-dichos construyen casi tantas situaciones como las acciones, donde la ilegalidad hace parte integral de lo cotidiano. Se trata entonces de elaborar marcos a la vez metodológicos y conceptuales que puedan dar cuenta de la fluidez, la informalidad y la movilidad de estos fenómenos.

Bibliografía

Agier, Michel (2002): *Aux bords du monde, les réfugiés,* París, Flammarion.

Baby-Collin, Virginie (2000): "Les barrios de Caracas ou le paradoxe de la métropole", *Cahiers des Amériques latines,* n° 35, París, pp.109-128.

Barth, Frederick (1995): "Les groupes ethniques et leurs frontières" en P. Poutignat y J. Streiff-Fenart, *Théories de l'ethnicité*, París, PUF (1969), pp. 203-249.

Bolivar, Teolinda (1995): "Urbanizadores y constructores para ser citadinos. Creación de vidas en la necesidad", *Revista Urbana*, n° 16-17, pp. 31-52.

Briceño-León, Roberto (1992): *Venezuela: clases sociales e individuos*, Caracas, Fondo Editorial Acta Científica Venezolana.

Brubaker, Rogers (2001): "Au delà-de l' 'identité'", *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, París, n° 139, septiembre, pp. 66-85.

Candau, Joël (1996): *Anthropologie de la mémoire*, París, PUF, Que sais-je?

Certeau, Michel de (1990): *L'invention du quotidien. 1. arts de faire, 2. habiter, cuisiner*, París, Gallimard, Folio essais.

Douglas, Mary (1971): *De la souillure*, París, François Maspero.

EFIP (2001): Boletín "Solidaridad Permanente", 1er trimestre, p. 5.

Elias, Norbert (2000): *Logiques de l'exclusion,* Paris, Fayard, Pocket Agora, (1a ed. 1965).

García, Jesús [Chucho] (2000): "La tragedia que sacudió al mundo. Ochenta por ciento de los afectados son afrovenezolanos", *Africamérica*, Caracas, n° 8.

Goffman, Erving (1975): *Stigmate*, París, Les Editions de minuit.
Hurtado, Samuel (1995): "Matrisocialidad y la problemática estructural de la familia venezolana", *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, n° 1, enero-marzo, pp. 147-167.
Pavia, Marie-Luce (1999): "La découverte de la dignité de la personne humaine" en Marie-Luce Pavia, Thierry Revet (dir.), *La dignité de la personne humaine*, París, Economica, pp. 3-23.
Pedrazzini, Yves (2001): "Barrios, gangs, enfants de la rue...: Culture d'urgence et culture de l'asphalte en Amérique latine", Communication séminaire Prisma-4, Toulouse, 10-11 de mayo de 2001.
Pollak-Eltz, Angelina (1993): "¿Hay o no hay racismo en Venezuela?", *Ibero Amerikaniches Archiv*, Berlín, vol. 19, n° 3/4, número especial, pp. 271-289.
Rivas, Eloy (2000): "Dignificación de los damnificados: aproximación a una Constituyente Moral", *SIC*, Caracas, n° 628, sept.-oct., pp. 369-371.

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2003, vol. 9, nº 3 (mayo-agosto), pp. 59-71

ESTADOS UNIDOS Y LA DOCTRINA BUSH EN POLÍTICA EXTERIOR. VISIÓN DESDE AMÉRICA LATINA

Franklin Molina

Estados Unidos en el nuevo siglo-milenio comienza actuando bajo los lineamientos de una política exterior que se sustenta sobre las bases de la Doctrina Bush[1]. Esta doctrina prevalece en las principales acciones diplomáticas del presidente George W. Bush. Hacia el mundo Washington quiere neutralizar un posible ataque que venga de los árabes, de los norcoreanos, o de cualquier otro país miembro de lo que se ha denominado desde la Casa Blanca y el Departamento de Estado el "eje del mal" (Irán, Corea del Norte o Irak). Este miedo al mundo se profundizó luego del 11 de septiembre de 2001, cuando las torres gemelas de Nueva York se derrumbaban como dos castillos de naipes, y lentamente se fue proyectando una imagen de vulnerabilidad de la principal potencia de los asuntos internacionales.

El país mas "seguro" dejaba ver una estela de dudas sobre su capacidad de resguardarse frente a los ataques externos. En opinión del recién electo ex gobernador de Texas, esto deberá revertirse mostrando una imagen de dureza en los asuntos internacionales. *Mano de hierro* de la diplomacia norteamericana vendrá a caracterizar las acciones de EEUU hacia un mundo nada pacífico, y así el siglo XXI sólo será la reinvención de los siglos anteriores, llenos de guerras, enfrentamiento, equilibrios y desequilibrios de los sistemas internacionales[2].

En la teoría de las relaciones internacionales se hicieron algunas aproximaciones *light* (Halliday, 1999, 124) y muy optimistas sobre un mundo nada pací-

---

[1] En asuntos internacionales los norteamericanos han elaborado un gran compendio de doctrinas que parten desde el discurso de George Washington al Congreso norteamericano, finalizando el siglo XVIII, cuando pedía a Europa y particularmente a la Santa Alianza no intervenir en los asuntos hemisféricos.

[2] Los sistemas internacionales carecen de *sistematicidad organizada temporal*, es decir, se debilitan por los cambios, revoluciones o alteraciones al *statu quo* sistémico (Holden, 2001).

fico y ordenado después de la caída de la Europa del Este[3]. Predominó en las relaciones internacionales el *neokantianismo*, o *neoidealismo* (Underhill, 1994) en el cual se pensó que se alcanzaría la Paz Perpetua propuesta por Inmanuel Kant, para el orden internacional de los siglos XVIII y XIX. Sin embargo el mundo de hoy necesita aproximaciones teóricas y conceptuales que expliquen y analicen las constantes contradicciones, complejidades y articulaciones de un nuevo orden mundial en proceso de destrucción, reconstrucción o sencillamente la explicación de la construcción final del orden en la pos-Guerra Fría (Holden, 2001).

Es de destacar que la guerra de Irak no trastoca por completo al sistema internacional pero sí deja evidencia de un reacomodo del orden internacional de pos-Guerra Fría, caracterizado por i) dificultades del "viejo" sistema ONU, ii) una visión de la política exterior de Estados Unidos con grandes contradicciones tanto "internas" como "externas", iii) limitaciones para la *gobernanza global*, iv) un regreso a las concepciones geopolíticas de carácter globalista.

En primer lugar la dificultad del sistema ONU, que se creó en la Conferencia de San Francisco de 1945, se refleja en los siguientes aspectos:

- Debilidad para alcanzar la paz; es decir inestabilidad en lograr los objetivos de mantenimiento de la paz consagrados tanto en los *principios,* como en los *propósitos* de la Carta ONU (ver *principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas).*

- La asimetría del poder[4] del Consejo de Seguridad donde los cinco miembros permanentes se miran como los famosos prisioneros del dilema de la Teoría de los Juegos, donde se contradicen entre cooperar o no cooperar.

- La vulnerabilidad de la agenda internacional, caracterizada por ser una agenda llena de "múltiples agendas entrecruzadas" más allá de la guerra, como la pobreza, los derechos humanos, las armas nucleares, el desarrollo, lo que aumenta el tiempo de violencia en las relaciones internacionales (Held, 2001).

En segundo lugar las contradicciones "internas" y "externas" de Estados Unidos se expresan en los siguientes aspectos:

---

[3] Es de destacar la obra de Francis Fukujama sobre *El fin de la historia y el último hombre*, en el que se pronostica un mundo libre y democrático sin conflictos internacionales (Fukujama, 1992).

[4] En cuanto al poderío en el Consejo de Seguridad, Europa solamente tiene según informes de la OTAN 40% de las fuerzas norteamericanas (datos publicados en *World Affairs*, 2002, 178).

- En el ámbito interno la *imposición* de los halcones políticos en la diplomacia norteamericana (Cristison, 2002, 199). Según Stanley Hoffman (2002) la nueva arquitectura internacional representa para Estados Unidos una enorme complejidad por el choque evidente de globalizaciones donde son necesarios los aliados; no obstante, la administración Bush está aislada de sus tradicionales aliados occidentales.

- En el ámbito externo, la también imposición de los halcones políticos en el plano *multilateral.* La visión halconiana de las relaciones internacionales a nuestro modo de ver se ha impuesto en los principales organismos internacionales como la ONU (Consejo de Seguridad), en la OTAN como organismo regional, y en algunos acuerdos regionales como Asean, y el Foro Asia-Pacífico.

En tercer lugar, la limitación de la *gobernanza global* está caracterizada por los siguientes elementos:

- Una dificultad evidente en la *gobernabilidad planetaria.*

- Un sistema que carece de grandes tratados de paz o convenciones diplomáticas que no establezcan, como lo hicieron Versalles en la Primera Guerra Mundial(1919) o la Conferencia de San Francisco (1945), en la segunda posguerra, una *arquitectura mínima* de relaciones internacionales.

- Un orden de gobernanza global que se dificulta en tres dimensiones: económica, (multipolar) política (unilateral) e institucional (con mayor tendencia a la multilateralidad globalista).

- Estados Unidos –luego del derrumbe del Muro de Berlín– se convirtió en el rector de la alta política internacional, fundamentado en lo que en el siglo XX se llamó *la pax americana.* El peso de Estados Unidos en el sistema internacional posbipolar es importante en el plano tecnológico, económico, industrial, cultural, social, y fundamentalmente en la esfera política. Sin embargo los elementos externos limitan el *establishment* total de Estados Unidos en la palestra internacional y más aún la posibilidad de construir espacios que aseguren la gobernabilidad norteamericana en el tablero del juego internacional (Klare, 2002).

El 11 de septiembre: ¿El enemigo sin rostro?

Aquel 11 de septiembre de 2001 representaba, por un lado, el derrumbe de muchos términos de uso tradicional en la política y en las relaciones internacionales como seguridad, soberanía y poder, y, por otro lado, la construcción

de una agenda global con temas nada característicos del sistema de Guerra Fría, así el *neoterrorismo* se perfila como el metafenómeno de la política internacional que fundamenta la nueva arquitectura de los asuntos internacionales (Homer, 2002), inclusive la justificación de las acciones unilaterales de Norteamérica.

Esto llevó a George W. Bush –con pocos meses en la Casa Blanca– a tener más claro su imaginario del mundo exterior. Por un lado, considera a algunos países con alto potencial de *antinorteamericanismo* –caracterizados por tener "grupos sociales" de varias culturas que consideran a Estados Unidos como un enemigo en el mantenimiento de su cultura– posiblemente preparados para atacar a Estados Unidos. Por el otro, no sabe claramente los Estados o los actores responsables de los hechos "increíbles" ejecutados contra el World Trade Center. Esto lleva a la idea de iniciar una guerra *no convencional* y a la posibilidad recurrente de sentirse "hacia adentro" como un país altamente amenazado e inseguro con respecto a la política internacional (Baxter, 2002).

La Doctrina Bush surgió –como lineamiento inicial– desde la campaña electoral frente al ex vicepresidente Al Gore, del Partido Demócrata, en 2000. No obstante después del 11 de septiembre y –con ayuda de Powell, Rumsfeld, Condoleezza Rice y Dick Cheney[5]– Bush (hijo) se consolida en su política exterior con los siguientes elementos: en primer lugar, logra articular la seguridad nacional como elemento inherente a la seguridad global, a partir de la creación del escudo antimisiles (incluido el de Israel), la construcción de "alianzas estables" bilaterales (Washington y Londres) y las "alianzas difíciles" (Washington-París y Washington-Berlín) (Hoffman, 2001). En el ámbito interno se exigen algunas investigaciones en las agencias de inteligencia (FBI-CIA) y se crea el Departamento de Seguridad, además de aumentar el presupuesto nacional para programas de seguridad nacional y prevención del delito a través de la Ley de Seguridad (Klare, 1995).

[5] Aunque el presidente George W. Bush carece de antecedentes en política exterior, se ha rodeado de un equipo desusadamente experimentado y consumado. El secretario de Estado Colin Powell sirvió previamente como jefe del Estado Mayor Conjunto y como asesor de Seguridad Nacional. El secretario de Defensa Donald Rumsfeld vuelve al puesto que ocupó una vez. Además, antes encabezó una comisión que analizó la vulnerabilidad de Norteamérica a los ataques con misiles y recomendó un programa de defensa contra misiles. La asesora de Seguridad Nacional Condoleezza Rice sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC), donde se ocupó de cuestiones europeas durante la última parte de la Guerra Fría. Y el vicepresidente Dick Cheney no sólo fue secretario de Defensa en la administración del otro presidente Bush, sino que también trabajó como secretario general de la Presidencia cuando Gerald Ford. Más aún, los segundos de a bordo en Estado, Defensa y el NSC (Richard Armitage, Paul Wolfowitz y Stephen Hadley) también traen consigo credenciales impresionantes y larga experiencia en política exterior y de defensa, como lo hace Robert Zoellick en su cargo de representante de Comercio de Estados Unidos. Esta experiencia y pericia son importantes para enfrentar los principales retos internacionales que ahora encara ese país.

En tercer lugar, la Doctrina Bush busca un posicionamiento en los temas internacionales con un alto contenido de "realismo global"[6], evaluando los grandes costos para la Casa Blanca de compromisos multilaterales como el Tratado Penal Internacional (Estatuto de Roma) y el Protocolo de Kyoto, o los compromisos multilaterales adquiridos en la Ronda de Comercio de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Estados Unidos se niega a cooperar con algunos *regímenes internacionales* en materia ambiental y penal.

En cuarto lugar, la Doctrina Bush asume el particular *dualismo norteamericano*, al mejor estilo de las doctrinas clásicas de política exterior de EEUU, donde diplomáticamente se comporta de manera aislacionista y cautelosa, y en otros temas como altamente intervencionista y unilateralista. La historia de Estados Unidos nos cuenta del "doble juego" de cartas en los asuntos internacionales, que va desde posiciones moderadas hasta posturas nada conservadoras con un grado de intervencionismo en algunos conflictos mundiales[7]. Esto significa un nuevo tipo de *aislacionismo intervencionista*. El *aislacionismo intervencionista* es una acción contradictoria de la política exterior norteamericana en la que algunas veces es altamente aislacionista y en otros prefiere salirse de la institucionalidad internacional-global (Fineman, 2003).

Esta doctrina tiene de fondo el elemento del *terrorismo global*. El 11 de septiembre en el marco de los sucesos del World Trade Center, en el corazón de la principal potencia global, el presidente Bush declaraba la ofensiva contra el terrorismo global. El mismo día, los órganos de inteligencia (FBI, CIA, Pentágono) no tenían muy claro quiénes eran los autores intelectuales de los ataques. Sólo se conocía una lista global de posibles autores. El mundo árabe parecía ser el centro de atención de la estrategia antinorteamericana (Falk, 2003; Zunes, 2001).

Dentro de la Doctrina Bush es de especial interés la *diplomacia energética* y los factores de la geopolítica petrolera, sin olvidar el claro interés de Washington por áreas clave de petróleo como el Medio Oriente (Mar del Caspio), observado en acciones anti-OPEP y por otro lado la exacerbación de la identidad petrolera del gabinete de gobierno con alta experiencia en la explotación de hidrocarburos en el ámbito internacional.

---

[6] Doctrina que se sustenta en las bases del interés nacional, la seguridad militar y el uso frecuente de recursos de poder como constante en temas internacionales, en esta oportunidad además se acompaña de la política exterior realista del Reino Unido (MacShane, 2002, 2).

[7] En EEUU ha habido durante el siglo XX un alto nivel de participación tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, siendo esta superpotencia clave para realizar las convenciones de paz y lograr la articulación de un nuevo sistema internacional.

Globalidad, terrorismo y relaciones internacionales

Los ataques al World Trade Center y a las oficinas del Pentágono tenían el carácter –por primera vez en la historia norteamericana– de tocar al "gigante por dentro", teniendo como consecuencia la formulación de la geoestrategia global antiterrorista, expresada en los inmediatos viajes de Bush a Europa (con los aliados de la OTAN) y al sureste asiático (Asean), además de las reuniones subsiguientes con algunos países de la región del Asia-Pacífico (APEC) y buscando por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial una "posible" alianza con Moscú.

¿Qué significa la aparición de este fenómeno del neoterrorismo global[8] en las relaciones internacionales? Al parecer, después del 11 de septiembre ha existido la necesidad de estudiar y analizar estos hechos desde una perspectiva sistémica para observar todas las causas que generan este flagelo (Panitsh, 2002, 145). Este fenómeno exigirá investigaciones académicas y científicas para el estudio de sus consecuencias en el sistema internacional y el desencadenamiento de una era de terrorismo que va desde los fundamentalistas occidentales hasta los fundamentalistas orientales (Shaw, 2001).

Afganistán y la agenda de los neoconflictos[9]

Afganistán estaba dominado desde 1996 por el grupo Talibán, que imponía de una manera bastante anacrónica el estudio y la práctica del Corán, atentando contra los derechos humanos, y desechando algunos elementos de otras culturas que según los Talibán violentasen los cimientos de la cultura afgana (Conetta, 2002). Afganistán tenía experiencia en guerras importantes, por un lado la invasión de la URSS en 1979 y por el otro las guerras intestinas como consecuencia de una lucha de poder entre la Liga del Norte y el grupo Talibán. Una vez realizado el ataque del 11 de septiembre (11-S), se produjo una acusación por el Departamento de Estado y la CIA, responsabilizando a Osama Ben Laden, un supermillonario de Arabia Saudita, quien supuestamente estaba en el Asia Central y concretamente en Afganistán, comenzando todo un desplazamiento militar a este país asiático.

¿Cuáles fueron los resultados de la guerra de Afganistán de 2002? Varios. Por un lado, la eliminación del régimen que estaba en el poder, pero por el otro la estrategia de ataque de Washington ante una necesidad de realizar una gue-

---

[8] Es de destacar que el terrorismo internacional no ha sido fenómeno nuevo, antes del 11-S los hechos de la ETA en España, o los de Irlanda del Norte, o los de África, ubicaban al terrorismo como un fenómeno tradicional de las relaciones internacionales, sin embargo asumimos el término neoterrorismo por los nuevos factores que describen al terrorismo en el mundo global y globalizante.

[9] Se asume el término neoconflicto como una etapa del sistema internacional donde regresan la agenda anterior imbuida de conflictos locales, regionales pero con gran impacto en la sociedad internacional.

rra luego de la tragedia norteamericana. Esto trajo un inminente apoyo de la opinión pública estadounidense al líder republicano, quien aumentó en las encuestas ubicándose en 90% de preferencia del electorado.

Muy poco se sabe del paradero de Ben Laden[10], tal vez para Estados Unidos lo más importante sea el descubrimiento de cuarenta grupos neoterroristas, predominando los grupos árabes y en especial la red Al Qaeda, con lazos en todo el mundo, incluso en el sistema de seguridad de Estados Unidos. Este neoterrorismo tiene la característica fundamental de ser un fenómeno subestatal con vinculaciones transnacionales.

¿El Islam versus Occidente u Occidente versus el Islam?

Después del 11-S comenzó en la sociedad estadounidense un rechazo a todo lo árabe, aumentando la seguridad en los aeropuertos internacionales, y teniendo mayor cuidado con los árabes que viven en las ciudades norteamericanas. Paralelamente en algunas ciudades árabes se produjo un rechazo a Estados Unidos, que se expresa en quemas de banderas, manifestaciones públicas y atentados a embajadas norteamericanas, por las acciones en Afganistán e Irak.

Samuel Huntington, popularizado por su libro *Clash of Civilizations* (*Choque de civilizaciones*), fue uno de los teóricos que explicaban este enfrentamiento, sin embargo él mismo –en la guerra de Afganistán– negó la visión culturalista como base de explicación de este conflicto internacional, dado que Al Qaeda, Hamas o el Talibán son una expresión máxima del fundamentalismo árabe, denominado neofundamentalismo –por el alcance y las estrategias utilizadas– y no necesariamente la civilización que arropa al Corán.

Sin duda, el panarabismo no necesariamente es antinorteamericano, observándose en el Medio Oriente países aliados a Washington como Kuwait, Barhein, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, los cuales han cooperado militar y estratégicamente en el establecimiento de bases militares norteamericanas, y otros con una posición incómoda frente a Washington como Irán, Siria, Palestina, Jordania, los cuales han rechazado el uso de la fuerza de Estados Unidos contra Bagdad. Estos últimos países podrían reaccionar enérgicamente frente a la opción militar norteamericana. La Liga Árabe conformada por 22 países no ha tenido una posición común ante la política exterior de Bush frente a Bagdad. ¿Es la cultura árabe revisionista de la hegemonía norteamericana? Los árabes no necesariamente son antioccidentales, otras culturas podrían tener una reacción más fuerte a la política exterior de Washington como Corea del Norte, o algunos países de África, Asia y América Latina.

---

[10] En febrero de 2003 se capturó en Pakistán a Khalid Mohammed, el segundo hombre importante –después de Osama Ben Laden– de la red Al Qaeda.

El conflicto árabe-israelí. Estrategia desde la Casa Blanca

La creación del Estado palestino ha sido una política del presidente Bush, con mucha más vehemencia después de los sucesos del 11-S. ¿Por qué Washington es partidario de la creación del Estado palestino? Son varias las razones, por un lado la necesidad de poner fin a un conflicto histórico, entre judíos y palestinos; por otro lado la necesidad de reducir la propagación del "odio" a Estados Unidos, con los actos de neoterrorismo. En algunas declaraciones, Osama Ben Laden señalaba que los sucesos del World Trade Center eran de apoyo a la lucha de la causa palestina, o para exigir la retirada de los territorios como la Franja de Gaza y las alturas del Golán (Zunes, 2002).

Washington evaluó la posibilidad de pérdidas estratégicas, políticas, sociales y económicas a futuro por el conflicto árabe-israelí. No obstante, Tel Aviv es de suma importancia geopolítica para Estados Unidos por la creación del escudo antimisiles y por la ubicación ante un ataque al régimen iraquí o a la presión de cualquier otro país del Medio Oriente.

El Irak de Sadam Hussein. ¿La Operación Tormenta del Desierto II?

En 1991 el presidente George Bush (padre) realizó una de las operaciones militares de mayor tecnología en la historia de los conflictos internacionales, con el fin de demostrar el poder tecnológico y militar en un mundo donde no había un rival como lo fue la URSS. La "madre de todas las batallas", como fue calificada la Operación Tormenta del Desierto, demostraba un mundo con más competencia directa para Estados Unidos, esta operación cierra con broche de oro el fin de la Guerra Fría.

Sin embargo, más allá de la liberación de Kuwait y de la operación de gran avance en el territorio de Hussein, el régimen iraquí quedó herido de muerte pero no fue eliminado[11]. Con el ascenso de Bush hijo se pone en práctica la nueva "obsesión por Irak", esta vez sin muchas pruebas a la comunidad internacional de que Bagdad tenga Armas de Destrucción Masivas (AMD) y sin "lograr diplomáticamente" una segunda aprobación por parte del Consejo de Seguridad y en Europa con una OTAN claramente dividida.

La Operación Tormenta del Desierto de 1991 tuvo como resultado la demostración *tecnopolítica* del poderío norteamericano y el comienzo de un Sistema Internacional Unipolar donde los competidores son económicos (Unión Europea y Japón) (mundo económico multipolar); no obstante en la geopolítica

[11] Luego de la guerra las sanciones de la ONU consistieron en un embargo aplicado a Irak, que incluía canje de petróleo por alimentos, y la imposibilidad de realizar planes militares por Saddam Hussein, así como la imposibilidad de volar el espacio aéreo iraquí por un tercer país.

y la geoestrategia, Washington ordena claramente el tablero de juego de la política internacional.

¿Es Estados Unidos el *cowboy* de la política internacional?

En la década de los 90 se hicieron varias operaciones donde se contó con el apoyo de la comunidad internacional y muy particularmente con la ONU y la OTAN, como fue el conflicto de la ex Yugoslavia donde la Alianza Atlántica pudo realizar toda una operación militar para la pacificación de los Balcanes. No obstante, frente a Irak y Corea del Norte, Estados Unidos no ha tenido el apoyo de países como Francia, China, Rusia o Alemania.

A pesar de que Estados Unidos vive su mejor tiempo de unipolaridad no cuenta con la *gobernabilidad multilateral* a su favor, por el rechazo de algunos países ante las acciones unilaterales que ha emprendido. El gran debate para la política exterior norteamericana es "hacia adentro" y "hacia fuera" entre la opción unilateral o la diplomacia multilateral. Estas opciones dependen de la discusión que se dé en la Casa Blanca, en el Congreso y en el seno de los republícanos (Partido Republicano).

En Estados Unidos existen tres tipos de republicanos: los institucionalistas-globalistas, los moderados-cautelosos y los halcones-guerreros. Los institucionalistas-globalistas son partidarios de la cooperación internacional, tanto en el ámbito multilateral como bilateral; hay en el Congreso estadounidense algunos republicanos moderados-cautelosos, mientras que los halcones-guerreros tienen una postura de hierro en los asuntos internacionales. La Casa Blanca se vinculó con hombres duros (republicanos halcones) en política exterior. En los actuales momentos predomina la visión de los halcones –activos en política internacional–, esto dificulta el logro de un apoyo diplomático a las aventuras internacionales de Bush (Hoffman, 2002).

Del *impasse* del Consejo de Seguridad a la ruptura de la OTAN

El Consejo de Seguridad es el mayor talón de Aquiles de Estados Unidos, de los 15 miembros (5 son permanentes y 10 son miembros no permanentes): Estados Unidos cuenta allí con aliados no necesariamente pro norteamericanos, como China, Francia, y Rusia, en temas como la metodología para las acciones antiterroristas. Sin embargo ninguno de esos países individualmente ha podido consolidarse como contrapeso a Estados Unidos en la *High Policy* internacional. El recurso ha sido –en el caso de Irak– el *contrapeso conjunto* de Berlín, París y Moscú, que demostraron un interés común frente al tema Irak, pero que a largo plazo es una alianza coyuntural y poco estable que pudiese cambiar por el interés nacional de cada uno de los países. La política exterior de Alemania, Francia y Rusia depende de los elementos nacionales. En juego en una escalada conflictiva en el Oriente Medio, Francia y Rusia cuentan con grandes inversiones en petróleo en Irak.

El Consejo de Seguridad no ha tenido suficientes elementos para evitar los conflictos internacionales, teniendo una debilidad burocrática en el mantenimiento de la paz internacional (*meaking peace*) (Roxborough, 2002). Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania) son los mismos "aliados" de la Segunda Guerra Mundial; hoy la configuración internacional es distinta, la crítica central se le haría al sistema ONU, este organismo internacional actúa en ciertas ocasiones como "apagafuego" de los conflictos internacionales, y no en lo que pudiéramos denominar la *diplomacia preventiva* o la diplomacia del mantenimiento de la paz, a la que se hace referencia en la Carta de la ONU[12].

Y América Latina ¿es el vecino olvidado?

En el ultimo discurso al Estado de la Unión realizado en enero de 2003, el presidente Bush no tocó el tema de América Latina, como lo había hecho en 2002, predominando la "obsesión por Irak"; sin embargo son varios los elementos para entender la relación entre Washington y los vecinos del sur latinoamericano (Heine, 2002).

Sin duda, la guerra de Washington contra el terrorismo, en una primera etapa en la guerra de Afganistán y en una segunda etapa contra los países de los "ejes del mal", significó para muchos analistas el enfriamiento de temas latinoamericanos desde Washington, como el ALCA, la aplicación real del *fast track* para negociar tratados de libre comercio y la renovación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) en vigencia desde 1991.

A pesar de los compromisos globales, Estados Unidos sigue observando el escenario político y económico del sur más cercano: América Latina. Con todos los elementos de crisis de la región, la administración Bush no puede olvidar la relación de interdependencia asimétrica con los latinoamericanos. El *crack* económico de Argentina, el problema de Colombia, los cocaleros en Bolivia, el ascenso de Lucio Gutiérrez en Ecuador, y de Lula Da Silva en Brasil, la crisis política y petrolera en Venezuela, los inmigrantes mexicanos, son sólo algunos de los hechos que inquietan a Washington (Heine, 2002).

¿Está la región andina en la mirada de Washington?

Luego de la Conferencia del Financiamiento al Desarrollo de la ONU realizada en Monterrey en febrero de 2002, el presidente Bush visitó la nación inca del Perú, donde se reunió con Jorge Quiroga, Gustavo Noboa, Andrés Pastrana y el anfitrión Alejandro Toledo, presidentes de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, respectivamente, quienes disfrutan de la Ley de Preferencias Arancela-

[12] La Carta de las Naciones Unidas establece varios mecanismos para el equilibrio internacional, preservando el mantenimiento de la paz y la seguridad como garantía de un sistema internacional más equilibrado y pacífico.

rias Andinas (ATPA) desde la Conferencia de Cartagena de Indias de 1991, excluyendo a Venezuela por no ser productor de drogas.

De esta visita se derivan varios escenarios para el análisis. En primer lugar el escenario regional, la importancia de América Latina para la Doctrina Bush en el plano internacional; en segundo lugar el escenario cooperativo de la relación de los cuatro países andinos más la administración del republicano Bush; en tercer lugar el escenario ALCA, con la renovación del benéfico ATPA a los países andinos, aprobado después de una larga discusión en el Congreso norteamericano luego de su vencimiento en diciembre de 2001; y en cuarto lugar el escenario comercial estratégico con la mirada en el comercio como eje de la política exterior norteamericana.

¿Por qué no asistió Venezuela a esta cita de Lima con George Bush? Son varias las razones: por un lado, nunca hemos estado en el beneficio arancelario que otorgó George Bush (padre) bajo la Iniciativa para las Américas, además de las "fricciones" políticas entre Washington y Caracas, la postura venezolana frente al ALCA hace pensar a Estados Unidos que no necesitamos de este mecanismo. Es importante rediseñar desde Venezuela una política exterior clara, que explique a los socios de la comunidad internacional cuál es nuestro interés vital en los procesos de regionalización hemisférica y subregional. La idea es sumar espacios cooperativos, restando espacios conflictivos del sistema internacional-global (Casanueva, 2002; Ghimers, 2002).

Estados Unidos en el vecindario latinoamericano. ¿Realismo o globalidad?

Obviamente que en la relación interamericana hay varios escenarios prospectivos en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo el esclarecimiento de la Casa Blanca sobre sus propósitos para la región latinoamericana frente a temas clave como Plan Colombia, cooperación militar, nuevas bases militares, cooperación energética y la aprobación por parte del Senado con mayoría demócrata del mecanismo ATPA, que incluye nuevos productos a ser incluidos en las preferencias (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas) el pasado 24 de abril de 2002. En el mediano plazo la observancia de casos como Ecuador, Bolivia, México, Colombia, Argentina, Perú y Venezuela, en lo que podríamos denominar "democracias volátiles". En el largo plazo la negociación del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. Al parecer las páginas de la historia universal se escriben todos los días y el tiempo es un espacio diluido entre el presente y el futuro como afirmaba el poeta mexicano don Octavio Paz.

Bibliografía

Baxter, Jenny y Malcom Downing (eds.) (2002): *The Day that Shocked the World: Understanding September 11*, Londres, BBC Books.

Casanueva, Héctor (2002): "Integración regional o marginalidad internacional: las dos opciones de América Latina", *Estudios Internacionales,* año XXXV, nº 138, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile.

Christison, Kathleen y Bill (2002): "El conflicto de lealtades de la administración Bush", *Rebelión*, n° 2, Santiago de Chile.

Conetta, Carl (2002): *Strange Victory: A Critical Appraisal of Operation Enduring Freedom and Afghanistan War*, Project on Defense Alternatives Research Monographs, n° 6.

Falk, Richard (2002): "Testing Patriotism and Citizenship in the Global Terror War" en Booth y Dunne (eds.), tomado de: http://theglobalsite.ac.uk/press/201falk.htm.

Ghymers, Christian (2002): "América Latina y la coordinación de políticas económicas. ¿Hacia un Maastricht latinoamericano?", *Estudios Internacionales,* año XXXV, nº 138, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile.

Halliday, Fred (1999): "La globalización y sus descontentos", *Papeles,* n° 67, pp. 17-32.

Halliday, Fred (2001): *Two Hours that Shocked the World: September 11, Causes and Consequences*, Londres, Sagi Books.

Held, David (2002): "Violence, Law and Justice in a Global Age 14", tomado de: http:www.opendemocracy.net/document_store/doc648-5.pdf.

Heine, Jorge (2002): "¿Qué pasó, tío Sam? Los Estados Unidos y América Latina después del 11 de septiembre", *Estudios Internacionales,* año XXXV, nº 138, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile.

Hoffman, Stanley (2001): "Why don't They like Us? How America Has Become the Object of much of the Planet Genuine Grievances and Displaced Discontents (the Whole World is Watching)", *American Prospect,* vol. 12, n° 120, 19 de noviembre, p. 18, (4).

Hoffman, Stanley (2002): "America Alone in the World: More Than Ever, America Needs Allies, but the Bush Administration is Driving them Away", *The American Prospect,* vol. 13, nº 17, pp. 20-21 (text available).

Holden, Gerard (2001): "International Relations. Still an American Social Science?", *First Review*, tomado de: http://www.Theglobalist.ac.uk.

Homer-Dixon (2002): "The Rise of Complex Terrorism", *Foreign Policy*, tomado de: http://foreignpolicy.com/issue_janfeb_2002homer-dixon.html

Kennedy, Paul (2002): "The Eagle has Landed", *The Financial Times*, pp. 1-8.

Klare, Michael T. (1995): "In Pursuit of Enemies. The Remaking of US Strategy" en *Rogue State and Nuclear Outlaws. Americas Search for New Foreign Policy,* USA, Hill and Wang publishers.

_____ (2002): "An Anachronistic Policy: The Strategic Obsolescence of the Rogue Doctrine", *Harvard International Review,* vol. 22, n° 2, pp. 46-51.

_____ (2002): "El costo de conservar la supremacía" en *The Nation*, pp. 34-78.

Macshane, Denis (2002): "El retorno de la política exterior", conferencia dictada por el ministro británico para asuntos latinoamericanos, en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, Ministerio de Relaciones Exteriores, Caracas, mimeo.

Panitch, Leo (2002): "The Meaning of September 11th for the Left", *Studies in Political Economy*, pp 23 - 46.

Roxborough, Ian (2002): "Globalization, Unreason and Dilemmas of American Military Strategy", *International Sociology,* vol. 17, nº 3, pp. 339-359.

s/a (2003): "Fineman, Howard, Bush and God", *Newsweek,* 1 de marzo.

Shaw, Martin (2001): "Risk-transfer Militarism: the New Western Way of War" en *Foreign Policy*, pp 12 - 45.

Underdhill, Geoffey (1994): "Conceptualing the Changing Global Order" en Richard Stubbs y Geoffey R. D. Underhill (eds.), *Political Economy and the Changing Global Order,* Toronto, Ontario, McClelland, pp. 17-44.

Zunes, Stephen (2001): "Foreign Policy by Catharsis: the Failure of U.S. Policy Toward Iraq" en *Arab Quarterly (ASQ).*

TEMA CENTRAL

RESISTENCIA POPULAR Y CAMBIO POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2004, vol. 10, n° 1, (ener.-abr.), pp. 75-97

EL LABERINTO DE AMÉRICA LATINA: ¿HAY OTRAS SALIDAS?

Aníbal Quijano

América Latina, tres décadas después del comienzo de la neoliberalización capitalista[1], se mira hoy con su economía estancada, con la más alta tasa de desempleo y con el más alto porcentaje de pobres de su historia (Cepal, 2002; PNUD, 2002), atravesada de revueltas sociales, sumergida en la inestabilidad política y por primera vez en más de un siglo –es decir, después de la conquista del norte de México a mediados del siglo XIX, y de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas al final de ese mismo siglo– con su integridad territorial y su independencia política explícitamente en cuestión.

Culminando la década de los 80 en el siglo XX, en la región había consenso en denominarla como la *década perdida*, pues ya en 1982 América Latina sufría la más grave crisis económica en cincuenta años (Iglesias, 1983; Quijano, 1984). Veinte años después, no hay dificultad en señalar que el proceso ha sido no sólo una pérdida sino una auténtica catástrofe. Ciertamente en primer lugar para los explotados, los dominados, los discriminados. Pero esta vez el proceso ha ampliado largamente el universo de sus víctimas abarcando también a las capas medias urbanas de profesionales y tecnoburócratas y aun a los propios grupos de burguesía dependiente vinculados al mercado interno.

Empero, la creciente marejada de resistencia mundial contra los efectos de la neoliberalización del capitalismo y de la reconcentración del control imperialista de la autoridad estatal, también tiene en América Latina uno de sus espacios más activos. Y la ahora continuada movilización popular contra la situación actual y contra los regímenes políticos responsables de haberla producido, ha llevado a una deslegitimación universal del neoliberalismo, no sólo en su condición de eje de control de las políticas del Estado y del movimiento de la economía, sino también como lo que virtualmente había llegado a ser: una suerte de sentido común hegemónico para el conjunto de la existencia social.

Esa deslegitimación ideológica y política del neoliberalismo plantea ahora un debate sobre las opciones de orientación de las políticas económicas, sobre las perspectivas inmediatas y futuras de acción y, para comenzar, por su-

---

[1] El 11 de septiembre se cumplieron 30 años del golpe de Pinochet en Chile, que dio comienzo al proceso de neoliberalización del capitalismo en América Latina.

puesto, respecto de las más graves consecuencias sociales del prolongado dominio del capitalismo neoliberalizado: el creciente desempleo y la expansión del número de pobres y de la extrema pobreza. Para explorar sus perspectivas, es indispensable mirar de nuevo y más de cerca ese panorama.

El panorama actual de América Latina

Los procesos mayores que conducen y ordenan la actual perspectiva sobre América Latina, son:

1. La continuada y creciente polarización social de la población. Las estadísticas sobre el desempleo, la distribución de ingresos, la proporción de pobres y los niveles de pobreza apuntan a que dicha tendencia es el más abultado rasgo de la presente situación latinoamericana, producida, como en todo el mundo, por los programas de "ajuste estructural" que han sido impuestos en estos países para sostener el pago continuo de los servicios de una deuda internacional, la cual, sin embargo, crece sin cesar y que, en consecuencia, es impagable, equivaliendo a un tributo colonial, ya que el país más endeudado del planeta, Estados Unidos, no está sujeto a las mismas obligaciones[2].

2. La reprivatización social del Estado. El Estado reduce en forma continua los gastos fiscales en servicios públicos, educación, salud, seguridad social, infraestructura urbana y de transportes. Privatiza, en más de los casos remata, los recursos de producción bajo control estatal, las empresas estatales destinadas a la producción de mercaderías de exportación y a la producción de servicios públicos. Y procura, también continuamente, aumentar la deuda externa y la deuda interna, recurriendo sea a préstamos y créditos internacionales, sea a la venta de bonos del Estado, a fin de mantener crecientes las sumas pagaderas por servicios a la deuda internacional, en particular. Y para obtener recursos para dichos pagos, en momentos de contracción económica generalizada en toda la región y en el mundo, impone siempre nuevos impuestos sobre la población. Esas medidas del Estado denuncian, a las claras, que los socios, agentes y sirvientes de los capitalistas globales han logrado un control virtualmente privado del Estado, como lo tenía, antes de la Segunda Guerra Mundial, la coalición oligárquica (Quijano, 2002a).

3. La recolonización del control de los recursos de producción y del capital en su conjunto. El control de los recursos de producción, y en general de acumulación de capital, se ha concentrado y aún tiende a concentrarse más en manos de las corporaciones transnacionales o globales, las cuales reducen el número de sus trabajadores, depredan y contaminan la naturaleza y expor-

---

[2] Según el Informe de la Cepal para 2002, el desempleo llegó al más alto nivel de toda la historia económica de la región: 9,1%. Y los pagos de intereses de la deuda externa, 39.000 millones de dólares, el 2,4% del PIB regional, superaron por quinto año consecutivo las cifras de crédito obtenidos por la región.

tan todas sus ganancias, ya que en la mayoría de los países no pagan impuestos a los respectivos Estados, o sólo algunos y muy poco. Así, sus operaciones implican la desintegración de los circuitos internos de acumulación y la articulación sectorial de la estructura productiva a la cadena mundial de transferencia de valor y de plusvalor. En rigor, eso implica la conversión de los centros productivos en una suerte de factorías coloniales. La vieja categoría de "enclave colonial" recobra todo su perverso sentido. El control del capital financiero está en manos de la burguesía global, salvo, quizá, en un país. Y la especulación financiera, inclusive ilegal, es protegida por el Estado, como ha ocurrido, sucesivamente, en México, Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina.

4. La expansión de la resistencia popular y la deslegitimación del neoliberalismo. Aquellas políticas fueron impuestas en estos países con poca o a veces ninguna resistencia y han logrado operar, también con poca resistencia, por más de dos décadas consecutivas. Pero, desde el fin de la década pasada, sobre todo, aunque el "Caracazo" de 1989 debe ser considerado el punto de partida de esta tendencia, las víctimas de esas políticas han comenzado a movilizarse y a organizarse de muchos modos para protestar contra tales procesos y para resistir su continuación y profundización. En algunos casos, esas protestas y movilizaciones han producido auténticos estallidos sociales y han producido la crisis y la remoción de varios gobiernos, han llegado a gravitar en la elección de gobiernos con discursos antineoliberales, como en Venezuela, Argentina, Brasil. O, como en Cochabamba, Bolivia, han logrado impedir la imposición del control sobre el agua por parte de una corporación estadounidense con el peso de la californiana Bechtel, cuyos directivos tienen gravitación en el Estado norteamericano. O, como en el Perú, han bloqueado el remate de los servicios públicos de una ciudad y un año después han obligado al aumento de salarios del magisterio público, congelados por más de una década.

5. La acentuación de la inestabilidad política, pero aun con el voto como mecanismo de alternancia de gobiernos. El estancamiento económico, la revuelta social y la inestabilidad política de América Latina se enmarcan en un período de recesión mundial, de reducción del comercio internacional y de retracción de inversiones, inclusive parcialmente de la propia especulación financiera. Parece, en consecuencia, que se insinuara un horizonte de crisis político-social más turbulento y quizás explosivo. No obstante, es también por primera vez que todos los gobiernos, sin excepción, han sido elegidos mediante el voto universal. Inclusive los sucesivos recambios de gobierno han sido hechos, de algún modo, por cauces legales e institucionales. Así, por primera vez a escala regional la continuada inestabilidad política y la agitación social creciente no son enfrentadas inmediatamente por sangrientos golpes militares y regímenes autoritarios y represivos. Y las reivindicaciones y los discursos de la revuelta social que sigue al agotamiento del neoliberalismo, aunque podrían implicar un período de abiertas disputas por el control del poder, no parecen anunciar, no todavía en todo caso, una inminente puesta en cuestión del pa-

trón mismo de poder, como ocurría entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y mediados de los años 70 del siglo pasado.

6. Un proceso de nueva subjetivación social o constitución de nuevos sujetos sociales. En efecto, se han ido formando nuevos sujetos sociales, con reivindicaciones, discurso y formas de organización y de movilización nuevos y han hecho ya su ingreso en la escena política como actores decisivos en algunos países. Se trata, en primer término, del llamado movimiento de los indígenas que, aunque de dimensión continental, actuando desde Alaska hasta Tierra del Fuego, en América Latina tiene sus más importantes sedes nacionales en Ecuador, México y Bolivia, además de sedes locales y regionales importantes en toda la cuenca amazónica. Tal movimiento podría converger más adelante con un incipiente proceso de movilización y de organización de los que se llaman afro-latinoamericanos en varios países, en particular en Brasil, Colombia, Ecuador. En el caso de los indígenas, aunque todavía motejados de movimientos "étnicos", se dirigen a la redefinición de la cuestión nacional de los actuales Estados y a la autonomía territorial de las nacionalidades dominadas. Ya han comenzado a cambiar la geografía política de América Latina y en Ecuador y Bolivia ya son, de hecho, los actores políticos más importantes. En el primero de estos países los líderes de la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (Conaie) llegaron incluso a ocupar el sillón presidencial, efímeramente es cierto, junto con el entonces coronel Lucio Gutiérrez, después elegido presidente del Ecuador, precisamente con el apoyo del movimiento de los indígenas. Y, notablemente, el proceso de reidentificación social y nacional de esas poblaciones conlleva la reorganización comunal de sus pueblos, de sus instituciones, de sus formas de organización del trabajo y de la producción (Macas, 2000; Burbano, 2000)[3].

Una parte importante del movimiento de los indígenas latinoamericanos corresponde al campesinado. Eso quiere decir que una parte del campesinado latinoamericano asocia hoy sus problemas de control de la tierra para sembrar y para habitar con su situación nacional dentro del Estado. Pero la mayoría del campesinado de esta región no ha vuelto a producir los grandes movimientos que trajeron cambios profundos en la estructura de tenencia de la tierra y en la estructura de poder rural, entre 1950 y 1970. Sin embargo, en el caso brasileño, donde la derrota de esos movimientos fue total con el golpe militar de 1964 y donde, por lo tanto, los cambios fueron tan profunda y largamente regresivos, por el aumento del latifundio y la violencia de los terratenientes capitalistas, se ha desarrollado lo que posiblemente es el más grande movimiento organizado de los trabajadores del campo en todo el mundo: el Movimiento de

[3] Luis Macas fue el más importante líder en la fundación de la Conaie, fundó después la Universidad Indígena Intercultural y fue nombrado ministro de Asuntos Campesinos en el gobierno de Gutiérrez (sobre los sucesos que llevaron al efímero acceso de los indígenas y del entonces coronel Gutiérrez al sillón presidencial del Ecuador, originando la caída del presidente Mahuad y su reemplazo por el vicepresidente Gustavo Noboa).

los Sin Tierra (MST), que organiza y comanda cientos de miles de personas, organizadas en comunidades, cooperativas, poblaciones, invade y ocupa tierras, enfrenta la creciente violencia armada de los terratenientes. Consiguió que el gobierno de Fernando Henrique Cardoso adjudicara tierras a más de 300.000 familias y hoy presiona sobre el gobierno de Lula para una pronta reforma agraria. El MST no es un movimiento interesado solamente en la redistribución de la tierra agraria, sino que se orienta a la formación de nuevas formas de organización de producción y de gobierno. Es, en ese sentido, uno de los más importantes modos del proceso de nueva subjetivación social que atraviesa América Latina (De Sousa, 2002).

7. Creciente ocupación militar del territorio latinoamericano por las fuerzas armadas de Estados Unidos. Sin duda por todo aquello, se ha desatado una nueva preocupación para los que tienen posición hegemónica en el control del poder en América Latina. Con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos latinoamericanos, Estados Unidos está instalando desde fines de los 80, y más rápidamente ahora, bases militares y sedes y redes de servicios, de transporte y de aprovisionamientos bélicos (que son conocidas como Locaciones de Operaciones de Avanzada [FOL] y Sitios de Operaciones de Avanzada [FOS]) en virtualmente toda la región, aunque más concentradamente en el área andino-amazónica. Bajo el Comando Sur, con sede en Florida y subsedes en Puerto Rico, México y Centroamérica, no solamente se ha reintensificado el entrenamiento militar de las fuerzas armadas latinoamericanas, sino que se está desplegando una amplia red de bases y de FOL y FOS en Centro y Suramérica. A sus anteriores bases en Puerto Rico y en Guantánamo, en Panamá, Honduras y El Salvador, y a sus FOL en Costa Rica, Belice, Islas Caimán, Aruba-Curaçao, se añaden ahora la base de Manta, en Ecuador, las de Caquetá, Leticia y Putumayo, en Colombia, los FOL y FOS en Iquitos, Perú, en Chapare y la "unidad antiterrorista" en Santa Cruz, Bolivia; las de Salta, Chubuy, Río Negro, en Argentina. En este último país, antes del fin del gobierno de De la Rúa, se habría acordado una sede de investigaciones nucleares para fines científicos en la Patagonia (Arancibia, 2003)[4]; están aún en curso las negociaciones sobre la base de Alcántara en Brasil (Delgado Ramos, 2003; Mendonça, 2003)[5]. Con Perú, en marzo de 2002, se negoció un acuerdo por el cual el Estado peruano otorgaba a las fuerzas armadas de EEUU el derecho de libre tránsito por el territorio peruano, de transporte de toda clase de

---

[4] De hecho Patagonia parece haberse convertido en un serio problema de soberanía en Argentina. En marzo de 2002, una encuesta dirigida por Jorge Giacobe preguntó a los pobladores de la Patagonia argentina si estarían de acuerdo en entregar la Patagonia para cancelar la deuda externa del país. Esa encuesta fue usada por el economista Rudiger Dornbusch, entonces profesor del MIT, recientemente fallecido, en relación con su propuesta de entregar Argentina a la administración de un comité internacional. Y *Liberation*, de París, publicó el 5 de marzo de 2003 la lista principal de nuevos dueños y de compradores extranjeros de extensas áreas de la región.

[5] El Comando Sur de las fuerzas armadas de EEUU cubre 32 países, 19 en Centro y Suramérica, 12 en el Caribe. Véase mapa en http://www.southcom.mil /pa/idxfacts.htm.

equipos militares, incluyendo aviones, barcos, tanques, sin injerencia alguna del Estado peruano, y protegidos de toda actividad de la población local (Quijano, 1993 y 2002). El famoso Plan Colombia es, obviamente, uno de los nombres de todo aquel despliegue militar en América del Sur, uno de sus más públicos operativos en el proceso de organizar el control militar de la región. ¿Por qué y para que?

La lucha contra el tráfico de drogas, especialmente de la cocaína, cultivada y negociada en todos los países llamados andinos, fue el más socorrido argumento inicial. Posteriormente fue presentada como una reacción contra la extensión de la subversión, de Sendero Luminoso en el Perú de los 80 y de las FARC y los otros grupos en Colombia[6]. Y después del infausto 11 de septiembre del 2001, proclamada la *guerra infinita* contra el terrorismo, el Estado hegemónico del Bloque Imperial cubre con el mismo membrete de "terroristas" no sólo a dichas organizaciones subversivas (Sendero Luminoso o las guerrillas colombianas de las FARC o el ELN) sino a todos los movimientos de protesta social, muy en especial a los movimientos de indígenas, como el Movimiento al Socialismo (MAS), de Bolivia, y la Confederación Nacional de Indígenas Ecuatorianos (Conaie), de Ecuador.

Esa expansión del aparato militar de control de América Latina implica, de todos modos, el reconocimiento de que América Latina –la región más rica del mundo en materias primas minerales y vegetales, agua y biodiversidad, y donde por lo tanto el capital global y su Estado hegemónico tienen definidos intereses de control y que en el futuro próximo podrían llegar a ser aún más decisivos que el control del petróleo en el Medio Oriente– es también ahora política y socialmente una de las regiones más convulsas. Por eso, sólo un exceso de ingenuidad haría admitir que el despliegue de instalaciones militares, el entrenamiento y equipamiento de las fuerzas armadas locales en Centro y Suramérica están destinados solamente a ayudar a estos países a luchar contra el tráfico de drogas y contra el terrorismo. En verdad, es la integridad territorial, la independencia jurisdiccional o soberanía y la independencia política de los países latinoamericanos las que están en cuestión[7].

---

[6] Curiosamente, sin embargo, en el caso del Perú, bajo el gobierno de Fujimori desde 1990, un probado agente de la CIA, el ex capitán Vladimiro Montesinos, cumplió, probadamente ahora, sabidamente siempre, un papel central en el curso autoritario y corrupto del régimen, pero asimismo en la organización y control del tráfico de droga y de armas en la cuenca amazónica.

[7] Debe recordarse, a este propósito, que la primera gran reacción antiimperialista de América Latina en la segunda mitad del siglo XIX emergió precisamente frente a la conquista de la mitad norte de México. La expansión territorial de EEUU aparecía entonces como una amenaza a la soberanía de la región. Y se acentuó con la conquista de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, tras la derrota del moribundo imperio colonial español en 1898. Ahora estamos en una circunstancia dramatizada por la ocupación colonial de Irak y las amenazas contra los demás países del Medio Oriente, realizada con el pretexto de la lucha contra el terrorismo y con deliberada y probada falsificación de los

8. Un horizonte de conflictos de poder. Si no se pierde de vista todo lo anterior, es pertinente admitir un nuevo sentido a la versión latinoamericana de un proceso mundial. Ha ido creciendo en la región la parte de la población mundial colocada en las trampas creadas por el capitalismo actual. En primer término, sin el mercado nadie puede hoy vivir. Pero con sólo el mercado una creciente mayoría de la población no puede vivir. En segundo término, sin el Estado nadie puede vivir. Pero con el Estado una creciente mayoría de esa misma población ya no puede vivir. La población atrapada en esas trampas específicas de la fase actual del capitalismo, de un lado, se ve forzada sea a aceptar cualquier forma de explotación para sobrevivir, sea a organizar otras formas de trabajo, de distribución de trabajo y de productos, que no pasan por el mercado aunque no pueden, aún, disociarse totalmente de él. En un lado, por eso, se reexpanden la esclavitud[8], la servidumbre personal, la pequeña producción mercantil independiente, la cual es el corazón de la llamada "economía informal". En el otro lado, al mismo tiempo, se extienden formas de reciprocidad, es decir, de intercambio de fuerza de trabajo y de productos sin pasar por el mercado, aunque con una relación inevitable, pero ambigua y tangencial, con él. Y también nuevas formas de autoridad política, de carácter comunal, que operan con y sin el Estado, y cada vez más, si no siempre, contra él (Quijano, 1998).

Así, la creciente masa de desempleados, en especial de los sectores industriales, urbanos y modernizados de la región, ha comenzado a orientarse más allá del reclamo de empleo, salarios y servicios públicos, organizándose en redes de producción autogestionaria y de autogobierno de tipo comunal. Por ejemplo, la reciente crisis argentina puso en relieve mundial el movimiento de los "piqueteros", que ya estaba en acción desde unos pocos años antes, asediado y reprimido por el Estado. Este es un movimiento de trabajadores desempleados, sobre todo urbanos, que no solamente protesta por su situación y reclama empleo y salarios, sino que va hacia la organización de núcleos de producción orientados por la reciprocidad, hacia la ocupación y la gestión colectiva de tierras y de fábricas abandonadas. Pasó al primer plano al estallar la crisis de la segunda mitad de 2001 en adelante, porque convergió con la entrada de las capas medias profesionales y tecnocráticas a la revuelta contra el gobierno y contra el neoliberalismo, con la formación de las asambleas de barrio, con la ampliación del trueque a escala nacional (Auyero, 2001; López,

---

hechos respecto de Irak. Es inevitable, en consecuencia, la inquietud latinoamericana por su independencia territorial y política cuando EEUU declara "terroristas" a todos los movimientos de protesta social y política de la región, incluyendo a los movimientos indígenas, y al mismo tiempo acelera y expande la instalación de sus bases militares en todo el territorio latinoamericano.

[8] Lula ha decretado hace muy poco la prohibición y persecución del trabajo esclavo en el Brasil, especialmente en la Amazonía. Alabado sea. El problema es saber cómo hará para que sus propósitos tengan efectivo cumplimiento.

1998)[9]. En países como Argentina es un fenómeno relativamente nuevo, pero tiene raigambre e historia prolongadas en países como Perú, Ecuador o México[10].

Esos procesos de nueva subjetivación social son producidos en América Latina, como en el resto del mundo, por la aceleración y la profundización de las tendencias centrales del capitalismo, en particular la continuada y creciente polarización social. Y no obstante su heterogeneidad, como acaba de ocurrir en Argentina con la inesperada convergencia de las capas medias urbanas, no mucho tiempo antes conformistas e incluso reaccionarias, con los trabajadores desempleados urbanos y rurales organizados como "piqueteros", o está ocurriendo en Venezuela con la convergencia entre trabajadores urbanos y rurales desempleados y pobladores de aldeas y comunidades, podrían estar abriéndose condiciones para que la masa de desempleados urbanos y rurales, los que luchan por la tierra como en el MST, los trabajadores "informales" de muy bajos ingresos, y los "indígenas" de todos estos países fueran empujados a una lucha común contra el común enemigo: el capitalismo.

Así, tres décadas de neoliberalismo en América Latina han creado las condiciones, las necesidades y los sujetos sociales de un horizonte de conflictos sociales y políticos que podrían no agotarse solamente en la protesta y la oposición a la continuación del neoliberalismo, o sólo en la disputa por la distribución de ingresos y de recursos de supervivencia. En términos de supervivencia, la propia de América Latina ya está en riesgo. Y los nuevos sujetos sociales que emergen no solamente están ya en la escena del conflicto, sino que tienen todas las condiciones de crecer precisamente por las propias determinaciones de la crisis. Todo eso implica ya, o podría implicar, que el propio patrón de poder actual podría llegar a ser, finalmente, el foco mismo del conflicto.

Las principales vertientes del debate

Frente a ese panorama, América Latina está siendo empujada de nuevo, después de varias décadas, a un debate en el cual están planteados no ya solamente los problemas inmediatos, graves como son, de pobreza, desempleo, inestabilidad social y política, sino sus opciones históricas. Tres son, a mi juicio, las principales vertientes de opinión y de propuestas en este debate.

La que aparentemente más se extiende es, nada menos, la que había sido antes derrotada sin atenuantes –y eso es sin duda muy expresivo de las características de la crisis– la propuesta de un capitalismo nacional. Según los casos, volver a él (Argentina, sobre todo), organizarlo (por ejemplo, Venezue-

---

[9] En el *Observatorio Social de América Latina*, de Clacso, se publica información sistemática sobre las protestas sociales de cada país latinoamericano, desde 2000.
[10] Ver Aníbal Quijano, ob. cit.

la) o defender lo que ha sido mantenido (la excepcionalidad de Brasil). Los gobiernos de Chávez en Venezuela, de Lula en Brasil, de Kirchner en Argentina, con todas sus diferencias, son por ahora sus más claros representantes[11]. En la misma tendencia general podría ubicarse al Frente Amplio en Uruguay, al MAS en Bolivia, así como al PRD y quizás ahora inclusive al PRI en México, todos ellos con gravitación importante en la escena política de sus respectivos países.

La segunda vertiente, que se bate a la defensiva en el debate y en algunos países quizá incluso a la retirada, aunque no ha cedido nada en la práctica, defiende la plena legitimidad y la necesidad de la continuación del neoliberalismo y acusa, precisamente, al descontento y a la revuelta de los trabajadores y de las capas medias por las dificultades económicas actuales, porque, según ese razonamiento, de una parte ahuyentan la inversión y en consecuencia el empleo y el desarrollo, y, de la otra, generan problemas de *gobernabilidad democrática*. Esas fuerzas políticas están representadas en los gobiernos de Bolivia, Ecuador, México, Perú, Uruguay, en los de Centroamérica, y más ambiguamente en el de Chile. En el caso peruano sería una exageración decir que hay debate sobre tales cuestiones, ante todo porque los *mass media* están todos, sin excepción, bajo el control del neoliberalismo, pero no mucho menos porque todas las organizaciones políticas con influencia y con audiencia masivas defienden, con matices de importancia tangencial, la misma orientación. Es verdad que hay, desde hace dos años, una intermitente revuelta de los sectores populares contra el neoliberalismo, pero éstos, hasta ahora, se movilizan contra efectos puntuales de esa política y, en todo caso, no tienen, o no aún, organización, ni dirección políticas propias.

---

[11] El discurso del presidente Kirchner ante la Asamblea Legislativa (25 de mayo de 2003) de su país podría ser considerado como la más explícita y coherente presentación de la propuesta de restablecer el capitalismo nacional: "En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente". Más adelante agregó: "Como se comprenderá el Estado cobra en eso un papel principal, es que la presencia o ausencia del Estado constituye toda una actitud política". Y "sabemos que el mercado organiza económicamente pero no articula socialmente, debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona". Texto completo del discurso en http://www.argenpress.info, 27-5-2003. Durante los primeros cincuenta días de su gobierno, Kirchner ha dado importantes pasos hacia la reinstitucionalización del Estado, en el trato con los capitales especulativos de corto plazo, en la lucha contra la impunidad en el área de los derechos humanos y de la corrupción de los funcionarios públicos. Todos esos pasos se dirigen, ante todo, a la reorganización de la hegemonía burguesa en la sociedad, puesta en crisis desde los estallidos de fines de 2001. Pero aún no indican cómo sería reconstituido un capitalismo nacional desmantelado por más de treinta años, en el marco de un capitalismo mundial cuyo control económico y político han alcanzado su mayor concentración mundial en 500 años. Es ilustrativo contrastar los discursos de Chávez y su Constitución Bolivariana, los de Lula (por ejemplo, el artículo que acaba de publicar en Londres, traducido en *El Mundo*, en Madrid, y en *Perú 21*, 20-7-2003) y los de Kirchner.

En tercer nivel, reaparece, por el momento muy minoritariamente es verdad, una vertiente que estaba ausente del debate público desde las grandes derrotas de los años 70 del siglo XX. Comenzó a cobrar relieve desde el Foro Social Mundial de Porto Alegre en 2001, y ganó visibilidad y audiencia públicas sobre todo en el curso de la explosión social desde fines de ese mismo año en Argentina. Pequeñas agrupaciones y discursos procedentes del período anterior, que prolongan el debate entre las tendencias del llamado *socialismo científico*, han vuelto a ganar alguna audiencia en el debate público. Pero también está en curso de constitución una nueva corriente, producida en la crisis actual y que, probablemente, tiende a crecer más que la anterior. Aunque su discurso no es aún sistemático, ni sus propuestas explícitas, se dirige no sólo contra la variante neoliberal del capitalismo, sino contra el poder capitalista como tal. Los *colectivos* que se forman en diversos países, con diversos nombres y opciones, agrupando especialmente a los jóvenes, principalmente estudiantes e intelectuales, pero también trabajadores, son la expresión de las primeras formas y etapas del debate, de la organización y de la actuación de esta vertiente. Probablemente el sello común a su heterogéneo universo es la desconfianza en la experiencia y en las propuestas del *socialismo realmente existente*, su virtual ruptura con la experiencia estaliniana y el estatismo de tales *socialistas*. Por eso comienzan a ser percibidos por muchos de sus críticos, y aun por sus propios actores, como una prolongación de un indeterminado y aún no discutido *anarquismo.*

En las tres ediciones del Foro Social Mundial de Porto Alegre, la primera vertiente emergió como la más presente, aunque la última tuvo también una significativa presencia en la juventud asistente a dicho Foro (Quijano, 2002c). Por todo lo cual, bien se puede señalar que el desencanto de las capas medias con el neoliberalismo, de algunos débiles sectores burgueses con el estancamiento de la economía, y la revuelta de los trabajadores, en especial de los jóvenes, ya no solamente contra el desempleo y la pobreza, sino contra el orden social y político, han colocado el debate en la América Latina en el umbral de un nuevo período.

De todos modos, en el debate inmediato las vertientes ampliamente dominantes son las que defienden el patrón de poder imperante. Ambas requieren contar, en definitiva, con un giro muy pronunciado de las actuales condiciones y tendencias del capitalismo mundial. Porque, en efecto, para que el panorama actual de América Latina pudiera ser realmente cambiado y mejorado sin alterar el patrón mismo de poder que lo ha producido, dicho giro sería en verdad indispensable. Ante todo, una masa de inversión realmente muy considerable por lo menos en los países más grandes social y políticamente y más peligrosos para el poder actual, la generación de empleo masivo, la distribución también masiva de ingresos suficientes para comprar productos y servicios en el mercado, o la reorganización de la producción y administración estatal de los servicios básicos.

Esas son, precisamente, las promesas de los controladores del capitalismo, no alteradas a pesar de la magnitud y de la profundidad de la crisis de la economía latinoamericana. Asimismo, los que propugnan un nuevo capitalismo nacional seguramente esperan equivalentes condiciones. Pero, además, piensan que cuentan con la existencia de fuerzas sociales y políticas locales con la capacidad y la posibilidad de imponer, de nuevo, como en cortos períodos del pasado, la dirección del Estado local sobre el capitalismo y sobre la sociedad. De hecho, en los más importantes casos, Argentina, Brasil, México y Venezuela, los agentes políticos, no obstante todas sus diferencias, apuestan sin duda por el retorno de un capitalismo dotado de todos los recursos de desarrollo y en consecuencia capaz de permitir la amortiguación y la negociación institucionalizada del conflicto social, bajo el control del Estado, de modo que se pueda combinar, eficazmente, la primacía de intereses y agentes nacionales sin desmedro de su lugar en la estructura globalizada del capitalismo. Esas expectativas de combinar exitosamente el desarrollo capitalista nacional con la "globalización" son, sin duda, las que dan sentido a la reunión de Lula, Kirchner y Lagos con, nada menos que Blair y compañía, reinventores de una "tercera vía" *ad usum dei fine* del neoliberalismo tatcherista.

Las condiciones y las tendencias mayores del patrón capitalista de poder mundial, de un lado, y sus expresiones específicas y particulares hoy en nuestra región, del otro, difícilmente permitirían predecir semejante giro. Con todo, es necesario indagar en las bases sociales y políticas realmente existentes de tal imaginario, sea de la *tercera vía* del desarrollo capitalista nacional, sea de la *gobernabilidad* sin muchos sobresaltos del mismo capitalismo actual, en la América Latina que emerge de un más bien prolongado período de neoliberalización.

La sociedad neoliberalizada en América Latina

Aquí no podemos ir muy lejos, ni muy hondo, en esta indagación. Para lo que interesa o importa aquí, es mejor restringirla a unas pocas cuestiones centrales referidas al control del capitalismo, a las relaciones entre capital y trabajo y a las relaciones de esos sectores de interés social en el Estado.

Burguesía y control del capital

Para partir, hay consenso en el debate acerca de una reprimarización y terciarización de la estructura productiva de América Latina, con la parcial excepcionalidad de Brasil, como resultados del proceso iniciado desde fines de los 70. Eso implica, en primer término, que en estos países son extremadamente débiles o inexistentes, en todo caso en serio, de un lado la burguesía industrial y del otro la antes llamada "clase obrera industrial". Y que las capas medias, tecnocráticas y profesionales, que se constituyeron en asociación con la urbanización y la industrialización de la sociedad, han perdido espacio social y tienden a reducirse, desintegrarse o migrar hacia otros espacios sociales y, en consecuencia, mutar su carácter y sus papeles sociales.

Como es sabido, la producción industrial latinoamericana, ya al entrar en los años 80 del siglo XX, estaba concentrada sobre todo en tres países: Brasil, México y Argentina, en ese orden de importancia, hacían 77,9% del total latinoamericano. Mientras los dos primeros habían doblado su producción industrial en la década previa, en Argentina esa producción se reducía rápidamente, hasta ser virtualmente desmantelada en la década siguiente. Entretanto, Chile, Colombia, Perú y Venezuela aportaban juntos 16% del total regional (Lipschitz , 1980; Islas, 1983). La fuerte caída de esa producción desde comienzos de los 80 aceleró en los últimos años la desindustrialización y reforzó la reprimarización y la terciarización de todos los países, de nuevo con la excepción de Brasil.

¿Por qué esa reconversión de la estructura productiva regional? El proceso de reorganización del capitalismo mundial, bajo control de los países del *centro*, durante la crisis mundial originada a mediados de los 70 del siglo pasado, implicó un proceso masivo y mundial de desempleo, de flexibilización y precarización del empleo asalariado, como consecuencia los mercados internos de los países en curso de industrialización no consolidada, como los de América Latina, colapsaron. Eso arrastró a las burguesías latinoamericanas a emprender exactamente el rumbo opuesto al que iniciaron durante la crisis de los 30 y que caminaron más desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis de los 70: la producción para el mercado interno fue abandonada a favor de una política de producción para la exportación. Y en esa nueva dirección, por razones obvias, no era la industria la que podría crecer, sino la producción llamada primaria y los servicios. Y, paralelamente, la importación de productos industriales para uso y consumo de la burguesía, de sus capas medias asociadas, la "informalización"de la industria destinada a los pobres, y, también para ese mismo mercado, la posterior inundación de mercadería industrial de bajo precio y de baja calidad, desde Corea del Sur, Taiwán y otros países del Asia.

Entre 1970 y 1980 el llamado sector externo como componente del PIB regional pasó de 20% a 50%. En trece de los países saltó hasta 70% y solamente en seis países más pobres se mantuvo por debajo de 50%. Pero no solamente los países donde cayó el mercado interno optaron por privilegiar el sector externo de su economía contra el mercado interno. Si se toma el caso venezolano, con un mercado interno aún muy fuerte gracias al petróleo, se constata que el sector externo había llegado a 108%. Ergo, la exportación de petróleo permitía también la reducción acelerada de la producción industrial local para el mercado interno.

Ese proceso de reconversión de la estructura productiva de América Latina, conllevó, como es obvio, el cambio de su lugar en la cadena mundial de producción y de transferencia de valor y de plusvalor, pero igualmente el cambio del lugar y del papel de las burguesías de la región respecto de las del "centro". La precaria y relativa autonomía que estaba en proceso de constitución, sobre la base de la producción industrial, del proceso de articulación de circuitos regionales o locales de acumulación y de transferencia de valor, y del be-

neficio fundado ante todo en el mercado interno, terminó abruptamente y cedió ante la más completa subordinación bajo las burguesías "centrales".

Dentro de los grupos burgueses latinoamericanos, aparte de Brasil, sólo pudieron sostenerse y enriquecerse aquellos que pudieron asociarse con la producción primaria para la exportación, con la importación de mercaderías industriales, con el capital financiero y con los servicios. Como en la producción primaria, el control de los recursos decisivos ya estaba bajo el control de la burguesía internacional, así como el capital financiero y los servicios asociados, en rigor la burguesía local superviviente emergió no solamente más subordinada que nunca antes, sino sobre todo socialmente mutada en una nueva versión de burguesía compradora, empujada a la especulación comercial y financiera, y de ese modo directamente subordinada a la burguesía financiera globalizada desde comienzos de los años 70 del siglo XX.

Paralelamente, el control del capital, en cada uno de los sectores productivos, primarios, secundarios y terciarios, se desplazó largamente a la burguesía internacional o global. Esta es ahora dueña, sobre todo, del control del capital financiero, del que opera en los servicios básicos y del que opera en la producción primaria, salvo en el petróleo de Venezuela, de donde acaba de ser desalojado, y en el cobre de Chile. El control del capital en América Latina es, predominantemente, internacional o global. Las burguesías locales no son solamente subordinadas en las transacciones financieras y comerciales, sino que, ante todo, tienen un lugar secundario en el control del capital en la región.

De ese modo, agotada la crisis del Estado oligárquico, el iniciado proceso de hegemonía de los sectores industrial-urbanos dentro de la burguesía y en el Estado, no sólo no pudo ser consolidado, sino que al final de los 80 cedió el lugar a la hegemonía de los sectores "compradores", especuladores y de servicios y el control del capital fue cedido a la burguesía internacional o global. Dada esa situación estructural de los grupos dominantes, la vieja distancia entre identidad nacional e interés social, rasgo central de las relaciones de colonialidad y de dependencia, ha terminado en un auténtico divorcio.

El mundo de los trabajadores

Los efectos de esos procesos sobre los trabajadores han sido espeluznantes. Lanzados en su vasta mayoría al desempleo, a la precarización y a la flexibilización de las condiciones de empleo, la reducción o el desmantelamiento de la producción industrial produjo la dispersión y la fragmentación social de los trabajadores, el debilitamiento de sus instituciones gremiales, la crisis de su identidad social. Sobre esas bases se impuso el desmantelamiento de las leyes, instituciones y mecanismos administrativos que permitían a los trabajadores negociar las condiciones, las modalidades y los límites de la explotación. Las conquistas sociales mínimas, como la jornada de ocho horas de trabajo, han quedado virtualmente anuladas en muchos países, o han sido se-

riamente erosionadas en todos los demás. En todos, fueron empujados y arrinconados en una situación de empobrecimiento creciente. La tasa de desempleo (cerca de 10% de los trabajadores urbanos) y la proporción de pobres son los más altos de la historia de América Latina (más de la mitad vive con menos de un dólar diario y más de 20% con menos de medio dólar). Los salarios no han dejado de bajar en términos relativos y las distancias salariales entre los niveles más altos y los más bajos son en promedio de 70 a 1, y mayor en algunos países[12]. En fin, los trabajadores latinoamericanos, en su vasta mayoría, están sometidos a un sistema de sobreexplotación.

No puede ser sorprendente, dadas esas condiciones, que se expanda el trabajo forzado y el tráfico de esclavos, sobre todo de adolescentes y jóvenes, que son llevados a trabajar en la selva amazónica. Que crezca la servidumbre personal, sobre todo entre las mujeres migrantes entre los países de la región (por ejemplo entre Perú y Chile, antes Argentina) o entre América Latina e Italia o España. Que haya cientos de miles de niños trabajando en trabajos pesados, con salarios extremadamente bajos o en condiciones de esclavitud.

La violencia de esos procesos ha producido problemas excepcionalmente graves en la vida social de los trabajadores y de sus familias. Las tensiones psicosociales, la depresión, la neurosis de angustia, la violencia intrafamiliar, la desintegración de las familias, el trabajo y la mendicidad infantiles, son documentados en varios países y el impacto de esos problemas es muchas veces más profundo en las poblaciones discriminadas por criterios de "raza" o de "etnia", como en Brasil y los países llamados andinos (Pimentel, 2001; Centro Comunitario de Salud Mental, 1999).

En fin, lo que importa para nuestros propósitos de indagación sobre la estructura de la sociedad latinoamericana hoy es señalar que las relaciones entre capitalismo y trabajo son ahora, no sólo en América Latina, mucho más complejas que poco antes, que el mundo del trabajo es mucho más heterogéneo y además disperso y fragmentado. La crisis de identidad social que todo eso conlleva ha empujado a muchos a un proceso de reidentificación en términos no vinculados a la relación entre capital y trabajo, sino en otros muy distintos, entre los cuales los criterios de "pobreza", de "etnicidad", de oficios y de actividades "informales" y de comunidades primarias son, probablemente, los más frecuentes (Quijano, 2003).

---

[12] Por ejemplo entre el salario de un profesor del sistema de educación pública peruana, que ganaba 173 dólares mensuales hasta el mes de junio de 2003 en que una larga huelga nacional les permitió imponer un aumento de 28,98 dólares, y el del Presidente de la República que gana 19.000 dólares mensuales (que frente a la protesta masiva ha ofrecido reducir a US$ 12.000) y además tiene todos los gastos personales y domésticos pagados por el Estado.

Se puede identificar a la burguesía "compradora" y especuladora, adversaria del mercado interno, como hegemónica social y políticamente entre los dominantes locales, asociada y subordinada a los intereses de la burguesía central o global. Pero es difícil, en cambio, identificar un sector como el hegemónico en el heterogéneo, disperso, fragmentado y cambiante universo de trabajadores. La creciente mayoría de ellos está caracterizada por la actividad "informal" y por la multiinserción en el mundo del empleo, esto es insertado de manera precaria y muy diversa y en diversas actividades. Y sólo una minoría muy reducida está agrupada en instituciones sociales de tipo gremial o político, a diferencia de tres o aun de dos décadas atrás.

La secuencia neoliberalizadora

Sobre esos procesos y con esas condiciones se llevó a cabo, como es posible percibir ahora, la secuencia del proceso de neoliberalización del capitalismo impuesta por las burguesías "centrales" y sus respectivos Estados e instituciones, en toda la región, desde los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad:

1. La imposición del negocio de la deuda externa que comienza con el reciclamiento de los petrodólares y la globalización del capital financiero.

2. La reprimarización y la terciarización de la estructura productiva, incluyendo el dominio del capital financiero.

3. El estancamiento productivo, el desempleo y la fragmentación de las agrupaciones sociales de trabajadores.

4. La inflación llevada a la hiperinflación en los países principales de América del Sur, ante todo para deslegitimar a los sectores sociales y políticos renuentes a entregar al capital global y al imperialismo global el control del capital y del Estado. Recuérdese los paralelos casos de Argentina, Brasil y Perú, principalmente.

5. El reajuste estructural para cortar la hiperinflación y pagar los servicios de la deuda externa y reprivatizar y globalizar el control del capital financiero y productivo y de la producción y distribución de servicios públicos.

6. La "reforma del Estado", en realidad el desalojo de toda representación política y tecnocrática de las capas medias reformistas y de los trabajadores, para dar paso a la reprivatización del Estado.

7. Debido a esos mecanismos, la absorción transnacional de valor y del plusvalor ha llegado a ser virtualmente total en la mayor parte de la región.

La excepcionalidad brasileña

Aunque también dentro de la misma tendencia, Brasil constituye en este plano una notable excepción. Es el único país que ha mantenido una importante estructura de producción industrial, mientras todos los demás eran arrastrados a una desindustrialización. Es el único país que tiene, además, industria pesada, y de ese modo puede producir e incorporar tecnología avanzada, mientras ese tipo de industria ha sido desmantelado en todos los demás. Y aunque la presencia de empresas internacionales es muy importante, y en algunos rubros como la producción automotriz es decisiva, la mayoría de las empresas industriales son de propiedad de brasileños. Es el único país donde el capital financiero de propiedad de brasileños ocupa una posición interna dominante, cuando en todos los demás países el capital financiero es principalmente, y aun exclusivamente en muchos casos, como en el Perú, internacional. Es eso lo que explica la existencia de una fuerte burguesía brasileña, con intereses locales suficientemente importantes como para que su asociación con sus socios internacionales no corra a la subordinación con la misma rapidez y facilidad que en los otros países y, ostensiblemente, para que su peso en el Estado lleve a éste a negociar con fuerza las condiciones de esa asociación, como en el caso del ALCA, y que inclusive pueda apoyar a un Lula hasta el límite en que sus intereses sociales mayores no estén en riesgo. Eso mismo, sin embargo, es lo que da cuenta, de otro lado, de la extensión y la fuerza social, institucional y política del movimiento obrero brasileño. Lula es su demostración. Y, finalmente, del hecho de que no obstante sus crecientes dificultades, las capas medias profesionales y tecnocráticas de ese país no se hayan reducido, ni estén en riesgo inminente de desintegración, como en casi todos los demás.

Brasil es, sin embargo, también excepcional de otro muy distinto modo entre los países latinoamericanos. En primer lugar, es el último y hoy el único país latinoamericano donde *l'ancien regime* ha logrado no sólo mantenerse, modernizándose en términos de la tecnología y de sus hábitos de consumo. La fauna latifundista brasileña no sólo es la que más tierra controla en toda la región, sino que sigue empleando con los trabajadores los mismos exactos procedimientos del antiguo señorío terrateniente latinoamericano que fue terminando en todo el resto de la región a fines de los años 60 del siglo pasado: abusa, maltrata, tortura, mata a sus trabajadores. Esas prácticas sirven ahora para la explotación capitalista del trabajador, en sus múltiples formas asociadas de la actualidad, las del capital, las de la esclavitud, las de la servidumbre. Por eso, ha podido sostenerse y afianzarse como la barrera social y política principal a la democratización social y política del país, en especial respecto de la clasificación social "racial" de la población y de la brutal concentración de ingresos y de riqueza. Y ha logrado no perder lugar en toda coalición social y política de control del Estado. No hay sino que recordar que fue nada menos que el presidente Cardoso quien aceptó y mantuvo en su coalición política a los más poderosos y más reaccionarios grupos de dicha fauna. Y, políticamen-

te, pagó por ello. En segundo término, Brasil es hoy el país más polarizado socialmente no sólo de América Latina, sino de todo el mundo.

Lo que esa excepcionalidad implica, por todo eso, es que la expansión y el fortalecimiento del capitalismo en Brasil, especialmente durante la prolongada dictadura militar, fueron llevados a cabo a costa de la más brutal concentración del control de riquezas y de ingresos en manos de una reducida minoría, contra la abrumadora mayoría de la población. La derrota de los movimientos de democratización del poder con el golpe militar de 1964 permitió imponer una continuada escalada de polarización social. Primero por medio de la reconcentración de la propiedad agraria en manos del más feroz señorío rural capitalista de toda la región. Y, paralelamente, una creciente reconcentración de ingresos. Así, si en 1960 el 1% más rico de la población concentraba 11,9% de la renta nacional, en 1970 ya controlaba 14,7% y en 1980 16,9%. Pero si se toma el 5% más rico, en 1960 concentraba 23,8% de la renta nacional, mientras que en 1970 ya había llegado al control de 34,1% y en 1980 a 37,9% de dicha renta. En cambio, el 50% más pobre en 1960 recibía aún 17,4%, pero en 1970 bajó a 14,9% y en 1980 solamente ya 12,6% (Furtado, 1982). Esta escalada no se ha detenido desde entonces, y actualmente el 10% más rico de la población brasileña puede controlar 70 veces más de la renta nacional que el 10% más pobre (PNUD, 2003). En ese sentido, el proceso de reprivatización social del Estado comenzó, en América Latina, con el golpe militar de 1964 en Brasil.

Estas comprobaciones son extremamente importantes, si se quiere, decisivas, respecto de un asunto crucial. De todas las burguesías latinoamericanas, la brasileña es la única que tiene *aparentemente* los atributos de una burguesía nacional, porque sus intereses están asentados y ramificados en la economía de ese país. Podría decirse también, en ese mismo sentido, que el Estado brasileño, que ha protegido ese desarrollo, incluso lo ha conducido en determinados momentos, desde Kubitschek hasta el final de la dictadura militar, también tiene en apariencia los atributos de un Estado nacional.

No obstante, la continua escalada de concentración creciente del control de los recursos, de la tierra en primer lugar, y de la distribución de ingresos hasta producir la más brutal polarización social del continente, a pesar de ser la más rica de las burguesías de la región, a pesar del crecimiento rápido de la renta nacional, a pesar de ser la brasileña la novena economía del mundo, presenta una evidencia definitiva: que esa burguesía y ese Estado son "nacionales" sólo en tanto y en cuanto lo menos democráticos posibles, específicamente sólo en tanto y en cuanto lo más coloniales posibles, puesto que se fundan en el dominio colonial de una abrumadora mayoría de la población, "negra". La colonialidad del poder es la cara real de la "nacionalidad" de la burguesía y del Estado del Brasil (Quijano, 2000).

La cuestión del Estado

Como puede ser advertido en todo lo anterior, los procesos que han llevado a la América Latina a la situación actual han sido, en verdad, muy profundos. Han producido una genuina reconfiguración de la existencia social, de las relaciones sociales básicas, de los intereses sociales, de sus agentes, de sus instituciones, tanto en la dimensión material como en la intersubjetiva. En esa perspectiva, tienen el carácter de toda una contrarrevolución.

Es la expresión, en nuestra región, de los procesos de aceleración y de profundización global de las tendencias centrales del patrón de poder dominante, como consecuencia de la derrota mundial de los regímenes, organizaciones y movimientos sociales y políticos que rivalizaban o antagonizaban la hegemonía de los grupos capitalistas imperialistas "centrales" y de sus Estados. Tales procesos son: a) la radical reconcentración mundial del control sobre el trabajo, sus recursos y sus productos, en beneficio de los grupos capitalistas "centrales", una parte cada vez más minoritaria de la especie; b) la polarización acelerada de la población mundial entre esa minoría y una mayoría creciente, mayoría despojada de acceso a lo que el trabajo mundial produce, inclusive, para una proporción cada vez mayor, el acceso a recursos de supervivencia; c) para imponer el desarrollo de tales tendencias, la reconcentración mundial del control de la autoridad, en este caso del Estado, lo que en países como los de América Latina implica una forma de reprivatización del Estado (Quijano, 2000a).

El agente central de ese proceso de neoliberalización de la economía latinoamericana y de la reconfiguración de la estructura de poder, de los intereses sociales, de sus agentes, de sus agrupaciones e instituciones, ha sido el Estado. Y eso indica que los grupos de interés social asociados a esos procesos y beneficiarios de ellos obtuvieron la fuerza política necesaria para llegar al control del Estado y las condiciones adecuadas para imponer sus políticas.

Es inevitable preguntarse ahora, en medio de la crisis latinoamericana y del debate y confrontación social y política que observamos, y a la vista de los intereses sociales y agentes de la estructura de poder producidos por el neoliberalismo, cuáles serán o podrán ser las opciones dotadas de las condiciones y de la fuerza capaces de conquistar el control efectivo del Estado y de llevar adelante cuáles tendencias o cuáles propuestas.

Es cierto que ya en varios países, y de los más importantes, el descrédito del neoliberalismo ha llevado al gobierno a los partidarios del capitalismo nacional. ¿Significa eso que por lo menos en esos países se han establecido las condiciones del desarrollo capitalista bajo el control de una burguesía y de un Estado nacionales? Difícilmente. No existe, salvo parcialmente en Brasil, una burguesía local con alguna fuerza propia. Pero ya acabamos de ver el fundamento de esa fuerza y de su conflicto insanable con todo desarrollo capitalista nacional continuado. Y aunque determinados gobiernos pudieran ser admiti-

dos como nacionalistas, eso no califica necesariamente a los respectivos Estados como nacionales, como es el caso de Venezuela y de Argentina.

Es cierto también, de otro lado, que aparte de los discursos, son aún inexistentes las acciones concretas que puedan enrumbar el curso histórico próximo hacia las metas prometidas. Y es cierto ya, en cambio, que donde el discurso comenzó a afilarse y parecieron comenzar las acciones, como en la de Venezuela de Chávez, los grupos de interés social asociados al neoliberalismo y al imperialismo no han tardado en organizarse y pasar a la ofensiva contra el régimen chavista, con el ostensible apoyo de EEUU y de los gobiernos latinoamericanos que son sus aliados, enrumbándose claramente en dirección de una contrarrevolución (Quijano, 2002). Esa es, en todo caso, una indicación de que, si en Brasil o en Argentina se comenzaran acciones concretas e importantes en dirección del capitalismo nacional, los grupos sociales con intereses contrarios no tardarían en organizar la resistencia, si es que no están ya preparándola.

Las condiciones y los rasgos de un capitalismo nacional no imperialista y sin embargo capaz de desarrollo no son desconocidas. Aunque por períodos más bien cortados y por lo tanto sin las condiciones de desarrollo continuado, inclusive América Latina no es ajena a esa experiencia. Aunque no sea eso el objeto de esta discusión, están en juego, entre otras, las siguientes condiciones básicas. Primero, el control nacional de los recursos y de los productos, esto es la propiedad nacional de los recursos de producción decisivos (o estratégicos, como se suele decir), y en la actualidad eso implica, ante todo, el capital financiero. Segundo, una estructura productiva capaz de proveer a las demandas del mercado interno, en primer lugar, y complementariamente también del externo, y de defender su independencia sin perjuicio de su inserción y de su asociación mundial. Tercero, la expansión y el control del mercado interno. Cuarto, el control de las transacciones internacionales del país.

Todas esas condiciones se ordenan en torno de un factor central: la distribución relativamente democrática del acceso a recursos de producción, del acceso a ingresos para usar y consumir lo que la sociedad produce, la provisión democrática de servicios públicos, la relativamente democrática distribución del acceso a las instancias de generación y de gestión de la autoridad pública, esto es, del Estado. Todo eso implica la ciudadanía universal de los habitantes del país. En otros términos, se trata de una sociedad razonablemente democrática, que se expresa democráticamente en el Estado. El moderno Estado-nación capitalista es la expresión de una sociedad capitalista donde la democracia posible de este patrón de poder ha podido ser conquistada[13]. En otros términos, la condición histórica del desarrollo capitalista nacional, en los períodos en que eso llegó a ser posible, fue y es la democracia bá-

[13] Esto es, se trata de una negociación institucionalizada de las condiciones, de las modalidades y de los límites de la dominación y de la explotación.

sica de la sociedad y su expresión política en el Estado. Y ésa es, precisamente, la condición ausente hoy en América Latina.

La experiencia de capitalismo nacional no es del todo ajena a la historia latinoamericana. Pero, de un lado, ha sido siempre de corto alcance y de corta duración. Y, de otro lado, precisamente sólo cuando algunas fracciones de la burguesía tuvieron que aliarse, o admitieron hacerlo, con las capas medias modernizantes y ganar el respaldo de los trabajadores explotados, sea para destruir el Estado oligárquico, como en el caso mexicano, o para imponer la modernización básica de sus agrupaciones, como en los casos de Argentina, Uruguay, Chile o Colombia (Quijano, 1993). Pero en ninguno de esos casos la democratización de la sociedad y la nacionalización del Estado pudieron ser consolidadas de modo de garantizar la continuidad del desarrollo capitalista *nacional.* Por esas razones, el desarrollo capitalista posible ha sido solamente como neoliberalización y por lo tanto contra la creciente mayoría de su población.

El Estado en todos los países ha operado en estos últimos 30 años, en mayor o menor medida, en contra de la mayoría de la población. Esto es, no sólo como articulación política del dominio de una minoría sobre la mayoría, como en todas partes, sino como garante y administrador de la continuada y creciente exclusión social de la mayoría. A menos que alguien tuviera el desparpajo de sostener que, en los últimos diez años en especial, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Bolivia o en México, el Estado haya trabajado en beneficio de esa población. Tal Estado no llegó a ser del todo un Estado del capital, es decir, que articula la dominación del capital sobre el trabajo, pero sin dejar de mantener un margen de negociación de las condiciones de esa dominación. Ahora se trata del Estado de los capitalistas contra los trabajadores. Y tales capitalistas son, principalmente, internacionales y controlan el capitalismo mundial y hoy en especial el capital financiero. Dicho de otro modo, hemos sido víctimas de un proceso de reprivatización del Estado.

La determinación histórica central en esas relaciones entre capitalismo y Estado en América Latina consiste en la colonialidad básica del patrón de poder mundial imperante, originada precisamente con la propia América (Quijano 2000 y 2001).

Con todos los obligados recaudos, no parecen ser muy notables las condiciones que permitirían establecer o restablecer un capitalismo nacional, mucho menos democrático. El cambio histórico necesario para lograrlo sería tan profundo que implica en realidad una revolución. Y tampoco parecen estar a la vista, en el corto plazo, las condiciones y las fuerzas sociales y políticas que pudieran llevar a cabo un proceso de ese carácter y de esa orientación. De una parte, una revolución social para imponer un capitalismo nacional, democrático, choca en primer término con la propia burguesía, local e internacional. De la otra, las únicas fuerzas sociales y políticas que están en curso de constitución, si se desarrollan y se hacen efectivamente fuertes como para disputar

el control del poder en esta sociedad, probablemente se orientarían más a la producción democrática de una sociedad democrática. En tal caso, el patrón de poder capitalista estaría en cuestión, incluido, por cierto su Estado.

Si se observa con cuidado lo que ocurre con una mayoría creciente de la población latinoamericana y, probablemente, mundial, así como no puede vivir sin el mercado, ni puede vivir con el mercado, no puede tampoco vivir sin el Estado, ni puede vivir con el Estado. La acelerada profundización de las dos tendencias centrales del patrón de poder ha originado para sus víctimas esa doble trampa, que no dejará de desarrollarse en adelante. Para las víctimas que son empujadas al polo de miseria del capitalismo, por eso mismo, en adelante toda conquista o reconquista del acceso a los bienes y servicios que el trabajo produce no podrán realizarse sino como democratización radical de la existencia social. Tenderá, por eso, no mucho más tarde, también a hacerse sin el Estado o contra él.

Nuevas formas de autoridad están en pleno curso de constitución en todas partes, de manera molecular si se quiere. Ellas tienden a ser de carácter o de orientación comunal. Sus muchas formas de conflicto y de combinación con el Estado, ya están presentes. Así ocurrió con las experiencias de Villa El Salvador (Coronado y Pajuelo, 1996; Quijano, 1998 y 2000b) o de Huaycán, en el Perú, de las comunidades que reorganiza el movimiento de los indígenas en Ecuador y Bolivia, o que va ampliando el MST en el Brasil. Y así ha estallado a la mirada mundial en la reciente crisis argentina. Fuera de esas tendencias, la heterogeneidad histórico-estructural de la sociedad contemporánea, dentro y fuera de América Latina, no podría expresarse democráticamente, en una sociedad democrática. Y sin una sociedad democrática de ese carácter, la polarización social que produce el capitalismo actual, –sin pausa y sin retroceso posibles, arrastrando a la especie a una catástrofe demográfica y social sin precedentes y que ya está en curso en África, Asia y América Latina–, no podría ser controlada.

Bibliografía

Arancibia, Fabiana (2003): "Patagonia, la codiciada", *América Latina en movimiento*, n° 366, Quito, Ecuador, 18 de marzo, pp. 3-5, ALAI.

Auyero, Javier (2001): "Global Riots", *International Sociology,* vol. 16, n° 1, marzo, pp. 33-55.

Burbano de Lara, Felipe (2000): "Ecuador. Cuando los equilibrios crujen", *Anuario social y político de América Latina y el Caribe*, San José, Costa Rica y Caracas, n° 3, pp. 65-79. Flacso-Nueva Sociedad.

Centro Comunitario de Salud Mental (1999): *Familia y cambio social*, Lima, Cecosam.

Cepal (2002): Informe sobre el desempleo, Dublín, 8 de julio.

Coronado, Jaime y Ramón Pajuelo (1996): *Villa El Salvador. Poder y comunidad*, Lima, CEIS-Cecosam.

Delgado Ramos, Gian Carlo (2003): "Geopolítica imperial y recursos naturales", *Memoria*, México, n° 171, mayo, pp. 35-39.

Furtado, Celso (1982): "Trasnacionalizaçao e monetarismo", *Pensamiento Iberoamericano*, Madrid, n° 1, enero-junio, pp. 13-45.

Iglesias, Enrique (1993): "La evolución económica de América Latina", *Comercio Exterior*, México, febrero, vol. 33, n° 2.

Islas, Héctor (1983): "México y Brasil, la convergencia de problemas", *Comercio Exterior*, México, mayo, vol. 33, n° 5, pp. 405-408.

Lipschitz, Edgardo (1980): "América Latina en la economía mundial", *Economía de América Latina*, n° 5, México, pp. 15-33.

López-Maya, Margarita (ed.) (1998): *Lucha popular, democracia, neoliberalismo. Protesta popular en América Latina en los años del ajuste*, Caracas, Nueva Sociedad.

Macas, Luis (2000): "A diez años del levantamiento del Inti Raymi en Ecuador", *América Latina en movimiento*, Quito, n° 315, junio, pp. 12-16.

Mendonça, Maria Luisa (2003): "La ofensiva militar de EEUU", *América Latina en movimiento*, n° 371, Quito, 1 de julio, pp. 17-19, ALAI.

Pimentel, Carmen (2001): *Violencia y familia en la barriada*, Lima, Cecosam.

PNUD (2002): *Sobre la pobreza, Informe sobre desarrollo humano*, Dublín, 8 de julio.

PNUD (2003): *Informe sobre Desarrollo Humano*, julio.

Quijano, Aníbal (1984): "Los vicios del círculo. La crisis económica en América Latina", *Cuadernos del Centro de Estudios de la Realidad Portorriqueña*, n° 3, San Juan, Puerto Rico, septiembre.

_____ (1993): "¿A América Latina sobrevivera?", *São Paulo Em Perspectiva*, vol. 7, n° 2, São Paulo, pp. 60-67, Seade.

_____ (1998): *La economía popular en América Latina*, Lima, CEIS-Mosca Azul.

_____ (2000): "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina" en Edgardo Lander (comp.), *Colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales*, Buenos Aires, Unesco-Clacso.

_____ (2000a): "Globalización, colonialidad del poder y democracia" en *Tendencias básicas de nuestra época. Globalización y democracia*, Caracas, Instituto de Altos Estudios Internacionales Pedro Gual.

_____ (2000b): "The Growing Significance of Reciprocity from Below. Marginality and Informality in Debate" en Faruk Tabak y Michaeline A. Crichlow (eds.), *Informalization*, pp. 133-166, Baltimore-London, Johns Hopkins University Press.

_____ (2001): "Colonialidad, globalización y democracia en *Tendencias básicas de nuestra época*, Caracas, Instituto de Altos Estudios Diplomáticos "Pedro Gual", pp. 25-61. Traducido al portugués: "Colonialidade, Poder, Globalizaçao e Democracia" en *Novos Rumos*, año 17, n° 37, 2002, pp. 4-29, Instituto Astrogildo Pereyra, São Paulo.

_____ (2002): "El fujimorismo del gobierno Toledo", *Observatorio Social de América Latina*, Buenos Aires, junio, pp. 71-83, Clacso.

_____ (2002): *Venezuela, ¿un nuevo comienzo?*, *América Latina en Movimiento*, Quito, abril, 2002.

_____ (2002a): "El fujimorismo del gobierno Toledo", *Observatorio Social de América Latina*, Clacso, Buenos Aires, junio, pp. 71-83, reproducido en PUC-VIVA, PUC 2002, São Paulo, Brasil.

_____ (2002b): "El trabajo al final del siglo xx" en Bernard Founou-Tchuigoua, Sams Dine Sy and Amady A. Dieng (comps.), *Pensée Sociale Critique Pour Le XXI Siecle*, Melanges en l'honneur de Samir Amin, París, pp. 131-149, Forum du Tiers Monde, L'Harmattan.

_____ (2002c): "El nuevo imaginario anticapitalista", *América Latina en movimiento*, n° 351, abril, pp. 14-22.

Sousa de Santos, Boaventura (ed.) (2002): *Produzir para viver. Os caminhos da produçao nao capitalista*, Civilizaçao Brasileira, Río de Janeiro, pp. 81-114 y 189-283.

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2004, vol. 10, n° 1, (ener.-abr.), pp. 99-107

EXCLUSIÓN Y RESISTENCIA: SENDAS MEXICANAS

Raquel Sosa Elízaga

A casi tres años del inicio del gobierno reconocido como "de la transición", la población mexicana sabe que los cambios que esperaba no ocurrirán. Los programas de los gobiernos priistas se mantienen; buena parte de los personajes políticos que en el pasado los aplicaron, también; y la discusión sobre el rumbo político del país ha sido sistemáticamente evadida. En su lugar, gobiernan la frivolidad y el escándalo, las apuestas sobre la futura campaña presidencial, las encuestas de popularidad sobre los/las mejores o peores en el escenario político nacional.

El presente ensayo se orienta a buscar el modo en que se expresa hoy la vinculación entre la pobreza, la exclusión y la resistencia, así como a plantear tanto las limitaciones y dificultades, como algunas perspectivas posibles a las fuerzas democráticas del país.

Habitaciones de la pobreza

En su *Panorama social de América Latina 2002-2003* la Cepal reconoce la existencia de 220 millones de pobres en América Latina, de los cuales 95 millones son indigentes, es decir, 43,4% y 18,8%, respectivamente. De acuerdo con esa misma información, en el caso de México, poco más de 50% de la población está en condición de pobreza, mientras que poco más de 20% se encontraría en condiciones de indigencia.

La medición de la pobreza ha sido uno de los temas favoritos del gobierno de Fox, y en particular de la Secretaría de Desarrollo Social de su gobierno. Para llegar a una cuantificación lo más precisa posible, se contrató a un numeroso equipo de expertos que, bajo la dirección del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han llegado a la conclusión de que existen en México no dos, sino tres tipos de pobres: los pobres patrimoniales (con escasos ingresos), los pobres alimentarios (con deficiencias alimentarias) y los pobres de capacidades (sin acceso a la salud, educación, etc.)

La diversificación cuantitativa de los pobres ha permitido a esa dependencia acotar y reducir el número de pobres, así como redirigir los programas sociales, focalizándolos hasta el extremo, para evitar otorgar apoyos a personas

que, de acuerdo con sus criterios, no los necesitan realmente. Así, por ejemplo, en uno de los pocos programas del gobierno federal que se aplican en el Distrito Federal, la diferencia entre la cuantificación federal de la pobreza es de más de 40 puntos porcentuales, 18% para el gobierno federal; 63% para el gobierno local.

Cepal indica que, pese a que en la región la pobreza sólo ha disminuido en 0,4%, México ha vivido una disminución equivalente a 2,6%. Dicho reconocimiento, con el previo semejante emitido por el Banco Interamericano de Desarrollo, ha sido muy bien acogido por el gobierno de Fox, toda vez que lo interpreta como un éxito de su política ultrafocalizadora. No obstante, la propia Secretaría de Desarrollo Social federal ha debido reconocer que la disminución del número de pobres se debe, en no pequeña medida, a los ingresos que aportan los migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos, que ascienden anualmente a no menos de 12.000 millones de dólares.

El Banco Mundial, en cambio, es más escéptico y plantea que América Latina en su conjunto se encuentra hoy en peor situación que el África subsahariana, ya que los habitantes que perciben menos de un dólar al día pasaron de 48 millones a 56 millones entre 1990 y 2000, mientras que los ingresos sólo habrán aumentado en la región 0,3% entre 2001 y 2005. El BID ubica a México en el cuarto lugar en el nivel de pobreza de América Latina, con 58,8% de pobres "convencionales" y 27,7% en pobreza extrema (www.iadb.org).

El debate intenso y acalorado sobre el número de pobres, que incluye a críticos del programa federal, como el actual diputado Julio Boltvinik, podría ser considerado secundario, si no fuera por el hecho de que detrás suyo se encuentra una larga y consolidada postura neoliberal de considerar la ayuda a los pobres como temporal, acotada y orientada sólo a paliar los efectos más agudos de la política macroeconómica, y no a partir del reconocimiento de la existencia de derechos sociales, consagrados en la Constitución.

En efecto, la política federal se concibe a sí misma como impulso de una respuesta social, de una iniciativa orientada a superar la pobreza, a la que denomina *corresponsabilidad*. Así, por ejemplo, si el gobierno federal invierte un peso en un programa social, aspira, espera, pretende recuperar al menos diez centavos de los beneficiarios de dicho programa, sea en efectivo o en especie, es decir, como fuerza de trabajo. La exigencia es tal que se llega a plantear que, si las comunidades no depositan el anticipo de su colaboración corresponsable, el gobierno federal se reserva el derecho a entregar su parte (ver *Lineamientos del programa Hábitat*, publicados en el *Diario Oficial* en enero de 2003).

Durante los años neoliberales, todas las instituciones públicas dedicadas a dar cumplimiento a los preceptos constitucionales del derecho a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo sufrieron dramáticos ajustes presupuestarios, reorientación de sus programas en sentido de elitizarlos (los exámenes

de admisión aplicados por las escuelas de nivel medio superior y superior convirtieron el acceso a dichas escuelas en un rarísimo privilegio; la desestatificación de las pensiones entregó a los bancos 25% de lo acumulado por cada trabajador, como pago de la transferencia; la diferenciación de programas de salud excluyó a derechohabientes pobres del llamado segundo o tercer nivel de atención); o incluso desaparición o cierre de servicios (lo que afectó particularmente a los programas de vivienda y empleo).

El continuo acoso a las industrias estratégicas nacionales (petróleos y energía eléctrica) no logró hasta ahora traducirse en la desnacionalización o privatización de las casi últimas empresas estratégicas en manos del Estado que quedan en el país, pero indudablemente incidió en su desmantelamiento, la fabricación de deudas multimillonarias, la preparación para quiebras parciales y, desde luego, en una masiva e insistente campaña en los medios de comunicación sobre la necesidad de *modernizar* y *desarrollar las potencialidades de cooperación internacional* de dichas empresas, en eufemismos vulgares por lo obvios.

Una política que incluya el reconocimiento y garantías al cumplimiento de derechos sociales, en cambio, no puede admitir que se excluya de su ejercicio a ningún miembro de la sociedad: la educación, la salud, el trabajo, la vivienda deben ser para todos. Debe el Estado asumir esta responsabilidad social y no acotarla o transferirla al ámbito privado. Ello no quiere decir que no se admita la existencia de instituciones privadas que otorguen servicios en cualquiera de estas áreas, cobrando a quienes puedan y quieran pagar por ellas. Significa que es el Estado el responsable de que no se produzca exclusión por razones económicas, sociales, étnicas, de género, de edad o de cualquier otra índole en el cumplimiento de los derechos ciudadanos.

Los pobres de carne y hueso

Escapa también a la obsesión estadística la comprensión de los seres humanos clasificados como en situación de pobreza, aunque, desde otro ámbito, también existen estadísticas que indican el grave estado de deterioro social en que se encuentran los pobres en distintos países del mundo. En el *Informe mundial sobre la violencia y la salud* que publicó a principios de 2003 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó en 1.600.000 las defunciones por causas violentas en el mundo. Cito extensamente:

> Tres de cada cuatro víctimas de homicidio eran varones, y las tasas masculinas de muerte por homicidio fueron más de tres veces superiores a las femeninas. La mayor tasa mundial de homicidios (19,4 por 100.000) correspondía a los hombres de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. En la población masculina las cifras tienden a descender con las edades; sin embargo, entre las mujeres ronda el 4 por 100.000 en todos los grupos de edad, con la excepción del grupo de entre 5 y 14 años, en el que desciende al 2 por 100.000 aproximadamente.

> Por el contrario, las tasas de suicidio tienden a aumentar con la edad en ambos sexos. La más elevada (44,9 por 100.000) se registró entre los hombres de 60 años o más; era más de dos veces superior a la de las mujeres de la misma edad (22,1 por 100.000). Sin embargo, en el grupo de entre 15 y 29 años la tasa masculina era de 15,6 por 100.000, frente a 12,2 de la femenina.
>
> Las tasas de muerte violenta varían también en función de los ingresos de los países. En los de ingresos bajos y medios son más de dos veces superiores (32,1 por 100.000) a las de los países de altos ingresos (14,4 por 100.000).

En el mismo informe se señalan diferencias regionales, siendo mayor la tasa de homicidios (en que incluyen a conflictos armados) en África y las Américas, así como entre comunidades urbanas y rurales, siendo las primeras las mayores víctimas de suicidios. La OMS no concluye sin afirmar que la violencia amenaza, antes que a nadie, a la población económicamente activa de todos los países del mundo, obligando a gobiernos y fundaciones internacionales a proveer refugios a poblaciones que escapan de las guerras, a sufrir daños en bienes públicos e infraestructura, a sufrir los costos de una menor productividad del trabajo, a desincentivar las inversiones, el turismo, y limitar el desarrollo económico. "Los costos de la violencia rara vez se distribuyen de manera homogénea. Las personas con menos posibilidades de protegerse frente a las adversidades económicas serán las más gravemente afectadas", sentencia.

Dicha información ofrece un panorama crítico de una condición de vulnerabilidad de los pobres que no es frecuentemente tomada en cuenta. La revista *América Economía*, por ejemplo, ha establecido una calificación a las más importantes ciudades del continente, de acuerdo con el nivel de violencia que viven sus sociedades. Según lo que ellos llaman el Producto Interno Bruto per cápita *ajustado por violencia* (en el que se "descuentan" pérdidas ocasionadas por violencia y delincuencia), otorgan un puntaje de 27.053 dólares anuales a Miami; de 8.283 a Santiago; de 7.533 a Bogotá, y de 6.355 a Ciudad de México (*América Economía,* 25-4/8-5 de 2003). Es evidente que las ciudades latinoamericanas señaladas se encuentran en las peores calificaciones (4 puntos, según los parámetros de la revista) en lo que se refiere a criminalidad, eficacia de las fuerzas de seguridad pública, disturbios sociales, terrorismo, secuestros e inestabilidad geopolítica.

El panorama de pobreza asociada con violencia, así, está muy lejano de las perspectivas planteadas en las décadas de los 60 y 70 en relación con opciones de cambio social. Lo de hoy, la violencia extrema que sufrimos, es una perversa combinación de los efectos del desempleo, la frustración, la presencia de grandes y poderosas bandas delictivas, sobre todo en nuestras ciudades, de la ineficacia y en gran medida corrupción de los aparatos policíacos y de procuración de justicia. Los/las pobres, podemos decir, se encuentran sitiados entre el abandono gubernamental y el acoso de la violencia, la que se inflinge sobre ellos, la que ellos mismos pueden inflingirse presas de la desesperación.

Movimientos de resistencia

Característicos de los tiempos que se viven, los movimientos sociales mexicanos son todos una clara expresión de la voluntad y el empeño que cientos de miles de ciudadanos han puesto para impedir que continúen tanto las políticas neoliberales impuestas por el gobierno federal, como sus más crudos efectos en el desempleo, la pobreza, el desconocimiento de derechos sociales, el desmantelamiento de industrias y servicios estratégicos. Más que analizarlos en detalle, lo que nos interesa ahora es destacar sus rasgos comunes, su temporalidad coincidente, el modo en que expresan las líneas de una resistencia popular.

Movimientos por la reivindicación de derechos sociales

En el período que ha ocupado el actual gobierno, tres movimientos se han señalado en defensa de derechos sociales: el movimiento de huelga de la UNAM, en contra del incremento de cuotas de acceso y de la realización de exámenes de ingreso que tienden a excluir a estudiantes pobres; el movimiento magisterial en demanda de incremento salarial, que ha paralizado la actividad educativa a nivel básico en los cinco estados más pobres del país durante los meses de mayo y junio de cada año; y el movimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, en defensa del mantenimiento de la edad de jubilación a los sesenta años, que el gobierno pretendía modificar.

Debe señalarse que los dos primeros movimientos, que contaron inicialmente con grandes simpatías de la población y de las comunidades educativas de origen, han vivido situaciones de violencia y agresión que en mucho han disminuido su eficacia y desprestigiado a sus dirigentes. Los enfrentamientos entre estudiantes universitarios y de estudiantes con maestros, así como las ocupaciones del Sindicato de Maestros, de la Cámara de Diputados y los intentos de linchamiento de diversos dirigentes magisteriales, que ocurrieron en 2001 y 2003, respectivamente, facilitaron en el primer caso el repudio de buena parte de la opinión pública y otorgaron argumentos a la rectoría de la universidad para que ésta solicitara y obtuviera el ingreso de la paramilitar Policía Federal Preventiva en las instalaciones de la UNAM, metiera presos a más de mil estudiantes y expulsara definitivamente a algunos dirigentes del denominado como Consejo General de Huelga.

Más recientemente, la provocación organizada para detener la manifestación anual por justicia en el caso de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco abrió socialmente la inquietud sobre la existencia de personas y grupos infiltrados en el movimiento estudiantil, con el afán de impedir que el reconocimiento social a la justicia de sus demandas tuviera eco y consecuencias.

En lo que respecta a los maestros, la extrema violencia de sus acciones durante su más reciente concentración en la ciudad de México debilitó extraordi-

nariamente las simpatías mayoritarias por la absolutamente legítima demanda de incremento salarial y mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores del magisterio, que terminaron negociando con los gobiernos de sus estados reivindicaciones específicas, que pusieron fin en este momento a un movimiento que ha tenido largo alcance.

En el caso de los trabajadores del Seguro Social, en cambio, sus manifestaciones de protesta realizadas durante el mes de septiembre en la ciudad de México contaron con decenas de miles de adherentes y concluyeron con la conquista de su objetivo principal, que era mantener como estaba la edad de jubilación. Comparativamente hablando, ésta fue una lucha corta de resistencia, que no vivió situaciones de descomposición, y que tuvo la posibilidad de captar para sí el apoyo de una sociedad extremadamente sensibilizada en relación con la problemática de los adultos mayores, entre otras cosas por el programa de pensión universal ciudadana que aplica el gobierno del Distrito Federal.

Movimientos en defensa de la tierra y de las empresas estratégicas

Es el caso de la lucha de los ejidatarios de San Salvador Atenco, que se inició en octubre de 2001, luego de que el gobierno federal anunciara su intención de expropiar terrenos comunales de ese pueblo con el fin de construir un nuevo aeropuerto internacional que diera servicio a la ciudad de México. La lucha de los campesinos de Atenco ha logrado un amplio apoyo social y, sobre todo, impedir que fructificaran los planes gubernamentales, toda vez que el proyecto en cuestión se canceló poco menos de un año después, en agosto de 2002. Tal vez lo que más destaca en este caso es la unidad del movimiento a partir de sus inicios, así como el hecho de que aceptaran solidaridad, pero no se subordinaran a los ritmos, formas y exigencias de grupos o partidos que manifestaron su adhesión. Fue el pueblo de San Salvador Atenco el símbolo de una resistencia al neoliberalismo que animó a miles durante los dos primeros años del gobierno federal.

No obstante, durante el reciente proceso electoral que debía renovar el ayuntamiento del pueblo, la decisión abstencionista de la mayor parte del movimiento dio lugar al establecimiento de un gobierno priista que, aunque es repudiado por los habitantes de la región, carece de impedimento legal para ejercer su mandato, con lo que se abre un frente de división de un pueblo que había logrado mantener su unidad a lo largo de todo este período.

Autoridad semejante tienen las movilizaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, opuesto radicalmente a la privatización de la energía eléctrica, y que ha ido incrementando su capacidad de protesta y las adhesiones que recibe de distintas organizaciones en sucesivas y multitudinarias manifestaciones frente a Palacio Nacional, el Congreso de la Unión y las principales calles de la ciudad, prácticamente desde el inicio del gobierno. La masiva y muy cerrada oposición a la privatización de la energía eléctrica ha tenido impacto en

el Congreso de la Unión, en que han fracasado ya dos iniciativas presidenciales hasta la fecha.

El movimiento en defensa de la autonomía indígena

Durante el mes de febrero de 2001, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional realizó una marcha por diversos estados para exigir al gobierno federal la aprobación de la Ley de reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas a que se había comprometido el gobierno anterior. La marcha fue seguida por decenas de miles, con recepciones multitudinarias en cada uno de los lugares por los que transitó, y culminó en un evento significativo en el Congreso de la Unión, en que los dirigentes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN expusieron sus puntos de vista sobre la autonomía indígena a un Congreso semivacío, al que sólo acudieron los representantes del PRD y parte de la comisión designada por el Congreso para atender el conflicto de Chiapas. Dos años y medio después, luego de un prolongadísimo silencio apenas roto por iniciativas de encuentros internacionales en territorios zapatistas en ese estado, el EZLN propuso e instituyó lo que llama "Juntas del buen gobierno", que, de acuerdo con su ideario político, no son propiamente autoridades sino colectivos de vigilancia del ejercicio de gobierno por parte de comunidades zapatistas. Los "Caracoles", como se les conoce, iniciaron sus actividades en cinco municipios de Chiapas durante el mes de agosto de 2003, pero debieron establecerse en breve en un total de 33 municipios autónomos zapatistas. En el evento inaugural, el comandante David, del EZLN, expuso un plan de siete acuerdos y siete demandas, en que se incluyen el respeto a la autonomía e independencia de las organizaciones sociales, la promoción de formas de autogobierno y autogestión en todo el territorio nacional, y el impulso a la rebeldía y la resistencia civil y pacífica de la población. Se proponen, asimismo, la formación de redes de comercio básico, el fomento al consumo básico y la formación de una red de información y cultura, así como la defensa de la propiedad ejidal y comunal de la tierra, la protección y defensa de los recursos naturales, trabajo digno y salario justo para todos, vivienda digna, salud pública gratuita, alimentación y vestido para todos, educación laica y gratuita a niños y jóvenes y respeto a la dignidad de mujeres, niños y ancianos.

Globalifóbicos

En coincidencia con el ideario zapatista, y con la participación de las organizaciones e intelectuales que han apoyado su causa, el movimiento de los globalifóbicos ha mostrado gran capacidad de despliegue y resistencia, no obstante que ha enfrentado, en diversos momentos, la provocación de movimientos de resistencia empeñados en radicalizar y confrontar tanto a los integrantes del movimiento como a los participantes en reuniones internacionales de organismos internacionales. Durante el mes de agosto, la reunión en Cancún de la Organización Mundial del Comercio concluyó sin acuerdo alguno, en buena medida debido a la coincidencia entre las protestas del movimiento glo-

balifóbico presente en los alrededores de instalaciones fuertemente resguardadas por la policía local, la Policía Federal Preventiva y el ejército, con las demandas de los países de la periferia capitalista de romper el proteccionismo impuesto por las grandes potencias. Dicha conjunción produjo un impulso sin precedentes a la exigencia de revisión de normas y acuerdos internacionales que sólo consideran el punto de vista de los países centrales, pero también permitió consolidar un movimiento cada vez más maduro de defensa de la soberanía de los pueblos, en lucha contra la globalización excluyente impuesta por el neoliberalismo, y que promueve la paz.

En este mismo sentido se pronunció la última semana de octubre el encuentro internacional "En defensa de la humanidad", en cuya declaración final los participantes señalaron:

> La humanidad ha llegado a un punto crítico que entraña serios peligros. Asoma una nueva barbarie. No se trata sólo de que una minoría haya concentrado una proporción enorme de la riqueza, mientras masas empobrecidas apenas pueden sobrevivir. El sistema hegemónico opera como una maquinaria de exclusión social. Una cantidad cada vez mayor de seres humanos ha sido declarada prescindible para el modelo en expansión; y predomina la idea de que los organismos públicos deben desentenderse de la suerte de los excluidos de la globalización.

Como objetivos específicos, el encuentro se planteó la necesidad de establecer una red de académicos, intelectuales, integrantes de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que tenga la capacidad de "reaccionar de manera inmediata ante una situación de emergencia que amerite el posicionamiento de nuestra red y las movilizaciones necesarias". La red se propone aportar y difundir conocimientos para deslegitimar el sistema dominante, proponer alternativas fundadas en la acción comprometida de los movimientos sociales de los pueblos y el análisis de sus experiencias de resistencia e innovación; fomentar la resistencia a la globalización y el neoliberalismo, tanto a escala local como global y crear redes interculturales para difundir voces plurales y diversas en defensa de la humanidad.

Nuestro país, como ha podido observarse por el mosaico de organizaciones y movimientos de protesta a la exclusión que se han planteado en los últimos años, está presente en la reflexión y la acción en torno de la problemática de la exclusión y la pobreza. Dos por lo menos son las tendencias que se observan en este proceso reciente: el esfuerzo infructuoso del gobierno federal para producir un esquema de combate a la pobreza y control social que aparezca como novedoso, a la vez que asimilado a las directrices impuestas por los organismos internacionales; y un movimiento social de protesta, que adopta eventualmente formas violentas, pero que ha ido conformándose en torno de ejes centrales de resistencia pacífica, principalmente bajo la inspiración ideológica del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Entre los partidos, la confluencia del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional con las principales propuestas de reforma y privatización de las industrias estratégicas, de continuidad del gobierno neoliberal y de represión y acotamiento de los movimientos sociales, se ubica una y otra vez en el territorio de la política conservadora, enfrentados tanto a los movimientos como a la escasa capacidad demostrada por el gobierno actual de atender las necesidades más urgentes de la población.

El caso del Partido de la Revolución Democrática plantea dificultades en relación tanto con su asociación con los movimientos sociales, como con su ubicación en el espectro político nacional. Este partido ha sufrido en los últimos años sucesivas crisis de dirección, confrontación de corrientes internas, disputas de poder y alianzas efímeras con posturas conservadoras de parte de algunos de sus dirigentes e integrantes en el Congreso (como en el no menor de la aprobación de una contrarreforma a la Ley Indígena que intentó sustituir a las reformas realmente demandadas por los indígenas).

No obstante, el PRD es el único partido nacional que sostiene la defensa de las industrias estratégicas, el reconocimiento y ejercicio de los derechos constitucionales individuales y colectivos, y la defensa de la soberanía nacional. Uno de sus dirigentes históricos gobierna la ciudad de México, con un programa que ha merecido atención y reconocimiento de diversos sectores de la población, y que pudiera constituir un ejemplo, si logra asentarse en la conciencia y en la participación de los ciudadanos de la capital, así como establecer vínculos constructivos con un muy rico, muy diverso y muy complejo conjunto de movimientos sociales de resistencia al neoliberalismo y la globalización depredadora.

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2004, vol. 10, n° 1, (ener.-abr.), pp. 109-127

EL SILENCIO COMO FORMA DE RESISTENCIA CIVIL. ANÁLISIS DEL DISCURSO DEL EZLN, 1997- 2001[1]

Luisa Ortiz Pérez

Introducción

El trabajo que presento a continuación es el resultado de estudios dirigidos a analizar la evolución de los repertorios discursivos desarrollados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) mexicano en su etapa de maduración (pos-San Andrés), así como la habilidad que este movimiento de resistencia indígena ha demostrado para generar nuevas articulaciones discursivas que lo incluyan dentro de un escenario político social global.

Parto del contexto histórico en el cual el zapatismo toma la decisión consciente de excluirse del escenario político que él mismo creó –los Diálogos de San Andrés– en septiembre de 1996. A partir de ese momento, el debilitamiento de la fuerza política del EZLN debido a la pérdida del enclave de negociación con el gobierno es estratégicamente transformado en nuevas condiciones de posibilidad o salida, en el contexto de Hirschman[2], con el fin de fortalecer una faceta alternativa y más vigorosa del zapatismo. Los mecanismos que producen estas nuevas condiciones de posibilidad son analizados temáticamente para identificar las etapas de desarrollo de la estrategia de resistencia del EZLN, en un contexto en el que deben dejar de considerar al actor hegemónico como un interlocutor útil y se articulan nuevos significados para comu-

---

[1] Ponencia presentada en el Congreso de la Latin American Studies Association, Dallas, Texas, realizado entre el 27 y 29 de marzo de 2003.

[2] Aquí hago referencia al texto de Hirschman (1997). En este texto el autor señala que la *salida* es el espacio en el que la opción de los clientes de no optar por la *voz* responde al hecho de que no están suficientemente convencidos de que la opción elegida es suficientemente eficaz para cambiar el estado de cosas mediante la apelación a una autoridad superior o la movilización de la opinión pública con la intención de forzar un cambio de administración. La *salida* es el producto de la falla en el comportamiento eficiente de instancias o instituciones, combinada con la imposibilidad de negociar la falla y llegar a acuerdos que solventen los costos producidos por la falla.

nicarse con interlocutores diferentes al gobierno mexicano, en este caso en particular, la sociedad civil nacional e internacional.

Llevo mi análisis de 1997 hasta principios de 2001, con el fin de resaltar que el EZLN consolida su capital político en el espacio que la sociedad civil ocupa, y desarrolla nuevas cadenas de significado para su lucha en las que el silencio es un arma y la palabra es la nueva opción de acción democrática en México. Las fuentes que estudio para realizar mi análisis son los comunicados, cartas y desplegados de prensa del EZLN de 1997 a 2001, así como la reacción generada por estos documentos en los medios de comunicación mexicanos tales como el periódico *La Jornada*, el semanario *Proceso*, y las opiniones de analistas políticos y académicos con el fin de resaltar tres momentos narrativos fundamentales.

El primer momento narrativo que identifico se intitula "1997: Olvido y achicamiento". En él intento resaltar las razones por las cuales el zapatismo se aleja de los diálogos con el gobierno mexicano y debe antagonizar la hegemonía que desempeñan los Acuerdos de San Andrés en su discurso. Esta ruptura constituye un verdadero impasse que debe ser resuelto por el EZLN centrándose en los fines de su lucha, en la resistencia y en la generación de nuevas articulaciones, posibilitando su supervivencia en forma alternativa para evidenciar la posición violenta y alevosa de su interlocutor principal: el gobierno mexicano.

El segundo momento narrativo lo he denominado "1998: Diálogo subalterno". Este corresponde a los procesos desarrollados por el EZLN para dirigir sus articulaciones discursivas y los repertorios de movilización alternativos. El diálogo con la sociedad civil, entendida como un actor distinto al gobierno mexicano y como el espacio en el que las condiciones de posibilidad de identificación y generación de ideologías tienen lugar, construye una base sólida de apoyo y de solidaridad que legitima la lucha y también asegura su permanencia en el futuro.

Y el tercer momento que subrayo en este trabajo es "1999-2001: La marcha hacia la contrahegemonía", en el que resalto que los espacios discursivos alternativos evolucionan hacia actividades políticas cuasiinstitucionales. Estas actividades llevan al EZLN a fortalecer su capital político de tal manera que al enfrentarse nuevamente al discurso hegemónico del gobierno mexicano, esta vez encabezado por Vicente Fox, la derrota la experimenta la hegemonía. ¿Será que finalmente el EZLN logra construir un nicho de autonomía política en el que la participación cuasiinstitucional del movimiento rebelde indígena es posible?

Concluyo mis reflexiones afirmando que la fortaleza del EZLN nos sitúa frente a un movimiento social maduro que confirma la importancia del diseño de estrategias discursivas de conformación de la ideología e identidad del movimiento con base en la centralidad de conceptos como el de contingencia. La eficacia estratégica del EZLN y su desobediencia civil por medio de las pala-

bras, sin recurrir a la confrontación *violenta*, logran integrarse en las agendas políticas de un gobierno democrático que no está dispuesto a aceptar la plurietnicidad y la multiculturalidad de las identidades políticas que lo integran.

Método

La metodología que utilizo para realizar una lectura detallada de estos textos está influenciada en gran medida por la propuesta heurística de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe[3] sobre el análisis de las luchas políticas que pretenden cuestionar y desplazar poderes y discursos hegemónicos, en el ámbito de lo político y lo ideológico. Al entender el discurso como una práctica articuladora de significados políticos, Laclau y Mouffe –desde Gramsci y su lectura del poder y de la relación entre el poder y la sociedad civil– proponen la existencia de discursos contrahegemónicos que contrarían y potencialmente desplazan significados pertenecientes al discurso hegemónico.

Estos discursos contrahegemónicos son, sin lugar a dudas, el camino hacia la articulación de propuestas políticas y discursivas que rivalizan con el *statu quo* ofrecido por el discurso hegemónico. Caminos que de igual forma personifican el espíritu de la democracia radical, entendida ésta como aquel concepto de democracia que permite la existencia de verdaderos canales de expresión del disenso por parte de la sociedad civil organizada en nuevos movimientos sociales.

Laclau y Mouffe ofrecen un abanico de estrategias metodológicas para observar el comportamiento de los discursos y los difíciles espacios de rivalidad situados en sus fronteras políticas. Dichos espacios en conflicto nos permiten identificar aquellos puntos de choque entre el discurso hegemónico del Estado mexicano y el contrahegemónico del EZLN, y nos ofrecen clara evidencia de que lo que se disputan ambos actores en el conflicto mexicano no es otra cosa que la posibilidad de enunciar un discurso de sociedad, de política y de país, más o menos incluyente de las diferencias étnicas, de clase y de género.

---

[3] Su reflexión sobre discurso y luchas por el control de la hegemonía política se intitula *Hegemonía y estrategia socialista* (1985), y es considerada una de las propuestas contemporáneas más estructuradas con respecto al futuro del pensamiento y la práctica política de lo social. Ernesto Laclau es politólogo, historiador y filósofo argentino, y ha reflexionado durante las tres últimas décadas sobre los derroteros del pensamiento social en un mundo dominado por la hegemonía discursiva del liberalismo capitalista posmoderno. En esa óptica escribió junto a Chantal Mouffe, *Hegemonía y estrategia socialista* en 1985. Chantal Mouffe, politóloga y teórica política de la Universidad de Westminster, en el Reino Unido, ha trabajado sobre aspectos políticos y sociales alrededor de las nociones de ciudadanía, cultura cívica y formación de identidades políticas en el contexto de los nuevos movimientos sociales y los antagonismos identitarios. Algunos de los trabajos más destacados son *The Return of the Political* (1993) y *The Democratic Paradox* (2000).

1997: olvido y achicamiento

> Ratificando su intransigencia a siquiera discutir los temas fundamentales de la vida política del país, el gobierno ratificó su postura frente a la reforma del Estado: discutir abstracciones y no reformar nada. Ratificando a la actual delegación gubernamental, el gobierno ratificó su actual política indigenista: prepotencia, racismo, intolerancia. El gobierno insiste en ver a los indígenas como sujetos de recibir limosnas y fotografías, pero como actores políticos no (EZLN, 1997, 361).

Tras romper los diálogos de San Andrés con el gobierno mexicano, encabezado por Ernesto Zedillo, a finales del mes de agosto de 1996, la delegación zapatista se retiró hacia las montañas de la selva Lacandona mientras los líderes del movimiento, entre ellos Marcos, permanecieron negociando con el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, y los miembros de la Conai y la Cocopa. El objeto de la negociación era la posibilidad de instaurar una Comisión de Seguimiento y Verificación que tuviera a su cargo la misión de verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz a los que se llegasen entre el EZLN y el gobierno federal mexicano.

Paralelamente, el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, alejado y alejándose de Chiapas y de los zapatistas, propone una "Reforma Constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas", la cual no es bien recibida por el EZLN ya que "implica la negación del espíritu y la letra de los Acuerdos de San Andrés" (EZLN, 1997, 422). Bellinghausen añadiría además que el decreto de carácter secreto era divulgado por los zapatistas calificándolo de "anticonstitucional, riesgoso para la unidad nacional y simulando derechos que niega expresamente" (*La Jornada*, 12-1-1997).

Los zapatistas y sus simpatizantes enfrentaron la encrucijada de recuperar sus repertorios de acción armada defensiva o de continuar privilegiando la opción del diálogo y de la concertación para la solución de sus demandas políticas e identitarias.

> En el camino de esta nueva crisis, se juega la disyuntiva de si el camino de la negociación es la via válida y eficaz para resolver las demandas de los ciudadanos. La aspiración de cambios pacíficos y civiles se vuelve ceguera tonta si sólo se pierde tiempo en la solución de los problemas fundamentales de la nación (*La Jomada*, 24-1-1997).

Así, la disyuntiva zapatista corresponde además a la decisión del gobierno mexicano de reforzar las acciones armadas en contra de aquellos que habían decidido no jugar más el juego de la negociación, lo que evidentemente ejercía presión sobre el grupo rebelde[4].

---

[4] Ver el diario mexicano *La Jomada* en la columna *Masiosare*, del 21-12-1997, denunciando los nexos del gobierno estatal y los grupos paramilitares actuando en territorio zapatista: "¿Alguién tenía duda? El gobernador Ruiz Ferro firmó un convenio con el

> La zona norte ha sido teatro de operaciones de dos de los grupos paramilitares más conocidos: Paz y Justicia y Los Chinchulines, y es también la que concentra a casi la mitad del total de desplazados de guerra que hay en el estado y que se estiman entre siete u ocho mil, según cálculos de los organismos humanitarios. Incluso, apenas a veinte kilómetros de aquí está el municipio El Bosque, escenario del más reciente desalojo del concejo autónomo San Juan de la Libertad –en la nomenclatura zapatista–, con un saldo de ocho muertos, una veintena de desaparecidos y dos mil desplazados de sus poblados. Se afirma también que entre Simojovel y Tila no hay plena libertad de tránsito, ya que es conocido que el grupo Paz y Justicia controla los retenes en los cruceros estratégicos y donde se registran frecuentes asaltos en los caminos (*La Jornada*, 21-12-1997).

El *olvido* es la expresión discursiva más clara para describir la frustración que nació como resultado de la negativa del gobierno a reconocer los años de trabajo que el EZLN había invertido en generar condiciones para que los Acuerdos de San Andrés produjeran dividendos políticos y sociales en su lucha indígena, tanto en el plano ideológico como identitario.

> La delegación gubernamental puede hacer caso omiso de este detalle [se refiere aquí a la instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación], lo puede minimizar la Cocopa, lo puede pasar por alto la Conai, lo puede "olvidar" la prensa, puede no darle mucha importancia la sociedad civil. Pero los pueblos indígenas no. La mesa de San Andrés reitera su proyecto de fracaso en la medida en que lo que se acuerda no se cumple ("Se retira el EZLN del diálogo", 3-9-1996, EZLN, 1997, 361).

El olvido también tiene otra dimensión interesante y es aquella que lucha para que la sociedad civil simpatizante de los zapatistas no olvide que están en Chiapas desde hace 500 y más años, que permanecerán ahí, y que probablemente sus problemas y demandas permanecerán también en Chiapas.

Y el *achicamiento* es definido por Marcos como un significado a través del cual se describe la asonada contrainsurgente a la que se enfrentan los zapatistas en ese momento:

> Se demuestra que esa guerrilla –el EZLN– sólo tiene fuerza en una parte de cuatro municipios del suroriental estado de Chiapas en México. Conseguido esto, sigue exigir a la guerrilla la rendición incondicional ("7 preguntas a quien corresponda", EZLN, 1997, 444).

En aquel tiempo, paralelamente a la escalada armada del gobierno mexicano en Chiapas y a la ruptura de los diálogos, la comandante Ramona se encuentra en el Zócalo de la Ciudad de México trabajando en pro de la otra estrategia zapatista posible y deseable. El fortalecimiento del brazo político del EZLN, el Frente Zapatista de Liberación Nacional, desarrollaría la gesta eman-

---

grupo priista paramilitar Paz y Justicia al que entregaría una cantidad enorme, inusitada, increíble para esas regiones de Chiapas (...) con el fin de llevar a cabo tarea sucia".

cipadora de los indígenas mexicanos como actores políticos y ciudadanos iguales en el sistema político.

Y no es que quiera sugerir que en Ciudad de México Ramona no se enfrenta a un impasse similar al del EZLN en Chiapas. Más bien sugiero que la multiplicación de frentes, uno de guerra física en el estado de Chiapas y otro de confrontaciones discursivas tanto en Chiapas como fuera de allí, resaltan el hecho de que Ramona tenía mucho más que ganar denunciando la falta de cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés en Ciudad de México, que Marcos denunciando a control remoto desde la selva el avance de los paramilitares y el ejército mexicano en su territorio ocupado.

Estas consideraciones son hechas por los zapatistas y queda claro que el camino a seguir es el de fortalecer y endurecer el discurso, minimizar el daño producido por la guerra contrainsurgente y reducir la distancia existente entre el EZLN y su interlocutor privilegiado: la sociedad civil.

Sin embargo, el problema inicial al que se enfrentan los zapatistas es el de deconstruir[5] el discurso ambiguo con el que el gobierno gestiona los asuntos en Chiapas. Un discurso en el que la paz y el diálogo son la fachada abierta y mediática del gobierno mexicano, y, por otro lado, el paramilitarismo y la violencia contra las comunidades indígenas, la parte oculta de la estrategia contrainsurgente.

> ¿Doble discurso? No, ya no queda ni siquiera esa esperanza (...) el presidente Zedillo desactivó lo que ayer era una posibilidad lejana (pero al fin existente) y que ahora (ironías que dan cuenta del escalamiento violento en el tratamiento del caso) ya no sirve ni siquiera para tratar de eludir o justificar la realidad ("Hay solamente un discurso", *La Jornada*, 2-7-1998).

A lo que el presidente Zedillo responde "luego de defender la acción del ejército en Chiapas y rechazar la postura de quienes piden su retiro unilateral, porque al plantearlo (...) no piensan 'en la gran mayoría de los indígenas chiapanecos que han sufrido la amenaza de la violencia o viven asechados por ella', señala que el doble lenguaje lo tienen aquellos que 'se dijeron mediadores' y faltaron en esa tarea por anteponer su parcialidad y sus intereses de grupo" ("El doble lenguaje", *La Jornada*, 1-7-1998).

Por eso la estrategia deconstructiva del EZLN es la que articula significados de ruptura y de guerra complementados por Marcos con "honor, la palabra y la consecuencia" (*La Jornada*, 14-3-1997), como antídotos en contra de la represión y la propaganda de que son víctimas, y en contra del rechazo a las instancias de mediación del diálogo.

---

[5] La deconstrucción entendida como "el desplazamiento de algunas de las condiciones de posibilidad y el desarrollo de nuevas posibilidades que trascienden cualquier cosa que pudiese ser caracterizada como la aplicación de una categoría" (Laclau y Mouffe, 2000, 9).

Estos significados se anticipan de alguna manera a las consecuencias del asesinato por paramilitares de 45 mujeres y niños en el pueblo de Acteal el 22 de diciembre de 1997. Estos hechos sirven además para confirman al zapatismo que la "guerra con las palabras" es la única opción discursiva que podría asegurar la supervivencia del EZLN y de sus simpatizantes.

> ... del 22 de diciembre de 1997 al 13 de enero de 1998, hubo movilizaciones en 130 ciudades de 27 países de los 5 continentes. En especial el 12 de enero (...) con un idéntico reclamo: alto a la guerra de exterminio, castigo a los responsables de la matanza de Acteal y cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés (Subcomandante Marcos, "La historia de los otros", en *Desde las montañas del sureste mexicano*, p. 327).

Así al gobierno mexicano y a Acteal solamente podrá responderse con movilizaciones pacíficas, con palabras, con verdad.

> El aumento en el número de tropas y su relocalización en Chiapas tuvo un enorme costo en la imagen internacional del gobierno y provocó el repudio de la opinión pública nacional. Lejos de doblegarse, las comunidades rebeldes enfrentaron la escalada militar con la resistencia pacífica de sus mujeres y niños (Luis Hernández Navarro, "El impasse", *La Jornada*, 3-2-1998).

Respondiendo con manifestaciones, interpela las acusaciones del presidente Zedillo sobre el papel nefasto que desempeñó el EZLN a fines de 1994 en el descalabro financiero de su administración y del Tratado de Libre Comercio (Nafta) recién inaugurado: "... [Los zapatistas] contribuyeron a precipitar la crisis financiera del país, que impuso un severo costo político y humano a la gran mayoría de los mexicanos" ("El doble lenguaje", *La Jornada*, 1-7-1998).

Como conclusión preliminar en esta sección puedo afirmar que los significados que los zapatistas articulan a su discurso para describir el proceso que los aleja de la etapa de diálogo con el gobierno mexicano y que los acerca a nuevas enunciaciones discursivas, describe la encrucijada en la que se encuentran muchos de los movimientos sociales del mundo en la actualidad: la posibilidad o imposibilidad de integrar armónicamente "ruptura" y "guerra". Caer en ruptura radical significaría la salida del movimiento fuera de la lucha social y esa clase de salida no es necesariamente provechosa, ya que la lucha permanece, independiente de la estrategia que se utilice para articularla y pelearla. En el caso de la lucha indígena, 511 años son la evidencia de su permanencia casi perpetua. La guerra radical tampoco es una estrategia posible para el EZLN como movimiento social. Su capacidad de desobedecer civilmente tiene límites cada vez más estrechos en contextos normativos de guerra.

Es por esto que la cadena diferencial de guerra contra el olvido y el achicamiento es propuesta por el zapatismo para decir que sigue siendo fuerte y opositor y al mismo tiempo no desobedece de tal manera que la sociedad civil no pudiera identificarse con su causa. La violencia sale para siempre del repertorio zapatista y es reemplazada por la palabra.

De esta manera establecieron un agudo contraste con el discurso hegemónico del Estado mexicano que proponía una lectura del futuro del conflicto en Chiapas:

> En Chiapas, (...) sólo puede haber lugar para la unidad, el diálogo y el trabajo; para la tolerancia, el apego a las leyes y la democracia. [Zedillo] pidió imaginar y trabajar por un futuro con milpas bien nutridas, con cafetos robustos, con mesas bien abastecidas. La violencia, destacó, nunca puede retoñar en progreso ("El doble lenguaje", *La Jornada*, 1-7-1998).

El diálogo con el gobierno es anulado, decisión que algunos, como el obispo Alamilla Arteaga del Episcopado mexicano, califican de "insultante", particularmente en lo que concierne al silencio de Marcos durante 1998 ("El discurso amenazante y con falsedades", *La Jornada*, 1-6-1998), y se propone la guerra contra el olvido con la ayuda de la sociedad civil.

Así la guerra en Chiapas se siguió llevando a cabo, enfatizando en significados que integraron la noción de ruptura entendida como el hecho de que los zapatistas no negociarían más con el gobierno mexicano hasta que éste cumpliera con las condiciones mínimas impuestas para reanudar diálogos[6]. Los zapatistas propusieron la noción de la "guerra contra el olvido", entendida por Marcos como "el tiempo de la palabra para la paz", integrando a luchadores sociales solidarios con la causa zapatista, en el contexto de un diálogo formativo de un discurso contrahegemónico en el que el otro dejó de ser el estado. La otredad del zapatismo de ahora en adelante es la sociedad civil.

> Lo que está mirándose en Chiapas es la última parte de lo que planteó Zedillo. Una última etapa en que lo único que cuenta es lo que el señor dice de sí mismo y lo que nada cuenta es lo que los demás dicen de sí mismos. Es lo que va a acabar con la Ley para el Diálogo, y luego con la Cocopa, de la que ya se dice que algunos de sus integrantes están más para el lado del gobierno que para el lado de los indígenas. ¿Con quién habrían de hablar así los indígenas y el gobierno? ("Lo que pasa en Chiapas", *La Jornada*, 2-8-1998).

Finalmente, la marcha de los 1.111 zapatistas enfatiza también en el peso de la lucha indígena como motor del zapatismo y legítimo incentivo para no dejar nunca la lucha en contra de la discriminación racial y política que experimenta el indígena chiapaneco, y en general el mexicano.

En palabras de Carlos Montemayor: "México sufre una especie de esquizofrenia nacional: por un lado aplaude al indio histórico y ensalza el patrimonio

---

[6] Estas condiciones son: respeto a la dignidad y el derecho a la vida de los indígenas chiapanecas. Desmilitarización del estado de Chiapas. Cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Respeto a la Ley de Concordia y Pacificación. Disolución de los grupos paramilitares. Excarcelamiento de presuntos zapatistas. La falta de una instancia mediadora para los diálogos entre las partes, la persistencia del hostigamiento gubernamental contra las comunidades zapatistas y el incumplimiento gubernamental de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

cultural prehispánico; por otro lado margina, subestima, desprecia al indio real de carne y sangre. El aplauso y el respeto son para el mundo indígena prehispánico; deseamos que el indio del pasado sea como creemos que fue. Pero exigimos que el indio de hoy cambie. Pensamos que debe dejar de ser indio, dejar de ser lo que es. Aunque nosotros, los no indios, no estemos obligados a cambiar y no nos propongamos cambiar" (*La Jornada*, 12-9-1997).

1998: diálogos subalternos

> La oferta gubernamental de muerte no fue comprada por los zapatistas. A la guerra de exterminio no opusimos nuestra guerra. A la destrucción no respondimos con destrucción. A la muerte no contestamos con la muerte. Una palabra sintetiza un año –1998– de callado heroísmo protagonizado por decenas de miles de indígenas, hombres, mujeres, niños y ancianos: resistencia. ("Cinco años del ¡Ya basta!", en subcomandante Marcos, *Detrás de nosotros estamos ustedes*, p. 27).

La ruptura y la palabra son articuladas a nuevos referentes discursivos que los zapatistas utilizan para fortalecer su identidad de resistencia y la vigencia de sus demandas, particularmente en un contexto ausente de referentes e interlocutores.

> La inacción del Ejecutivo –no se pierda de vista– estuvo acompañada de una virtual inacción del EZLN: sus escasas y débiles iniciativas eran resultado de haber perdido el centro de la escena política por mucho tiempo, debido al cansancio de la sociedad ("Diálogo en duda", *La Jornada*, 3-2-1998).

Las nuevas enunciaciones tienen el fin de generar significados que articulen opciones posibles para que la lucha indígena del EZLN subsista. Como parte de su estrategia de difusión ideológica e identitaria, la sociedad civil pasa a ser sujeto de otredad en el que el EZLN se refleja y encuentra las condiciones de posibilidad necesarias para la formación de su identidad e ideología, y no solamente en un interlocutor natural y privilegiado.

Los repertorios de movilización en los que los zapatistas son convocantes y organizadores de las actividades[7] y los espacios de intercambio de información en los que el mediador principal son los medios de comunicación impresa, como el diario mexicano *La Jornada*, tienen sentido solamente cuando se subraya la participación fundamental de la sociedad civil.

---

[7] Los eventos organizados por el EZLN para encontrarse con la sociedad civil son marchas indígenas de Chiapas a Ciudad de México en septiembre de 1997 y en marzo de 2001, consultas ciudadanas con funciones plebiscitarias en marzo de 1999, encuentros ciudadanos en Aguascalientes Chiapas, en 1994, el intergaláctico regional y el internacional en 1996, y la participación de brigadas de paz, cinturones humanos y comunidades civiles de paz desde 1994 hasta la fecha.

Esta sociedad civil es definida por los zapatistas como el espacio de diálogo compartido por las ONG, actores sociales organizados, opinión pública, intelectuales y académicos e individuos "dispuestos a resistir la hegemonía discursiva del Estado mexicano", y que desempeña el papel de articulador de la causa zapatista, una causa indígena, social, política pero sobre todo humana:

> Nuestro interlocutor no es el gobierno mexicano. Ese, como dijimos, ya no escucha. Nuestros interlocutores son ustedes, los miles y miles de personas que en México y en el mundo quieren y buscan el fin de un sistema de opresión que no es más que una guerra en contra de la humanidad (Subcomandante Marcos, *Desde las montañas del sureste mexicano*, p. 328).

La sociedad civil es interpelada en documentos como la Quinta Declaración de la Selva Lacandona (5 DSL), enunciada el 19 de julio de 1998, la cual caracteriza efectivamente el discurso que relaciona sociedad civil con ruptura, además que señala la manifestación del silencio como origen de la articulación antagónica de *tiempo de la palabra para la paz*.

> Hermanos y hermanas: Ha pasado ya el tiempo en que la guerra del poderoso habló, no dejemos que hable más. Es ya el tiempo de que hable la paz, la que merecemos y necesitamos todos, la paz con justicia y dignidad (...) Es esta la hora de los pueblos indios de todo México ("5 DSL", en La *Jornada*, 19-7-1998).

Esta declaración señala que es tiempo de que las discusiones sobre el estado de cosas en Chiapas trasciendan las limitaciones impuestas por el discurso del gobierno nacional y alejen del espacio discursivo a grupos armados estatales y paramilitares encargados de llevar a cabo una guerra de contrainsurgencia en contra de los zapatistas. El Congreso de la Unión y la Comisión de Concordia y Pacificación son interpelados con el fin de rearticular "la lucha por los derechos de los pueblos indios, como un paso a la democracia, la libertad y la justicia para todos" ("5 DSL", en *La Jornada*, 19-7-1998).

De esta manera es claro que el EZLN intenta situarse nuevamente dentro del eje en el cual la guerra contrainsurgente y el discurso hegemónico del Estado mexicano resultaban antagónicos con valores de democracia, igualdad y dignidad, banderas del discurso zapatista[8].

> Pero Acteal es también el símbolo de la lucha de dos esfuerzos: el del gobierno que busca que la desmemoria y la impunidad triunfen; y el de la sociedad civil que exige justicia verdadera y se niega a olvidar el peor crimen de los últimos 30 años. Y la lucha por la memoria y la justicia es la lucha por la paz digna. En esta lucha estamos ustedes y nosotros (EZLN, *La Jornada*, 8-1-1998).

---

[8] Ver Ortiz Pérez (2003), capítulo 4. En este capítulo se establece una relación directa entre el discurso zapatista de democracia, igualdad y dignidad y significados de paz con el discurso autoritario, desigual y poco confiable y los significados de guerra del gobierno mexicano encabezado por Ernesto Zedillo.

El zapatismo tiende a evolucionar hacia su nueva identidad de movimiento social abanderado de las causas que el Estado mexicano ha abandonado: particularmente la causa democrática y de justicia.

> Nosotros entendemos que la lucha por el lugar que merecemos y necesitamos en la gran nación mexicana, es sólo una parte de la gran lucha de todos por la democracia, la libertad y la justicia, pero es parte fundamental y necesaria ("5 DSL", en *La Jornada*, 19-7-1998).

Esta identidad democrática se expresa en el escenario de la sociedad civil articulando un discurso de resistencia en el que a la guerra no se le hace la guerra, sino que se ofrece una "resistencia digna y silenciosa". Silenciosa para el gobierno, y elocuente y verbal apara aquellos que sí respetan los valores de la democracia, la igualdad y la dignidad.

> Los zapatistas hicimos del silencio un arma de lucha que no conocía y contra la que nada pudo hacer, y contra nuestro silencio se estrellaron una y otra vez las punzantes mentiras, las balas, las bombas, los golpes. Así como después de los combates de enero de 1994 descubrimos en la palabra un arma, ahora lo hicimos con el silencio. Mientras el gobierno ofreció a todos la amenaza, la muerte y la destrucción, nosotros pudimos aprendernos y enseñarnos y enseñar otra forma de lucha, y que, con la razón, la verdad y la historia, se puede pelear y ganar... callando ("5 DSL", en *La Jornada*, 19-7-1998).

Adicionalmente, la articulación zapatista busca integrar los deseos y demandas por democracia de la sociedad civil como actor antagónico del gobierno mexicano. Esta estrategia ya había funcionado anteriormente para el EZLN[9]. En este caso, la misma estrategia discursiva es instrumentalizada: generar coincidencia entre los intereses de los miembros de la sociedad civil con el fin de que esta se acerque a los procesos de identificación del zapatismo y los haga propios.

> Vimos que a nuestro silencio se sumó la voluntad de gentes y personas buenas que (...) levantaron voz y fuerza organizada en contra de la mentira, y así parar se pudo la injusticia y la simulación que se pretendían como ley constitucional de derechos indios y no era mas que ley para la guerra ("5 DSL", en *La Jornada*, 19-7-1998).

Adicionalmente, y tomando prestado el argumento de Luis Hernández Navarro, la negativa de hablar del EZLN también coincide con la intentona del gobierno mexicano de restablecer los diálogos con el fin de "reabrir la negociación sobre los acuerdos para disminuir el alcance de las reformas".

---

[9] Aquí estoy haciendo referencia a la articulación discursiva de "Todos somos Marcos" que es emitida en el contexto de la denominada "Traición de febrero de 1995", en la que el bienestar del subcomandante Marcos y de la dirigencia zapatista se veía amenazado por las órdenes de captura lanzadas en su contra por el presidente Zedillo.

> Sin embargo, [Zedillo] nunca ha señalado con precisión qué puntos de la iniciativa de ley de la Cocopa provocan ese tipo de problemas y, mucho menos, ha demostrado la validez de sus afirmaciones. Mientras no lo haga existen razones fundadas para suponer que lo que verdaderamente pretende, más allá de sus palabras, *es reabrir la negociación sobre los acuerdos para disminuir el alcance de las reformas,* ignorando que tanto San Andrés como la iniciativa de la Cocopa fueron producto de negociaciones previas. No se trata de que los zapatistas pretendan el "todo o nada" sino que no pueden renegociar interminablemente los acuerdos. Estos ya se negociaron en dos ocasiones (Luis Hernández Navarro, "El impasse", *La Jornada*, 3-3-1998).

Finalmente el espacio discursivo del nuevo zapatismo se cierra con la transición posible del zapatismo local al global. En esta transición, tiene lugar con el fin de expandir el espacio de acción del otro y con la posibilidad de que la identificación recíproca zapatismo-sociedad civil supere las fronteras territoriales mexicanas. Esta asociación con la sociedad civil internacional es vital para la obtención de la legitimidad que permitió caracterizar al EZLN como un grupo rebelde con fines pacíficos en la arena internacional, aun después de la ruptura de los diálogos con el gobierno mexicano.

> La sociedad civil nacional ha sido el factor fundamental para que las justas demandas de los zapatistas y de los indígenas de todo el país continúen por el camino de las movilizaciones pacíficas. La sociedad civil internacional ha sido sensible y ha tenido oídos y ojos atentos para que la respuesta a las exigencias no sean más muertes o prisiones. Las organizaciones políticas y sociales independientes nos han aceptado como hermanos y así nuestra resistencia se llenó de aliento. Todos no han ayudado para resistir a la guerra, nadie para hacerla ("5 DSL", en *La Jornada*, 19-7-1998).

La "5 DSL" concluye[10] con una propuesta de movilización para la sociedad civil: una invitación a una consulta ciudadana que tiene como fin el hacer conocer a los simpatizantes zapatistas la iniciativa de Ley Indígena propuesta por la administración Zedillo por medio de la Cocopa, y saber su opinión sobre la "guerra de exterminio" llevada a cabo por el Estado mexicano[11].

---

[10] Ver Ortiz Pérez (2003), capítulo 2, "Radical Dissent and Revolutionary Discourses", en el que se analiza la estructura argumentativa y de forma de las cuatro primeras declaraciones de la selva Lacandona, estableciendo patrones de similitud y de diferencia. Es importante resaltar que toda DSL siempre termina solicitando el apoyo de la sociedad civil para llevar a cabo algún recurso de movilización social. La 1 DSL pide movilización para unirse al EZLN; la 2 DSL solicita apoyo para la realización de la Convención Nacional Democrática en agosto de 1994; la 3 DSL pide la organización de un gobierno de transición en el que los miembros de la CND restablezcan los valores democráticos perdidos en 1995; la 4 DSL convoca a la creación del Frente Zapatista de Liberación Nacional en 1996.

[11] Preguntas incluidas en la consulta: Pregunta 1. ¿Estás de acuerdo en que los pueblos indígenas deben ser incluidos con toda su fuerza y riqueza en el proyecto nacional y tomar parte activa en la construcción de un México nuevo? Pregunta 2. ¿Estás de acuerdo en que los derechos indígenas deben ser reconocidos en la Constitución mexicana conforme a los Acuerdos de San Andrés y a la propuesta correspondiente de la

La ley indígena, que no había sido revisada por el EZLN, fue enviada por el presidente Zedillo al Senado de la República en marzo de 1998, asegurando que:

> La propuesta cumple con los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en lo que se refiere a la creación de "un nuevo marco jurídico nacional para los pueblos indígenas", que se apoya en la iniciativa elaborada por la Cocopa y se incluyen las "reservas" que el gobierno federal le hizo a esta última en "cuatro observaciones" para prevenir "confusión, interpretaciones inadecuadas o contrarias a la unidad de los mexicanos" (*La Jornada*, 16-3-1998).

En adelante se convocan y realizan encuentros entre el EZLN y la sociedad civil en San Cristóbal de Las Casas del 20 al 22 de noviembre de 1998, y la convocatoria para el II Encuentro Americano por la Humanidad y en contra del Neoliberalismo en Brasil para finales de 1999. Y es que el proceso que sigue de la construcción de un discurso de sociedad civil y zapatismo es el de edificación de nuevos espacios de diálogo ya que la confianza ha sido reanudada y los lazos fortalecidos. Es por eso que el EZLN tomará la iniciativa de salir de la selva Lacandona y los Altos de Chiapas para verificar si su fortaleza es capaz de enfrentar a la nueva administración presidencial no priista en el poder.

1999-2001: política abierta. La estrategia final

> Los zapatistas hemos tendido un puente con otras organizaciones sociales y políticas, y con miles de personas sin partido, de todas hemos recibido respeto y a todas hemos correspondido. Además hemos, junto a otros, tendidos puentes a todo el mundo y hemos contribuido a crear (al lado de hombres y mujeres de los 5 continentes) una gran red que lucha por medios pacíficos en contra del neoliberalismo y resiste luchando por un mundo nuevo y mejor. También hemos contribuido en algo en el nacimiento de un movimiento cultural nuevo y fresco que lucha por un hombre y un mundo nuevos ("5 DSL", en *La Jornada*, 19-7-98).

En esta etapa narrativa final quiero argumentar que la salida del EZLN de Chiapas y la Marcha hacia la Ciudad de México de finales de 2000 a principios de 2001 es la parte culminante de una estrategia fortalecida de discurso subalterno que posiciona al zapatismo como movimiento social capaz de explotar estrategias políticas cuasiinstitucionales con el fin de posicionar, en el centro de la agenda nacional e internacional, su resistencia, su lucha y las razones de ésta.

Durante 1999 y el 2000, el EZLN continúa aprovechando discursivamente los espacios de comunicación establecidos dentro de la sociedad civil para

---

Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión? Pregunta 3. ¿Estás de acuerdo en que debemos alcanzar la paz verdadera por la vía del diálogo, desmilitarizando el país con el regreso de los soldados a sus cuarteles como lo establecen la Constitución y las leyes? Pregunta 4. ¿Estás de acuerdo en que el pueblo debe organizarse y exigir al gobierno que "mande obedeciendo"' en todos los aspectos de la vida nacional? (EZLN, *La Jornada*, 11-12-1998).

emitir opiniones y participar en luchas de los actores sociales. La huelga estudiantil de la UNAM, en 1999, defensa de los derechos humanos en causas de Amnistía Internacional, denuncia de los escándalos financieros de la banca nacional, caso Fobaproa, la defensa del patrimonio cultural, diálogos con intelectuales como Alberto Gironella o Carlos Monsivais, a los periodistas de *La Jornada*, a y "lesbianas, homosexuales, transgénicos y travestis" (subcomandante Marcos, 2000).

Sin embargo es muy claro para finales de 1999 que es necesario llevar el diálogo con la sociedad civil hacia una dimensión de compromiso político superior. Una dimensión discursiva además en la que las palabras para la paz se conviertan en soluciones para la problemática de Chiapas. La coyuntura de la elección de Vicente Fox es particularmente buena para que el EZLN pueda planear un desarrollo discursivo novedoso en un contexto en el que la transición democrática que deja al régimen político del PRI atrás favorezca condiciones de diálogo posible entre el zapatismo y el nuevo "Estado" mexicano.

Marcos llamará la nueva estrategia discursiva una "política abierta", en la que tres años de violencia armada paramilitar, de propaganda en los medios, de amenazas militares y de ausencia de diálogo han sido contrarrestados con solidaridad entre rebeldes y sociedad civil, además de la movilización social que el zapatismo convoca. Lo que busca esta política abierta es "organizar a los ciudadanos y demandar del poder atención y gobierno" (*La Jornada*, 3-12-2000).

El zapatismo decide entonces volver a considerar al gobierno mexicano objeto de articulaciones discursivas. Tiene además mucho que ver con aprovechar la necesidad del gobierno mexicano por reanudar los diálogos con el EZLN, ya que sobre la administración Fox pesan las preguntas sobre Chiapas. El conflicto en Chiapas ha sido tema obligado en todas las reuniones que Fox ha celebrado con los jefes de Estado y de gobierno de los países de Europa que ha visitado durante su gira previa a su toma de posesión en diciembre de 2000 (ver *La Jornada*, 6-10-2000).

En palabras de Vicente Fox:

> Todo está listo para solucionar el conflicto, sólo estamos esperando que el Ejército Zapatista reaccione a nuestras propuestas y se decida a iniciar el diálogo con nosotros; les aseguro que no habrá un solo tema que no estemos dispuestos a discutir, a efecto de que el problema se solucione satisfactoriamente para todos. Como ya he mencionado, estamos dispuestos a hacer todo lo que se necesite para solucionar el problema (*La Jornada*, 6-10-2000).

El gobierno de Fox hizo avances significativos por distinguirse de las articulaciones discursivas y prácticas políticas de sus antecesores, intentando continuar los diálogos. Señales como la amnistía a militantes presos o el retiro de tropas del ejército mexicano son elocuentes. Esta serie de actitudes no son a

las que el EZLN está habituado, y sin embargo la reacción del zapatismo a ellas es positiva.

Así es como en el mes de diciembre de 2000 el subcomandante Marcos propone la marcha zapatista a Ciudad de México.

> ... a casi siete años del levantamiento zapatista, en enero de 1994, ha tomado la decisión de salir de Chiapas para hacer "política abierta", con el fin de "organizar a los ciudadanos y demandar del poder atención y gobierno" (*La Jornada*, 2-12-2000).

Marcos explica que la marcha arranca con el viaje que él y 23 miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional harán a Ciudad de México en febrero de 2001, para "convencer al Congreso de la Unión de las bondades de la propuesta de iniciativa de ley elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) en noviembre de 1996".

Se vislumbra de esta manera la posibilidad que el EZLN encuentra para enunciar su discurso de resistencia dentro de márgenes de actuación política cuasiinstitucional.

> El objetivo del EZLN es no sólo conseguir que se reconozcan los derechos indígenas, terminar la guerra y alcanzar la paz, sino salir a hacer política como cualquier otro grupo, pero no como partido político, porque no nos planteamos la toma del poder, aunque sí como una organización política (*La Jornada*, 2-12-2000).

Aquí es donde el papel de la sociedad civil se vuelve fundamental. Y es que, a diferencia de los partidos políticos, el EZLN nunca ha deseado ser una fuerza política que controle el poder público. El zapatismo es una identidad y una ideología que busca cambiar la forma como se concibe el espacio público desde la sociedad civil y busca cambiar los comportamientos políticos desde esa trinchera discursiva, y no desde el sistema político tradicional.

> No estamos pensando en candidaturas, pero sí en hacer política abiertamente. El problema ahora es –enfatizó– si vamos a seguir así como estamos, con el pasamontañas y con las armas o vamos a hacer una oposición abierta (*La Jornada*, 2-12-2000).

Marcos insistió en que los 24 miembros del CCRI, incluido él, viajaran a Ciudad de México para hablar con el Congreso de la Unión. La finalidad del viaje es resaltar la importancia que tiene para la identidad zapatista y su ideología la Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas, enfatizando en que al reconocer la diferencia étnica cultural de México no se pone en riesgo la soberanía nacional. Además, argumenta Marcos: "el país (...) necesita esa ley porque resuelve no sólo la demanda de los pueblos indígenas, sino también daría un gran paso para el proceso de paz y la desaparición de la guerra en Chiapas" (*La Jornada*, 2-12-2000).

La marcha de los 24 oficiales de alto rango del Ejército Zapatista de Liberación Nacional –entre ellos, el subcomandante Marcos– se inicia en marzo de 2001, partiendo desde su refugio en la selva chiapaneca hasta la capital. Los objetivos eran por una parte golpear fuertemente al nuevo gobierno en el poder, tratando de probar su resistencia a la presión zapatista y su *real* voluntad de cambio, y por otra llevar a la nueva administración foxista a honrar los acuerdos firmados con el EZLN cinco años antes.

De esta forma, la máquina de imagen zapatista va pasando por numerosas ciudades medias en el trayecto hacia Ciudad de México D.F., sorprendiendo a los espectadores del nuevo zapatismo por razones que no son evidentes a simple vista. La manifestación política de los más marginados y excluidos refleja indiscutiblemente la estructura social y económica de América Latina, donde las divisiones entre diferentes clases y grupos culturales son irreconciliables si no se revalúan nociones tales como las de ciudadanía, derechos individuales, derechos comunitarios, de grupo, el derecho a la diferencia y a la libre determinación.

El EZLN es entonces un espejo donde se refleja la conjunción, a mi parecer exitosa, entre demandas de tipo cultural y étnico de los indígenas, con reclamos por mayor equidad y justicia en lo económico y lo político propios del pobre, el marginado, el excluido del sistema. La marcha y la visita del EZLN a Ciudad de México tuvieron entonces la finalidad de reiterar que los "de afuera" quieren estar "adentro", que tienen suficiente apoyo popular para lograrlo –como prueban los más de veinte mítines sostenidos durante la "Marcha por la Dignidad".

Al analizar el discurso zapatista enunciado durante los mítines de apertura y cierre de la marcha a Ciudad de México, con el fin de ilustrar la articulación sólida de discurso, ideología e identidad zapatistas, debemos hacer referencia a dos conceptos que recurrentemente han aparecido como pilares de las formaciones discursivas del zapatismo desde sus inicios: la noción de la dignidad y la del "espejo del presente reflejando la historia viva de México"[12].

> Dignidad es el nombre de esa flor primera que mucho debe caminar para que la semilla encuentre el corazón de todos y en la gran tierra de todos los colores se nazca por fin ese mundo que todos llaman mañana (EZLN, 24-2-2001).

Por un lado, la dignidad es un recordatorio del pasado, de los pueblos originarios de la identidad mexicana; por el otro, la dignidad es un símbolo que justifica la lucha zapatista y las acciones presentes del EZLN. Esta noción de dignidad es además politizada por el discurso zapatista y se convierte en la motivación que articula lo indígena con las aspiraciones de la sociedad civil

[12] La elección de ambos textos corresponde principalmente a razones analíticas. Los conceptos a los que hago referencia pueden ser encontrados en cualquiera de los discursos zapatistas desde 1994 hasta la fecha.

mexicana: "Los indígenas mexicanos somos indígenas y somos mexicanos. Queremos ser indígenas y ser mexicanos (...) la nuestra es la marcha de la dignidad indígena (...) la marcha del color de la tierra" (EZLN, 24-2-2001).

Ahora, parece que tras la elección de Vicente Fox como presidente de México, tras ganar elecciones transparentes y legítimas, y derrotar al candidato del PRI, el reclamo zapatista por la democracia encontraría descanso. Pero no es así, la articulación de los conceptos de dignidad y de espejo reproducen un argumento que es aún más complejo. Y es que, si bien la demanda por democracia de los zapatistas en algún momento de su lucha fue una demanda por el respeto de la democracia electoral, el EZLN siempre toma en consideración que expresiones reales de democracia implican igualdad en la participación de todo ciudadano y la equidad en el acceso a espacios, tribunas y asientos para todo grupo político en el país. Democracia popular e inclusión es lo que demandan los zapatistas:

> ¡Ya basta! Dice y repite la voz más primera, los indígenas que somos del color de la tierra. Un lugar queremos. Un lugar necesitamos. Un lugar merecemos nosotros que somos del color de la tierra. Un lugar digno para ser lo que nosotros somos, el color de la tierra (EZLN, 24-2-2001).

Adicionalmente, las contradicciones a la identidad indígena y no indígena de México son expresadas claramente en el discurso zapatista de política abierta:

> Hermano, hermana indígena. Hermano, hermana no indígena. Aquí estamos para decir que estamos. Y cuando decimos "aquí estamos", también al otro nombramos. Hermano, hermana que eres mexicano y que no lo eres. Contigo decimos "aquí estamos". Hermano, hermana indígena, y no indígena: un espejo somos (EZLN, 21-3-2001).

El valor que tiene el traer el pasado de una nación poscolonial y colocarlo en el centro del escenario político es resaltado por el contraste que genera una enunciación de este tipo para la discusión en espacios de toma de decisiones. Así el establecimiento de lazos entre el pasado de lucha y de rebeldía hace las veces del espejo en el que los miembros del EZLN se reflejan sin miedo y que reúne en una serie de contingencias históricas que justifican el legítimo y consecuente curso de acción del EZLN de 1994 a la fecha.

> Es hora de que el Fox y a quien sirve escuche y nos escuche. Es la hora de que el Fox y quien lo manda nos vea. Una sola cosa habla nuestra palabra. Una sola cosa mira nuestra mirada. El reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígenas. Un lugar digno para el color de la tierra (EZLN, 21-3-2001).

El zapatismo se sitúa, por medio de esta función de espejo, como punto de referencia histórica del régimen político en turno. La legitimidad otorgada por su herencia histórica, explica las razones por las cuales el zapatismo exige que se incluya dentro del México presente a su pasado rebelde y a los hombres que lucharon por forjar el México actual, la sociedad civil.

> Cuando decimos que somos, también decimos que no somos y no seremos... No somos quienes aspiran a hacerse del poder, y desde él imponer el paso y la palabra... No somos el arrepentido mañana, el que se convierte en imagen aún más grotesca del poder, el que simula sensatez y prudencia donde no hubo sino compra-venta. No seremos (EZLN, 21-3-2001).

La conclusión a la que quiero llegar en esta sección puede resumirse con esta pregunta: ¿Quiénes son los ganadores y perdedores de la marcha?, ¿Qué propósito tiene el silencio cuando él mismo ha fortalecido la voz del EZLN?

Conclusión y victoria

Al abrirse paso la alternancia política en el poder presidencial en México, el EZLN perdió la acérrima crítica al PRI y a su autoritarismo como punto de referencia discursivo. No obstante en 2001 se consolida nuevamente la fuerza del EZLN. En su momento, el movimiento zapatista inscrito dentro de la atmósfera de la transición y beligerancia se colocaba en la vanguardia de la posibilidad de articular discursos que propusieran tránsitos hacia una democracia más tolerante de la diferencia étnica en particular, argumentando todo esto desde espacios de diálogo de la sociedad civil.

Sin embargo, debido a la incapacidad del gobierno para estructurar una nueva noción de país posible, al constatar que el gobierno de Fox representa el mismo formato de Estado mexicano con diferente ideología política pero con la misma opinión sobre la desobediencia civil y las actividades políticas de grupos indígenas, se esfuma la posibilidad de crear espacios de diálogo en los que las diferencias entre el EZLN y el Estado mexicano se subsanen.

En ese terreno podría suponerse que la influencia que ejerce el EZLN se diluye y deja de tener proyección en la vida política, corriendo el riesgo de convertirse en una "anécdota folk", siguiendo el destino de la CND y el Congreso Nacional Indígena, dos iniciativas que se cerraron después de haberse convertido en cascarones.

Privilegiar a la sociedad civil como interlocutor y como subjetividad de la alteridad zapatista resalta la existencia de una esfera política alternativa, contrahegemónica suficientemente poderosa como para generar espacios de diálogo e intercambio político dentro de los cuales el gobierno mexicano y su discurso hegemónico no son necesarios. En otras palabras, los movimientos sociales han sido obligados a dejar de dialogar con aquellas esferas que los rechazan por motivos ideológicos y políticos, y se enfrentan a una vida al margen de la ley donde las batallas son ganadas en esferas contrahegemónicas y estas esferas se fortalecen cada vez más.

Bibliografía

Castells, Manuel (1998): "El poder de la identidad" en *La era de la información. Economía sociedad y cultura*, vol. 2, Madrid, Paidós.

EZLN (1994): *Documentos y comunicados*, vol. 1, México, Ediciones Era.

_____ (1995): *Documentos y comunicados*, vol. 2, México, Ediciones Era.

_____ (1997): *Documentos y comunicados*, vol. 3, México, Ediciones Era.

Hischman, Albert (1997): *Salida, voz y lealtad*, México, FCE.

Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe (2000): "Preface to the Second Edition" en *Hegemony and Socialist Strategy*, Londres, Verso.

_____ (1985): *Hegemony and Socialist Strategy*, Londres, Verso.

Laclau, Ernesto (1996): "Why do Empty Signifiers Matter to Politics" en *Emancipation(s)*, Londres, Verso.

La marcha del color de la tierra (2001): Del 2-12-2000 a 2-4-2001, México, Rizoma.

Mouffe, Chantal (1993): *The Return of the Political*, Londres, Verso.

_____ (2000): *The Democratic Paradox*, Londres, Verso.

Ortiz Pérez, Luisa (2003): *Challenging Discursive Hegemony in Mexican Contemporary Politics. The EZLN (1994-1996)*, PhD Thesis, University of Essex.

Stephen, Lynn (2002): *Zapata Lives! Histories and Cultural Politics in Southern Mexico*, Berkeley, University of California Press.

Subcomandante Marcos (1999): *Desde las montañas del sureste mexicano*, México, Plaza y Janés.

Subcomandante Marcos (2000): *Detrás de nosotros estamos ustedes*, México, Plaza y Janés.

Otras Fuentes

Diario *La Jornada*, México (1997-2001).

Semanario *Proceso*, México (1997-2001).

http://www.ezln.org.

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2004, vol. 10, n° 1, (ener.-abr.), pp. 129-153

PROTESTA POPULAR Y COOPTACIÓN DE MASAS EN GUATEMALA

Carlos Figueroa Ibarra

I. Introducción

En diciembre de 1996, en el momento de firmarse el último de los acuerdos de paz entre la insurgencia y el gobierno guatemalteco, muy pocos fueron optimistas en relación con las dificultades que atravesaría el proceso que se iniciaba con el fin de las hostilidades. Los acuerdos fueron un proyecto de país que buscaba salir de años de conflicto social y político. Pese a la conciencia de muchos con respecto a los avatares que habría de atravesarse para que estos acuerdos se volvieran realidad efectiva, en aquel momento, los últimos años del siglo XX, dichos acuerdos significaron una esperanza. Hoy esta esperanza se encuentra maltrecha y los viejos conflictos perviven y se entrelazan con los nuevos.

En este trabajo se intentará hacer un esbozo de dos de los rasgos más sobresalientes de la relación Estado-masas en dicho país. Por un lado la naciente protesta popular, que tiene en el ascenso de las luchas campesinas acaso su rasgo más relevante. Por otro lado, las pretensiones de un partido populista de derecha –que ha hecho gobierno en los últimos años–, de cooptar a buena parte del mundo rural a través de las redes que tejió la contrainsurgencia en los años de la guerra sucia. El contexto en el cual se dan estos dos últimos hechos es la incipiente rearticulación del movimiento popular después de ser desarticulado en los años del terror. Este último tiene presencia no solamente como un horror del pasado, sino como una creciente realidad actual.

2. Auge y declive de los movimientos de masas (1970-1980)

A lo largo de casi toda la segunda mitad del siglo XX, los regímenes dictatoriales no resolvieron nunca lo que era su principal debilidad: su ausencia esencial de hegemonía en el seno de la sociedad guatemalteca. Cierto es que no hay dictadura por aislada que esté que no tenga sus asideros de consenso en algunos sectores sociales. Las dictaduras militares guatemaltecas no fueron la excepción pero lo que verdaderamente las marcó fue la existencia de significativas porciones de la sociedad que se le rebelaron. La razón es fácil de encontrar: nacidas en el contexto de la naciente Guerra Fría y del golpe contrarrevolucionario que derrocó al presidente Arbenz en 1954, dichas dictaduras hicieron de la ideología de la seguridad nacional y del anticomunismo el rasgo ideológico

que las vertebró. Unidas por una secular cultura política sustentada en el terror con el anticomunismo de la segunda posguerra, su noción de comunismo fue lo suficientemente extensa, como para convertir a una parte muy importante del espectro político en el enemigo a vencer.

Los efectos de lo anterior se hicieron ver en el seno del Estado y de la clase dominante guatemalteca: un afianzado hábito expoliativo con respecto a la masa trabajadora, la identificación de cualquier medida agraria de carácter redistributivo con el comunismo, la persecución violenta de la izquierda revolucionaria, la exclusión de la legalidad de las fuerzas reformistas y en términos generales el predominio de una cultura política asentada en el terror. El terror fue mecanismo esencial de la reproducción estatal en Guatemala durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX. En esas circunstancias resultó difícil que una política de agregación de masas desde y para el Estado fuera exitosa. Más bien la historia de la segunda mitad del siglo XX en Guatemala es la de una confrontación de una dictadura crecientemente terrorista con una sociedad civil con tendencias a la insubordinación. He aquí la causa primordial de un Estado poderoso en el uso de la fuerza, pero débil e inestable en el terreno político (Figueroa, 1991, 117).

En la década de los 70, la sociedad guatemalteca había observado un relativo proceso de industrialización merced al mercado común centroamericano, por ende un relativo crecimiento de la clase obrera industrial. Al mismo tiempo el eje fundamental de la acumulación capitalista seguía siendo la agroexportación principalmente asentada en el café (IIES/USAC, 1980). Se constituyó lo que algún analista llamó el modelo híbrido de acumulación capitalista: un polo industrial dirigido al mercado centroamericano y otro más de carácter agrícola dirigido a los mercados centrales (Bulmer, 1990). La exclusión de una enorme masa campesina con respecto a la tierra ya era la que hoy se sigue observando: 2% de las grandes unidades agrarias controlaban casi dos terceras partes de la superficie cultivable del país. Los bajos salarios en el campo también se observaban en la ciudad.

Dos coyunturas agravaron estos hechos de carácter estructural: el primero lo constituyeron los efectos inflacionarios de la crisis petrolera mundial de 1972 y 1973; el segundo, las consecuencias sociales del terremoto de 1976 que mató a 27.000 personas y agravó más la situación de masas de trabajadores y campesinos.

A lo largo de los siete años comprendidos entre 1973 y 1980 –comenzando con la huelga magisterial de este último año–, la sociedad guatemalteca presenció un ascenso notable de la protesta popular. Se observaron movilizaciones, paros y huelgas obreras (industriales y agrícolas) algunas de las cuales tuvieron una proyección nacional. Tal fue el caso de la gran marcha de los mineros de Ixtahuacán en diciembre de 1977 y la huelga de los obreros agrícolas en la mayoría de las plantaciones agroexportadoras de la costa sur en 1980. A diferencia de lo que sucedió en los años anteriores, cuando las clases medias urbanas

fueron protagonistas de la resistencia antidictatorial, en la década de los 70 la clase obrera y particularmente la urbana fue el eje de la protesta popular.

Tabla 1

Huelgas y paros en el sector industrial (1966-1978)

	Huelgas y paros	Obreros en huelga	Días no trabajados
Gobierno de Julio César Méndez Montenegro (1966-1970)	51	41.689	441.200
Gobiernò de Carlos Arana Osorio (1970-1974)	74	71.605	887.500
Gobierno de Kjell Laugerud (1974-1978)	119	102.364	1.213.600

Fuente: *Bulletin of Labour Statistics* (1972-1978). Departament of Labour, Washington DC

La tabla 1 nos muestra la anterior aseveración. El movimiento obrero observó un notable ascenso a partir de 1970. El número de huelguistas o paristas en el período de 1974-1978 casi triplicó el observado en el período de 1966-1970. Mientras que el mismo número de huelguistas o paristas se elevó en más de cuatro veces en relación con el número observado en el primer período mencionado. Lo mismo puede decirse con respecto al número de días no trabajados: en los ocho años posteriores al período de 1966-1970, el número de días no trabajados casi se quintuplicó.

En un contexto centroamericano que avanzaba hacia el estallido revolucionario de fines de los años 70, el crecimiento organizativo de la protesta popular también es insoslayable. A la central sindical clasista más antigua, la Federación Autónoma Sindical de Guatemala (Fasgua), se agregaron la Central Nacional de Trabajadores (CNT) que se desvinculó de la influencia socialcristiana. Junto a la Federación de Trabajadores de Guatemala (FTG), estas tres centrales cumplirían un papel decisivo en las luchas sociales del período. El surgimiento de un organismo que aglutinó a estas centrales y a diversas organizaciones sindicales y sociales, el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), se vio complementado con la organización de los empleados bancarios, de los trabajadores del Estado, de los estudiantes de educación media y universitaria, y finalmente con el surgimiento del Comité de Unidad Campesina, que habría de cumplir un papel notable no solamente en la huelga de obreros agrícolas de 1980, sino también como base de apoyo a la insurgencia armada que se desplegó a finales de la década.

La tabla 2 nos da una idea del auge de masas que precedió al estallido revolucionario en Guatemala.

Tabla 2

Protesta popular en Guatemala (1973-1980)

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	Total
Movilizaciones, paros, huelgas obreras, industriales y agrícolas.	-	-	-	6	6	8	3	7	**30**
Movilizaciones campesinas, tomas de tierra.	1	-	-	1	2	2	4	1	**11**
Movimientos estudiantiles, universitarios y de educación media.	-	-	-	-	7	7	2	1	**17**
Movimientos vecinales, pobladores	-	-	1	-	2	3	2	-	**8**
Marchas callejeras importantes.	1	1	-	-	3	5	6	1	**17**
Movimientos, paros, huelgas de trabajadores del Estado.	1	-	1	1	9	11	-	3	**26**
Manifestaciones populares de alcance nacional.	1	1	-	1	3	2	2	1	**11**
Huelgas, paros de trabajadores bancarios y comerciales.	-	-	-	-	1	2	1	2	**6**
Total	**4**	**2**	**2**	**9**	**33**	**40**	**20**	**16**	**126**

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID). *Democracia y movimientos sociales: Estados y sectores subaltemos. 1954-1978. Noticias de Guatemala*, números 1-36, publicadas por el Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala, México, D. F., 1976-1979.

La anterior tabla nos ilustra con respecto a las principales características de las luchas sociales de la década de los 70. Puede también observarse la composición de las luchas sociales sumando las huelgas, paros de los obreros industriales y agrícolas, trabajadores bancarios y comerciales, así como trabajadores del Estado, aproximadamente 50% de todas las protestas en los siete años incluidos en la tabla. A diferencia de lo que sucederá en los albores del siglo XXI, la protesta campesina, expresada en movilizaciones y tomas de tierras, solamente sumó aproximadamente 9% de las luchas sociales. En lo que se refiere a la cronología de dichas luchas podemos observar el salto que éstas dan entre 1976 y 1977. Puede observarse que, entre uno y otro año, huelgas, paros, marchas, movilizaciones casi se cuadruplicaron. He aquí una muestra cuantitativa del aumento de la combatividad y organización popular después del terremoto de 1976. También es de hacer notar el drástico descenso que las luchas reivindicativas tuvieron después de 1978: en 1979 descendieron en 50%, para seguir descendiendo en 1980 en 20% en relación con el año anterior.

La razón de ello estriba en el drástico aumento de la represión a partir de las grandes movilizaciones de protesta popular observadas en octubre de 1978. En ese mes se observó la gran cúspide de la protesta popular de la década de los 70. Todo el tejido organizativo construido en los años anteriores se volcó a las calles de la capital para protestar contra la medida gubernamental de elevar el precio del transporte urbano. Los enfrentamientos callejeros, marchas, mítines, paros y huelgas paralizaron casi por completo al Estado, redujeron en 50% el tiempo normal de trabajo en 70% de las industrias y en 100% de la banca y aseguradoras (NG, 10/78). En aquel momento, Nicaragua observaba ya la crisis nacional general que culminaría con el derrocamiento de Somoza en julio de 1979, mientras en El Salvador también había una creciente explosividad social. Después de varios años de una relativa declinación de la represión estatal, se inició la tercera gran ola de terror estatal[1].

La represión a la rebelión urbana de octubre de 1978 implicó 30 muertos, 400 heridos y 800 detenidos. El terror estatal inició su ascenso. Medido en términos de muertos y desaparecidos se incrementó en 56% entre 1978 y 1979, para incrementarse aún más entre 1979 y 1980 (65%) y entre 1980 y 1981 (51%). El primer paso fue el asesinato o desaparición forzada de dirigentes y activistas populares, principalmente en los cascos urbanos (1978-1980). Un segundo paso fue la acentuación del carácter masivo del terror, con miras a destruir el movimiento revolucionario armado (1980-1981); y un tercero, a partir del arribo de Efraín Ríos Montt al poder en marzo de 1982, que consistió en la política de tierra arrasada. En 17 meses, el terror estatal asesinó y desapareció a 16.000 personas, obligó al refugio en México a 90.000 más, y desplazó internamente a casi un millón (Figueroa, 1991, caps. III y IV)). La primera fase arrasó con casi todo el tejido organizativo urbano. Las otras dos devastaron la resistencia reivindicativa en las áreas rurales.

Sin embargo, hay que hacer notar que a partir de marzo de 1982, cuando Ríos Montt llegó a la presidencia de facto, la contrainsurgencia dio un giro notable. Conviene que nos detengamos en este punto, debido a que en este trabajo nos ocupamos de las posibilidades que ha tenido en Guatemala la cooptación de masas por parte del Estado. Durante los 17 meses de gobierno de Ríos Montt (1982-1983), el genocidio en campos y ciudades fue acompañado de un discurso reformista y del enfrentamiento con la cúspide de la clase dominante guatemalteca. En ese sentido, Ríos Montt daba continuidad a la doctrina de seguridad nacional a la vez que rompía con la intransigencia del tradicional oscurantismo reaccionario. El discurso contrainsurgente tuvo aristas antioligárquicas: la guerra contra el comunismo tenía que ser una en la que los fusiles se combinaran con los frijoles. La guerra también tenía que ser contra "la explotación, el hambre, la ignorancia, la enfermedad y fundamentalmente contra la injusticia". El capital tenía que sacrificarse: "no gane ese 20% sobre sus ventas,

---

[1] Las otras dos se observaron en 1954 y en 1967-1971. La tercera se inició en 1978 y no terminaría sino hasta 1984 (Figueroa, 1991, cap. II).

este año confórmese con ganar un 10%, sea inteligente, arriésguese a ganar menos, pero juntos combatamos a la miseria nacional". El principio de la ruptura con la tradicional intransigencia anticomunista era sencillo: "una persona que tiene hambre es un buen comunista; una persona que tiene mucho que comer es un buen anticomunista" (Figueroa Ibarra, 1991, 186, 204, 232).

Pareciera que el gobierno de Ríos Montt recordara lo planteado por Maquiavelo de que el príncipe debería ser como un centauro, mitad bestia mitad humano. El proyecto de Ríos Montt contempló el uso despiadado de la violencia combinado con medidas que expandieran al Estado en el seno de la sociedad civil. En lo que se refiere a esto último, al discurso populista hay que agregar el fustigamiento del régimen a la clase política tradicional y el plan de fundar un partido político de masas[2]. Pero también se ensayó la fundación de una central sindical de carácter oficial que afirmaba tener 95.000 afiliados, el uso del protestantismo reaccionario a través de las sectas fundamentalistas y finalmente lo que resultaría ser un arma de carácter estratégico: las Patrullas de Autodefensa Civil, después llamadas Comités Voluntarios de Autodefensa Civil, pero que hoy continúan siendo denominadas PAC (Ibíd., 179-186)[3].

El derrocamiento de Ríos Montt en agosto de 1983 postergó todos estos planes. Éstos habrían de retomarse a partir de 2000, cuando el partido encabezado por el propio Ríos Montt colocó a Alfonso Portillo en la Presidencia de la República.

3. La protesta popular en los años de la posguerra

El fin del conflicto interno en Guatemala dejó a una sociedad desgarrada: un saldo de 150.000 a 160.000 muertos y de 40.000 a 45.000 desaparecidos entre 1960 y 1996, según muestran las estimaciones convencionales. Éstas colocan a Guatemala en el pináculo de la ignominia en la América Latina del siglo XX[4]. Dichas cifras explican en gran medida el reflujo de las luchas sociales en Guatemala durante los últimos lustros del siglo XX. Pasarían muchos años antes de que el movimiento popular guatemalteco se recuperara de la sangría y mutilación que le significó el auge del terror que provocó la guerra revolucionaria popular. Mientras las organizaciones populares y las luchas sociales descendían significativamente merced a la represión, las acciones mili-

---

[2] Ese partido habría de fundarse ya habiendo sido derrocado Ríos Montt. Hoy el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) es el partido de gobierno y tiene gran expansión en el seno de la sociedad civil.

[3] En páginas posteriores nos referiremos a las Patrullas de Autodefensa Civil.

[4] Las dos fuentes más autorizadas para las estimaciones de la violencia política en Guatemala son: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag), *Guatemala Nunca Más* (4 volúmenes), Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, Guatemala, 1998 y Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), *Guatemala Memoria del Silencio* (12 volúmenes), Guatemala, junio de 1999.

tares desarrolladas por el movimiento revolucionario observaban un ascenso notable. Un recuento de sabotajes, ajusticiamientos, ocupaciones militares, emboscadas, combates con el ejército y operativos de propaganda de la insurgencia nos muestra que tales acciones militares crecerían en 342% en 1979 y 86% más entre 1980 y 1981 (Figueroa, 1991, 143). A la escalada de acciones revolucionarias le acompañaba un incremento de las acciones de terror selectivo y masivo por parte del Estado.

Entre 1982 y 1983 no quedaba mucho de la red de organizaciones sindicales, campesinas y populares que se habían convertido en las protagonistas de la vida política en la década anterior. No obstante ello, hubo destellos de protesta popular que resultan significativos si recordamos que se daba en un contexto fuertemente represivo: la huelga de los trabajadores municipales de 1982 (Castañeda, 1993, 278), el amplio y explosivo movimiento contra el alza del transporte urbano de septiembre de 1985, la huelga de miles de trabajadores del Estado en 1987 (Figueroa, 1999b, 133, 136) y la gran huelga de cortadores de caña en 1989 (Bastos y Camus, 2003, 31). Durante todos estos años se observó en Guatemala una suerte de democracia restringida. En enero de 1986 asumió nuevamente la presidencia de Guatemala un civil, Vinicio Cerezo, y la democracia cristiana llegó a ser partido de gobierno después de años de oposición y en momentos hasta de persecución. Un examen de la situación de los derechos humanos durante los primeros gobiernos civiles nos indica que, aun cuando se hablara de democracia por el retorno al gobierno de los civiles, el terror seguía siendo la mediación esencial entre Estado y sociedad.

Las cifras de desaparecidos muestran que durante el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1990) alcanzaron en algunos años dimensiones parecidas a las del gobierno del general Carlos Arana Osorio (1970-1974) y son superiores al del período del general Kjell Laugerud (1974-1978). Durante el gobierno de la democracia cristiana, la desaparición forzada tuvo repuntes significativos en 1987 y 1988. En iguales términos puede hablarse del gobierno de Jorge Serrano Elías (1990-1993), cuyo primer año con 147 casos de desaparición forzada es más elevado que cualquiera de los años de gobierno del general Laugerud (Figueroa, 1999a, 126).

El arribo de los llamados gobiernos civiles a partir del gobierno de Cerezo implicó la introducción sistemática de planes de ajuste estructural[5]. Así, paquetes de estabilización y ajuste –que implicaron severas restricciones a la ya deteriorada calidad de vida de la población– fueron aplicados en julio de 1988, noviembre de 1989, marzo, abril y noviembre de 1990. También durante el período de Serrano Elías, en mayo de 1993 (Anónimo, 1993, 70). Los peores años de la represión habían pasado y la democracia restringida implicaba la creación de un espacio político para poder legitimarse. En ese espacio político rodeado por las acciones de terror, fue reconstruyéndose el movimiento popu-

[5] López, 1989; Timossi, 1989, 1993; Peña, 1992; Arancibia, 1993; Anónimo, 1993.

lar. En 1984 se fundó el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) por familiares de desaparecidos, en 1988 surgió el Consejo de Comunidades Étnicas "Runujel Junám" (CERJ) y la Coordinadora de Viudas de Guatemala (Conavigua). En 1989 el Consejo de Desplazados de Guatemala (Condeg). Todas estas organizaciones estuvieron o están vinculadas a la defensa de los derechos humanos. En 1985 surgió la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (Unsitragua), la cual junto a la central surgida durante el gobierno de Ríos Montt, la Central de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) y la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), fundaron la Unidad de Acción Sindical y Popular en 1987 (Figueroa, 1999b, 137). La disminución del terror y la relativa apertura política, así como la aplicación de medidas neoliberales como las ya mencionadas, propiciaron el surgimiento de todas estas organizaciones. Si bien en 1983 no hubo ninguna solicitud de legalización sindical, en 1984 se observaron 3, en 1985 se dieron 4, 15 en 1986 y 47 en 1987 (Font, 1992, 13).

Vemos entonces dos vertientes: la de reivindicaciones clasistas, de carácter sindical y, la de la red de defensa de derechos humanos, surgida en el contexto desgarrador de las violaciones a los derechos humanos. A esta se agregaría una tercera: la vertiente de organizaciones mayas con fronteras difusas con el resto de organizaciones populares. Algún autor ha expresado que a partir del segundo lustro de los años 80 el epicentro de la resistencia popular se trasladó de la clase a lo étnico (Font, 1992).

En algún otro lugar, el autor de este trabajo aventuró la hipótesis de que en sociedades como la guatemalteca, que apenas estaban saliendo de un conflicto armado interno, los motivos de la protesta tenían que estar determinados por las agendas que emanaban de dicha situación. Ciertamente la acentuación de la injusticia provocada por el neoliberalismo generaba estallidos de cólera popular, pero en el caso centroamericano, y en particular en el guatemalteco, acaso habría que descartar el patrón de protestas que se pudo observar en el *caracazo* de febrero de 1989 (Figueroa, 1999b, 142, 145).

Esto fue cierto en el contexto inmediato de la posguerra cuando el resarcimiento de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante los años de la guerra y la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas (principales víctimas de dichas violaciones) pasaron a un primer plano. Como veremos más adelante, a principios del siglo XXI observamos en Guatemala una compleja interrelación entre lo étnico y lo clasista, entre lo étnico y la reivindicación de los derechos humanos. Más aún, las demandas laborales han aumentado su importancia y el cuadro empieza a tener, *mutatis mutandis*, algún parecido con lo que se observó en la década de los 70.

La firma entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, en diciembre de 1996, mediante el cual se finalizó de manera formal el conflicto interno, ciertamente inició una nueva etapa en la vida de la sociedad guatemalteca (Reconciliación,

1997, 23). Los últimos años del siglo XX estuvieron marcados por las esperanzas en una nueva sociedad que generaron los distintos acuerdos de paz. Esa nueva sociedad observaría la preeminencia de la sociedad civil, el desarrollo de la vida institucional democrática, el funcionamiento efectivo del Estado de derecho, la ausencia de represión política y el respeto irrestricto de los derechos humanos, la erradicación del fraude e imposición electoral, golpes militares y presiones del ejército así como las acciones desestabilizadoras antidemocráticas, subordinación del ejército al poder civil, el reconocimiento y respeto a la identidad y derechos de los pueblos indígenas, la justicia social expresada en el acceso de todos los guatemaltecos a los beneficios de la producción nacional y recursos naturales, y el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado interno (Ibíd., 97, 99).

El acuerdo final de diciembre de 1996 sintetizó todos estos elementos y agregó el que los guatemaltecos tienen derecho a conocer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia ocurridos durante el enfrentamiento armado interno. También se encuentra un numeral que recoge el espíritu del acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria (mayo de 1996) mediante el cual se expresa que la población rural es la más afectada por la pobreza, las iniquidades y la debilidad de las instituciones estatales, por lo que el Estado y todos los sectores organizados de la sociedad deben aunar esfuerzos para la resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural (Ibíd., 348-349).

A siete años de haberse concluido las negociaciones y suscrito el acuerdo final, su aplicación es magra. En un balance de su cumplimiento y perspectivas, la URNG constataba en mayo de 2003 que, a la hora de realizar los cambios que los acuerdos implicaban, "muchos de los actores" cambiaron su beligerancia e interés mostrados en la etapa de la negociación. Algunas fuerzas cedieron y se paralizaron cuando llegó el momento de abordar los temas sustantivos que afectaban "estructuras e intereses de grupos de poder". El resultado fue que cambió la correlación de fuerzas favorable al cumplimiento de los acuerdos. Los acuerdos de paz se habían cumplido parcialmente en algunos temas, aun cuando en la mayoría no se han cumplido. El acuerdo sobre los pueblos indígenas sufría enormes rezagos, el de aspectos socioeconómicos y reforma agria se encontraba estancado, no se había iniciado la dignificación y el resarcimiento a las victimas de la represión, los defensores de los derechos humanos y sociales eran atropellados abierta o encubiertamente, la Policía Nacional Civil se estaba militarizando y corrompiendo, el ejército continuaba gozando de un presupuesto superior al establecido, tenía un despliegue territorial y cumplía funciones que no correspondían a las establecidas para tiempos de paz, la política fiscal no correspondía al pacto fiscal (URNG, 2003, 4, 5).

En el contexto del incumplimiento de los acuerdos de paz, esto es, de los acuerdos sobre los cuales surgió el consenso de la paz política en Guatemala, los efectos sociales del neoliberalismo en Centroamérica, y particularmente en

Guatemala, se convierten en un ambiente de gran explosividad social. Puede verse esto cuando se analiza en la tabla 3 un recuento de los conflictos observados en los últimos tiempos en Guatemala.

Tabla 3

Cantidad de conflictos por tipología y departamentos afectados de un total de 358 registrados (julio 2002 a abril 2003)

Tipología	*Departamentos afectados*																							Totales por tipología
	Guatemala	*Alta Verapaz*	*San Marcos*	*Petén*	*Escuintla*	*Huehuetenango*	*Quetzaltenango*	*Quiché*	*Chimaltenango*	*Izabal*	*Jalapa*	*Sololá*	*Suchitepéquez*	*Totonicapán*	*Jutiapa*	*Retalhuleu*	*Sacatepéquez*	*Santa Rosa*	*Chiquimula*	*Baja Verapaz*	*El Progreso*	*Zacapa*	*Nacional*	
Incidentes de linchamientos	33	21	12	3	2	10	3	5	6	3	2	5	5	8	1			1						**120**
Servicios básicos	23	2	6	2	5	2	1	2	2		3	2	2		1		1	2	1		1		1	**59**
Tierra		16	2	5	4	2	3	2	1	2	1					2			1	2			1	**44**
Laborales	11	1	2	2	2		2			3	2				2								7	**34**
Educativos	9		1	2	1		3		1		1				1	1	1		1				5	**27**
Municipales	8	1	5		1	1	1	1					2			1	2	1						**24**
Comunitarios	2					1		1				2			1									**7**
Partidos políticos	3																						2	**5**
Extraordinarios	11		4	4	2			1	1	1						1					1		12	**38**
Total por Departamentos	**100**	**41**	**32**	**18**	**17**	**16**	**13**	**12**	**11**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**6**	**5**	**4**	**4**	**3**	**2**	**2**	**0**	**28**	**358**

Fuente: Cálculos de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag) con datos hemerográficos de *Prensa Libre*, *Siglo XXI*, *El Periódico*, *Al Día*, *Nuestro Diario* y *La Hora*.

Resalta en primer término que 33% de los conflictos registrados entre julio de 2002 y abril de 2003 correspondan a linchamientos. Según nos informa la Odhag, de estos 120 incidentes 22 se pueden calificar como intentos, aun cuando en realidad en su mayoría son linchamientos interrumpidos por acción de alguna autoridad estatal (Odhag, 2003b). Más de 60% de estos linchamientos se observaron en el departamento de Guatemala, es decir en la capital del país o zonas aledañas y en los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango y San Marcos, todos ellos escenarios importantes del conflicto interno que terminó en 1996.

Los linchamientos, una acción que busca la justicia por mano propia, son expresión de los *vacíos estatales*. Éstos comienzan con el notorio déficit de legiti-

midad que muchos Estados –algunos más, otros menos– tienen ante vastos sectores de la sociedad civil. En efecto, la corrupción, la impunidad de que gozan los funcionarios estatales y la ineficiencia en la administración de justicia desprestigian a la política y a los políticos y restan espacio a una gobernabilidad democrática.

La alta incidencia de linchamientos en Guatemala expresa una manera perversa de rebelión y de ilegitimidad estatal. El examen de los linchamientos sugiere que éstos deben verse como formas de protesta social más que como acciones delictivas. En el linchamiento, como en el motín, la ira provocada por el ordenamiento social se desencadena más o menos espontáneamente sobre el enemigo más próximo y a menudo éste resulta ser la autoridad más cercana. La justicia por mano propia es la ocupación del vacío estatal que ya hemos mencionado. Como en algún momento lo dijo el anterior procurador de los derechos humanos en Guatemala: "Yo creía que se debían [los linchamientos] a la guerra, por las masacres y el genocidio, pero ahora estoy seguro que se deben a la justicia, que es inoperante y lenta" (Diario *La Jornada*, México D.F., 15-9-1999, 80).

Al menos en el caso de Guatemala, la explicación resulta incompleta si sólo se queda ahí. Como dice Carmen Aída Ibarra, analista guatemalteca, la cultura del terror y de la violencia también cumple su papel: "Los códigos éticos de los guatemaltecos son de autoritarismo y violencia (...) además la guerra de 36 años tocó la mente y el corazón de los guatemaltecos. La violencia se convirtió en algo normal, la vida perdió valor" (Diario *La Jornada*, México D. F., 15 de septiembre de 1999, p. 80). Sin embargo, acaso haya que indagar todavía más allá de esta afirmación. Y quizás lo que aparece como vacío estatal en realidad sea la presencia de la maquinaria contrainsurgente que actúa de manera subrepticia. Gustavo Meoño, director de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, sostiene que cada vez son más frecuentes los casos de linchamientos de personas que se atreven a desafiar la impunidad y que el papel de instigadores de los ex comisionados militares y patrulleros civiles es una constante en los mismos (Meoño, 2002)[6]. El cuadro de la violencia actual en Guatemala puede terminar de percibirse, si se analizan las cifras que ofrece la tabla 7 en la siguiente parte de este trabajo.

El segundo conflicto en importancia es el referido a los servicios básicos, lo cual conlleva a situaciones de confrontación debidas a la negación o prestación irregular de servicios como salud, comunicaciones, energía eléctrica, agua potable, vivienda. Los datos indican que estas confrontaciones se dan entre los usuarios y empresas privadas o el Estado (Odhag, 2003). Poco más de 9% de los conflictos son agrupados en el rubro de "municipales" lo cual

---

[6] Los comisionados militares fueron el aparato de civiles que coadyuvaban con el ejército en el cumplimiento de algunas de sus funciones, como el reclutamiento. Pronto se convirtieron en informantes y parte del aparato de la contrainsurgencia.

significa disputas entre vecinos y corporaciones municipales por recursos naturales, inconformidad por la gestión administrativa o afectaciones de intereses por esta última.

El recuento de conflictos nos informa que 9,5% de los mismos tienen que ver con huelgas o paros de trabajadores y 44 de 358 (12%) tienen que ver con conflictos de tierra entre los cuales se encuentran en primer lugar las ocupaciones de tierras, legalizaciones de dichas ocupaciones, conflictos de linderos y disputas por la propiedad de la misma.

En la tabla 4 podemos observar lo que ha acontecido con las luchas populares en el presente año. De un total de 238 eventos de protesta popular, 104 (casi 44%) corresponden a reivindicaciones clasistas o laborales. Durante 2003 esto puede aparecer acentuado en tanto que el año comenzó con una huelga de maestros que llegó a involucrar a alrededor de 60.000 de ellos y que mantuvo en paro las labores educativas públicas durante 51 días. Del total de eventos de protesta popular que hemos recopilado para 2003, las huelgas tienen un reducido número (3) pero una de esas tres (la de los maestros) tuvo un alcance nacional. Casi 40% de las protestas se escenificaron a través de marchas y mítines, mientras que una cuarta parte de las mismas correspondieron a los cortes de ruta. Estos fueron realizados en su mayoría por maestros y trabajadores, entre los cuales destacaron los trabajadores de la salud, quienes encabezaron luchas en contra de la privatización de los servicios, la corrupción y la injerencia patronal. También se observaron cortes de ruta realizados de manera conjunta por campesinos, trabajadores, padres de familia que estuvieron vinculados a luchas contra la privatización de la educación, el Tratado de Libre Comercio en Centroamérica, el Plan Puebla Panamá.

La tabla 4 también nos da una idea de la diversidad de los sujetos populares que participan en las protestas. Se encuentran desde trabajadores, campesinos, estudiantes, maestros hasta nuevos actores como mujeres, padres de familia, discapacitados, jubilados, desmovilizados, homosexuales y lesbianas (algo impensable en la Guatemala de los 70 del pasado siglo) y, por supuesto, a las Patrullas de Autodefensa Civil, de las cuales nos ocuparemos más adelante.

Todo aquel que lea recuentos de las luchas populares en los últimos tiempos en Guatemala (OSAL, 2003; GGRC, 2003) advertirá una creciente movilización social que tiene al menos cuatro objetivos: luchas campesinas por la tierra (ocupaciones), luchas salariales, luchas contra las privatizaciones de los servicios de salud y educación, y luchas contra las implicaciones que tienen los diversos proyectos imperiales sobre la región centroamericana (Tratado de Libre Comercio y Plan Puebla Panamá).

El año 2003, como ya se ha mencionado, comenzó con una extensa lucha magisterial que inició la Asamblea Nacional del Magisterio en demanda de un aumento salarial de 100%, creación de 7.000 plazas, mayor presupuesto para

el Ministerio de Educación, mejoras en la infraestructura escolar. A fines de enero, el paro docente era una realidad para más de 40.000 maestros y durante las semanas siguientes se observaron movilizaciones en diversos departamentos de la república. A mediados de febrero, más de 20.000 maestros de todo el país, con el apoyo de padres de familia y estudiantes de la Universidad de San Carlos, ocuparon las inmediaciones de diversas dependencias gubernamentales. Otros observadores han indicado que el movimiento alcanzó a movilizar durante una huelga de 51 días a 62.000 maestros (80% del total del magisterio) (GHRC, 2003). El movimiento terminó a mediados de marzo con un acuerdo de 9 puntos con un aumento salarial de 150 quetzales, participación del magisterio en la planificación del presupuesto de Educación para 2004, reposición de mil horas de trabajo.

Un hecho que merece mencionarse en este período es que el movimiento sindical no ha mostrado el vigor de antaño. Sin embargo en los últimos meses el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (Sntsg), el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos (Stusc), así como la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP) encabezaron luchas contra la privatización de los servicios de salud, la derogación de prestaciones y alza de las tarifas de electricidad. En particular la acción de los trabajadores de la salud fue tan notable que lograron, en la primera semana de julio de 2003, que el presidente Portillo derogara un acuerdo gubernativo que permitía la participación de organizaciones privadas en la administración de servicios del Ministerio de Salud. Los tratados de Libre Comercio y el Plan Puebla Panamá fueron objeto de críticas en la marcha del 1° de mayo y en ese mes la Coordinadora Nacional Sindical y Popular y la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic) ocuparon el Parlamento Centroamericano para exigir representación en las discusiones del TLC. Campesinos y sindicalistas de Petén, Alta Verapaz y Sololá bloquearon carreteras para protestar contra la forma secreta en que se iniciaron las discusiones de dicho tratado. En julio medio millar de delegados de organizaciones sociales, de 153 comunidades de Playa Grande e Ixcán (Quiché) así como 33 representantes de comunidades del estado de Chiapas en México, participaron en el Encuentro Binacional sobre Tratados Comerciales y la Selva del Ixcán. Además de pronunciarse sobre el TLC, repudiaron las consecuencias del Plan Puebla Panamá. Hay que destacar las luchas y manifestaciones que se dieron en estos meses por parte de maestros, estudiantes y padres de familia a favor de la elevación de las condiciones de trabajo en la educación pública y en rechazo a la privatización de la educación. Finalmente, hay que mencionar la realización en agosto del Primer Congreso Nacional de los Pueblos Mayas, en el cual participaron 300 delegados de 100 municipios del país (casi 30%), que dio formalidad a la Asamblea Nacional del Pueblo Maya.

Tabla 4
Protesta popular en Guatemala (enero-septiembre 2003)

Sector	Protesta										Total
	Huelgas	*Paros*	*Cortes de ruta*	*Marchas*	*Mitines*	*Ocupaciones de tierra*	*Tomas de instalaciones*	*Motines*	*Pronunciamientos Denuncias*	*Sabotajes*	
Maestros	1		17	14	5		16		5		**58**
Estudiantes	1		4	4	4						**13**
Campesinos			4	2	6	6	4	4	5		**31**
Trabajadores	1	4	18	5	8		4		6		**46**
Padres de familias			3		1						**4**
Mujeres				2	1				2		**5**
PAC			5	4	4		10	5	2	2	**32**
Indígenas				1	3				4		**8**
Vecinales			1	1	3				1		**6**
Discapacitados				1	1						**2**
Vendedores ambulantes			1	1							**2**
Adultos mayores Jubilados				2	3						**5**
Derechos humanos				2	2				2		**6**
Pescadores					1						**1**
Pequeños comerciantes			2								**2**
Homosexuales Lesbianas				1	1						**2**
Popular*			7	3	1						**11**
Desmovilizados									1		**1**
Pobladores				1	1						**2**
Jóvenes									1		**1**
Total	**3**	**4**	**62**	**44**	**45**	**6**	**34**	**9**	**29**	**2**	**238**

Fuente: Elaboración propia con base en cronologías de protestas populares del *Observatorio Social Latinoamericano* (Clacso), La Semana en Guatemala, Resumen de noticias.
*Se refiere a protestas populares en las que confluyen diversos sectores sociales.

Sin embargo, entre todos estos movimientos, merece especial mención el ascendente movimiento campesino que se está observando en Guatemala. Como ya se ha mencionado, el recuento hemerográfico realizado por la Oficina

de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag, 2003), nos indica que entre julio de 2002 y abril de 2003 se observaron 44 conflictos agrarios que se refieren a ocupaciones de fincas por parte de campesinos, exigencias de tierras, demandas de regularización legal, denuncias de manipulación o falsificación de documentos de propiedad. Organizaciones campesinas ocupan un lugar destacado en la vida cotidianidad de Guatemala. Entre ellas hay que mencionar a la CNOC, una central campesina que agrupa a organizaciones con el Comité de Unidad Campesina (CUC) y la Conic, esta última una organización de gran relevancia en el país.

Pero existen otras organizaciones que revelan la vitalidad del movimiento campesino en el momento actual: Plataforma Agraria, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo de Colombia (Codeco), el Comité Campesino del Altiplano (CCDA). Un momento culminante de este ascenso campesino fue la presentación en agosto por parte de las organizaciones agrupadas en la CNOC de una propuesta de lo que ellos llaman Reforma Agraria Integral, contrapropuesta crítica al mercado de tierras como solución al problema agrario en el país (CNOC, 2003).

Tabla 5

Guatemala: Número de fincas ocupadas hasta el 2002 (Datos CNOC)

Departamento	*N° de fincas*	*N° de familias **	*Fecha de ocupación**				*Extensión***
			15-40 años	*Más de 50 años*	*2001*	*2002*	
Alta Verapaz	25	2358	1	2		16	333.5
BajaVerapaz	12	1240	3	4	1	1	86.5
Izabal	8	1663			5	2	146.03
Suchitepéquez	2	125				1	14.03
Jutiapa	1	700			1		0.18
Chimaltenango	1	500				1	22
Sololá	1						
Huehuetenango	1						
¿?	1						
Total	**52**	**6586**					

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas. * No se logró recabar información en todos los datos. ** En caballerías (1 caballería = 64 manzanas). No se logró recabar información en todos los casos.

La tabla 5 nos indica que en 2002 se encontraban 52 fincas ocupadas por más de 6.500 familias campesinas. De los datos que pudimos obtener, más de la mitad de estas fincas (53%) fueron ocupadas durante 2001 y 2002. La cifra es un indicador de que la ocupación de fincas es un fenómeno que se ha acentuado en fechas relativamente recientes. Puede el lector comparar la inci-

dencia de fincas ocupadas durante los años 70 y el elevado número que este tipo de lucha social se observa en la actualidad. La tabla 4 muestra que los campesinos participaron en ocupaciones de tierras, cortes de ruta, tomas de instalaciones públicas. Casi 14% de las protestas populares registradas en dicha tabla corresponden a acciones campesinas.

Más de 70% de las fincas ocupadas se encontraron en la región de las Verapaces (los departamentos de Alta y Baja Verapaz). La tabla 6 nos ofrece una idea más aproximada de la naturaleza de las ocupaciones de fincas en dicha región. Lo cual resulta representativo dado que la gran mayoría de las fincas ocupadas que hemos registrado en la tabla 5 corresponden a dicha región. Lo primero que llama la atención es que mientras en los datos ofrecidos por la CNOC en la tabla 5 las invasiones ascienden a 52, el registro de invasiones que nos ofrece la tabla 6 nos indica que hasta abril de 2003 solamente en las Verapaces habían 63 fincas ocupadas.

Tabla 6

Conflictos y ocupaciones en las Verapaces* (hasta abril 2003)

Ocupaciones	N° de familias	Extensión ocupada (ha)	Tipo de tierra**									
			Mozo colono	Baldío	Reserva natural	Terreno municipal	Arrendamiento	Fontierra***	Propiedad privada	Cooperativa	Indeterminado	Finca nacional
63	4,060	28,349.5	20	6	4	1	3	10	2	2	11	4

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de la antropóloga Martha Gutiérrez (Avancso). * Alta y Baja Verapaz. ** Estatus de la tierra ocupada. *** Organismo del Estado que adquiere tierras a través de compra a sus propietarios.

Una investigadora guatemalteca, que ha hecho trabajo de campo en varias de las fincas ocupadas, nos informa de la razón más inmediata del auge de las ocupaciones de tierras por campesinos: la crisis de precios del café en el mercado internacional (Gutiérrez, 2003). Siendo durante mucho tiempo la principal de las agroexportaciones, el cultivo del café ha ocupado a miles de proletarios temporales (cuadrilleros) y también permanentes (mozos colonos)[7]. Desde mediados del siglo XX se empezó a observar un conflicto con los mozos colo-

[7] El mozo colono es un trabajador residente en la finca. A menudo la finca cafetalera le otorga una parcela de tierra que le sirve de complemento al salario que recibe.

nos: el proceso de modernización productiva de las grandes fincas impulsó a los finqueros a expulsar a los mozos colonos para optimizar el uso de la tierra y librarse también de prestaciones laborales. En los años 70 ésta era una de las fuentes de la violencia cotidiana en las regiones cafetaleras (Figueroa, 1980, cap. III).

En la actualidad la crisis del café ha profundizado la miseria rural, al extremo de que buena parte de las luchas campesinas son debidas a las exigencias para que el Estado cumpla con los programas de emergencia para salvar de la hambruna a miles de obreros agrícolas y campesinos minifundistas que han funcionado como semiproletarios. A partir de 2001, 98.000 obreros agrícolas permanentes fueron despedidos o están en proceso de serlo y 126.000 temporales no fueron contratados para la recolección del café. Los despidos fueron hechos sin pagar las prestaciones que fija la ley (Gutiérrez, 2003). Esto nos indica que buena parte de los conflictos derivados de las ocupaciones de tierras, en el fondo, también son conflictos laborales que involucran a finqueros y mozos colonos. De las invasiones consignadas en la tabla 6, en una tercera parte involucran a mozos colonos mientras que buena parte del resto son ocupaciones de tierras fincas. En el espíritu de los acuerdos de paz se ha creado un organismo cuyo cometido es adquirir tierras para repartir a campesinos (Fontierras). El 15% de tierras ocupadas en las Verapaces que aparecen bajo ese rubro en la tabla 6 han sido tierras en propiedad de grandes fincas; luego de la ocupación pasan a formar parte de la negociación con dicho organismo gubernamental.

En realidad éste es el sentido de las ocupaciones: acciones colectivas que en pocos casos hacen uso de la violencia y que en realidad funcionan como mecanismos de presión para que los finqueros accedan a vender la tierra, le reconozcan derechos laborales, o se agilicen trámites legales en alguna oficina gubernamental (Ibíd.). Como lo refleja la tabla 6, la crisis originada por la decadencia de las exportaciones ha desencadenado la oleada de ocupaciones de tierra, en las que han sido afectados no sólo los grandes terratenientes, sino también terrenos baldíos, reservas naturales, fincas nacionales (propiedad del Estado).

4. Las Patrullas de Autodefensa Civil. Terror y cooptación de masas

Hemos dicho ya que a lo largo de toda su historia más reciente, en Guatemala se ha observado una incapacidad estructural por parte del Estado de tener una base social de masas. Ríos Montt quiso enmendar esta deficiencia durante el tiempo en que fue presidente de facto después de un golpe de Estado (1982-1983). En la coyuntura electoral de 2003, su proyecto fue el mismo: generar un gobierno fuerte que en su continuidad construya un Estado también fuerte, porque está asentado en un extenso apoyo de masas. El FRG fue visto como el instrumento para llegar a ese objetivo y al mismo tiempo romper con la maldición según la cual "partido que gobierna pierde las elecciones".

El FRG es un partido disciplinado, asentado en el clientelismo que generan sus líderes locales y que con el apoyo del Estado, puesto que estaba ejerciendo el gobierno, podía convertir un discurso populista y determinadas prebendas (piochas y palas, fertilizantes a bajo precio, almuerzos escolares, mercado de tierras etc.) en un mecanismo para agregar masas a su proyecto de continuidad en el poder político.

Elemento fundamental en este propósito es la agitación de toda la masa rural campesina que fue organizada en los momentos de la guerra contrainsurgente en las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) (AI, 2002). Hoy toda esta estructura organizada de los ex PAC ha sido de nueva cuenta movilizada y reorganizada en función del otorgamiento de una indemnización que compensa los servicios prestados en la lucha contrainsurgente. Inicialmente fueron inscritos 628.000 ex patrulleros con expectativas de ser resarcidos con una cantidad de 2.500 dólares cada uno de ellos, lo que hubiera implicado una erogación de 1.570 millones de dólares (GHRC *et al.*, 2003). En enero de 2003, tales expectativas de cientos de miles de campesinos que fueron patrulleros se materializaron en una concentración de 30.000 ex patrulleros que respaldaron la presentación del tercer informe de gobierno y el primer gran acto de campaña electoral del FRG (Meoño, 2003).

En las profundidades de la Guatemala rural, en las aldeas remotas en las que se vivió de cerca el conflicto armado de los años 80 y 90, se ha ido constituyendo un poder local que podía ser decisivo para que el FRG ganara o al menos obtuviera en los comicios de 2003 una votación mucho más alta de lo que las encuestas estaban prediciendo. Líderes locales de las antiguas PAC, ex comisionados militares (civiles que estuvieron al servicio del ejército), pastores de sectas protestantes, habilitadores (reclutadores de trabajadores agrícolas temporales para los grandes latifundios agroexportadores), se han constituido en muchas de estas comarcas en una suerte de elite local (Avancso, 2002, cap. XII). Esta elite local puede ser usada para inducir el voto a favor del FRG. La mediación prebendal ya mencionada, unida a la intimidación que pueden ejercer un enorme dispositivo de ex patrulleros satisfechos con el pago parcial de las indemnizaciones por los servicios prestados, puede hacer la diferencia.

Las expectativas iniciales de un pago de 2.500 dólares (aproximadamente 20.000 quetzales) finalmente se convirtieron, el 20 de marzo de este año, en el ofrecimiento de un pago individual de 5.241 quetzales (aproximadamente 680 dólares) que se hará en tres pagos de 1.747 quetzales. El anuncio gubernamental también expresó que los beneficiarios de dicha medida serían únicamente 250.000 patrulleros, cifra bastante por debajo de los 628.000 inicialmente inscritos. Tales noticias ocasionaron, durante los meses de marzo y abril, protestas, movilizaciones, bloqueo de carreteras, enfrentamientos violentos con las autoridades, ocupaciones de municipalidades y hasta quemas de edificios públicos. Estos hechos están reflejados en la tabla 4, que nos informa que

más de 13% de los eventos de protesta popular entre enero y septiembre de 2003 fueron protagonizados por los ex PAC.

Sin embargo en mayo, cuando el gobierno comenzó a repartir entre los ex patrulleros los primeros certificados de pago, las protestas comenzaron a amainar. Los 250.000 beneficiados han firmado al recibir sus certificados, un compromiso de no participar en acciones legales o protestas para reclamar más beneficios que los acordados. No obstante, todavía en junio militantes del FRG y ex patrulleros inconformes se enfrentaron violentamente en el poblado de Nebaj, departamento de El Quiché (*LSG*, diversos números).

Es este proceso de organización y agitación de masas, que tiene como estructura movilizadora al propio FRG, organizaciones como la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) y los poderes locales en los confines rurales, es la explicación de los sucesos del 24 de julio. Ese día un centenar de buses extraurbanos llevaron a la capital de la república a unos cuatro o cinco mil campesinos indígenas y ladinos, buena parte de ellos ex PAC. Protestando por que se estaba impidiendo la inscripción de Ríos Montt como candidato presidencial, los campesinos cercaron el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y en una manipulación clara de la lucha de clases y el resentimiento social también fueron dirigidos hacia los dos edificios del Centro Empresarial, hacia las colonias burguesas de Las Conchas y La Cañada, en claras alusiones al ex presidente Arzú y al empresario y periodista Dionisio Gutiérrez, conocido opositor del gobierno del FRG.

Palos, machetes, piedras en manos de hombres y mujeres con pasamontañas que casi lincharon a varios periodistas y provocaron la muerte de uno de ellos, sembraron el terror ese día en la ciudad capital. El mito reaccionario, racista y oligárquico de los indios que bajan de las montañas y pasan a degüello a los ladinos pareció tener visos de realidad ese día (Ibíd.). También el mito del FRG antioligárquico, que se ha expresado en labios de Ríos Montt y Portillo: "Guatemala ya no será una finca de los oligarcas ni los guatemaltecos seguirán siendo tratados como peones".

Detrás del FRG y del gobierno del presidente Portillo se encuentra una ascendente nueva burguesía que le está disputando con firmeza el poder político a la llamada burguesía tradicional. Ciertamente hay empresarios que se sustentan en formas de acumulación lícita, pero hay también un enorme poder económico que se asienta en formas ilícitas de acumulación. Algún analista enumera en nueve las principales empresas del crimen organizado: el narcotráfico, el tráfico ilegal de personas hacia EEUU, el lavado de activos, el contrabando, el robo en carretera de camiones y furgones con carga, los asaltos bancarios, los secuestros extorsivos, el robo y trasiego internacional de vehículos de lujo y las adopciones ilegales y tráfico de menores (Meoño, 2003).

Tabla 7
Guatemala: Violación de derechos humanos y hechos violentos

HECHO VIOLENTO O DE VIOLACIÓN A DDHH	2002												2003	TOTAL
	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene-feb	
Violación contra el derecho a la vida														
Ejecución extrajudicial	9	15	25	11	9	9	8	9	10	12	14	24	9	**164**
Asesinatos	98	102	131	173	148	111	136	154	84	98	134	178	287	**1834**
Asesinatos de testigos o asesinatos políticos	0	1	2	0	3	0	0	3	1	3	2	4	10	**29**
Asesinatos de trabajadores de DD.HH	0	3	0	5	0	3	1	0	0	0	0	0	1	**13**
Homicidios	76	88	72	84	92	111	77	54	66	89	104	143	7	**1063**
Estrangulamiento	1	1	4	1	7	2	2	7	1	6	8	12	14	**66**
Violación contra el derecho a la integridad														
Linchamiento	1	3	0	5	6	2	4	14	4	0	0	0	7	**46**
Intento de linchamiento	18	9	10	31	17	20	28	15	16	13	17	19	17	**230**
Vapuleados	6	5	5	5	5	9	5	5	8	9	11	12	16	**101**
Golpeados	5	6	7	15	16	17	16	9	11	14	16	19	17	**168**
Heridos de arma de fuego	64	63	62	68	61	88	79	69	90	98	92	90	105	**1029**
Heridos de arma blanca	32	30	36	31	36	42	35	32	37	34	56	78	4	**483**
Violación	14	18	19	14	17	19	14	17	13	12	14	13	3	**187**
Casos de tortura	11	12	11	16	15	17	10	16	13	11	14	15	11	**172**
Tortura de trabajadores de DD.HH	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Allanamientos de oficinas de Org. de DD.HH o similares	0	6	5	4	1	1	1	3	4	0	0	0	0	**25**
Allanamientos de casas particulares o empresas	1	2	2	2	4	4	3	1	3	2	3	3	43	**73**
Violación contra el derecho a la libertad														
Desaparición forzada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Robo de niños o niñas	7	8	4	10	13	17	12	16	19	13	16	19	0	**154**
Secuestro	10	13	10	9	10	12	10	8	8	9	6	6	5	**116**
Secuestro de trabajadores de DD.HH	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**
Desapariciones sin causa	3	6	3	3	2	10	11	9	8	9	8	12	15	**99**
Amenazas	5	2	11	16	21	41	13	7	7	8	9	14	11	**165**
Amenazas contra trabajadores de DD.HH	0	7	5	5	5	6	1	1	2	4	5	6	1	**48**
Amenazas contra periodistas	0	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	**12**
Atentados	1	4	2	10	5	5	4	6	1	1	4	7	6	**56**
Acoso	7	3	3	7	3	3	7	9	8	7	11	12	2	**82**
Total de violaciones x mes	**369**	**414**	**429**	**530**	**498**	**549**	**477**	**464**	**414**	**452**	**544**	**686**	**593**	**6419**

Fuente: Elaboración propia basada en informes sobre la situación de los derechos humanos y hechos violentos en Guatemala durante 2002 y enero y febrero de 2003. Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), febrero de 2002 y marzo de 2003.

Son estas actividades las que constituyen la fuerza social que sustenta al FRG y al gobierno actual de Guatemala. En ellas existe una asociación de civiles y ex militares vinculados a violaciones de derechos humanos. No solamente la impunidad ante las formas de acumulación ilícita es lo que une a todos estos grupos en pos de una cuota esencial del poder político. El yerno de Ríos Montt podrá seguir haciendo buenos negocios en el contrabando y falsificación de zapatos tenis de marca reconocida, pero también el propio general seguirá gozando de la impunidad ante sus crímenes en el contexto de la contrainsurgencia. En tanto que buena parte de los integrantes de los poderes invisibles han estado vinculados a los crímenes de la guerra sucia, hay en la propia preservación ante la justicia universal una poderosa motivación de poder (Mack, 2003).

Podría ser ésta una explicación al porqué con el gobierno de Alfonso Portillo los asesinatos, secuestros, golpizas, amenazas de muerte, intimidaciones, allanamientos de locales, saqueos de casas de habitación, han afectado de manera muy importante a activistas y organizaciones de derechos humanos. Las cifras del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) para 2002 y los primeros meses de 2003 (tabla 7) son elocuentes del hostigamiento a las organizaciones de derechos humanos: 13 asesinatos, 25 allanamientos de oficinas, 3 secuestros, 73 allanamientos de casas particulares, 47 amenazas de muerte (GHRC *et al.*, 2003; GAM, 2003).

5. Palabras finales

El examen de las luchas sociales que se han observado en Guatemala desde la última década del siglo pasado sugiere la existencia de al menos tres rasgos. El primero de ellos tiene que ver con los sujetos que en el momento actual constituyen al movimiento popular. En la década precedente al gran estallido revolucionario de los años 80, las luchas sociales reflejaron la naturaleza del capitalismo tal como éste existía en la Centroamérica de aquellos años. Los hijos de las clases medias urbanas convertidos en estudiantes siguieron jugando un papel central en la resistencia antidictatorial, pero pronto apareció como actor protagónico una emergente clase obrera industrial, hija de los efectos de la relativa industrialización del mercado común centroamericano.

El movimiento sindical urbano, constituido en gran medida por sindicatos de empresas industriales, desempeñaría un papel decisivo en todas las jornadas en las que las reivindicaciones salariales, laborales en general, se articularon a un proyecto de revolución social. Los sindicatos de obreros agrícolas y la aparición en 1978 del Comité de Unidad Campesina (CUC) (Bastos y Camus, 2003, 25) expresaron la lucha de clases en una sociedad que articulaba una acumulación capitalista sustentada en la agroexportación con otra más que se asentaba en una relativa industrialización.

El proceso de desmantelamiento de la dictadura militar se dio, como todas las transiciones democráticas en América Latina, acompañada de la implanta-

ción del neoliberalismo: reducción de la acción del Estado, supresión de las barreras arancelarias que protegían a la industria local, sustitución de exportaciones, privatizaciones, restricciones salariales, inserción en la globalización. En este contexto, la agroexportación acentuó su larga crisis provocada por la tendencia a la baja de los precios de sus productos. La lucha de clases en Guatemala en los últimos años ha estado marcada por estos acontecimientos. La clase obrera industrial ha perdido la beligerancia que antaño tuvo, las luchas de los obreros agrícolas y campesinos han cambiado de sentido y contexto, y los asalariados del sector público han asumido una centralidad que antes no tenían. Trabajadores municipales y del Estado protagonizaron dos de los cuatro grandes eventos que marcaron el inicio de la reconstrucción del movimiento popular en los años 80. Maestros y trabajadores de la salud pública fueron los sectores asalariados más beligerantes durante este último año.

El segundo rasgo tiene que ver con los efectos novedosos que ha impreso en las luchas populares más recientes la composición étnica de Guatemala. Hoy casi todos los ámbitos de la protesta popular están iluminados por la reivindicación étnica. Las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos tienen una fuerte presencia indígena, las organizaciones campesinas han articulado la demanda de la tierra no solamente como un medio de vida sino también como una reivindicación cultural (la Madre Tierra) y, finalmente, en la diversificación de los sujetos de la protesta popular la reivindicación de lo étnico ocupa un espacio primordial.

Un tercer rasgo lo constituiría el que la resistencia al neoliberalismo ha crecido en los últimos cinco años. La protesta popular ha incorporado, en ese sentido, el espíritu del *caracazo*. Después de un período en el cual lo étnico y el resarcimiento de las infamias cometidas por la guerra sucia parecieron opacar los conflictos de clase, hoy éstos han vuelto aparecer como lucha contra el neoliberalismo y los efectos perversos de la globalización. Por ello mismo se observa también una tendencia a la articulación regional, mesoamericana, de la protesta popular.

El Tratado de Libre Comercio para Centroamérica y el Plan Puebla Panamá han originado el surgimiento de protestas que trascienden los marcos del Estado nacional. Campesinos y sindicalistas de Petén, Alta Verapaz y Sololá bloquearon carreteras para protestar contra la forma secreta en que se iniciaron las discusiones del TLC para Centroamérica (OSAL, 2003). En junio de 2003, diversas organizaciones centroamericanas se reunieron en Managua para pronunciarse contra el TLC en Centroamérica (MSC, junio 2003). En julio, medio millar de delegados de organizaciones sociales, de 153 comunidades de Playa Grande e Ixcán (Quiché), así como 33 representantes de comunidades del estado de Chiapas en México, participaron en el Encuentro Binacional sobre Tratados Comerciales y la Selva del Ixcán (Adital, 6/03). Ese mismo mes se realizó en Tegucigalpa el IV Foro Social Mesoamericano que tuvo como tema central el Plan Puebla Panamá (FM, julio 2003).

Cabe concluir este trabajo con la constatación de que hoy la protesta popular en Guatemala no se encuentra articulada a un proyecto político de carácter alternativo. En esto se diferencia notablemente de lo que aconteció en décadas pasadas, cuando buena parte de las protestas populares estaban articuladas a un espíritu revolucionario y a las organizaciones que lo encarnaban. Resulta paradójico que en el contexto de una creciente protesta popular las organizaciones de la izquierda guatemalteca tiendan a la irrelevancia electoral.

Si esto es una circunstancia coyuntural o un rasgo nuevo de los movimientos sociales como postulan los estudios del tema, es algo que el tiempo dilucidará.

Bibliografía

Amnistía Internacional (2002): *Guatemala. Reaparecen las patrullas de Autodefensa Civil.* AMR 34/053/2002/s, 4 de septiembre.

Anónimo (1993): *Principales consideraciones sobre el desarrollo rural guatemalteco en Guatemala, ONG's y desarrollo. El caso del Altiplano Central*, México D.F., Editado por el Centro de Estudios Integrados de Desarrollo Comunal.

Arancibia, Juan (1993): *El ajuste estructural en Centroamérica* en Vilas (coord.) 1993.

Adital (2003): "Población guatemalteca y mexicana rechazan tratados de libre comercio", tomado de: http://www.adital.org.br/asp2/noticia.asp?idioma=ES-&noticia=7840, junio.

Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (Avancso) (2002): *Se cambió el tiempo. Conflicto y poder en territorio K'iche*, Guatemala, Avancso, enero.

Bastos, Santiago y Manuela Camus (2003): *Conic. 11 años de lucha por el rescate de la cultura maya y la Madre Tierra*, Guatemala, Conic/Hivos.

Bulmer Thomas, Víctor (1990): *La economía política de Centroamérica desde 1920*, San José, Costa Rica, Publicación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Castañeda, Gilberto (1993): "Panorama después de la tempestad: el movimiento sindical y popular en la década de los ochenta" en Vilas (coord.), 1993.

Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) (1978): *Democracia y movimientos sociales: Estados y sectores subalternos. 1954-1978*, Guatemala C.A., mimeo.

Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (1976-1979): *Noticias de Guatemala*, n° 1-36, México, DF. (NG).

Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) (1999): *Guatemala Memoria del Silencio*, Guatemala C. A., (12 vols.).

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Estados Unidos (GHRC/USA), Fundación para los Derechos Humanos de Guatemala (FHRG), Oficina de Nueva York de la Fundación Rigoberta Menchú Tum,

Red por la paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) (2003): "Guatemala: la corrupción del Estado y la sociedad. Un análisis político de la situación de derechos humanos", mimeo, Guatemala, mayo.

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) (2003): *Propuesta de Reforma Agraria Integral. Documento base para la discusión*, Guatemala, agosto.

Departament of Labour (1978): *Bulletin of Labour Statistics (1972-1978)*, Washington D.C.

Figueroa Ibarra, Carlos (1991): *El recurso del miedo. Ensayo sobre Estado y terror en Guatemala*, San José, Costa Rica, Editorial Universitaria Centroamericana (Educa).

_____ (1999a): *Los que siempre estarán en ninguna parte. La desaparición forzada en Guatemala*, México D.F., Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Centro Internacional para la Investigación en Derechos Humanos (Ciidh), Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (Icsyh).

_____ (1999b): "Paz, neoliberalismo y protesta popular en Guatemala" en Margarita López Maya (ed.), Caracas, Nueva Sociedad.

_____ (1980): *El proletariado rural en el agro guatemalteco*, Guatemala, Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos de Guatemala.

Font, Joan (1992): "Actores políticos en cambio: los movimientos populares guatemaltecos en el contexto de una liberalización limitada", Los Ángeles, ponencia presentada en el XVII Congreso de la Latin American Studies Association-LASA, septiembre.

Foro Mesoamericano (FM) (2003): *Organizaciones sociales mesoamericanas lanzan campaña contra el Banco Interamericano de Desarrollo*, "organizaciones_mesoamericanas_contra_bid.htm", tomado de: http://www. caritaspanama.org/incidencia/fsm/organizaciones_mesoamericanas_contra_bid.htm, julio.

Fundación Casa de la Reconciliación (1997): *Recopilación cronológica. Acuerdos firmados en la negociación por la paz en Guatemala*, Ciudad de Guatemala, (Reconciliación, 1997).

Gutiérrez, Marta (2003): *Las ocupaciones de tierra: un conflicto entre propietarios y no propietarios*, Guatemala, Avancso, agosto, mimeo.

Hernández Pico, Juan (2003): *La revelación parcial de los poderes ocultos*, Guatemala, Divulgado por Memoria, Verdad y Justicia, Agosto.

Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de San Carlos (IIES/USAC) (1980): *Los rasgos fundamentales de la formación social guatemalteca*, Guatemala C. A., Colección Problemas Socioeconómicos, n° 8, Departamento de Publicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

La Semana en Guatemala (2003): Resumen de noticias, (LSG), diversos números.

López, J. R. (1989): *El ajuste estructural de Centroamérica. Un enfoque comparativo*, Cuadernos de Ciencias Sociales, n° 26, San José, Costa Rica, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

López Maya, Margarita (ed.) (1999): *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste*, Caracas, Editorial Nueva Sociedad.

Meoño, Gustavo (2002): *Fractura en la transición*, Fundación Rigoberta Menchú Tum, mimeo, divulgado por Memoria, Verdad y Justicia, Guatemala, 31 de agosto.

_____ (2003): *Guatemala 2003: situación y perspectivas*, Guatemala, divulgado por Memoria, Verdad y Justicia, abril.

Movimientos Sociales Centroamericanos (MSC) (2003): *Declaración de los movimientos sociales centroamericanos. No al Tratado de Libre Comercio*, 4 de junio.

Observatorio Social de América Latina (OSAL) (2003): *Cronología de protestas y movimientos sociales en Guatemala (enero-agosto de 2003)*, Buenos Aires.

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag) (1998): *Guatemala Nunca Más*, Guatemala C. A., (4 Volúmenes), Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica.

_____ (2003): *Cantidad de conflictos por tipología y departamentos afectados de un total de 358 registrados (julio 2002 a abril 2003)*, Guatemala C. A.

_____ (2003): *Cantidad de incidentes de linchamientos por departamentos y meses comprendidos entre julio de 2002 y abril de 2003*, Guatemala C. A.

Peña, Artemio (1992): *Ajuste y estrategia productiva. El caso de Guatemala*, Centro de Estudios de la Realidad Guatemalteca (CERG), Serie Temas de la Realidad Guatemalteca, nº 10-11, enero-agosto, año 4, segunda época.

Timossi Dolinski, Gerardo (1989): *Centroamérica: deuda externa y ajuste estructural*, La Habana, Cries/Centro de Estudios de América (CEA).

_____ (1993): "Crisis y reestructuración: el balance centroamericano de los años ochenta" en Carlos M. Vilas (coord.), 1993.

Vilas, Carlos M. (coord.) (1993): *Democracia emergente en Centroamérica*, México D.F., UNAM.

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (2003): *Los acuerdos de paz. Análisis de su cumplimiento y perspectivas*, Guatemala, mimeo, URNG.

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2004, vol. 10, n° 1, (ener.-abr.), pp. 155-174

LAS LUCHAS SOCIALES EN COLOMBIA: RESISTENCIA FRENTE A LA GUERRA

Martha Cecilia García Velandia

La llegada del nuevo siglo no augura precisamente vientos de paz ni desarrollo para Colombia. Muchos factores atentan contra cambios económicos, sociales y políticos favorables para los habitantes del país. Durante el último lustro el conflicto armado interno se ha intensificado, han disminuido las expectativas de su resolución pacífica y, más bien, se ha producido un endurecimiento de la opinión pública frente a una eventual negociación de paz (González, 2002, 14-19).

El escalamiento de las acciones terroristas en ciudades y en la propia capital del país, a partir de enero de 2002, tras la ruptura de los diálogos entre el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2003) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), contribuyó a transformar la percepción del conflicto armado como un asunto rural que se libraba en campos y municipios alejados de las capitales departamentales, en una guerra *en* y *por* las ciudades. Y en un contexto de lucha internacional contra el terrorismo, a la guerrilla, especialmente a las FARC, se la convirtió en el principal enemigo de la sociedad y del país, en una organización terrorista comparable con grupos como Al Qaeda, y se le restó connotación política o ideológica a su lucha, aún más por sus vínculos con el narcotráfico. En este contexto se produce el triunfo electoral del Álvaro Uribe Vélez (con una plataforma que insistía en la recuperación de la autoridad estatal en todo el territorio nacional y en la depuración de la política de todas sus corruptelas) y de ahí su intransigencia frente a los grupos guerrilleros que, según él, no son delincuentes políticos sino terroristas[1]. Posición que lo llevó a negar que en Colombia exista un conflicto interno: lo que hay es una guerra contra el terrorismo que atenta contra un Estado pluralista y legítimo; por ello no puede haber población "no combatiente", ya que todos los

[1] Así, las alternativas parecen ser su eliminación física o una negociación en condiciones de rendición. Frente a las guerrillas el tiempo de la paz ha sido sustituido por el tiempo de la guerra total contra el terrorismo, mientras con los paramilitares ha sostenido diálogos en secreto y lo poco que ha salido a la luz pública permite pensar que predominará, a nombre de la reconciliación, una política de perdón y olvido de los crímenes de lesa humanidad que han cometido.

colombianos deberían estar al lado de las fuerzas militares porque no es posible la neutralidad. Discurso que se plasma en medidas como el proyecto de Estatuto Antiterrorista, con la creación de las zonas de rehabilitación (declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional) y de las redes de informantes[2]. Se busca que la sociedad pase de víctima a actor, aportando recursos, soldados[3], cooperando con las autoridades y respaldando a las instituciones (González, 2003).

No obstante la retórica gubernamental, las cifras de víctimas de la violencia política por violaciones a los derechos humanos y por infracciones graves al derecho internacional humanitario (DIH) ratifican que en Colombia sí existe un conflicto armado interno: solamente durante el período comprendido entre el 1° de julio de 2002 y el 30 de junio de 2003, 4.351 personas fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos (2.546 personas fueron detenidas de manera arbitraria, 792 fueron ejecutadas extrajudicialmente, 573 sufrieron amenazas, 160 fueron desaparecidas, 144 fueron torturadas y 125 heridas, 10 padecieron violencia sexual y una fue víctima de un atentado). En cuanto a infracciones graves al DIH, 3.028 personas fueron victimizadas por los actores del conflicto y las acciones bélicas, entendidas como acciones legítimas de guerra, dejaron un total de 3.401 víctimas (Cinep-Justicia y Paz, 2003, 35). Otros datos que reafirman la situación de violencia que vive el país son los referidos al desplazamiento forzado y los éxodos masivos: durante el cuatrienio de Pastrana Arango (y a cinco meses de terminar su gobierno) se produjeron 200 éxodos masivos, fueron desplazadas 1.091.320 personas –alrededor de 50% del total de víctimas en 15 años– y el número de municipios expulsores pasó de 494, en 1998, a 716 localidades, en 2002 (*El Tiempo*, 2002, 1 y 20). El país ha contemplado desde 1985 hasta 2003 el éxodo de 2,9 millones de colombianos dentro de su propio territorio y el año 2002 fue el de mayor desplazamiento forzado en Colombia desde entonces (Codhes, 2003, 124).

Si el ambiente político resulta desolador, el contexto económico no es mejor, como lo muestran algunas cifras. Durante el quinquenio 1998-2003, el ritmo de crecimiento promedio del producto interno bruto *per cápita*[4] ha sido el más bajo desde que se tienen estadísticas y los costos directos del conflicto rondan 2 puntos del PIB anual (PNUD, 2003, 110); la distribución del ingreso empeoró, el gasto social disminuyó (las coberturas en salud, educación y seguridad social se encuentran estancadas) mientras aumentó el gasto en de-

---

[2] Iniciativa gubernamental que convoca al conjunto de la población a participar, de manera voluntaria, en redes de civiles que informan a las autoridades sobre las acciones de los grupos insurgentes o posibles ataques.

[3] Como los "soldados campesinos": jóvenes entre los 18 y los 24 años que prestan el servicio militar y tienen la misión de proteger los mismos pueblos de los que son oriundos, por eso el ejército ha optado por llamarlos "soldados de mi pueblo".

[4] En 1999 el PIB presentó la cifra más baja de la historia nacional: cayó tres veces más que en 1931, última vez que este indicador tuvo un comportamiento negativo (Archila, 2003, 40).

fensa, orden y seguridad (CID y CGR, 2003). La pobreza ha estado por encima de 50% (y en los dos últimos años se incrementó) y los niveles de indigencia en 2002, lejos de haberse reducido, exceden los de 1990 (Cepal, 2003, 6).

La política económica, en los últimos años, se ha encaminado hacia un ajuste fiscal que asegure, a la vez, el pago de la deuda[5], la financiación de la guerra y la estabilidad macroeconómica. Los últimos gobiernos han privilegiado el cumplimiento de los pactos con el FMI sobre la atención al gasto social que, expresado como porcentaje del PIB, se redujo a 13,4% en 2001, luego de haber alcanzado 16,7% en 1996, lo que supuso una disminución sistemática del gasto social por habitante de 438 a 332 dólares en ese período (Cepal, 2003, 25). Ello se traduce en una pérdida de cobertura y en una agudización de la inequidad en la distribución de los subsidios. "Y mientras el gasto social disminuye, el gasto en defensa, orden y seguridad aumenta. En los dos últimos años se ha intensificado el ritmo de crecimiento del gasto en defensa. El pie de fuerza sigue aumentando, y más ahora cuando el gobierno trata de hacer realidad la llamada *seguridad democrática* (...) y por la forma como ha sido concebida, las acciones gubernamentales asociadas a ella se reflejarán en una consolidación de la tendencia creciente del gasto militar. Y para que este mayor gasto sea compatible con el programa de ajuste fiscal, hay que disminuir los recursos de otros programas" (CID, CGR, 2003, 8). Mientras tanto, continúan los procesos de privatización y concesión en la prestación de los servicios públicos domiciliarios y sociales, acompañados de la eliminación de subsidios a los más pobres, lo que ha significado la conversión de los bienes públicos universales en mercancías a las que se accede como en cualquier mercado por el libre juego de la oferta y la demanda, con los consecuentes efectos regresivos sobre la garantía de derechos económicos, sociales y culturales, y la calidad de vida de los colombianos.

La política agraria no permite abordar los problemas históricos y estructurales del sector agrario y del campesinado: concentración de la riqueza, dificultades para el acceso a la propiedad, tenencia de la tierra y de los recursos productivos –sin contar que de ninguna manera contempla la posibilidad de una reforma agraria integral–, alto costo del dinero e insuficiencia de crédito para la producción, cuellos de botella en la comercialización de productos, desprotección agraria nacional, crisis ambiental, altos niveles de pobreza y violencia, entre otros (Prada, 2003b).

Las reformas llevadas a cabo en el campo laboral que han implicado la reconversión del Estado, la flexibilización de los contratos laborales, la elimina-

---

[5] "Hoy, más de 53% del presupuesto del gobierno central está destinado al pago de la deuda pública interna y externa. Esto, aunado a los gastos enormes ya comprometidos en defensa, seguridad y justicia, implica que hay una proporción muy reducida del presupuesto nacional susceptible de ser orientada a políticas sociales por parte del gobierno central" (Garay, 2003, 37).

ción de recargos salariales a los patronos, el incremento del número de contratos de aprendizaje, la reducción de costos de despido y la adopción de acciones para desmontar parte de la protección laboral, anuncian un incremento aún mayor del índice de desempleo[6] y una disminución del nivel de ingresos de las familias de los trabajadores. "En la perspectiva del nuevo mundo laboral, en el que la relación asalariada se hace cada vez menos importante, las nuevas oportunidades de trabajar están asociadas a la figura del 'cuenta propia' y a modalidades de contratación por servicios o de obra (...) con la consecuente precarización de los ingresos" (CID, CGR, 2003, 29-31), factores que contribuyen a ahondar la pobreza. A pesar de tener una mano de obra más barata y competitiva respecto al mercado internacional, los empresarios prefieren hacer contratos de servicios, trasladar las obligaciones de seguridad social a los trabajadores y evitarse el pago de tributos parafiscales, reduciendo los ingresos del Sena (entidad gubernamental encargada de tecnificar mano de obra), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las cajas de compensación familiar (Ibíd, 94).

La propuesta del actual gobierno de reforma a la administración de la justicia amenaza la independencia del poder judicial y atenta contra algunas conquistas fundamentales de la constitución política de 1991 como la acción de tutela (que se propone sea restringida y se excluya de ella los temas relacionados con derechos sociales y económicos, tampoco habría tutela contra decisiones judiciales ni se impondrá a las autoridades públicas obligaciones de imposible cumplimiento o que se propongan alterar leyes) y la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se ha opuesto a algunos de los contenidos de las políticas de seguridad que los dos últimos gobiernos han pretendido desarrollar y que, en ambos casos, tienden a limitar algunas libertades públicas y otorgar a las fuerzas armadas funciones de policía judicial. Las sentencias de esta misma Corte en materia de derechos económicos, sociales y culturales, han sido duramente criticadas por las elites económicas y políticas del país. "Las políticas sociales del poder ejecutivo y la contrarreforma constitucional se orientan hacia la creación de un Estado autoritario y presidencialista" (*Actualidad Colombiana*, 2003, 4- 5).

Las relaciones en materia de comercio internacional con EEUU, en particular, el proceso de negociación de Colombia con el ALCA y el eventual acuerdo bilateral de libre comercio con EEUU, como el que ha propuesto el gobierno nacional, no garantizan una inserción positiva del país, por cuanto las ventajas nacionales frente al mercado internacional y las reglas en los acuerdos multila-

---

[6] El desempleo se agudizó en la segunda mitad de los 90 y la desocupación promedio, alrededor de tres millones de colombianos, persiste desde mediados de 1999 hasta nuestros días. Además, el número de asalariados ha disminuido: entre 1994 y 2002 hay 900.000 empleos remunerados menos, mientras en el mismo período el número de independientes aumentó a 2.5 millones (CID, CGR, 2003, 29 a 31).

terales no son claras[7]. El sector agrario está preocupado por la exposición de sus economías en el ALCA, porque podría alterar negativamente la seguridad y la soberanía alimentaria nacional.

Si bien es cierto, la degradación del conflicto destruye riqueza, trunca las opciones de las personas que lo padecen y afecta el contexto económico, social, político e internacional para el desarrollo (PNUD, 2003, 99 y 111), los actores sociales no han permanecido incólumes ante la intensificación de la guerra, el creciente empobrecimiento o las decisiones de política gubernamental que los afectan de manera severa. Por el contrario, no han acallado su voz y han recurrido a diversas estrategias de resistencia social, una de las cuales la constituyen las acciones sociales colectivas, de carácter civilista, desarrolladas en el escenario público, para expresar intencionalmente demandas o presionar a las soluciones ante el Estado, en sus diferentes niveles, o ante entidades privadas. Estas luchas[8], de carácter puntual pero público, no deben ser tomadas como movimientos sociales aunque, en ocasiones, pueden ser la expresión manifiesta de ellos.

Los actores participantes en las luchas sociales se definen a partir de tres criterios: la existencia de un conflicto social específico, la identidad que se produce en torno a él y la intencionalidad de la acción emprendida. Criterios que, sumados a la visibilidad alcanzada, han permitido diferenciar el protagonismo de nueve actores: asalariados, pobladores urbanos, campesinos, grupos étnicos, mujeres, estudiantes, trabajadores independientes o por cuenta propia, gremios empresariales y reclusos.

Las luchas sociales: entre la resistencia y el cambio

Frente al contexto anteriormente descrito, distintos actores sociales han expresado su resistencia, protagonizado luchas sociales que, a pesar de dis-

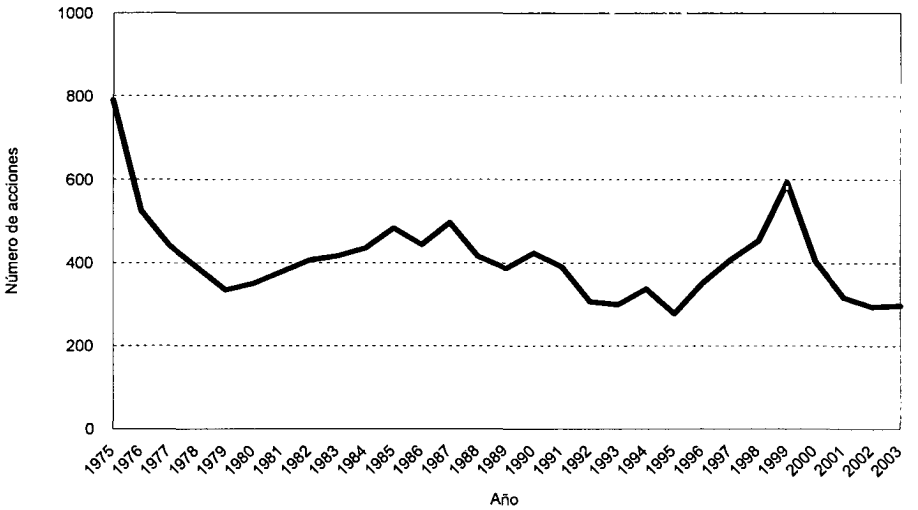
---

[7] Dentro de las condiciones que ha impuesto EEUU a los acuerdos bilaterales de Singapur y Chile está la libertad irrestricta para el movimiento de capitales, cláusula sobre la cual Bhagwati y Tarullo (2003) se pronunciaron así: "los libres flujos de capital (...) pueden generar pánico y llevar al colapso los mercados y las monedas sobre todo en los países en desarrollo" (CID, CGR, 2003, 37).

[8] Las cifras que sustentan este artículo provienen de la Base de Datos de Luchas Sociales de Cinep, cuya fuente de información básica es la prensa nacional y regional, noticieros radiales y de televisión; periódicos y boletines producidos por las organizaciones convocantes y participantes en los procesos de movilización social y entrevistas a sus líderes. Esta base da cuenta de los actores sociales, sus convocantes y adversarios, de las modalidades de lucha que asumen (paros, bloqueos de vías, movilizaciones, ocupación transitoria de entidades públicas, invasiones de tierras rurales y de suelos urbanos, y confrontaciones no armadas), de los motivos que tienen para manifestarse, de los contextos en los que llevan a cabo sus acciones y de las respuestas y logros que obtienen.

minuir en número con relación a las realizadas durante el último cuarto del siglo XX, como se muestra en la siguiente gráfica, han permitido que nuevas facetas de problemas estructurales emerjan, han revelado distintos aspectos de los conflictos sociales y políticos que vive el país y han puesto en evidencia la incapacidad o el desgano gubernamental para atender las demandas sociales y el manejo represivo que se ha hecho de los conflictos sociales que ellas expresan.

Dinámica de las luchas sociales en Colombia 1975-2003



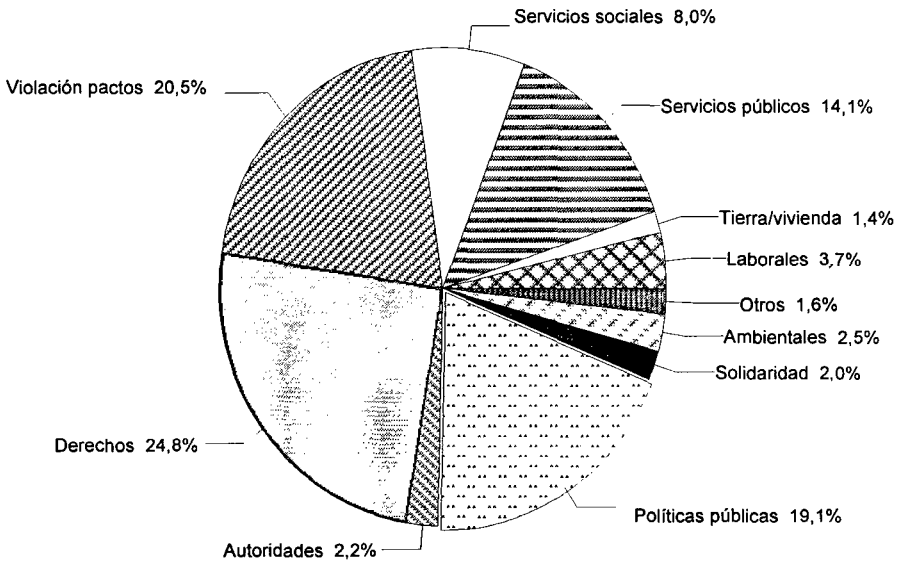
Los motivos de las luchas sociales[9]

Durante el último lustro, la población colombiana resuelta a manifestarse en el escenario público, reveló que los guerreros la tienen en la mira. Todos los actores sociales denunciaron algunos de los efectos del ajuste estructural al que está sometido el país y ratificaron en la práctica la observación hecha por el Banco Mundial: dadas las características del ajuste y las tendencias sobre la distribución del ingreso, nada garantiza una sostenibilidad democrática en el futuro mediato de América Latina.

[9] Los motivos de las luchas sociales constituyen la variable que intenta medir la percepción que los actores tienen acerca de las causas del conflicto social y se han clasificado desde aquellos que representan demandas materiales hasta aquellos más políticos y simbólicos (Archila y otros, 2003, 257-203).

La siguiente gráfica permite observar que una cuarta parte de las luchas sociales registradas durante el periodo 1998-2003 tuvo como motivo principal y explícito la demanda de protección y garantía de derechos, primando entre ellos, el respeto a la vida. Y es que en los últimos años, en Colombia, se ha ido desdibujando el campo de batalla militar y la población civil ha pasado a ser el blanco de las diferentes estrategias de las partes enfrentadas, como mecanismo de terror, afianzamiento político y social, repoblamiento y financiación de la guerra, sin que los contendores acepten su responsabilidad por los homicidios, los secuestros o el pillaje que perpetran (Cinep-Justicia y Paz, 2002, 33; Valencia, 1999, 13; CCJ y Cinep, 2000, 44.)

Demandas de las luchas sociales en Colombia 1998-2003



El segundo factor de protesta lo constituyó el recurrente incumplimiento de acuerdos establecidos durante ese lapso o en tiempos pretéritos. Si bien la violación de pactos provocó la mayoría de huelgas de los asalariados, otros actores sociales salieron al espacio público a denunciar que los acuerdos se firman pero no se cumplen.

Las protestas que reclamaron la reformulación de políticas públicas ocuparon el tercer lugar en la escala de motivos de las luchas sociales, y fueron protagonizadas por todos los actores colectivos. El plan de desarrollo del gobierno Pastrana desencadenó una oleada de protestas a lo largo y ancho del país, no

registrado en la historia de las luchas sociales. Cada sector social encontró en el proyecto señales que pronosticaban que sus condiciones de vida no mejorarían y por el contrario serían lesionadas aún más.

Las movilizaciones por servicios públicos e infraestructura física revelaron nuevas facetas de los problemas que giran a su alrededor: privatizaciones y concesiones que no respondieron a los argumentos neoliberales de mejorar la prestación de servicios o la calidad en las obras civiles y por el contrario han aumentado sus tarifas y se han impuesto nuevas tasas para mantenerlos.

Los servicios sociales, y entre ellos la educación, la seguridad ciudadana, la atención a la infancia, a la tercera edad, a los indigentes y la salud, han sido reivindicados en su calidad de derechos de toda la población.

Los motivos estrictamente laborales han disminuido ostensiblemente, como factores de movilización, en parte, por el temor de los asalariados de ser despedidos de sus puestos y por los altos índices de desempleo.

Las luchas referidas a problemas ambientales, aunque pocas, fueron motivadas por los impactos negativos de la construcción de megaproyectos sobre las comunidades y culturas indígenas, las economías campesinas, la seguridad alimentaria y la biodiversidad. Otros asuntos ambientales que generaron protestas fueron la falta de acciones eficaces para prevenir y gestionar riesgos y atender damnificados; y la incapacidad de la planificación urbano regional para atender la provisión y manejo de aguas y residuos, sin afectar el entorno y pensando en el futuro.

Los abusos cometidos por autoridades civiles y militares, en razón del cargo que ocupan, los desacuerdos con la gestión que realizan y la corrupción que corroe las instituciones públicas generaron protestas de parte de todos los actores.

Las expresiones de solidaridad, aunque bajas en número, manifestaron su apoyo a las demandas de otros sectores en conflicto, defendieron los derechos de poblaciones que se encontraban en medio de operativos militares, y superaron las luchas motivadas por la tierra y la vivienda. No se ha dejado de luchar por ellas. Hoy se reclaman políticas globales para responder a la crisis del agro colombiano o políticas sectoriales efectivas para atender el déficit vivienda.

Participación de distintos actores en las luchas sociales recientes

De las luchas sociales acaecidas en el último quinquenio, 83,2% fueron protagonizadas por pobladores urbanos, asalariados, campesinos e indígenas y estudiantes. Los trabajadores independientes o por cuenta propia, los gremios empresariales, las mujeres y los reclusos, aunque muestran pocas luchas, han venido haciéndose más visibles en el escenario público por diversas razones que se señalarán más adelante.

Los pobladores urbanos luchan por el derecho a la ciudad y por vivir en paz

Los pobladores urbanos tuvieron la mayor actividad reivindicativa durante el último quinquenio y más de un tercio de sus luchas tuvo su origen en la persistente violación de derechos civiles y políticos: secuestros, masacres y amenazas dirigidas contra líderes sociales y políticos, perpetradas por agentes armados ilegales, la presencia y el accionar de la guerrilla y los paramilitares, la inclusión de civiles en la confrontación armada, la desatención a los desplazados y las acciones de "limpieza social"[10].

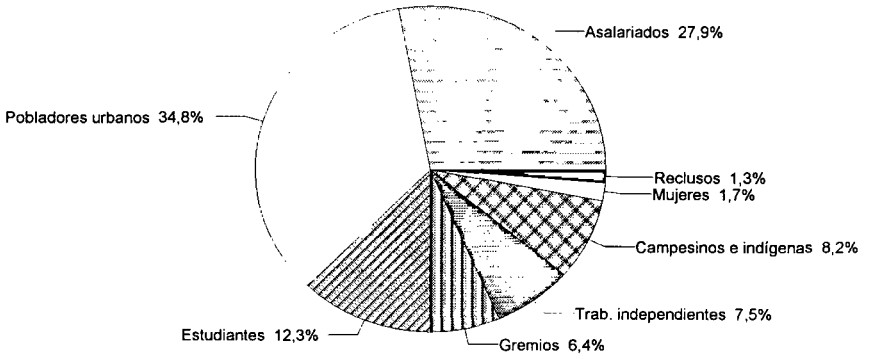
La exigencia del derecho a la ciudad por parte de los pobladores se expresa en las demandas por vivienda, servicios públicos y sociales y un ambiente sano. Durante el último lustro, los problemas de financiación de vivienda causaron una oleada de protestas en el país por parte de los deudores de créditos que debieron devolver los inmuebles en dación de pago ante la imposibilidad de sufragar los gastos de la deuda. Los efectos de la privatización de la administración, distribución y facturación de los servicios públicos domiciliarios sobre la calidad y las tarifas de éstos[11] y la presencia de fuentes de contaminación en las inmediaciones de zonas de habitación también motivaron acciones colectivas en los pobladores urbanos. A ello se suma la manifiesta incapacidad de las administraciones locales para afrontar el crecimiento urbano, incrementado en algunas regiones del país por la llegada de cientos de desplazados forzados que, además de refugio, piden un entorno digno para vivir.

---

[10] Es un tipo de violencia orientada contra personas que no sólo tienen unas determinadas conductas consideradas como desviadas, sino que además pertenecen a sectores socioeconómicos marginados, fenómeno fundamentalmente urbano que se inició en 1979 como hechos aislados contra prostitutas y homosexuales y hacia 1990 cobraba la vida de más de 400 personas por año (Rojas, 1994) y entre sus víctimas preferidas se encontraban indigentes y jóvenes de los barrios populares y cobró una modalidad distinta, pero ya extendida por el país: las masacres (García, 2003, 92).

[11] Los pobladores urbanos han pedido al gobierno nacional poner fin a los contratos con operadores privados y entregarlos a las administraciones locales y han planteado que el Estado cumpla con las exigencias impuestas por el FMI sin trasladar la carga financiera del endeudamiento a los usuarios.

Participación de actores en las luchas sociales 1998-2003



Entre las demandas por servicios sociales, primaron las referidas a problemas de cobertura educativa. La inseguridad impulsó a poblaciones enteras a pedir la presencia de la fuerza pública y el cumplimiento del mandato constitucional de preservar la vida, honra y bienes de los pobladores. La exigencia de aumento de partidas para atender a la población infantil y a ancianos, así como movilizaciones de indigentes pidiendo asistencia social, dejaron al descubierto la falta de políticas para atender a los sectores más vulnerables de la población. Aunque la profunda crisis de la red hospitalaria pública llevó al cierre de varios hospitales, sus usuarios poco se movilizaron en su defensa y dejaron esa tarea a los trabajadores de la salud.

Entre las políticas públicas que fueron blanco de las protestas de los pobladores urbanos están los programas de renovación y ordenamiento urbanos, la imposición de altas tasas de interés[12], el plan nacional de desarrollo y la política de paz del gobierno de Pastrana, la reforma política del actual gobierno y la decisión del presidente Uribe Vélez de apoyar la reciente guerra contra Irak.

Los asalariados contra la reducción del mundo del trabajo

Durante 1998-2003, el número de huelgas, de huelguistas y de jornadas no laboradas por motivo de huelga disminuyó persistentemente, hecho sin precedentes en los últimos veinte años, debido a que los trabajadores del Estado

[12] Las altas tasas de interés que impuso el Banco de la República entre 1994 y 2000 frenaron el crecimiento económico, profundizaron la recesión, deterioraron el balance de las empresas, afectaron negativamente la situación de los deudores y profundizaron la crisis fiscal (CID, CGR, 2003, 90).

(que son los únicos en la economía que siguen al frente de las protestas laborales) perdieron la capacidad de movilización. Las reformas gubernamentales encaminadas a reacomodar el aparato estatal a las exigencias del capital internacional, ofrecer las propiedades públicas al mercado y adelgazar al máximo la función social del Estado[13] han golpeado de manera severa a los asalariados, al disminuir medio siglo de logros económicos y políticos de los que gozaban los trabajadores de las más importantes empresas estatales, entre los cuales cabe destacar las prestaciones laborales y las mismas convenciones colectivas de trabajo. Con la reestructuración del aparato estatal, centenares de empresas de todo tamaño fueron liquidadas, alrededor de 22.300 empleados fueron despedidos y muchos sindicatos entraron en receso o desaparecieron de la actividad pública (Delgado, 2003, 31).

Los trabajadores han dado la pelea pero no están en condiciones de ofrecer otra resistencia diferente a la que se ha producido en los últimos años. Si la política laboral actual desconoce y excluye a las organizaciones sindicales de la toma de decisiones, debilita los espacios de concertación laboral y criminaliza la acción legal y legítima de los sindicatos, la política de seguridad aumenta la represión al derecho de asociación sindical, la calificación de las huelgas como ilegales, los hostigamientos a la protesta y el incremento de las amenazas a los trabajadores sindicalizados en momentos de resolución de conflictos laborales (ENS, 2003).

Como el sindicalismo del sector privado está casi paralizado, la mayoría de las protestas corresponde al ámbito público, donde los empleados de la salud, del magisterio y los trabajadores de la empresa estatal de petróleos (Ecopetrol) siguen ocupando los primeros lugares.

Los motivos que impulsaron las huelgas permiten verificar el proceso de degradación de los derechos de los trabajadores. Más de la mitad de los ceses laborales se originó en la violación de las normas legales o cláusulas convencionales (en primer lugar, retención de factores salariales: salarios, horas extra, recargos nocturnos y festivos, prestaciones legales y extralegales, cuotas a los fondos de seguridad social o vivienda, intereses de cesantías). Las protestas de signo político, en su mayoría contra las políticas económicas y sociales del gobierno, impulsaron 19% de las huelgas pero movilizaron a más de ocho millones de trabajadores, mientras la huelga por negociación de petitorios (por motivos estrictamente laborales), apenas arrojó 10,4% del total de los

---

[13] Esto se refiere a la ley que modificó las transferencias del Estado central hacia las entidades territoriales, la ley de ajuste fiscal, la reestructuración de las nóminas, la reforma del régimen pensional, la reforma del régimen salarial de los docentes universitarios, a las que se suman las facultades extraordinarias del actual presidente para reestructurar las empresas del Estado, que implican la fusión y liquidación de alrededor de 41 empresas estatales, entre ellas Ecopetrol, el Instituto de Seguros Sociales y la Empresa de Telecomunicaciones, Telecom.

ceses laborales. Casi la totalidad de las huelgas por asesinato o desaparición de líderes sindicales recayó en los petroleros (Delgado, 2002, 18).

Los estudiantes luchan por la educación pública

Los estudiantes de secundaria, a través movilizaciones y de ocupaciones de sus colegios, denunciaron que el recorte presupuestal en educación ordenada por gobierno nacional, como medida de ajuste y austeridad en gasto, derivó en el despido de maestros, en un caos en la contratación y remuneración de catedráticos, en la fusión de diversos establecimientos educativos y en la amenaza de acabar con la jornada nocturna –esencial para jóvenes trabajadores. Los universitarios protestaron contra el desmonte de los recursos parafiscales y el cambio de régimen laboral de 25.000 docentes de 19 universidades públicas, denunciaron la disminución y, en algunas instituciones, el manejo corrupto de los recursos destinados a la educación pública, el cierre de hospitales universitarios y de institutos de investigación científica y sentaron su voz de protesta contra la intención de actores armados de trasladar el conflicto a los campos universitarios y les exigieron mantener los establecimientos educativos por fuera de la confrontación violenta. Ante las amenazas y acciones de los grupos armados, exigieron su derecho a la organización y a la protesta y marcharon para pedir la liberación de compañeros secuestrados y desaparecidos.

Durante 1999 la comunidad educativa demostró una alta capacidad de movilización contra el plan de desarrollo del gobierno de Pastrana Arango porque pretendía desaparecer el carácter público de la educación al modificar los aportes del Estado a las universidades públicas y atentar contra la autonomía universitaria. Y en el último año protestó contra el autoritarismo que esgrime el actual presidente y contra los recortes a las libertades democráticas. Como lo han mostrado a lo largo de la historia del país, los estudiantes siguen siendo los abanderados de la solidaridad con otros sectores en conflicto o en medio del conflicto.

Campesinos e indígenas: resistencia ante la guerra y el hambre

Durante el último quinquenio, se presentó un descenso significativo de la protesta de campesinos e indígenas, en relación con períodos anteriores, lo que contrasta con el incremento de los éxodos masivos y de los desplazados internos. El cambio de la dinámica de las luchas de estos actores "se explica, en parte, por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, la disputa entre los grupos armados ilegales por vastos y ricos territorios y los desplazamientos forzados por la violencia" (Prada, 2003a, 142-143).

Por ello no es de extrañar que la mitad de las protestas realizadas por campesinos, afrodescendientes e indígenas expresara su resistencia frente a la guerra desatada en el campo. Y han sido las poblaciones indígenas del sur

del país (departamentos de Cauca, Nariño y Caquetá) las que más han recurrido a nuevas formas de acción colectiva, que han dado en llamar "resistencia civil", para defender sus vidas, su patrimonio cultural y su dignidad, y para expresar su repudio a toda acción de grupos armados sobre sus territorios. Cantos y danzas tradicionales, cordones humanos, despliegue de banderas blancas, en algunas oportunidades, han sido eficaces contra el fuego de las armas y para ahuyentar temporalmente la guerra de su entorno. Son señales de que la gente no quiere seguir sometida a la violencia que azota la región y que aspiran a que sus territorios sean espacios para el desarrollo regional y la inversión social.

De otra parte, los desplazados, a través de acciones colectivas locales, regionales y nacionales –en su mayoría, tomas de entidades–, dejaron al descubierto la ausencia de una política gubernamental eficiente (a pesar de la existencia de una ley para brindar ayuda a esta población específica) para superar la crisis humanitaria en el país, prevenir el desplazamiento, brindar asistencia humanitaria, atender a la reubicación en los lugares recepción y otorgar garantías para retornar a sus parcelas.

Algo más de la cuarta parte de las luchas de campesinos y grupos étnicos, durante el último lustro, demandaron medidas en torno de la política agraria, entre ellas, alivio a las deudas crediticias, cese a la importación de alimentos y a la fumigación de cultivos de uso ilícito e implementación de programas eficientes de sustitución de dichos cultivos y reformulación de las políticas cafetera y agraria.

El incumplimiento de acuerdos suscritos en anteriores protestas ocupó el tercer motivo de las luchas. Campesinos e indígenas se vieron obligados a protestar una y otra vez para que el gobierno cumpliera con lo pactado y aún así el gobierno hizo caso omiso de los reclamos. Las protestas por motivos ambientales advirtieron que de no atender de manera inmediata los daños ocasionados por la construcción de hidroeléctricos y carreteras, las comunidades indígenas y campesinas serán despojadas de sus tierras, las pérdidas ambientales serán irreversibles, con graves efectos económicos y sociales para las regiones donde ellas habitan.

En los últimos años, han descendido notablemente las luchas por la tenencia y titulación de tierras. Y no es que el problema de escasez de tierras se haya solucionado o aminorado. Por el contrario: la concentración de la propiedad se ha acentuado[14], los usos del suelo se han modificado y mafiosos, grupos armados ilegales y empresas multinacionales han entrado en la disputan por el control de tierras rurales. Sin embargo, organizaciones campesinas, afrocolombianas, indígenas y de desplazados prepararon una movilización

[14] En 2001, 0,35% de los propietarios de más de 500 hectáreas controlaban el 61,2% de la superficie (Fajardo, 2002, 11).

nacional que se realizó en abril del 2003 para entregar al gobierno nacional el Mandato Agrario Nacional, resultado del Congreso Nacional Agrario, que hizo parte de la campaña por el derecho a la tierra. El documento es una propuesta de política pública para el campo que aborda asuntos como la protección y garantía de derechos fundamentales (a la vida, a la tierra, derechos de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes), las libertades democráticas; el fin del desplazamiento forzado y la solución política al conflicto social y armado, la soberanía y la seguridad alimentarias; alternativas al ALCA y a otros acuerdos de libre comercio; la protección del medio ambiente y la concertación de políticas con los campesinos vinculados con la producción de cultivos de uso ilícito.

Los trabajadores por cuenta propia: por el derecho a un trabajo digno

Durante el último quinquenio, el desmesurado incremento de los trabajadores por cuenta propia ha contribuido a visibilizar su demanda fundamental: el derecho a trabajar. Derecho que los vendedores ambulantes reclaman cuando se enfrentan con la fuerza pública que realiza operativos de "restitución del espacio público para la circulación los ciudadanos". Ante la persecución, los abusos de la fuerza pública y la confiscación de mercancías que ya se ha vuelto cotidiana en los centros urbanos, han pedido a las administraciones municipales crear mesas de negociación y reubicación concertada, y exigen a las autoridades acatar la sentencia de la Corte Constitucional, proferida en 1999 en su favor, que exige no llevar a cabo desalojos del espacio público sin haber definido una reubicación que les garantice el derecho al trabajo.

Otros trabajadores por cuenta propia que se lanzaron a la protesta en este período fueron los "pimpineros" (comerciantes de gasolina de contrabando), quienes bloquearon vías entre Colombia y Venezuela y en algunos municipios de la costa atlántica, para rechazar los decretos gubernamentales tendentes a prohibir la actividad de la cual derivan su sustento y para pedir alternativas para cambiar de oficio.

Pero pocas son las alternativas que se ofrecen a estos sectores sociales. Ningún plan de relocalización de los ambulantes podrá satisfacer la creciente demanda por una pequeña porción de espacio callejero para ofrecer sus mercancías y las actividades ilícitas de los gasolineros están siendo perseguidas sin oferta de sustitución viable.

Los gremios empresariales: a la defensa de sus actividades económicas

Los gremios empresariales que han utilizado el recurso de la movilización colectiva para ejercer presión para satisfacer sus demandas son los de transportadores y comerciantes. Los primeros protestaron durante el quinquenio

contra las continuas alzas del precio de la gasolina[15], contra el control de carga, la inseguridad en carreteras y terminales de transporte, contra las amenazas y acciones de bandas armadas, contra medidas destinadas a renovar el parque automotor, contra el cobro del IVA a los insumos y pidieron concertación con las administraciones municipales sobre normas ambientales y acciones efectivas de control al transporte pirata.

Por su parte, los comerciantes protestaron contra la política fiscal expresada en las medidas tributarias que exigen el pago de impuestos de importación y la legalización de mercancías. Pidieron dos años de plazo para legalizar mercancías, suspender las investigaciones contra supuestos evasores de impuestos e instalar mesas de negociación para discutir la penalización contenida en la reforma tributaria.

Las mujeres resistiendo a la guerra

Las acciones colectivas públicas de las mujeres, aunque escasas en número, han tenido como bandera de lucha la defensa de los derechos individuales y colectivos y muestran la capacidad que tienen las organizaciones femeninas para poner en la esfera pública asuntos políticos de gran envergadura.

Entre las acciones colectivas adelantadas por mujeres, en los últimos cinco años, se destacan las protagonizadas por las madres de los soldados y policías retenidos por las FARC, encaminadas a pedir al grupo guerrillero pruebas de supervivencia de sus hijos, presionar al gobierno a favor del canje y solicitar la solidaridad ciudadana en torno a la liberación de los secuestrados. Tras la negativa gubernamental de usar la figura del canje, continuaron movilizándose para pedir al gobierno y a la guerrilla la firma de un acuerdo humanitario que permitiera la liberación de sus hijos.

Estas mujeres campesinas, amas de casa, fueron "socializando su maternidad" –como lo hicieron las Madres de la Plaza de Mayo–, en medio de sus encuentros, de sus gestiones y de sus mítines. De las manifestaciones públicas de su dolor de madres, esposas, compañeras, hermanas o amigas pasaron a hacer exigencias políticas ante el gobierno y la guerrilla.

El 2 de junio de 2001, el gobierno y las FARC firmaron un acuerdo humanitario de intercambio de uniformados enfermos por guerrilleros en igual condición[16], y 26 días después este grupo guerrillero entregó a organismos humanitarios 242 soldados y policías rasos. Aún permanecen en manos de la guerrilla 47 miembros de las fuerzas armadas y sus familiares marchan un día a la se-

---

[15] Durante 1999 se produjeron seis alzas y el combustible aumentó 34%.

[16] Acuerdo que facilitó la liberación de 59 miembros de la fuerza pública y la salida de catorce guerrilleros de las cárceles.

mana en plazas centrales de ciudades capitales y han conformado organizaciones que no cejan en su objetivo de volver a reunirse con sus parientes[17].

Desde hace varios años, tanto el Día Internacional de la Mujer como el Día Internacional de la No violencia contra la Mujer son conmemoraciones durante las cuales las mujeres expresan públicamente su rechazo a toda forma de violencia: el hambre, el maltrato, la discriminación, la violación de los derechos; exigen el derecho a la paz y a la democracia, a la equidad de género; se solidarizan con las víctimas del conflicto armado[18], y reiteran su intención de "no parir un hijo más para la guerra".

Bajo el lema "las mujeres paz-harán", se movilizaron para exigir a actual gobierno abrir espacios de reconciliación basados en el cese al fuego y en acuerdos humanitarios que lleven a liberación de secuestrados y al retorno de los desaparecidos y se declararon en contra de la militarización de la vida civil.

Las mujeres se han vestido de luto para protestar públicamente contra actos de los violentos, para pedirles que no maten a sus maridos ni a sus hijos, que no las involucren a ellas en el conflicto, que no las maltraten ni las violen. Les piden a los guerreros que la vida y el cuerpo de las mujeres no se convierta en un espacio más para la guerra.

Algunos grupos de homosexuales participan de la misma causa, como lo vienen expresado públicamente durante la celebración del Día Internacional del Orgullo Gay, cuando le han pedido al Estado y a la sociedad el reconocimiento de su igualdad en derechos y de su diferencia en preferencias sexuales, y han protestado contra la violencia "porque, esa sí, no distingue inclinación sexual" y han lanzado la consigna: "Por una Colombia incluyente, el cuerpo, primer territorio de paz".

Los reclusos se rehusan a perder todos sus derechos

Quienes están recluidos en centros penitenciarios no han sido refractarios al tema de la paz. Por el contrario, han dado varias muestras en los últimos años de su intención de ser partícipes en la resolución política del conflicto armado interno que vive el país. Han llevado a cabo mítines por la paz, contra el secuestro, se han pronunciado a favor y en contra de propuestas negociación entre gobierno y grupos armados ilegales.

---

[17] Entre ellas, las Madres de la Plaza de Bolívar y las Madres de la Candelaria.

[18] Durante el último lustro, con amplia participación nacional e internacional, las organizaciones y redes de mujeres realizaron dos marchas, hacia Barrancabermeja, epicentro de la región del Magdalena Medio, una de las más azotadas por la violencia, para expresar solidaridad con su pueblo y para rechazar los continuos hostigamientos por parte de los grupos paramilitares a la Organización Femenina Popular.

Pero también, y sobre todo, han exigido que la cárcel no sea un sitio ajeno al derecho. Por ello, han pedido mejoras carcelarias: atención médica, mejor calidad de la alimentación, procesos de resocialización. Han protestado ante la grave situación de hacinamiento, el pésimo estado de las infraestructuras de los penales, la restricción de visitas, la falta de oportunidades de trabajo –lo que no les permite acceso a rebaja de penas–; han denunciado atropellos de directores de cárceles y guardianes, malos manejos administrativos, incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades carcelarias y municipales, y han puesto en evidencia la ineficiencia del aparato judicial y la lentitud de los procesos judiciales.

En buena parte de sus protestas, desde los años 90, los reclusos han sido acompañados por sus familiares, quienes han intervenido ante los órganos judiciales para exponer las demandas de los internos.

El tratamiento gubernamental a las luchas sociales: para la muestra un botón

El gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) fue sordo a los reclamos de los actores sociales y pareció estar más atento a los de actores armados. Este mensaje ambiguo fue respondido por diversos sectores sociales con formas extremas de acción colectiva que, en ocasiones, fueron estridentes, en otras, simbólicas y, en las menos, violentas. Cuando el anterior gobierno abrió espacios a la negociación de demandas sociales lo hizo de manera discriminada: prefirió atender a los gremios empresariales y excluir a sectores con menor capacidad de presión. Mientras el presidente Pastrana hacía "diplomacia para la paz" en el exterior, desplazados, vendedores ambulantes, campesinos ocupaban oficinas de organismos internacionales (la del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Nunciatura Apostólica) y realizaban mítines ante embajadas, como formas de protesta encaminadas a dar a conocer conflictos sociales y pedir mediación de agentes externos ante el gobierno colombiano.

Las protestas ocurridas durante el primer año del gobierno de Uribe Vélez (2002-2003) se presentaron en un contexto de estado de excepción, de la conversión de algunas regiones en zonas de rehabilitación, de la conformación de redes de informantes, de la escalada de terror en ciudades capitales y carreteras, y en un ambiente de polarización del Estado y de una parte de la sociedad en torno de la guerra total contra el terrorismo y de la unanimidad de pensamiento que convierte en enemigo del establecimiento a todo el que se atreva a protestar.

Mientras el presidente Uribe manifestaba ante la Asamblea de la ONU, en Nueva York, a mediados de septiembre de 2002, que respetaría la controversia y que su política de seguridad no pretendía acallar la crítica, varios actores sociales se unieron para darle la "bienvenida" al nuevo gobierno con una jor-

nada nacional de protesta que fue reprimida: marchas de estudiantes, sindicalistas y campesinos fueron bloqueadas por el ejército, hubo detenciones y varios extranjeros fueron deportados, tras indagatorias, por participar en movilizaciones indígenas. Las medidas de seguridad fueron reforzadas para "prevenir actos terroristas y sabotajes" y los militares aseguraron que la movilización era orquestada por las FARC. El Defensor del Pueblo aseveró que, al declarar ilegal el paro, el gobierno estaba violando los derechos ciudadanos de protestar contra lo que consideraban injusto (El *País*, 18-11-2002, A5).

Para concluir

Las luchas sociales a las que nos hemos referido resultan contestarias frente a la situación que padecen los actores sociales y al discurso dominante, sin embargo, no debe perderse de vista que sólo hemos tratado una de las múltiples formas de resistencia social que hoy se presenta en el país ante los cambios políticos que se adelantan que, para nuestro caso, no van en el sentido de la ampliación de la democracia ni de la extensión y garantía de los derechos a la sociedad en su conjunto.

Ante los vientos que soplan en el país, ante los niveles de exclusión económica, social y política que presenta Colombia, los actores sociales tienen tareas ineludibles, entre ellas, exigir al actual gobierno y a los actores armados adelantar un proceso de negociación política y jugar un rol fiscalizador sobre el Estado en términos de limitar su poder y de subordinarlo al régimen democrático.

Bibliografía

Actualidad Colombiana (2003): "Qué queda de la justicia?", año XIV, n° 365, Bogotá, agosto 13 al 27, pp. 4 y 5.

Archila, Mauricio, Álvaro Delgado, Martha Cecilia García y Esmeralda Prada (2003): *25 años de luchas sociales en Colombia. 1975-2000*, Bogotá, Cinep.

Bolívar, Ingrid (2003): "La simplificación de la política", *Cien días vistos por Cinep*, vol. 11, n° 52, Bogotá, enero-julio, pp. 4-8.

Centro de Investigaciones del Desarrollo (CID), Universidad Nacional de Colombia y Contraloría General de la República (CGR) (2003): *Bienestar y macroeconomía. Informe de coyuntura,* Bogotá, tomado de: www.currie.fce.unal.edu.

Cepal (2003): *Panorama social de América Latina. 2002-2003*, tomado de: www.eclac.cl.

Cinep-Justicia y Paz, Banco de datos de derechos humanos (2002): "Las dimensiones de la guerra", *Cien días vistos por Cinep*, vol. 1, n° 50, Bogotá, febrero-mayo, pp. 33-35.

_____ (2003): "Año crítico en derechos humanos", *Cien días vistos por Cinep*, vol. 11, n° 52, Bogotá, enero-julio, pp. 33-38.

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y Cinep (2000): "Dos años de gobierno Pastrana: agravamiento de la crisis humanitaria", *Agenda para la superación de la crisis humanitaria en Colombia*, Bogotá.

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) (2003): "La respuesta gubernamental al desplazamiento forzado", *El embrujo autoritario. Primer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez*, Bogotá, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, pp. 121-131.

Delgado, Álvaro (2002): "La huelga perdió su eficacia", *Cien días vistos por Cinep*, vol. 10, n° 51, Bogotá, junio-noviembre.

_____ (2003): "Despedir, despedir y despedir", *Cien días vistos por Cinep*, vol. 11, n° 52, Bogotá, enero-julio, pp. 32-32.

Escuela Nacional Sindical (ENS) (2003): Informe presentado en el Encuentro Internacional Sindical: "Impactos de la globalización en el trabajo y los derechos laborales", Foro Social Mundial Temático, Cartagena, junio 17.

El Tiempo (2002): Informe de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y paz: "Balance de la administración Pastrana. Desplazados: un millón más", Bogotá, 6 de julio, pp. 1 y 20.

Fajardo, Darío (2002): "Tierra, poder político y reforma agraria y rural", *Cuadernos Tierra y Justicia*, Bogotá, ILSA.

Garay, Luis Jorge (2003): "Políticas públicas y garantía de los DESC", *El embrujo autoritario. Primer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez*, Bogotá, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, pp. 33-44.

García, Martha Cecilia (2003): "Luchas urbano-regionales" en Mauricio Archila y otros, *25 años de luchas sociales en Colombia. 1975-2000*, Bogotá, Cinep, pp. 71-120.

González, Fernán (2002): "Colombia entre la guerra y la paz. Aproximación a una lectura geopolítica de la violencia colombiana", *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 8, n° 2, Caracas, mayo-agosto, pp. 13-49.

_____ (2003): *Manuscritos sobre la coyuntura nacional*, Bogotá, Cinep junio.

González, Jorge Iván (2003): "Referendo y equilibrio fiscal", *Cien días vistos por Cinep*, vol. 11, n° 52, Bogotá, enero-julio, pp. 23-24.

Prada, Esmeralda (2003a): "La lucha por los derechos. Campesinos, afrodescendientes e indígenas: tras el velo de la guerra", *El embrujo autoritario. Primer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez*, Bogotá, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, pp. 133-147.

Prada, Esmeralda (2003b): *Manuscritos sobre la coyuntura nacional*, Bogotá, Cinep, junio.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2003): *El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia-2003*, Bogotá, PNUD.

Rojas, Carlos (1994): *La violencia llamada "limpieza social"*, Bogotá, Cinep.
Valencia Villa, Alejandro (1999): "Los actores del conflicto y las vicisitudes de lo humanitario: Entre la peste y la deshonra", *Cien días vistos por Cinep*, vol. 10, n° 45, Bogotá, julio-noviembre, pp. 13-16.

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2004, vol. 10, n° 1, (ener.-abr.), pp. 175-202

MOVIMIENTO INDÍGENA, DEMOCRACIA, ESTADO Y PLURINACIONALIDAD EN ECUADOR

Pablo Dávalos

Introducción

América Latina vive tiempos de cambio. Los procesos de movilización y resistencia social en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en México, entre otros países, evidencian que existe un real agotamiento del modelo de ajuste y reforma estructural, así como del modelo de democracia que le era correlativo. Han surgido en la región importantes movimientos sociales, con agendas nuevas, con expectativas diferentes, con visiones de futuro provocadoras. América Latina ha sido la región más duramente golpeada por la crisis de la deuda y por la imposición de las políticas de ajuste y reforma estructural. Ha sido también el escenario en el cual se ha experimentado la democracia como un sistema político que procesa los conflictos de acuerdo con los requerimientos del poder. Es en América Latina en donde ha surgido, entre los nuevos movimientos sociales, el movimiento indígena, con una fuerte presencia política en México, Bolivia y Ecuador, y con fuerte desarrollo organizativo en Perú, Guatemala, entre otros países de la región. La guerra del gas en Bolivia, en octubre de 2003, en la cual el movimiento indígena tuvo una fuerte presencia política, así como el proceso del movimiento indígena mexicano y el movimiento indígena ecuatoriano, dan cuenta del avance significativo que el movimiento indígena ha logrado en el continente.

De los movimientos indígenas existentes en la región, quizá uno de los más fuertes en lo organizativo y político sea el movimiento indígena ecuatoriano. Desde su insurgencia pública en 1990, hasta la reciente participación en elecciones generales en 2002, y su ruptura con el gobierno de Lucio Gutiérrez, el movimiento indígena ha signado con su presencia el debate político en el Ecuador contemporáneo.

El presente texto realiza una lectura del proceso político del movimiento indígena ecuatoriano y de su enfrentamiento con el sistema político; para el efecto trabaja desde varias líneas: primero, parte de una hipótesis general en la cual la política se inscribe dentro de un sistema que la codifica, la estructura, la norma, la regula y le otorga tanto las nociones de sentido como los marcos

institucionales de acción, es el sistema político. En el sistema político existe un sistema de representación que es clave a la hora de definir a la democracia y de construir los consensos (¿o hegemonías?), y administrar los disensos.

El sistema de representación ha estructurado un marco mínimo de condiciones que sirven de base para la representación electoral en un contexto denominado como democrático, en ese marco mínimo consta su definición de ciudadanía y de participación social, entre otras. Pero este sistema político es un correlato de un sistema económico que se estructura en la producción social de un excedente y en su apropiación individual. Ambos sistemas son parte de una estructura de poder. De ahí que para entender al movimiento indígena haya que situarlo dentro de esa matriz general. Su acción política solamente puede ser comprendida dentro de la referencialidad más amplia que le otorga ese sistema político y su contraparte económica. La lucha del movimiento indígena es justamente por abrir ese sistema político, por provocar cambios en las nociones de la representación, en la concepción del Estado, a la vez que provocar cambios en la estructura económica.

Por ello, el presente texto parte de una constatación: los tiempos del sistema político, así como sus prioridades y su agenda, no coinciden con los tiempos de la movilización social, y no sólo que no coinciden sino que son contrapuestos. Hay una dialéctica en esos tiempos que expresa una dialéctica de la confrontación social. De ahí que se ponga como ejemplificación de esa dialéctica el levantamiento indígena de 1990 y las elecciones de medio período de la misma fecha. En esos dos eventos, las dos dinámicas no llegan a encontrarse y pugnan por deslegitimarse mutuamente.

El movimiento indígena ecuatoriano comprende que si quiere lograr cambios en el Ecuador tiene que pasar necesariamente por el régimen político. Pero se trata de una transición compleja, porque no puede acercarse a ese régimen político desarmado como movimiento social, si lo hace terminaría por perder el horizonte de su proyecto y subsumiéndose a los requerimientos del sistema político, es decir, del poder.

Para poder transitar por ese régimen político sin perder la identidad de su proyecto, el movimiento indígena tiene que transformarse a sí mismo, tiene que superar su condición de movimiento social y constituirse en sujeto político, pero para hacerlo necesita desarrollar una agenda que no sea étnica, sino que desde lo étnico plantee un nuevo deber ser para el Estado y para la sociedad.

Si el movimiento indígena persiste en mantenerse como movimiento social, su agenda étnica es válida y podría ejercer presión para que algunos elementos de su agenda puedan ser incorporados al debate político nacional, pero si quiere constituirse en referente social, debe cambiar su agenda sin perder su identidad étnica, debe convertir a esa agenda en un proyecto nacional, posible históricamente, inclusive en su formulación y viable fácticamente. El movimien-

to indígena ecuatoriano logra esa transición gracias a su propuesta de *plurinacionalidad del Estado.*

Es esta propuesta la que le permite cambiar los ejes de su discurso y transitar en el árido y lleno de trampas territorio del sistema político. Es desde esa lógica que debería entenderse la creación del movimiento político Pachakutik, efectuada en 1996. El texto plantea que la constitución de este espacio político del Pachakutik sólo puede entenderse dentro de la dialéctica de lucha de clases con el sistema político y dentro de la dialéctica interna del movimiento indígena en su transformación como sujeto político.

De otra parte, el texto realiza una lectura del proceso de la Asamblea Constituyente de 1998, un proceso que fue motivado, respaldado y realizado desde la demanda de los movimientos sociales, las organizaciones populares y el movimiento indígena. Es necesaria esta lectura porque el sistema político pudo asimilar esas resistencias, esas movilizaciones populares para finalmente aprobar un texto constitucional muy favorable a los intereses del poder.

El texto plantea algunas hipótesis que explicarían esa contradicción. La referencia a este proceso ahora aparece como una prioridad por las circunstancias que atraviesan los movimientos sociales y el movimiento indígena en otros contextos, especialmente en Bolivia. Allí, luego de la destitución de Sánchez de Lozada, se ha exigido la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Sería conveniente que el movimiento indígena y social boliviano estudie procesos similares para no cometer errores y para posicionar de mejor manera su agenda.

1. Los desencuentros de la política y la política de los desencuentros

5 de junio de 1990: los indígenas del Ecuador, organizados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Conaie, realizan el primer levantamiento indígena desde el retorno de la democracia en 1979. Este levantamiento retoma las prácticas de las sublevaciones indígenas que se dieron a todo lo largo de la colonia y la era republicana (Moreno Yáñez, 1997). El país entero se estremece. Emergen con fuerza inusitada los indios como actores sociales con una plataforma determinada y un proyecto político propio. La situación política es tensa y la cobertura de los medios de comunicación es total. Sin embargo, existe un gran ausente en este debate: el sistema político. En este levantamiento indígena, todo el conflicto se procesó y negoció directamente entre el Estado y la dirigencia de la Conaie. No participaron, ni por asomo, los partidos políticos, incluidos los partidos políticos de izquierda. No jugó ningún papel el Congreso Nacional. La oposición política no apareció jamás durante este conflicto. La institucionalidad política creada desde la democracia no tuvo un rol

determinante ni en la negociación ni en la resolución de los puntos que motivaron levantamiento[1].

17 de junio de 1990: se realizan las elecciones de medio período que renuevan las minorías de los gobiernos municipales y los diputados provinciales. El triunfador de estas elecciones es el partido de derecha Partido Social Cristiano (PSC), que había realizado una fuerte oposición al entonces gobernante partido socialdemócrata, Izquierda Democrática (ID), y que había defendido la posición de los terratenientes durante el levantamiento. Los medios de comunicación llenan el debate con los contenidos del enfrentamiento entre el gobierno y la oposición. El levantamiento indígena de hace apenas una semana, es noticia, pertenece al pasado y el pasado, en los medios, no existe. Hay un gran ausente en este proceso electoral: el movimiento indígena. No participa de hecho en las elecciones, se abstiene de participar en el proceso con candidatos propios, llama a su militancia a no participar en el evento electoral, y llega a boicotear incluso la realización del Censo de Población y Vivienda que se efectuará meses más tarde[2].

Dos momentos, dos espacios, dos prácticas, dos proyectos que se presentan en el mismo entramado, en el mismo juego de relaciones de poder, en el mismo espacio que define la política, pero alejados, casi antitéticos, antagónicos y contradictorios. Son espacios que no se imbrican entre ellos, más bien se disputan los sentidos, las legitimidades, las justificaciones. Son espacios que poseen sus propios contenidos, sus propias referencialidades, sus propias agendas, sus prioridades y sus discursos, y construyen desde sus dinámicas una noción de política y de Estado. Un deber-ser para la política y para el Estado que son contrapuestas y antagónicas.

---

[1] Un editorialista expresaba al respecto lo siguiente: "Pero lo más vergonzoso del asunto es la indiferencia del Congreso Nacional. A ellos, ni les va ni les viene el levantamiento. Y el gobierno se entrampa en el juego político doméstico que la oposición le plantea, sin enfrentar a glotones diputados con una situación que es hoy fundamental y emergente: el movimiento indígena" (*Hoy*, 30-8-1990). Otro medio de comunicación en su página editorial lo expresa así: "El silencio de los partidos políticos frente al levantamiento indígena muestra hasta dónde llega su sorpresa. Han quedado enmudecidos ante un movimiento que los cuestiona por todos los lados, y les hace aparecer como inútiles. (...) Lo que se tiene por delante quizá podría ser resumido así: un sistema de partidos desbordado por un movimiento social; un Estado desprotegido frente a un sector social que lo cuestiona por todos los costados (el sistema político fue eludido por el movimiento indígena); y una sociedad que espera con interés los resultados de un diálogo entre amenazas de nuevas movilizaciones" (*El Comercio*, 27-6-1990).

[2] Una nota de prensa de la época dice al respecto: "Quedan suspendidas las elecciones en todas las comunidades y queda prohibida la entrada de los partidos políticos a sus territorios" (*El Comercio*, 8-6-1990).

¿De qué tipo de desencuentro se trata? ¿Se trata de una cuestión coyuntural o más bien de un fenómeno más estructural? ¿Qué dialéctica de la participación social oculta y muestra esta contradicción? ¿Por qué esos desencuentros se justifican y se legitiman desde la separación? ¿Y de qué separación se trata: es discursiva, es ideológica, es programática...? Si la política construye desde la participación social, una noción de Estado, de sociedad, de contractualidad, ¿qué impasses suscitan estas formas diferentes de hacer política, y qué implicaciones tienen para la formulación del deber-ser del Estado? ¿Qué hacer con la democracia en el Ecuador que juega en dos escenarios sin pensar siquiera en integrarlos? Y, en última instancia, ¿qué es la democracia en el Ecuador? ¿Qué contenidos quiere darse al sistema político que se dice democrático? ¿Cómo procesa ese sistema democrático la diferencia radical, al Otro?

En la coyuntura de 1990, coexisten dos espacios políticos cuya referencialidad es diferente para cada uno de ellos, pero que tienen como objetivo provocar reformas del Estado que expresen la forma en que está construida la política y el poder. De una parte, está la necesidad que sienten las elites para reformar al Estado de acuerdo con los contenidos de la modernización neoliberal, y, de otra, están todos los sectores sociales, entre ellos el movimiento indígena, que resienten de esa transformación, que se oponen a ella. El Estado se convierte en un asunto crucial, en un punto de encuentro y de desencuentro, en una finalidad política. Por paradójico que pueda parecer, el proyecto de la modernización neoliberal que ha satanizado al Estado necesita de éste para imponerse, para consolidarse. Desde esa construcción del sentido del Estado, inscriben su práctica, su proyecto, tanto el régimen político con sus sistemas de representación, sus partidos políticos, su clase política, como las organizaciones sociales, los sindicatos, el movimiento indígena, entre otros movimientos sociales. Dos espacios, dos prácticas que convergen hacia un mismo objetivo: la reforma del Estado.

El espacio en el que se constituyó el levantamiento indígena es el de la movilización social. Allí se integra, se consolida, se recrea el tejido de la organización social y popular. En este espacio las reglas de la participación social aparecen más abiertas, más horizontales, a pesar de toda la conflictividad y disputas de poder que se dan a su interior. No existe ninguna institucionalidad formal o estatal que codifique, regule y coaccione estos espacios. Se forman desde agendas determinadas. Son espacios abiertos, plurales. Son el tejido de aquello que el discurso político del liberalismo quiere adscribirlos como la "sociedad civil". Un amplio abanico de organizaciones sociales y populares, con plataformas variadas, con prioridades diferentes, con tiempos propios. En ese espacio está el movimiento indígena. Nace desde la dinámica y la estructura de los movimientos sociales. Nace con una agenda determinada, con un proyecto concreto.

El segundo espacio es el reconocido oficialmente como aquel de la política. Es el espacio en el que supuestamente se resuelven los conflictos entre la so-

ciedad y el Estado, a través de la mediación de los partidos políticos. Es el espacio de la democracia representativa. De la clase política, o de aquellos intelectuales orgánicos de las clases económicas que disputan la política, sus sentidos, sus discursos y sus marcos normativos e institucionales. Un espacio que aparentemente procesa los conflictos sociales desde la representatividad, las elecciones y las instituciones creadas al efecto.

Se pensaría que cada espacio tiene su legitimidad propia al tiempo que sus propios tiempos. Se estaría tentado a creer que estos espacios encajan en la descripción del discurso liberal que separa al Estado de la "sociedad civil". Pero, al menos en el caso del Ecuador, es sólo una tentación, porque allí se instaura una relación compleja que problematiza la política, la construcción de lo público y la definición del Estado y quizá el ejemplo más representativo de esa conflictiva relación sea el movimiento indígena y su relación con la política y el Estado. Los indios, en el levantamiento de 1990, solamente aceptaron como interlocutor válido al Presidente de la República, como representación del Estado. No se detuvieron a pensar un solo instante en la pertinencia que tendría el sistema político, creado justamente para resolver los conflictos que los indios le planteaban al Estado, ni tampoco pensaron en los mecanismos que la democracia había creado para resolver los conflictos sociales. ¿Por qué lo hicieron?

Los indios, en junio de 1990, obviaron al sistema político, lo pusieron entre paréntesis en su negociación con el Estado, por una razón que para ellos era evidente: se trataba de un sistema que los había excluido desde siempre. Aceptar a este sistema político habría sido equivalente a una derrota política anticipada. Los indios habían cuestionado a la democracia realmente existente, habían cuestionado a los partidos políticos, habían sido críticos con las formas que asumía la representación en el contexto de la democracia. Los indios sabían que la democracia realmente existente más que una oportunidad se constituía como una amenaza. Pero los indios querían salvar el concepto de participación social de la democracia sin aceptar el diseño de la representación política, una apuesta riesgosa que se revelaría como el conflicto más importante en su proceso de constitución como sujeto político a todo lo largo de la década de los 90.

El sistema político, de su parte, les devolvió la moneda una semana más tarde a los eventos del levantamiento indígena de junio de 1990. Si los indios querían que su agenda constase en la política ecuatoriana, entonces que ganen las elecciones, fue la respuesta del sistema político ecuatoriano. Que jueguen el juego de la democracia, que apuesten, que se comprometan, que se involucren. Para ganar hay que apostar, y para apostar hay que aceptar las reglas de juego. Y es eso lo que justamente los indios no querían. No participaban en las elecciones porque no podían aceptar esas reglas de juego, que consideraban injustas, excluyentes y políticamente "direccionadas" en contra suya. No podían entrar al sistema de representación porque lo habían cuestio-

nado radicalmente y participar en éste habría significado limitar los contenidos de ese cuestionamiento y a la larga legitimarlo.

El impasse está ahí, y no solamente desde el levantamiento de 1990, está ahí desde siempre, consta desde que se construyó la república y que en su acto de creación, en agosto de 1830, declaraba que para ser ciudadano había que ser mayor de edad, saber leer y escribir, ser blanco y tener una renta anual de 30 mil pesos. Desde aquella creación republicana, los indios sabían que estaban de facto y de *juris* por fuera de la política, al margen del Estado y de la sociedad. La política en el Ecuador desde un inicio había constituido un sistema de dominación étnico racial en la que la condición de indígena era un elemento clave para su sometimiento. Entonces, ¿cuál era la diferencia con el actual sistema político? ¿Acaso no existían haciendas y patrones de hacienda aun en 1990? ¿No había el presidente Rodrigo Borja, perteneciente a la socialdemocracia, realizado declaraciones que eran aquellas que siempre las realizaban los patrones de hacienda cuando tenían conflictos con los indios?[3] Para los indios, las condiciones de exclusión no habían cambiado radicalmente incluso en 1990. La democracia, al menos tal como estaba estructurada en Ecuador, se trataba de un juego con reglas injustas y que favorecían a la estructura del poder.

Entonces, para los indios, el espacio de los movimientos sociales, o al menos el espacio que ellos quieren para su organización social, no puede ser referido al espacio de una amorfa sociedad civil, su movimiento no adscribe al terreno de las libertades de los agentes individuales en los que se posicionan agendas particulares susceptibles de ser negociadas desde y con el régimen político existente y bajo el marco de la democracia representativa.

Para los indios, el movimiento social debe ser el espacio en el que confluyen las disidencias, las críticas, los cuestionamientos, las resistencias a ese régimen político, y que se constituye, al menos en el caso del Ecuador, en un espacio que pretende disputar la hegemonía en la construcción del Estado, de la política y del poder. El movimiento social, para los indios, no complementa a la democracia sino que se opone a esa construcción política hecha desde el poder y llamada democracia, pero se trata de una oposición que busca crear otros sentidos para ésta. No se relaciona con los partidos políticos desde la perspectiva del "votante", porque en el mundo de los pueblos indígenas no

---

[3] La expresión del doctor Rodrigo Borja, entonces presidente de la República, fue la siguiente: "Agitadores irresponsables están manipulando a los indígenas ecuatorianos de la sierra para que cometan actos de violencia que conspiran contra el avance económico del Ecuador y, sobre todo, contra la provisión de alimentos para las ciudades ecuatorianas (...) En quinientos años nadie ha buscado la solución de esos problemas y ningún gobierno ha tratado como seres humanos, como ecuatorianos con los mismos derechos y las mismas obligaciones, a las comunidades aborígenes del Ecuador, como mi gobierno" *(Hoy*, 6-6-1990).

existe esa condición, porque lo que se quiere desde el movimiento indígena ecuatoriano es recuperar el sentido de participación del vocablo democracia desde una redefinición total de las reglas de juego político.

Los indios, en la década de los 90, al igual que los obreros en las décadas pasadas, así como otros sectores sociales como los maestros, por ejemplo, construyen un espacio de movilización, de lucha social, de organización popular, porque justamente el régimen político los excluía, tanto como actores sociales cuanto como sujetos políticos. El régimen político quería "domesticarlos", quería institucionalizarlos. Los movimientos sociales se resisten a esas prácticas. Tienen relación con partidos políticos, especialmente de izquierda, pero su fuerza no está en el mercado electoral sino en la movilización social, en la capacidad de bloqueo y de negociar desde esa capacidad sus agendas respectivas.

Empero, estos movimientos sociales siempre han intentado asaltar al régimen político. Participan en las elecciones. Buscan abrir espacios dentro de este régimen político. Pero su presencia al interior de la institucionalidad política es marginal y más bien contribuye a reforzar la idea de la participación, la pluralidad y la tolerancia que el sistema político ha construido para legitimarse. Estos movimientos, que en general tienen una plataforma antisistema, cuando ingresan al sistema de representación política, generalmente son derrotados y su discurso antisistema se ve entrampado en la contradicción de querer hacer política sin comprometerse con el sistema político vigente. Esa participación los agota políticamente, los desarma organizativamente, los desmoviliza, los enfrenta entre ellos. Los códigos que estructuran al sistema de representación no son aquellos que conforman la organización popular o social. Su entrada al régimen político favorece al sistema de partidos en detrimento de su propia organicidad. He ahí la paradoja de la democracia y la participación social.

¿Cómo se presenta esta paradoja desde la dinámica del movimiento indígena? ¿Qué discursos y qué prácticas construyó el movimiento indígena ecuatoriano para relacionarse e imbricarse con el régimen político ecuatoriano? ¿Qué trampas evitó y cuáles fueron las que no pudo evitar en esa confrontación?

2. Los indios en el Ecuador: de actores sociales a sujetos políticos

Cuando se realizó el levantamiento indígena de 1990, la primera sospecha de la clase política ecuatoriana[4], era que se trataba de una manipulación con

[4] Es el politólogo italiano Gaetano Mosca el que acuña la expresión "clase política" como elemento referencial del sujeto activo del régimen político. La noción de clase política hace referencia a aquello que Gramsci denominaba el "intelectual orgánico". En virtud de que el régimen político ha generado sus propias nociones de sentido y sus propios conceptos, el presente trabajo los utiliza sin dejar de alertar sobre la necesidad de problematizar estos conceptos.

fines electorales. Su primer acercamiento al levantamiento de 1990 fue el de situarlo en las coordenadas del régimen político existente, un régimen que construía sus significados, sus referentes y sus discursos, desde la manipulación y la acción estratégica[5]. En esa lógica y habida cuenta que ese levantamiento se realizaba a apenas dos semanas de las elecciones de medio periodo, era "normal" la suspicacia de pensar que ese acto de los indios se explicaba, contextualizaba y referencializaba desde lo electoral. La clase política, tendía a explicar y legitimar la acción social desde su propia lógica, y esa lógica procesaba toda la conflictividad social a lo electoral y lo institucional. Se trataba de un proceso en el cual la interpretación de los fenómenos sociales y políticos, en realidad implicaban el sometimiento de la realidad social a los requerimientos del poder. El hecho de que el levantamiento indígena haya sido realizado en vísperas de las elecciones, para la clase política, era un acontecimiento más que sospechoso. Pero ¿eran los indios, los apacibles y mansos indios ecuatorianos, los que estaban realmente detrás de este levantamiento? ¿Si en todo este período jamás habían existido, por qué emergen justamente ahora? ¿No será que existen "oscuros intereses" que los manipulan, que los utilizan[6]?

Estas cuestiones se convirtieron en la segunda explicación que dio la clase política sobre el levantamiento de 1990. En efecto, primero dijeron que era un acto políticamente sospechoso con evidentes afanes de distorsionar y utilizar estratégicamente a las elecciones, y, segundo, que los indios eran incapaces de hacerlo por sí mismos, y esto por una razón: para las elites en el Ecuador, para todo el sistema de dominación étnico-racial que construyeron desde la colonia, los indios simplemente no existen.

De *facto* y de *juris*, los indios no existen en la historia oficial. La ciudadanía, condición de participación política, no llegaba hasta ellos, y por lo tanto estaban fuera de los mercados electorales y obviamente del sistema político. Los indios no eran un electorado importante al que seducir o manipular. Y en caso de que fuera necesario hacerlo, ahí estaban la Iglesia y el sistema hacienda. Esta condición de inexistencia política, y cuasiontológica, que se convirtió en un sustrato de la ideología oficial y política del sistema de dominación étnico-racial, ha sido determinante para comprender el denominado "problema indígena" desde las elites en el Ecuador. A los indios había que "incorporarles" a la civilización, a la modernidad, a la política. Eran objetos de las políticas desarrollistas,

---

[5] Como "acción estratégica", defino aquellas acciones que establecen los individuos entre sí, en un acto discursivo, que tienen por objetivo manipular al otro (Habermas, 1996).

[6] "Es tiempo de elecciones y en una oportunidad así, algunos de los 14.338 salvadores del cantón, la provincia y la patria toda acudan a cualquier método. Esta ocasión, han empujado a campesinos para ocupar un templo católico en Quito. El subsecretario de Gobierno informa que en ese episodio hay manipulación político-electoral y tiene razón: los organizadores han escogido una época que delata la orientación del movimiento." (*El Comercio*, 8-6-1990).

nunca sujetos de su propia historia. Eran la materia prima del asistencialismo, del desarrollismo. Eran una buena expiación para las culpas del sistema.

El levantamiento de 1990 toma desprevenida a la clase política que estaba inmersa en los juegos de la oposición. El argumento de que la intencionalidad subyacente del levantamiento era electoral estaba también hecho para restar legitimidad a la acción política de los indios. Su levantamiento podría ser justo pero era "político", es decir, no se trataba de un hecho transparente, sino de una manipulación realizada por otras personas y en virtud de posicionarse ante el electorado en condiciones ventajosas. No se sabe bien cómo un levantamiento puede influir en un mercado electoral, pero la clase política, incluido el Poder Ejecutivo, vieron en el levantamiento la manipulación de "oscuros intereses" que buscaban medrar de las elecciones. Hay allí un sustrato de racismo, mas el racismo era parte consustancial de los imaginarios simbólicos de la clase política ecuatoriana[7].

Al acusar al levantamiento de "político", la clase política cometía una especie de suicidio porque contribuiría a desprestigiar la esfera de lo político que era por definición su espacio de constitución y autoreferencialidad. Lo político empieza a agotarse como discurso y posibilidad de cambio, y es la misma clase política ecuatoriana la que lo agota al tratar de cerrar su espacio a los conflictos sociales. En efecto, la clase política en la medida de lo posible trata de cerrarse sobre sí misma y paradójicamente busca legitimarse deslegitimando la política.

En el levantamiento de 1990, la clase política no hizo ningún esfuerzo por acercarse a estos nuevos actores sociales. No se preocupó de ninguna manera por comprender los planteamientos que estos nuevos actores les hacían al Estado y a la sociedad. Una semana después de concluido el levantamiento, el país entero se sumerge en la dinámica electoral. En el discurso electoral, ningún partido político, incluidos los de izquierda, hicieron referencia ni al levantamiento, ni a sus demandas[8].

---

[7] "Most whites and mestizos viewed Indians as inherently inferior. Some regarded 'indigenas' as little better than a subspecies. A more benign perspective condescendingly considered the Indian as an intellectual inferior, an emotional child in need of direction" Ecuador (US State Department, 1990).

[8] Una reflexión hecha al respecto establece: "La demanda india también se enlaza con la necesidad de un nuevo sistema político participativo. El actual sistema de partidos no recoge las demandas de la sociedad, ni las convierte en propuestas que perfeccionen a la democracia. Hay cortes muy profundos entre los partidos políticos y la sociedad, que reproducen los problemas regionales, étnicos, clasistas, las diferencias ciudad-campo y hasta las diferencias de género. Esos cortes alejan a las elites partidistas de sus bases impidiendo su representación" (Bebbington *et al.*, 1992).

Este divorcio era sintomático de que las prioridades de la clase política no pasaban por una agenda social. A lo más que se podía llegar es a reconocer el justo reclamo de los indígenas, los eternos preteridos del desarrollo, pero muy difícilmente habría de reconocer en ellos a un sujeto político, menos aún un sujeto que dispute la hegemonía en la construcción del Estado. De otra parte, la clase política y el régimen político tenían en su haber el acumulado de las resistencias y movilizaciones de la clase obrera durante los 80 y su neutralización política y asimilación institucional.

En efecto, durante la década de los 80 del siglo pasado, la clase obrera ecuatoriana protagonizó importantes movilizaciones contra la imposición de las políticas de ajuste. Pero, a pesar de lo masivas y contundentes que parecieron ser esas movilizaciones, el ajuste macroeconómico finalmente se impuso. Las elites económicas y políticas en el Ecuador habían cambiado los contenidos de su agenda. Sus prioridades no estaban ya en la formulación de una base industrial con sustento nacional. Tampoco les interesaba proteger la estructura estatal e institucional que era correlativa a este proyecto de constituir un proceso de industrialización propio.

Esta adscripción de las elites económicas y políticas al ajuste y a la reforma estructural de contenidos neoliberales del Estado, será el eje de enfrentamiento en los años 80 y 90. Existe allí una paradoja que habría de ser determinante para comprender el conflicto político del Ecuador en ese período, y es que el diseño del Estado, y del sistema político que se hicieron en los años 1978-1979, que fueron los años en los que se produjo la transición hacia la democracia, eran funcionales a ese proyecto de la industrialización. Pero más allá de eso, consta la dinámica de procesamiento del conflicto que se hizo desde el sistema político a las resistencias populares a la imposición de las políticas de ajuste y reforma estructural. Desde las primeras huelgas generales de 1983, hasta inicios de los años 90 a clase obrera, no pudo desarticular esta agenda política y económica de las elites. El ajuste y la reforma estructural fueron imponiendo sus tiempos, sus dinámicas, sus requerimientos.

El sistema político ecuatoriano se había revelado eficaz para detener, neutralizar y someter las resistencias a la agenda de la transformación económica neoliberal. Era una muralla de granito en la cual se estrellaban las resistencias populares sin provocar serios estremecimientos. Es por ello que, cuando emerge el movimiento indígena, el sistema político no toma ningún tipo de precaución, de alerta, de reacomodo frente a la emergencia de este nuevo actor. Si las masivas y fuertes huelgas nacionales convocadas por los sindicatos agrupados en el Frente Unitario de Trabajadores, no pudieron conmover al sistema político, entonces, era más difícil aún que el nuevo actor emergente, el movimiento indígena, que por definición tenía una agenda restringida bajo parámetros étnicos, pueda significar un peligro para este sistema, menos aún que pueda constituirse como un sujeto político que dispute la hegemonía en la construcción del Estado.

En efecto, en el debate de inicios de los 90, empieza a prefigurarse una de las nociones centrales de esta disfuncionalidad entre el sistema político y el diseño estatal creado en los años 70 y que correspondía a un proyecto finalmente archivado, el proyecto de la industrialización nacional, con la agenda del ajuste y la reforma estructural. Esa disfuncionalidad generaba demasiados puntos de fuga en el sistema político. Puntos de fuga que podrían ser utilizados de manera estratégica por la resistencia social al ajuste. La noción de tipo epistemológico que permite iniciar el debate sobre la necesidad de una reforma política del Estado, es aquella de la "gobernabilidad".

Es sobre esta agenda del ajuste y la reforma estructural que se definen las posiciones, debates y propuestas de los diferentes grupos y partidos políticos. Es esta agenda la que provoca los conflictos con la oposición política en el gobierno de 1988-1992. El PSC (Partido Social Cristiano) presionaba por acelerar los tiempos de la transición neoliberal. El partido gobernante, la socialdemocracia de la ID (Izquierda Democrática), quería atenuar esos tiempos, no porque discrepaba de la agenda, menos aún porque tenía un programa alternativo, sino porque era necesario procesar y desmantelar la capacidad de resistencia social sin dañar la imagen de la socialdemocracia ecuatoriana.

Entonces, si el modelo político había resistido las movilizaciones de los poderosos sindicatos de obreros y de otras fuerzas sociales, ¿por qué cambiarlo ante la emergencia de los indios? En un contexto en el que los indios no existen y las disfuncionalidades entre ajuste y democracia amenazan tanto a la política como a la economía, el discurso de la gobernabilidad se constituye en la plataforma de acción que permitiría recomponer el régimen político en función de la modernización liberal de la economía.

Los indios plantean en 1990 una propuesta que para el régimen político aparece como incomprensible y fuera de toda posibilidad de comprensión: se trataba de su demanda de plurinacionalidad del Estado. ¿Qué es la plurinacionalidad? ¿Cómo adscribirla a los contenidos del régimen político y a su discurso de la gobernabilidad? ¿Qué quieren los indios con su propuesta de plurinacionalidad del Estado: dividir al país, un Estado dentro de otro Estado, una balcanización de la república?

Propuesta incomprensible y fuera de todo el ámbito de codificación de la clase política. Los indios pretenden, desde esta propuesta posicionar un nuevo deber-ser del Estado, de la política y de la sociedad, basándose en las categorías e instituciones ancestrales de sus pueblos[9]. Es esta incorporación de toda

[9] Uno de los fundadores de la Conaie, y líder del movimiento indígena ecuatoriano, Luis Macas, con respecto a las demandas de plurinacionalidad del Estado ecuatoriano manifiesta lo siguiente: "... nuestra demanda contempla el pedido de reforma al artículo 1 de la Constitución Política del Estado, reconociendo al país como Estado plurinacional, ya que consideramos que nos identificamos como nacionalidades indígenas, que forma-

su vivencia ancestral a su discurso político, conjuntamente con el agotamiento de las políticas de reforma liberal, las que van ampliando el horizonte de acción y debate político de los indios.

Si los indios son o se creen portadores de un nuevo deber ser para el Estado, y si ese nuevo deber ser se inscribe en los contenidos de su propuesta de plurinacionalidad, propuesta que quiere otorgar un estatus epistemológico y político a la diferencia de la cual se creen portadores, entonces los marcos de acción como movimiento social les resultan estrechos. Los indios tienen un enorme poder de convocatoria y movilización sustentado en un denso y complejo entramado organizativo. Los indios pueden y de hecho lo hacen, constituirse en la columna vertebral de la movilización social y enfrentamiento al régimen político y al Estado. Además, el hecho de plantearse un nuevo deber-ser para el Estado hace que ellos mismos construyan a su interlocutor. No es el régimen político, no es un determinado partido político, es el Estado y en concreto para los indios la representación del poder del Estado está en el Poder Ejecutivo, en la figura del Presidente de la República.

El Estado plurinacional es el eje de una bisagra teórica y política que permite la transición de los indios en el Ecuador, de movimiento social hacia un sujeto político. Les abre el horizonte de posibilidades políticas, les permite construirse un estatus de interlocución frente al Estado, y en ese proceso les abre una vía de acceso al régimen político.

En efecto, desde el levantamiento de 1990, hasta inicios de 1996 en los que se conforma el movimiento político Pachakutik, los indios en el Ecuador, van a transformarse de movimiento social en sujeto político. El hecho de poseer una visión de Estado, con todo lo que ello significa: reforma jurídica bajo condiciones de pluralismo jurídico, derechos colectivos, reconocimiento de los territorios ancestrales bajo la figura de las circunscripciones territoriales, reconocimiento a las instituciones económicas ancestrales, etc., les otorga a los indios una base desde la cual sustentar su proyecto histórico y político. En la coyuntura que va de 1990 a 1996, los indios pueden ampliar sus alianzas, incorporar a otros sectores, posicionar su proyecto de la plurinacionalidad del Estado, oponerse exitosamente a la modernización liberal, que justamente en ese período se radicaliza y se intensifica.

---

mos parte de un Estado plurinacional (...) Esta demanda se orienta, al mismo tiempo, al reordenamiento constitucional y la creación de leyes e instrumentos jurídicos que permitan nuestro derecho a la autodeterminación (...) El derecho que demandamos a la autodeterminación consiste en crear un régimen (autogobierno) que nos permita tener competencia legal sobre la administración de los asuntos internos de nuestras comunidades, en el marco del Estado nacional" (Macas, 1992, 25).

3. El movimiento político Pachakutik

La primera reacción que tiene la clase política y el sistema político en general con respecto al movimiento político Pachakutik, es la de situarlo y comprenderlo dentro de una perspectiva corporativa, es decir, como un movimiento político que nace desde la dinámica de un actor social, y que responde más a esta dinámica que al conjunto de la población. En un inicio, la clase política no cree que el movimiento Pachakutik sea un peligro real que amenace las estructuras del poder. El hecho de que asuma a este movimiento como una práctica corporativa de un actor social, amén del sistema de dominación étnico racial, hacen que el régimen político sitúe la creación de Pachakutik como una oportunidad para legitimarse a sí mismo más que como una amenaza. Este nuevo movimiento político se crea a inicios de 1996 como una respuesta a la coyuntura electoral de ese mismo año.

Como antecedente, habría de indicar que en 1995, los principales dirigentes de la organización indígena más importante del Ecuador, la Conaie, manifestaron públicamente su desacuerdo con las elecciones generales y plantearon un distanciamiento radical con el régimen político lo que en primera instancia llevó a pensar que los indios estarían nuevamente fuera de las elecciones de 1996. Pero, ya en el levantamiento de 1994, realizado para detener la aprobación por parte del Congreso Nacional, de una Ley de Desarrollo Agrario, que destruía la propiedad comunal de la tierra e instauraba un mercado de tierras bajo criterios de rentabilidad y monopolización, los indios comprendieron que solamente una amplia política de alianzas con otros sectores sociales podría ser eficaz para dar fuerza a su proyecto. A fines del año siguiente, en 1995, todos estos sectores sociales, a los cuales se suma el movimiento indígena, hicieron causa común para detener la privatización de la seguridad social. Es esta confluencia en el proceso político de movilización y resistencia al ajuste y a la modernización liberal la que abre la posibilidad de una política de alianzas más amplia que incluya en su estrategia la participación electoral desde un espacio político propio.

Pachakutik es un movimiento político creado para actuar dentro del sistema de representación política, pero con una agenda concreta y un espacio acotado tanto desde las dinámicas del conjunto de organizaciones sociales que lo conformaron, como del movimiento indígena que lo situó en la perspectiva de su proyecto político más amplio. La creación de este espacio marca la transformación de los indios en sujetos políticos. Pero es una transformación que aún necesita consolidarse y que necesita superar la prueba de no subsumirse ni perderse en los espacios electorales del régimen político. Así, para constituirse como sujeto político, el movimiento indígena tiene que atravesar el Escila del régimen político ecuatoriano sin perderse en sus laberintos y el Caribdis del corporativismo gremial sin resignar su proyecto histórico.

El movimiento indígena también comprende que su entrada al sistema político está mediatizada por el sistema de dominación étnico-racial. Dado este sistema, es muy difícil que los indios tengan posibilidades de posicionarse en el cerrado mercado electoral, en un electorado, además, moldeado bajo los parámetros del sistema de dominación étnico-racial. En ese sistema de dominación, los indios son perdedores por antonomasia y los perdedores, como en *Cien Años de Soledad*, estaban condenados a no tener una segunda oportunidad sobre la tierra.

Cuando los indios se resisten al sistema político, saben e intuyen que es muy difícil luchar en contra de ese sistema de dominación étnico-racial y bien podría suceder que toda su movilización social termine disuelta en esa telaraña de la institucionalidad política creada justamente por y desde el régimen político, que toda su fuerza política se revele incapaz de suscitar apoyos electorales, que toda su estructura organizativa se debilite al entrar en la competencia electoral y que los escasos votos que pudiesen captar en vez de fortalecer su ingreso al sistema de representación sirvan más bien de argumento para minimizar y relativizar el alcance de su proyecto político. Quizá allí radique una de las explicaciones a su reticencia a participar dentro del régimen político.

La vinculación con los movimientos sociales les abre la vía de acceso al régimen político sin ser cribados por el tamiz del sistema de dominación étnico-racial. A no dudarlo, se trató de una estrategia inteligente pero que marcará a futuro los límites y posibilidades del movimiento político Pachakutik, porque en esa constelación de organizaciones sociales y populares, con las que el movimiento indígena construye su política de alianzas, su propuesta de plurinacionalidad se pierde dentro de una agenda que en general es antisistema pero que no asimila dentro del discurso antisistema todas las posibilidades que podrían generarse desde la plurinacionalidad.

En el movimiento Pachakutik confluyen una serie de organizaciones sociales y también grupos de la izquierda política que tienen prácticas, discursos, estructuras orgánicas y espacios previamente definidos. Es esta mixtura que al mismo tiempo que expresa su riqueza marca también sus límites de acción dentro del sistema político ecuatoriano. El riesgo que se corría y que se expresará de hecho años más tarde es que se confunda el medio con el fin. El movimiento Pachakutik había sido creado desde la matriz de lo indígena, de ahí su nombre, con el objetivo de llevar al interior del sistema de representación política la discusión sobre la plurinacionalidad del Estado, al tiempo de abrir esa discusión al conjunto del régimen político ecuatoriano y de servir de muralla de contención al avance de la modernización neoliberal[10].

---

[10] Puede consultarse al respecto el documento: "Documento de base ideológico política del Movimiento de Unidad Plurinacionalidad Pachakutik Nuevo País", por Luis Macas y Pablo Dávalos, julio 2001, en www.pachakutik.org.ec/ archivos/congreso1.htm.

El movimiento Pachakutik en sus inicios tiene una presencia relativamente exitosa: logra efectivamente consolidar una presencia indígena y no indígena pero adscrita al proyecto indígena, en casi todos los espacios del sistema de representación política: el Congreso Nacional, las prefecturas, las alcaldías, las concejalías, los tribunales electorales, etc. Su punto más importante en esa coyuntura es cuando en 1998 logra la ratificación por parte del Congreso Nacional del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce los derechos fundamentales de los pueblos y naciones indígenas, y un año antes, en 1997, cuando participa activamente en la destitución del entonces presidente de la República Abdalá Bucaram.

Esa presencia electoral del movimiento Pachakutik también se refuerza con el agotamiento de los partidos más tradicionales del sistema político. De los principales partidos políticos existentes, durante la década de los 80 y los 90, casi todos ellos ganaron las elecciones y fracasaron en su gestión de gobierno. La mayoría de ellos se declaraban en período electoral como furibundos críticos de las políticas de ajuste del FMI y del Banco Mundial, y una vez en el gobierno se empeñaban en cumplir con la agenda del ajuste y la reforma estructural.

Los partidos políticos y su clase política habían perdido legitimidad y también credibilidad. Pero se trataba de una erosión parcial y que en lo fundamental no afectaba ni a la estructura del poder ni al diseño fundamental del sistema político. El sistema de representación política tenía un diseño tal que era casi invulnerable a las críticas que pudiesen ser hechas desde distintos sectores de la sociedad. Había existido una crisis institucional en lo referido al Ejecutivo, pero los sitios neurálgicos desde los cuales se tomaban las decisiones más importantes para la modernización liberal (Banco Central, Ministerio de Finanzas, Consejo de Modernización del Estado, entre otros) habían sido "desconectados" de la esfera de lo político, y el *locus* en el que se aprobaban esas decisiones, el Congreso, seguía siendo manejado por los partidos políticos tradicionales.

Pero a no dudarlo este desgaste de los partidos políticos tradicionales, y también el desgaste de la clase política, contribuyeron a que Pachakutik se fuera consolidando en el mercado electoral. Muchos electores pensaron que quizá este movimiento podría refrescar el cerrado régimen político existente. Ahora bien, desde su conformación, el movimiento político Pachakutik está atrapado en sus propias contradicciones: debe cuestionar al sistema político desde dentro pero al tener que participar en él finalmente lo legitima; debe llevar adelante el debate de la plurinacionalidad y de una reforma radical del Estado, pero al ganar los poderes locales, las alcaldías, las prefecturas, al controlar los tribunales electorales, tiene que negociar con la estructura de poder y con el Estado vigente, y en esta negociación tiene que atenuar, disimular o finalmente posponer su propuesta de reforma del Estado bajo condiciones de plurinacionalidad. Debe ganar las elecciones, pero sus tiempos están marcados básicamente por la capacidad de movilización de las organizaciones indí-

genas, y de hecho se convierte en el único partido político en el que la lógica electoral se subsume a la capacidad de movilización y a las decisiones de las organizaciones indígenas y sociales. De su parte la Conaie, como la principal organización indígena en el Ecuador, debe mantener cierto tipo de control sobre el movimiento político Pachakutik, sin caer en prácticas corporativas y sin enajenarse el apoyo de otros sectores sociales.

Esas contradicciones expresan el carácter que tiene este movimiento y el proceso en el que está inscrito, porque en realidad el Pachakutik no es un partido político *strictu sensu*, y menos aún como los define el régimen político ecuatoriano. El Pachakutik más bien es un espacio creado desde la dinámica de un actor social, el movimiento indígena y desde su proceso de constitución como sujeto político, para abrir el régimen político a la discusión de su proyecto que es la plurinacionalidad del Estado. La creación de este movimiento político Pachakutik expresa, justamente, esa transformación de tipo político que atraviesa el movimiento indígena ecuatoriano durante la década de los 90. Al crear este espacio, le dota de todo su potencial organizativo para abrir dentro del régimen político una especie de cabeza de playa, desde la cual se pueda ir posicionando y construyendo su proyecto del Estado plurinacional.

Los tiempos del movimiento Pachakutik son más amplios y su concepción de la realidad y la política es más simbólica que racionalista como consta en su nombre, *Pacha:* tiempo, y *Kutik*: retorno, cambio, transformación. Su imbricación con la estructura organizativa indígena es muy fuerte, y, de hecho, la organización indígena lo considera como una instancia más de su proceso. Las decisiones que deba tomar Pachakutik, si quieren tener peso político, tienen que necesariamente pasar por esas dinámicas de las tomas de decisiones de las organizaciones indígenas, cuyos tiempos políticos no sólo que no coinciden sino que se presentan como contrapuestos a los tiempos de la coyuntura política. El Pachakutik no es un fin en sí mismo, es un medio para provocar cambios en el régimen político ecuatoriano. Su creación demuestra que el movimiento indígena ecuatoriano ha abierto su agenda a la sociedad, ha diversificado su política de alianzas y quiere convertirse de interlocutor en sujeto político con capacidad real de reformular las condiciones del poder en el Ecuador.

Al ser una instancia, un espacio creado desde estas transformaciones políticas del movimiento indígena, el movimiento Pachakutik nace con unas capacidades de maniobra y un espacio de acción acotados y circunscritos a este proceso de constitución en sujeto político. Es allí donde se instauran las principales contradicciones de este movimiento, y que generarán fuertes conflictos con la organización indígena.

En efecto, esto puede constatarse en dos coyunturas, la de 1999-2000, cuando el movimiento indígena ecuatoriano se enfrenta de una manera radical al gobierno de Jamil Mahuad, y logra su destitución a fines de enero de 2000,

y la de la alianza con el coronel Lucio Gutiérrez, para enfrentar conjuntamente las elecciones a fines de 2002.

En la primera coyuntura, tanto en los levantamientos de 1999, como en la insurrección del 21 de enero de 2000, el movimiento indígena no utilizó como recurso político o como factor estratégico a su movimiento político Pachakutik. Al igual que al resto de partidos políticos, lo puso entre paréntesis. Habría sido plausible pensar que en estos eventos, sus espacios creados, entre ellos el movimiento Pachakutik, jueguen un rol fundamental tanto en los levantamientos indígenas como en la destitución de Mahuad. Pero su práctica política les había revelado que el sistema político, al igual que el sistema económico, es casi imposible de cambiar desde dentro y que abrir el espacio a uno solo de los partidos del sistema político, incluso si se trataba del movimiento Pachakutik, era en realidad abrir la puerta al enemigo. De ahí que tanto en los tres levantamientos que se hicieron en 1999, como en la insurrección del 21 de enero del año siguiente, la conducción política del movimiento indígena trató en lo posible de proteger el espacio de la movilización y de la confrontación en contra del gobierno del sistema político.

En la coyuntura electoral de fines de 2002, el Pachakutik hizo una alianza con un grupo de coroneles con los cuales había participado en la destitución del presidente Mahuad, el 21 de enero de 2000, y apoyó la candidatura presidencial del coronel Lucio Gutiérrez. El problema se suscita cuando se ganan las elecciones y el movimiento indígena comprueba que no había desarrollado los mecanismos suficientes para controlar los espacios de acción del movimiento Pachakutik.

El sistema político tiene sus tiempos, sus prioridades, sus discursos, sus consensos. Ha construido un denso entramado burocrático-institucional y ha hecho del ejercicio del poder un asunto administrativo. Ha llegado incluso a autonomizar la política de la economía y el gobierno de la administración. Cuando el movimiento Pachakutik gana las elecciones en alianza con Lucio Gutiérrez, la lógica del sistema político termina imponiéndose a las necesidades estratégicas del movimiento indígena, y no sólo que se impone sino que llega a subsumir los tiempos, las agendas y las prioridades políticas del movimiento indígena, a su propia dinámica y requerimientos. En ese pequeño espacio de tiempo, que va entre la elección de la primera y segunda ronda electoral, el sistema político pudo acotar los espacios y las posibilidades de gobierno del movimiento indígena. Al separar la política de la economía, instrumentalizaba la economía a los requerimientos del poder. El discurso que sustentaba esta separación era un discurso tecnocrático cuya referencialidad epistemológica estaba en el campo de la economía neoclásica (todo el discurso del déficit fiscal, del déficit en balanza de pagos, etc.), y se articulaba de manera coherente con las directrices estructuradas desde el denominado Consenso de Washington.

Al cambiarse el sentido del discurso y al enfrentarse a la corresponsabilidad de ser gobierno, el movimiento indígena comprendió que su movimiento político Pachakutik se había de una u otra manera autonomizado de sus procesos más internos y se había adscrito y funcionalizado más al régimen político que a su proyecto real. El costo político de esta autonomización es enorme pero es un proceso que consta desde la conformación misma del movimiento Pachakutik.

En efecto, desde su creación, el movimiento Pachakutik no definió con claridad esos espacios ambiguos que lo diferenciaban tanto de los movimientos sociales que lo habían creado, como del sistema de partidos políticos en los que tenía que actuar. Esa ambigüedad era un recurso estratégico en el momento de su conformación porque evitaba las disputas con otros sectores sociales sobre su conducción política, y generaba un consenso sobre su necesidad política práctica. En un inicio, a nadie se le ocurrió entre los movimientos sociales y en el movimiento indígena, que el Pachakutik fuera la apuesta estratégica fundamental para la lucha contra y por el poder. Esa lucha y esas disputas se las situaban siempre en el campo de la confrontación de fuerzas, en las que el Pachakutik era más un instrumento que un fin en sí mismo.

El problema se suscita cuando el movimiento Pachakutik disputa realmente la conformación del gobierno en la coyuntura electoral de fines de 2002 e inicios de 2003. Es en esa disputa cuando las ambigüedades del Pachakutik se revelan importantes, porque esas ambigüedades se constituyen en grietas que impiden que el movimiento indígena y los movimientos sociales puedan no imponer sino al menos negociar su agenda.

El sistema político encerró al movimiento Pachakutik en la disyuntiva del gobierno como asunto técnico y administrativo. El Pachakutik no tenía la posibilidad de resolver esa disyuntiva, porque ése no era su espacio. Esa discusión y disputa tenía que darse en el espacio en el que se confrontaba al poder y en el que el movimiento indígena había actuado hasta antes de las elecciones de 2002. El Pachakutik tenía que transferir la resolución de esa disputa a la movilización social del movimiento indígena y los movimientos sociales. Asumir la responsabilidad de dirimir un proyecto político sin tener la capacidad política para hacerlo era una grave responsabilidad histórica. Las ambigüedades originales de Pachakutik se constituyeron en un elemento que a la larga terminó consolidando al régimen político en detrimento de la organización indígena y social.

Es interesante comprobar gracias a esta coyuntura que no se puede establecer una relación entre el movimiento Pachakutik y el movimiento indígena como una relación lineal de causa-efecto entre el movimiento político y el movimiento social que sería su referente, porque no existe un movimiento político fuera de un sistema de representación política, y porque el movimiento social por definición no tiene capacidad de cambiar al régimen político del cual el sistema de representación es sólo una parte. La realidad es más compleja que la

relación lineal entre movimiento social y movimiento político. Pachakutik como movimiento político sólo puede ser explicado como parte del proceso de constitución de los indios como sujetos políticos. Como sujetos políticos los indios tienen que enfrentarse a un sistema político hecho para garantizar determinadas relaciones de poder. Pachakutik, como movimiento político, se relaciona con el movimiento indígena como parte de una confrontación más vasta en contra de un régimen político excluyente y de un sistema económico explotador.

Las sombras en el espejo: plurinacionalidad y gobernabilidad en la Asamblea Constituyente de 1998

La creación del movimiento Pachakutik es parte del camino que tiene que andar el movimiento indígena en su trayectoria hacia la constitución de su ser como sujeto político. Pero en ese camino hay hitos que son importantes y reveladores de este proceso y cuya comprensión puede dar cuenta de la importancia que tiene este proceso en el debate político del Ecuador contemporáneo.

El sistema político en el Ecuador fue diseñado a fines de los años 70 del siglo pasado y pensando en ese Estado que garantizaba el modelo de sustitución de importaciones. Ese sistema político se planteaba la necesidad de provocar una modernización política que fuese correlativa a la modernización económica. El desajuste entre el sistema político y el sistema económico se produce cuando, apenas iniciado el retorno a la democracia en 1979, se produce en 1982 la crisis de la deuda externa en América Latina y se suspenden los flujos de capital a la región y por consiguiente la financiación al desarrollo. En marzo de 1983 el Ecuador adopta su primer paquete de ajuste macroeconómico al tenor de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

La resistencia social a estas políticas de ajuste es fuerte pero no consistente a nivel político, y esto porque la dictadura de los años 1976-1979 había comprendido que para garantizar el proceso de retorno a la democracia era necesario antes desmantelar y desarticular la oposición que podrían hacer los sindicatos, los sectores sociales y los partidos de izquierda. La democracia se inaugura en Ecuador con un saldo trágico cuya expresión más representativa es la masacre a los obreros del ingenio azucarero de Aztra en 1979.

Es en virtud de ello que las protestas contra el ajuste económico no lograron ni una revisión ni una suspensión de las medidas de ajuste. Pero la transición hacia un nuevo modelo económico y político se realiza casi concomitantemente a la imposición de las políticas de ajuste. Este nuevo modelo será denominado como "reforma estructural", y su definición más coherente la hará John Williamson a inicios de los 90 como el Consenso de Washington.

Transformar el sistema económico sin provocar cambios en el sistema político es una disfuncionalidad que puede provocar tropiezos, conflictos y enfrentamientos que deberían ser evitados. Para la modernización de carácter neoli-

beral que propugna el Consenso de Washington, es necesario llevar adelante una serie de cambios de tipo institucional, jurídico, normativo e ideológico en el sistema político. Esos cambios se adecuarán a la estructura discursiva e incluso epistemológica de la teoría del "buen gobierno", es decir, de la "gobernabilidad" (Dávalos, 2003). Desde inicios de los años 90, y coincidente con la emergencia política de los indios en el Ecuador, se empieza a posicionar con fuerza el discurso de la gobernabilidad y de la necesidad de una reforma política del Estado que asegure la gobernabilidad del país.

Este discurso coincidía con el pedido del movimiento indígena de una reforma política del Estado pero para su declaración y constitución en Estado Plurinacional. Ambos discursos van a marcar el debate y los sentidos de la construcción política en el Ecuador. El discurso de la gobernabilidad se posiciona en los medios académicos, intelectuales, en la prensa, en las declaraciones de líderes políticos de los partidos tradicionales, etc. Es el sistema político en su conjunto el que empieza poco a poco a apoderarse del discurso de la gobernabilidad como una necesidad de provocar cambios en el Estado que sean correlativos a las reformas de tipo económico.

Pero el sistema político necesita que las demandas de la gobernabilidad sean situadas en el terreno de la sociedad en su conjunto, porque necesita construir legitimidad alrededor de la reforma política del Estado, pero al mismo tiempo tiene que cerrar el debate alrededor de la idea de la plurinacionalidad[11].

La clase política quiere hacer de este concepto de gobernabilidad un verdadero discurso del nuevo contrato social entre la denominada sociedad civil y el Estado. El sistema político está consciente de que su legitimidad social está cuestionada, pero al situar esos cuestionamientos dentro del discurso de la gobernabilidad los hace autorreferenciales, es decir, la sociedad critica al sistema político porque éste no ha logrado niveles aceptables de gobernabilidad, pero la reforma política bajo el esquema de la gobernabilidad le podría devolver la legitimidad social que el sistema político ha perdido.

Es un recurso truculento que manipula los contenidos del cuestionamiento social al régimen político, pero que se revela muy eficaz para posicionar la idea de una reforma del Estado en condiciones de gobernabilidad. De esta manera, el sistema político arrebata la reivindicación de la reforma política del Estado hecha por el movimiento indígena, y reduce los contenidos de la crítica

---

[11] "A diferencia de lo ocurrido en Ecuador en anteriores procesos políticos de las últimas dos décadas, hay que reconocer que gran parte del impulso e inspiración del actual proceso de reforma política proviene de los sectores organizados de la sociedad. Han sido precisamente las asambleas ciudadanas, organizaciones populares, indígenas, mujeres, obreros, empresarios y estudiantes quienes han llevado la iniciativa para reestructurar al actual sistema político..." (Mejía Acosta y Wray Reyes, 1997, 31).

que el movimiento indígena había hecho al Estado a una falta de acuerdos y consensos alrededor de la idea de la gobernabilidad.

Pero, ¿qué entiende la clase política por gobernabilidad? Para la clase política ecuatoriana la respuesta a la falta de gobernabilidad no es teórica, ni ética, ni axiológica, es puramente operativa e instrumental. Para la clase política, la corrección de ciertos mecanismos y procedimientos en el sistema de representación bien podrían asegurar la gobernabilidad del conjunto del sistema.

A diferencia de los indios que con su categoría de plurinacionalidad buscaban un nuevo deber-ser para el Estado, en el que se debatan los contenidos epistemológicos de la diferencia, sobre todo en la construcción de los nuevos sujetos, como el sujeto comunitario, y las nuevas instituciones, como la administración de justicia indígena, las instituciones económicas comunitarias, etc., y desde esos contenidos de la diferencia construir el deber ser del Estado, un Estado cuyo contenido deontológico radique en la plenitud y vigencia de los derechos de todos; el discurso de la gobernabilidad que posicionaron las elites políticas en el Ecuador, no pasó de algunas recomendaciones de tipo instrumental y operativo que se conocen con el nombre de "presidencialismo", es decir, trasladar mayores capacidades de decisión a la figura del presidente de la República, acotar los espacios de acción del Congreso Nacional, eliminar la representación minoritaria y eliminar los derechos sociales y ciudadanos a la movilización, la organización y la protesta. En realidad, se trataba de provocar una reforma política en la que se acentuaban los caracteres autoritarios y antidemocráticos del sistema político[12]. El mismo Osvaldo Hurtado expresaba que:

---

[12] El ex presidente Osvaldo Hurtado (1981-1984), uno de los fundadores de la democracia cristiana en el Ecuador, ha sido uno de los intelectuales más lúcidos del sistema político que propusieron las reformas al Estado bajo las condiciones de gobernabilidad. La mayoría de sus propuestas fueron finalmente adoptadas por la Asamblea Constituyente de 1998. Mejía Acosta las resume de la siguiente manera: "A nivel de la clase política las propuestas vienen desde perspectivas particulares como institucionales. Posiblemente la más elaborada sea la de Osvaldo Hurtado que recoge una serie de temas que se han venido discutiendo desde hace algún tiempo y que cada vez que existe la posibilidad de una reforma vuelven a la mesa. Las acciones propuestas son de reforma al sistema político y parten de la creencia de que el problema del Ecuador está en su sistema político que no ha podido lograr niveles aceptables de gobernabilidad. Las propuestas de Hurtado son las siguientes:
'1) Eliminar las elecciones de diputados de mitad de período, realizarlas simultáneamente con la segunda vuelta presidencial.'
'2.) Disponer que el voto de los ciudadanos sea facultativo.'
'3.) Calificar la participación de los llamados independientes.'
'4.) Reducir el tiempo de las campañas electorales.'
'5.) Limitar y controlar el gasto electoral.'
'6.) Establecer que la presidencia del Congreso Nacional corresponda al partido de mayor votación; prorrogar el período de sus miembros a dos años.'
'7.) Restringir la capacidad de la función legislativa para destituir ministros de Estado.'

"Parecía existir una correlación entre un Ejecutivo fuerte y una democracia estable" (Hurtado Larrea, 1993, 23).

Al igual que a inicios de los 90 cuando los movimientos sociales se presentaban desconectados del sistema político, este debate se dio en una sola dirección, la de la gobernabilidad. El sistema político jamás abrió el más mínimo espacio para una discusión sobre la plurinacionalidad, y en cambio utilizó todos los recursos de los que disponía para imponer los contenidos del discurso de la gobernabilidad.

La máxima concesión que el sistema político hizo a la plurinacionalidad fue deformarla y presentarla como el pluriculturalidad y multietnicidad. Es decir, se reconocía esa diferencia pero más desde una visión de folclore que desde una visión política. Al reducir el debate de la plurinacionalidad a una cuestión culturalista se evitaba convertir al movimiento indígena en interlocutor político.

Es desde esta disputa que el movimiento indígena presiona por la convocatoria a una Asamblea Constituyente para definir la reforma política del Estado pero bajo condiciones de plurinacionalidad. Este pedido es considerado como una propuesta excesiva. Para llegar a reformar ciertos aspectos de tipo operativo e instrumental no era necesaria una Asamblea Constituyente. La clase política ecuatoriana cerró toda posibilidad a la convocatoria a una Constituyente, porque convocarla habría sido darle la razón a los indios y posicionar la agenda de los indios. Era impensable, entonces, que dada la estructura de poder y las prioridades del régimen político la Asamblea Constituyente pudiese ser un objetivo político de ese régimen[13].

En efecto, se aspiraba a realizar transacciones en el Congreso Nacional, para que éste pueda ir poco a poco realizando los cambios operativos que ga-

---

'8.) Limitar las funciones del vicepresidente de la República a las que le otorgue el presidente.'
'9.) Restablecer la disposición dos veces derogada de que un partido para conservar su registro electoral debe obtener un mínimo de votos.'
'10.) Sancionar a los diputados que dejen sus partidos por los que fueron electos.'
'11.) Restituir el derecho del vicepresidente a la sucesión'" (Mejía Acosta y Wray Reyes, 1997, 18-19).

[13] Osvaldo Hurtado expresaba en 1993 lo siguiente: "Estoy en desacuerdo con la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la que antes que aportar con una solución al problema político más bien los agravará. Mencionaré sólo dos riesgos. Las facultades de una Asamblea Constituyente son tan amplias que incluso podría declarar cesante al presidente hoy en ejercicio o al próximo que se elija y si tal cosa llegara a suceder el país bordearía los límites del caos. Súmese a ello la consecuente inestabilidad jurídica y política que generaría y sus efectos negativos en las actividades económicas. Además, ¿qué garantía podemos tener de que dicha Asamblea no será igual al actual Congreso Nacional?" (Hurtado Larrea, 1993, 42).

ranticen una mejor gobernabilidad. Pero esta intención del sistema político se enfrenta con el proceso político del movimiento indígena ecuatoriano. Para 1996, los indios tienen ya 10% del total de la representación parlamentaria. Para 1997, su presencia es vital para lograr la destitución del presidente Abdalá Bucaram.

Con gran sentido político, los indios negocian la destitución de este presidente a condición de que el nuevo presidente interino convoque a una Asamblea Constituyente. De hecho, el nuevo presidente interino, Fabián Alarcón (1997-1998), realizó un referéndum nacional para ratificar la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La movilización social de los indios y de los movimientos sociales fue determinante para que la población aprobase la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

Una vez aprobada la convocatoria a la Asamblea Constituyente, el movimiento indígena, conjuntamente con otros sectores sociales, emprendió un proceso de consulta previa con todas las organizaciones sociales y populares, en un proceso que lo denominaron como Asamblea Constituyente del Pueblo que se efectuó meses antes de la convocatoria formal a la Asamblea Constituyente. Este proceso de validación social de la propuesta indígena fue una de las iniciativas más importantes que haya podido adoptar el movimiento indígena y le consolidó como un referente político para el conjunto de las organizaciones sociales del Ecuador.

El sistema político tuvo que aceptar la convocatoria a la Asamblea Constituyente, pero la adscribió inmediatamente a sus propios contenidos y referencialidad, es decir, el sistema político la situó dentro del sistema de representación, en ese sistema, habida cuenta de la Ley de Elecciones y la Ley de Partidos Políticos, y del diseño de la participación que hacía muy difícil la participación política por fuera de los partidos políticos, las reglas estaban hechas de conformidad con los requerimientos y las expectativas que el mismo régimen político había creado.

Mientras el movimiento indígena y las organizaciones sociales y populares validaban el nuevo texto constitucional desde lo que ellos consideraban el deber-ser del Estado, el sistema político armaba las reglas de juego para la representación a la Asamblea Constituyente.

De esta manera, la Asamblea Constituyente que finalmente se realizó en 1998 fue el punto de confluencia entre el movimiento social y el sistema político ecuatoriano. Desde 1990, en el que los indios habían emergido con su levantamiento, hasta 1998, ambas dinámicas jamás se habían unido, jamás habían convergido. Es la Asamblea Constituyente de 1998 el punto de encuentro de estos dos procesos, pero también es el espacio de sus desencuentros y de sus conflictos.

En el breve espacio en el que la Asamblea Constituyente sesionó, pudieron constatarse que ambas dinámicas hablaban idiomas diferentes, prosas excluyentes. El sistema político al armar las reglas de juego de la convocatoria y elección de delegados o asambleístas a la Asamblea Constituyente, posibilitó que el peso de la balanza se inclinase hacia los partidos políticos, quienes por definición se adscribían con algunos matices a la necesidad de la gobernabilidad vía presidencialismo. Los representantes de las organizaciones sociales y del movimiento indígena, en cambio, fueron en desigualdad de condiciones, porque mientras discutían y validaban socialmente los contenidos de la nueva Carta Política habían descuidado los mecanismos de la elección que en el Ecuador tienden mucho al clientelismo y al caciquismo.

La Asamblea Constituyente de 1998 pudo haber sido el espacio de recuperación para la democracia ecuatoriana. En toda la década no había habido nunca la posibilidad de que los movimientos sociales se encontrasen con el régimen político y pudieran emprender un diálogo en función justamente de ampliar los contenidos de la democracia en el Ecuador.

Los partidos políticos reaccionaron de diferente manera ante la Asamblea Constituyente. El partido de derecha PSC, a la sazón uno de los partidos políticos más fuertes del Ecuador, no dio importancia a la Asamblea y envío en su representación a cuadros de segundo nivel. La Democracia Cristiana, que en Ecuador adoptó el nombre de Democracia Popular, en esa coyuntura el partido político más lúcido de lo que realmente estaba en juego en esta asamblea, puso a sus mejores cuadros, y de hecho fueron ellos los que marcaron el tiempo y los contenidos del debate político al interior de la Asamblea Constituyente, el Partido Socialista, partido de la izquierda política, se declaró contrario a la plurinacionalidad del Estado y defendió ciertos aspectos de un Estado de Bienestar, pero nunca entendió lo que realmente estaba en juego en esta coyuntura; igual cosa sucedió con la socialdemocracia del partido Izquierda Democrática. De su parte, el movimiento indígena y los movimientos sociales, fueron también con sus mejores cuadros indígenas y no indígenas a la Asamblea Constituyente pero su representación no fue muy significativa en términos cuantitativos.

El texto que finalmente se aprobó recoge en lo fundamental las reformas que el ex presidente Osvaldo Hurtado había planteado como condición de gobernabilidad y que constan en la nota n° 12 del presente texto. Son reformas que al mismo tiempo que aseguran el presidencialismo y fortalecen a los partidos políticos más grandes e importantes, también posibilitan cambios fundamentales en la reforma estructural del Estado, entendiendo a ésta en conformidad con los criterios establecidos por el Consenso de Washington.

Es una Carta Constitucional que posibilita la privatización del sector público y que recorta muchas garantías que existían anteriormente. En cuanto a la plurinacionalidad, el texto solamente adscribió una visión culturalista de los

derechos indígenas. Se reconoció la existencia de varias nacionalidades y pueblos, pero bajo la plurietnicidad y pluriculturalidad, que eran muy diferentes en su conceptualización de la plurinacionalidad, y se reconocieron los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos indígenas (artículos 83 y 84 de la Constitución Política aprobada por la Asamblea Constituyente de 1998).

El movimiento indígena había propuesto en 1990 al Ecuador la plurinacionalidad como la condición de un Estado que reconoce el derecho a la diferencia y en el que se garanticen los derechos de todos. En la Asamblea Constituyente de 1998, luego de un proceso de movilizaciones, levantamientos, conformación de un movimiento político, asambleas populares, destitución a un presidente, lucha social por la convocatoria a una Asamblea Constituyente, el movimiento indígena solamente pudo conseguir la aprobación de dos artículos, que desdibujaban su proyecto inicial y que relativizaban los contenidos de su proyecto histórico.

El sistema político finalmente se había impuesto una vez más sobre la lógica de la resistencia y la movilización social. Los dos artículos aprobados en la nueva Constitución, los artículos de los derechos colectivos, son la prueba de la derrota estratégica que el movimiento indígena soportó en la coyuntura de la Asamblea Constituyente de 1998. Ellos querían un nuevo deber-ser para el Estado, y obtuvieron el reconocimiento de los derechos colectivos como pueblos y nacionalidades.

Todo su proyecto de transformar al Estado cambió, gracias a la alquimia de la representación política, en una reivindicación casi gremial y de contenidos culturalistas. Aun así para el sistema político eso era demasiado. Los derechos colectivos eran una grieta a ser cerrada en la construcción de un Estado neoliberal. La lógica del texto constitucional debía en lo posible asegurarse de que con respecto a los derechos colectivos, tal como en la colonia, se "acata pero no se cumpla".

¿Por qué el movimiento indígena fracasó en posicionar su agenda en la Asamblea Constituyente de 1998? ¿Qué implicaciones políticas tiene este fracaso? ¿Cómo puede el movimiento indígena reconstituirse luego de este proceso? Una primera respuesta podría estar en la debilidad de la representación a la Asamblea Constituyente, pero a pesar de que en general es pertinente, es más bien una respuesta superficial. El problema de fondo tiene que ver con esa dialéctica del enfrentamiento con el sistema político. En la Asamblea Constituyente estuvo presente un espacio de confrontación entre dos proyectos de país y de política. La estructura de poder cerró toda posibilidad para que la propuesta de los indios pudiera siquiera ser considerada como propuesta alternativa. Se trataba de negarles a los indios y a las organizaciones sociales su estatus de interlocutores políticos, se trataba de relativizar los contenidos de su propuesta.

La Asamblea Constituyente se convocó de acuerdo con el diseño existente de los partidos políticos, pero luego sus resultados no se ratificaron por la sociedad. El movimiento indígena debió presionar para que el texto constitucional de la Asamblea Constituyente fuese aprobado y validado mediante un referéndum, y trasladar nuevamente a otro espacio esa disputa que el sistema político le había cerrado en la Asamblea. Trasladar esa disputa al espacio de la movilización social significaba cambiar los términos de la confrontación con el sistema político y obligarlo a un repliegue, significaba también abrir un tiempo político en el cual no se definiesen de una vez por todas los contenidos de la reforma sino esperar hasta que no se hubiesen debatido a profundidad los alcances tanto de la gobernabilidad cuanto de la plurinacionalidad.

El error estratégico del movimiento indígena fue subestimar al sistema político y pensar que su movimiento político Pachakutik era de por sí más que suficiente para afrontar y resolver las disputas con el sistema político. Ese error estratégico da cuenta de los nuevos conflictos que se suscitarán apenas un año después de la Asamblea Constituyente de 1998. En efecto, en 1999 se realizaron tres levantamientos indígenas, y la gobernabilidad supuestamente garantizada en la Constitución recientemente aprobada estalló en pedazos. Esa Constitución hecha con todo el recetario que la gobernabilidad establecía no sirvió para que el presidente Mahuad enfrentase la insurrección indígena del 21 de enero de 2000. Esa misma tarde, camuflado en una ambulancia, el Presidente huía del palacio presidencial, mientras que la multitudinaria marcha indígena y social, por vez primera en cinco siglos, izaba en ese mismo palacio de la Presidencia de la República, horas más tarde, su bandera, la huipala, símbolo de su atávica lucha y resistencia.

Bilbliografía

Bebbington, Anthony *et al.* (1992): *Actores de una década ganada. Tribus, comunidades y campesinos en la modernidad*, Quito, Ed. Abya Yala.

Dávalos, Pablo (2003): *FMI y Banco Mundial: La estrategia perfecta*, tomado de: http://alainet.org.

Habermas, Jürgen (1996): *Teoría de la acción comunicativa*, España, Paidós.

Hurtado Larrea, Osvaldo (1993): *Gobernabilidad y reforma constitucional*, Quito, Corporación Editora Nacional.

Macas, Luis y Pablo Dávalos (2001): "Base ideológica del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik", *Nuevo País*, julio, tomado de: web-site: www.pachakutik.org.ec/archivos/congreso1.htm.

Macas, Luis (1992): "El levantamiento indígena visto por sus protagonistas" en *Indios. Una reflexión sobre el levantamiento indígena de 1990*, Quito, Ildis-Ed. Abya-Yala.

Mejía Acosta, Andrés y Norman Wray Reyes (1997): *Asamblea Nacional para la Reforma Política. Límites y Posibilidades*, documento de trabajo n° 1, Quito, Proyecto Cordes-Gobernabilidad, abril.

Moreno Yánez, Segundo (1997): *Las sublevaciones en la Real Audiencia de Quito*, Quito, Ed. Abya Yala.

US State Department (1990): *Sierra Indians. Country Studies.*

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2004, vol. 10, n° 1, (ener.-abr.), pp.203-218

MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO POLÍTICO EN BOLIVIA

Javier Sanjinés C.

Durante la transmisión del mando presidencial, llevada a cabo el 6 de agosto de 2002, el hemiciclo congresal nos mostró a los bolivianos una imagen del país a la que no estábamos acostumbrados. Reunido ese día para recibirles el juramento a los nuevos mandatarios electos en los comicios electorales que se realizaron el 30 de junio de 2002, el Congreso Nacional no tenía ya el componente étnico homogéneo de mestizo-criollos que constituían tradicionalmente la legislatura, y representaban la unidad nacional. Ahora, las imágenes que el Congreso emitía eran ilustrativas de que un cambio profundo había tenido lugar en Bolivia, país que, con ocho millones de habitantes y conformado por varias etnias, reúne el aymara, el quechua y el guaraní, los tres idiomas originarios más hablados en todo el continente. En un lado del hemiciclo, congresistas de ambos sexos, vestidos de corbata y traje sastre, apoyaban fervientemente el discurso presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada, el neoliberal que volvía al poder después de cinco años, en un momento de aguda crisis de las reformas que él mismo había puesto en marcha entre 1993 y 1997. En el otro lado del hemiciclo, el sector igualmente importante de congresistas vestidos de chamarras, ponchos y sombreros, escuchaba en silencio y con gesto risueño que denotaba incredulidad, el discurso de unidad nacional que proponía el flamante Presidente, y que sonaba algo artificioso porque respondía a los intereses de una parte del país: la Bolivia moderna, ajena a las demandas indígenas y campesinas.

En los hechos, la frágil gobernabilidad parlamentaria, lograda a duras penas por el modernizador Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), mostraba ese día la quiebra profunda que se ha producido en esta Bolivia contemporánea. Lejos del acuerdo social que el discurso presidencial prometía, la reunión del Congreso era indicativa de la barrera cultural que hoy día divide a los bolivianos entre *q'aras* –nombre genérico quechua y aymara para los blancos y los mestizos, y que literalmente significa "desnudo, pelado"– e indígenas; de la escisión económica entre ricos y pobres; de la disparidad geográfica entre *cambas* –los habitantes del oriente boliviano– y *collas* –los habitantes andinos, descendientes del Kollasuyo– y, por último, de la aguda división política entre gobernantes y opositores.

Al observar las imágenes que la televisión difundía en todo el territorio patrio, también recordaba, ese 6 de agosto de 2002, cuán diferente era esta sesión congresal de la que tuvo lugar hace diez años atrás, cuando Sánchez de Lozada llegó por primera vez a la primera magistratura de la nación para continuar y profundizar el sistema neoliberal que el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el partido político en el poder, había impuesto en 1985, dándole un giro de trescientos sesenta grados al capitalismo de Estado que el propio MNR inauguró con la revolución nacional de 1952.

Las elecciones del 30 de junio, que precedieron a esta ceremonia de transmisión del mando presidencial, pusieron en evidencia las dos tendencias que marcan hoy en día la vida política boliviana: por un lado, la reconstrucción de la capacidad popular para intervenir en la vida pública, capacidad ésta que había quedado totalmente neutralizada por las reformas neoliberales que el Estado puso en marcha en 1985; por otro lado, la pérdida de legitimidad de los partidos políticos tradicionales, incluyendo el MNR. Por ello, dos cosas aparecen nítidamente en el escenario político y social de la Bolivia del presente: en primer lugar, el crecimiento de la capacidad popular para neutralizar las reformas neoliberales del pasado inmediato, y, en segundo lugar, la erosión paulatina de la política tradicional. Ambas situaciones se hicieron visibles en las elecciones pasadas, elecciones que dieron como resultado el crecimiento inusitado de una nueva izquierda organizada alrededor de vigorosos movimientos sociales, a cuyo estudio nos abocaremos en este trabajo, y la condensación de una decreciente votación alrededor de partidos tradicionales que impulsaron el proyecto neoliberal (Gutiérrez y García Linera, 2002).

Estas elecciones fueron la quinta vez que la población boliviana pudo manifestar su voluntad en las urnas, desde la "apertura democrática" de 1982, año que marcó el final del militarismo autoritario que gobernó el país casi ininterrumpidamente desde 1964. Sin embargo, y en claro contraste con las elecciones previas, la de junio no fue la simple rotación de partidos políticos tradicionales, acostumbrados a que sus elites urbanas criollo-mestizas ocupen los curules parlamentarios y las otras instituciones del poder, sino el más claro reto al neoliberalismo, proveniente de las fuerzas populares encabezadas por el caudillo cocalero Evo Morales y su partido Movimiento al Socialismo (MAS), y por el partido indianista (MIP) de Felipe Quispe, apodado "el Mallku". Hoy en día, estas fuerzas sociales, con su innegable fuerza parlamentaria, ponen en serio aprieto el ejercicio tradicional de la política y del poder.

Estamos hablando de nuevos movimientos sociales, indígenas y campesinos, que han sido exitosos en el bloqueo de ciudades y de carreteras, entre 2000 y 2003, y cuyo más reciente conflicto con el Estado fueron los enfrentamientos armados del mes de septiembre, en la altiplanicie aymara de Achacachi y de Warisata, en repudio de la venta de gas boliviano por puertos chile-

nos[1]. Estos movimientos sociales inician lo que podría ser el final de la época estatal neoliberal; también dan lugar al nacimiento de nuevas fuerzas de izquierdas en el campo político (García Linera, 2003). Sin lugar a dudas, lo que viene sucediendo en Bolivia, ante el pasmo de los sectores mestizo-criollo urbanos, es el fin del ciclo político de una democracia procedimental vacía de contenido, ligada a proyectos neoliberales que se resquebrajan y se hunden en todo el continente.

En gran medida, el pasmo criollo-mestizo tuvo que ver con el hecho de que la conciencia ciudadana equiparó, en las últimas dos décadas, la ascensión del neoliberalismo con el acceso a la modernidad, entendida ésta como la necesidad de introducir una economía de mercado fundada en la renovación tecnológica y en la racionalidad. Sin embargo, el "sí, se puede", eslogan modernizador con el cual el MNR de Sánchez de Lozada llevó a cabo su campaña proselitista, es negado día a día por una realidad económica y social totalmente adversa. Hoy, Bolivia es menos moderna que hace veinte años atrás. Con el cierre de las empresas estatales, el número de trabajadores asalariados se ha reducido considerablemente y el número de unidades domésticas que trabajan por cuenta propia, bajo la forma del autoconsumo, se ha multiplicado por diez. El sector informal citadino también ha crecido y el número de personas que mantienen relaciones contractuales y mercantiles se ha reducido a 32% del total de la población trabajadora urbana (García Linera, 2002, 149).

En materia de tecnología, el crecimiento descontrolado de los sectores informales negó la posibilidad de que se generalice en la ciudadanía el uso de la tecnología. Si se tiene en cuenta que poco menos de 50% de la población vive todavía en áreas rurales, la población campesino-indígena, de más de dos millones de habitantes, no tiene otro instrumento de trabajo que no sea el arado egipcio arcaico. El empleo de tecnología de punta queda restringido a los sectores relacionados con la telecomunicación y la banca, y a sólo 10% de la extracción minera y del trabajo industrial (García Linera, 2002, 150).

Tampoco fue particularmente aleccionador el empleo de la ética burguesa del trabajo que guía todo proceso modernizador. Los hábitos tradicionales y las pautas de conducta no han cambiado mayormente. En efecto, el período neoliberal estuvo plagado de estafas bancarias, ligadas a créditos vinculados con el Estado, y el empleo patrimonial del poder se mantuvo inalterado. Todo ello muestra que las prácticas señoriales, la prebenda y el uso indebido del poder no se modificaron en todos estos años de neoliberalismo a ultranza, y que la proclamada modernidad quedó reducida a eslóganes de campaña proselitista, como la irónica "Bolivia, país de vencedores".

---

[1] El 12 de octubre de 2003, cuando reviso por última vez este trabajo, recibo las noticias del sangriento enfrentamiento entre el ejército y los residentes de la ciudad del Alto, urbe de aproximadamente medio millón de habitantes, que limita con la ciudad de La Paz.

En resumen, el neoliberalismo, impuesto estas dos décadas por un sector criollo-mestizo que es burgués sólo en apariencia, se tradujo fatalmente en un "keynesianismo al revés" (García Linera, 2002, 152) en el cual el Estado redujo sus funciones productivas para agigantar su intervencionismo regulatorio en beneficio exclusivo de la inversión privada extranjera.

En las páginas que siguen revisaremos por qué el fracaso modernizador del proyecto económico neoliberal estuvo estrechamente ligado al auge de los nuevos movimientos populares. Acto seguido, relacionaremos la recomposición de la capacidad colectiva de lucha con el movimiento cocalero de Evo Morales. Luego, volcaremos la atención hacia los otros movimientos populares que tuvieron éxito estos últimos años, particularmente a la llamada Coordinadora de la Defensa del Agua y al movimiento aymara de Felipe Quispe. Por último, concluiremos con algunas observaciones en torno de las actuales limitaciones de estos nuevos movimientos sociales.

1. Reformas neoliberales y nuevos movimientos sociales

Durante los últimos quince años, politólogos y cientistas sociales pusieron toda su atención en las reformas neoliberales introducidas en el país con el retorno del MNR al poder, en 1985, y, sobre todo, con la promulgación de tres leyes fundamentales –la Ley de Capitalización, la Ley de la Participación Popular, y la Ley de la Reforma Educativa– que dieron notoriedad a la primera gestión administrativa de Gonzalo Sánchez de Lozada, entre 1993 y 1997. Pero a pesar de los análisis en torno del Estado plurinacional y a la nación multicultural (Mayorga, 2002), o a los esfuerzos continuos por afirmar teóricamente la modernidad y la gobernabilidad (Calderón y Laserna, 1994), o a la necesidad de afianzar la cultura política de la democracia bajo regímenes neoliberales (Lazarte, 2000), o a la búsqueda de una articulación entre el modelo neoliberal de democracia política y la diversidad social de raigambre étnico-cultural (Rojas, 1999), lo cierto es que la práctica política del neoliberalismo impulsó, en 1985, un plan de estabilización económica que provocó el serio distanciamiento entre el Estado y la sociedad civil. Los despidos masivos, la disminución drástica del valor de la fuerza de trabajo, la soberbia de la "clase política", el menosprecio que la política tradicional tuvo por las aspiraciones y necesidades de la población, son factores que hoy pesan fuertemente en la conciencia ciudadana y tienen que ver con el auge de los nuevos movimientos sociales.

Entre 1985 y 1997, año en que concluyó el primer mandato de Sánchez de Lozada, las políticas neoliberales quebraron las estructuras organizativas de movilización y de acción popular. Estas políticas provocaron el desmantelamiento de las industrias locales anteriormente nacionalizadas. Llamando "capitalización" a lo que en realidad es la privatización de la riqueza, el Estado neoliberal se ve hoy en figurillas para revertir el empobrecimiento generalizado del pueblo y su postergada posibilidad de ascenso y de movilidad social.

El esfuerzo político más sistemático del Estado neoliberal por reorganizar la participación pública fue la promulgación, en 1995, de la Ley de Participación Popular. Pensada para disolver las prácticas políticas de la autogestión y de la autodeterminación comunitaria, esta ley modernizadora consiste en la remunicipalización del país. Al pretender quebrar las asociaciones y los vínculos comunitarios, e imponer nuevas formas de control y de gestión del territorio –formas que son controladas por tecnócratas y por administradores ligados al poder y a los partidos políticos–, la Ley de Participación Popular, creada con intención modernizadora, no tuvo en cuenta que más de la mitad del territorio patrio responde a una lógica indígena de "servicio a la comunidad" que se distingue y se contrapone a la del "poder sobre la comunidad", propia de los sistemas occidentales (Albó, 2002, 19). Es esta "democracia étnica" (Rojas, 1994) o "democracia aymara" (Albó, 1972), fundada en el sentido de reciprocidad y de trabajo colectivo, que la Ley de Participación Popular tornó invisible, lo que muestra la contradicción entre la normatividad estatal y las prácticas cotidianas provenientes de las comunidades rurales de matriz indígena.

Así, la Ley de Participación Popular puede ser leída como la medida política más elaborada del neoliberalismo por invisibilizar, controlar y disolver las prácticas políticas comunales (Gutiérrez y García Linera, 2002, 17). En tal sentido, la así llamada "participación popular" fomentó la división de las comunidades, reatándolas a la sumisión clientelar de los partidos políticos y de sus elites citadinas occidentalizadas.

Al enfrentarse a estas reformas neoliberales, el movimiento popular tuvo una dura tarea reorganizándose, después de años de desorientación y de debacle. De este modo, podemos distinguir dos momentos del movimiento popular contemporáneo: por un lado, el momento de la derrota de las fuerzas populares ligadas a la clase obrera, período éste que se extiende de 1985 a 1999; por el otro, el momento de la recomposición de su capacidad colectiva de lucha, durante los últimos cuatro años. Este momento se hizo visible para todos en las elecciones de 2002 y en la sesión del Congreso Nacional que relato al comienzo de este trabajo.

En Bolivia, la izquierda asistió a su derrota mucho antes de que cayese el muro de Berlín y de que el izquierdismo mundial se desorganizase. Entre 1984 y 1985, la desastrosa gestión gubernamental de la Unidad Democrática y Popular (UDP), previa al retorno del MNR y a la implantación de su política económica neoliberal, mostró no sólo la impotencia de los partidos de izquierda que conformaban este bloque político, sino también la de los sectores de la extrema izquierda, incluidos los partidos comunistas, que caían derrotados en sus planteamientos políticos y económicos. Atrincherada todavía en un capitalismo de Estado, en momentos en que éste era desmantelado por las elites empresariales, la izquierda no había dejado de ser colonial en su relacionamiento con el indio, y nacional-estatista en materia económica. Puede entonces decirse que la izquierda, a la que se sujetaba la clase obrera, era nada más que una prolongación del nacionalismo revolucionario. Por ello, el colapso

de este modelo de economía y de Estado, entre 1984 y 1985, marcó también el fin de la izquierda, y cerró un ciclo político que comenzó después de la derrota de la Guerra del Chaco (1932-1935), con el auge del MNR, partido que al aparecer en el escenario político enarboló el "nacionalismo revolucionario" para llegar al poder en 1952. De este modo, el fin del nacionalismo revolucionario –no así del MNR, convertido en 1985 al neoliberalismo– fue poco heroico porque los mineros, aquellos que habían construido la nación revolucionaria a punta de dinamita y de disciplina sindical, no tomaron por asalto la histórica Plaza Murillo, donde se ubica el Palacio de Gobierno, sino que se desperdigaron por todo el país para instalarse en las tiendas nada épicas del comercio informal (Toranzo, 1989; Sanjinés, 1992; García Linera, 2003). La izquierda se había quedado sin sujeto de la revolución y su narrativa victoriosa del ascenso del proletariado había terminado trunca e incumplida. La historia se encargaba de mostrarnos las ruinas del supuestamente invencible modelo teleológico marxista de la revolución occidental.

Los izquierdistas respondieron de diferentes maneras ante semejante derrota. Los más avezados se volvieron neoliberales a ultranza y ofrecieron sus servicios a los partidos de derecha ascendente, particularmente al MNR. Los menos avezados, y, para mal de males, todavía utópicos, se aferraron a un indigenismo de clase media, de ribetes izquierdizantes. Sea cual fuere el desdichado destino de esta izquierda ilustrada, lo concreto es que ella cedió el paso a un período de dominación de la derecha que podemos calificar de "dominación sin hegemonía" (Guha, 1997). Entre 1985 y 1997, se construyó el "estado neoliberal-patrimonial contemporáneo" (García Linera, 2002, 155) y se consolidó el bloque social compuesto por fracciones empresariales ligadas al mercado mundial, a inversionistas extranjeros y a organismos internacionales de regulación que dominaron, sin el consenso ni el apoyo popular, todo el campo de las políticas públicas.

En los últimos tiempos, este bloque de dominación –sin hegemonía y, por lo tanto, sin consenso– se fue resquebrajando de manera cada vez más acelerada debido a la reorganización del movimiento popular. Los levantamientos populares de abril y septiembre de 2000, de julio de 2001, febrero de 2002, febrero de 2003, y los más recientes, de septiembre y de octubre de 2003, así lo han demostrado. Hoy vivimos bajo el signo de la insurrección permanente de los diversos movimientos sociales que controlan políticamente importantes grupos urbano-rurales. Estos movimientos pretenden imponer políticas públicas que modifiquen la distribución de excedente social, dejando atrás a los partidos políticos, los que perdieron su capacidad mediadora y dejaron de ser los vehículos tradicionales de canalización de las demandas de la sociedad ante el Estado. Lo que pasa en Bolivia, como en otras partes de América Latina, es que la sociedad civil ha comenzado a crear otras formas de mediación política que operan bajo nuevas prácticas de deliberación. Los cabildos y las asambleas han puesto en jaque el juego político de las instituciones dominantes, acostumbradas a los pactos de gobernabilidad y a las discusiones parla-

mentarias. Los movimientos sociales, que no pueden compararse a los partidos políticos porque no tienen una articulación social en gran escala, gozan, sin embargo, de una pasmosa capacidad para crear redes sociales subalternas que luego se tornan en movilizaciones populares que controlan extensas zonas geográficas del Estado.

El sociólogo político boliviano René Zavaleta Mercado solía decir que las crisis son momentos privilegiados de conocimiento porque revelan, como el *Angelus Novus* de Benjamín, lo que no es visible ni inteligible en los momentos de dominación institucionalizada. En el caso que nos atañe, fueron las crisis generadas por los levantamientos populares arriba señalados las que revelaron la existencia de un subsuelo político alterno, negado por el sistema institucional oficial, y que también pusieron de manifiesto la poca aceptación que hoy tienen los partidos políticos (Tapia, 2001).

Puesto que las crisis forman parte del proceso de constitución de la autonomía de los movimientos subalternos, podría decirse que las elecciones de junio de 2002, donde el MAS de Evo Morales y el MIP de Felipe Quispe lograron sendas victorias, fueron el momento estelar –dado el curso de los acontecimientos actuales, no será el único ni el último– de la acumulación histórico-política del movimiento indígena.

Ocurre que el subsuelo político al que nos referimos revela ahora, en las elecciones de 2002, su fuerza identitaria. Es la naturaleza quechua-aymara de los movimientos sociales que había quedado oculta, agazapada detrás del discurso de clase del sindicalismo minero. Ahora, libres de ropajes que encubran la identidad, los indios y los campesinos retoman un protagonismo político que acerca al presente la memoria de las rebeliones indígenas de los siglos XVIII y XIX. Así, conscientes de su historia, el MAS y el MIP le asestan un duro golpe al sistema político tradicional porque ponen en jaque la gobernabilidad institucional que la elites habían creado a duras penas durante las últimas dos décadas. En los hechos, no es una victoria numérica sino moral la que los partidos indios lograron en las últimas elecciones. Es la derrota mestizo-criolla a manos de indios y cholos que ingresan en el escenario político sin tener que pedir permiso ni a los intelectuales de izquierda, ni a los políticos que los representan. En otras palabras, e independientemente de que los movimientos indios retengan sus características actuales, no hay posibilidad alguna de que, en el futuro, la izquierda pueda dejar de tener en cuenta a los indios como sujetos autónomos y como actores sociales por derecho propio. En tal sentido, los indios y los cholos ingresan a la disputa política para quedarse. A continuación, veamos cómo ganaron en los últimos años este su derecho histórico.

2. La resistencia de los cocaleros

Al responder a las expectativas políticas y sociales de la población trabajadora de los valles del Chapare de Cochabamba, el MAS de Evo Morales es la

agrupación política de un sector social específico: los mineros relocalizados en esta zona de cultivo de la hoja de coca. En efecto, desalojados de las minas estatales que fueron privatizadas, entre 1985 y 1988, por el estado neoliberal, miles de trabajadores mineros migraron a los valles tropicales del Chapare para poder sobrevivir. De la siembra de tubérculos, plátanos y cítricos, estos relocalizados pasaron al cultivo de la hoja de coca. Este cultivo constituye, desde hace siglos, un mercado para consumidores urbanos y rurales, tanto en Bolivia, como en Perú y Argentina.

El cultivo de la coca tuvo un incremento en los años 80 porque los mineros relocalizados encontraron en la coca un cultivo rentable, capaz de darles una nueva posibilidad. Hay que también tener en cuenta que en la década de los 80 la hoja de coca era un cultivo en expansión. La así llamada producción "excedentaria" de la coca pasó a ser materia prima para la elaboración de pasta base de cocaína. La coca contaba con un mercado asegurado y en expansión. Esta producción excedentaria ha sido motivo de persecución permanente por la policía y el ejército bolivianos, en el marco de la "guerra contra las drogas" montada por el gobierno de EEUU. El MAS proviene de las luchas de resistencia contra la erradicación de los cultivos de coca.

Tres son las razones que Gutiérrez y García Linera (2002, 18-20) dan para explicar el éxito de este movimiento de mineros transformados en campesinos cultivadores de coca: en primer lugar, la extrema necesidad de los migrantes a las zonas de cultivo. El MAS es un movimiento político que se formó por la extrema necesidad de sus militantes. Ellos supieron desde el principio que sólo contaban con su cohesión interna para enfrentar los planes gubernamentales que pretendían sustituir los cultivos de coca por cítricos o plátanos sin rentabilidad alguna.

En segundo lugar, fue decisiva la calidad de "colonizadores" que tiene un gran porcentaje de la población del Chapare. Son hombres y mujeres que, despedidos de las minas y migrantes en su propio país, han construido prácticamente todo lo que hay de "desarrollado" en la región. Así, los sindicatos agrarios que dieron origen al movimiento cumplieron tanto funciones de organización como de ejercicio del poder local. Ampliando prácticas sindicales, el MAS tuvo una capacidad de gestión colectiva que pudo, como veremos a continuación, adaptarse a la Ley de Participación Popular. Sin embargo, y en la práctica real, los nuevos dirigentes, que ya no conforman la consabida "clientela" de los partidos tradicionales, acataron disciplinadamente las órdenes que provenían de sus bases y permanecieron ligados a ellas, a la tradición de las asambleas mineras, oponiéndose tenazmente a la separación entre la estructura política y el movimiento social.

En tercer lugar, está la presencia de Evo Morales, ligado estrechamente a toda la movilización popular, tanto cocalera como regional. Aymara migrado al Chapare, Evo Morales abandonó una región árida de altura, para ubicarse en

el trópico de Cochabamba, atraído por las mayores posibilidades laborales y comerciales que ofrece esta región, y debido al otro fenómeno globalizador que es el mercado de la coca.

El MAS se diferencia de los movimientos revolucionarios de otros países, como Sendero Luminoso y los otros movimientos guerrilleros de América Latina, por no tener un claro vínculo financiero con el narcotráfico, ni tampoco una clara predisposición a la lucha armada. En tal sentido, el MAS es un movimiento social de masas, tentado de pasar a la lucha armada porque no le han faltado amenazas y provocaciones del ejército y de la embajada norteamericana.

De manera por cierto astuta, el MAS fue uno de los primeros movimientos en acoplarse al nuevo escenario creado por la Ley de Participación Popular (Albó, 2002, 77). En efecto, los cocaleros decidieron participar por sí mismos en las primeras elecciones municipales en las que debía aplicarse la mencionada ley de remunicipalización territorial. Con esta finalidad, crearon el partido Asamblea Soberana del Pueblo, en 1996. No reconocidos por la Corte Nacional Electoral, los cocaleros se presentaron bajo el nombre de otro partido y lograron obtener la primera mayoría en el área rural del departamento de Cochabamba, además del control de importantes alcaldías rurales. Quedaba claro que un movimiento opositor del esquema neoliberal podía controlar los municipios, la expresión local del Estado, por la vía democrática.

El movimiento de Evo Morales fue creciendo poco a poco, logrando victorias en las elecciones nacionales de 1997, momento en el que Evo Morales alcanzó el escaño de diputado nacional. Desde entonces, a Evo no le han faltado problemas externos e internos en la conducción del movimiento. En lo interno, su liderazgo fue cuestionado seriamente por el quechua cochabambino Alejo Véliz. La lucha entre ambos provocó la escisión del movimiento, primero dentro de la Federación de Campesinos de Cochabamba, y, después, dentro de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la organización máxima del sindicalismo campesino. Estas maniobras fueron orquestadas por los partidos tradicionales que siempre vieron en el movimiento de Evo el peligro latente de que los cocaleros llegasen a controlar otras organizaciones importantes fuera de las áreas productoras de coca.

En lo externo, el ascenso al poder del general Hugo Bánzer, en 1977, constituyó otro golpe duro para el MAS. Banzer hizo de la extirpación de la hoja de coca la causa de su mandato presidencial. Estaba seguro de que por esa vía conseguiría el apoyo del gobierno de EEUU, y que limpiaría su nombre de viejos estigmas que lo vinculaban con el narcotráfico. La meta de "coca cero" pesaría fuertemente sobre los actos del MAS durante el gobierno de Banzer, quien murió antes de terminar su mandato.

En suma, el MAS logró organizar un movimiento contestatario que reúne en torno de Evo Morales a importantes dirigentes mineros y a un creciente sector

de clase media que incluye a intelectuales que no quisieron acomodarse a las políticas neoliberales de las décadas pasadas. Objeto de las críticas más fuertes del gobierno norteamericano –últimamente el gobierno mexicano también le negó ingreso a México, impidiéndole participar en la reunión de Cancún– Morales ha sabido explotar las críticas y la amenazas para aparecer como abanderado de la causa nacional en contra del imperio, que hace vanos esfuerzos por acallarlo.

El movimiento cocalero también creó nuevas formas de resistencia popular. El movimiento ha realizado un sinfín de marchas y bloqueos de caminos, en coordinación o no con otros actores sociales, y ha sufrido cerca de un centenar de bajas debidas sobre todo a las acciones represivas de las fuerzas del orden. A fin de evitar la represión, las marchas han recorrido senderos de montañas difíciles de detectar hasta llegar por varias vías a la sede de gobierno.

Pero esta modificación drástica de la relación de fuerzas sociales que vive hoy Bolivia no se limita al movimiento organizado por Evo Morales. A partir de 2000, dos otros grandes movimientos sociales surgieron en Bolivia: por una parte, un combativo movimiento regional de defensa del agua de Cochabamba y, por otra parte, una poderosa insurgencia aymara en el Altiplano, que ha puesto en serios aprietos al gobierno central. Veámoslos con algún detenimiento.

3. Otros movimientos sociales

Al enfatizar en la "cultura de vida", la Coordinadora del Agua y de la Vida fue uno de los más importantes y exitosos movimientos sociales de los últimos años. Como en el caso del MAS, la Coordinadora, una asociación todavía más flexible de gremios campesinos, de asociaciones comunales de riego, de desocupados, de jóvenes y de ciudadanos en general, mostró, entre enero y abril de 2000, la articulación de fuerzas urbano-rurales de Cochabamba que, en esta ocasión, se oponían a la intención gubernamental de privatizar en manos de consorcios transnacionales los sistemas de riego campesinos que, desde hace siglos, son administrados por las propias comunidades.

Uno de los logros más claros de este movimiento de la Coordinadora fue hacer visible por primera vez los límites de las reformas neoliberales iniciadas en 1986. En las duras jornadas de enero de 2000, el país vio la nueva cualidad organizativa de este tipo de movimientos: movilizaciones laxas, territorializadas, que giran alrededor de demandas básicas, como agua, tierras, servicios, y que muestran el estado de disponibilidad objetiva de la población para luchar en defensa de sus propios intereses, sin depender de las estructuras institucionales, ni de la mediación de los partidos políticos.

En los últimos años, los movimientos sociales, como este de la Coordinadora, no sólo generaron un polo de atracción articulado en torno a una demanda específica; también crearon, a partir de la acumulación de varias demandas

concretas, un programa de reformas económico-políticas lo suficientemente denso como para paralizar el Estado, producir "ruido" en su discurso político, y desplazar, como bien señala García Linera (2002, 21), la legitimidad discursiva de la modernidad globalizada, incluyendo la privatización, la democracia pactada y la gobernabilidad. Todo esto significó que, con el actuar de los movimientos sociales, el perspectivismo homogenizador del Estado –incluida su visión identitaria del mestizaje– quedase descentrado y profundamente cuestionado. Volveremos a este tema cuando toquemos más tarde el movimiento indígena de Felipe Quispe. Dicho de otro modo: los nuevos movimientos sociales multiplicaron los centros de irradiación discursiva y abrieron la posibilidad de concebir la democracia de una nueva manera. Pues de lo que se trató fue de generar un proceso de reforma de la política que viniese de la propia sociedad civil. De hecho, este proceso tuvo un sentido democratizante muy diferente porque alteró el monopolio de la política otorgado al sistema de partidos.

Al iniciar este apartado sobre la Coordinadora del Agua, dijimos que ella promovió en la sociedad civil una "cultura de vida". Conviene ahora explicar un poco más este asunto. La Coordinadora supo ligar la lucha por el consumo de un bien natural con la búsqueda de una nueva praxis política en el seno de la sociedad civil (Tapia, 2002, 54). Lo interesante e importante es que el movimiento generado por la Coordinadora pretendió no sólo la reivindicación de un bien natural, sino también la reforma de la sociedad. En efecto, la Coordinadora fue capaz de insuflar vida a una sociedad civil que sufría la desarticulación y el pasmo que le produjeron las reformas neoliberales. En otras palabras, la Coordinadora proporcionó un nuevo modelo de articulación organizativa y de acción a aquellos sectores subalternos que se vieron afectados por las reformas económicas que condujeron a los despidos laborales. En este sentido, la Coordinadora fue incluso un referente para el actuar de jóvenes de la calle, de lustrabotas, de estudiantes y de amas de casa.

Dos son las características de los movimientos sociales que giran en torno de la satisfacción de demandas básicas, como el agua, la tierra y los servicios. En primer lugar, crean espacios de deliberación paralelos a los de los partidos políticos. Se trata de espacios cambiantes, discontinuos, polimorfos (Tapia, 2002, 62) que se modifican de acuerdo con la naturaleza de los conflictos y de las luchas sociales. Como afirma Tapia, estos espacios son "campos de fuerza" movibles; no son "lugares estables" de la política institucional. En tal sentido, los "campos de fuerza" son zonas de tránsito donde los grupos sociales prefieren "hacer preguntas" antes que "dar respuestas" a los graves conflictos socio-económicos que pesan sobre nuestras sociedades. Por ello, los movimientos sociales permiten que los problemas y las frustraciones de la sociedad civil "fluyan", pero se alejan, la mayoría de las veces peligrosamente, de las "formas" establecidas por la organización social.

En segundo lugar, los movimientos sociales muestran con cruel objetividad que el centro de la política ha dejado de estar en los lugares institucionaliza-

dos de la representación –el Congreso, por ejemplo, se ha vuelto un auténtico "cetro de paja"–, de la mediación de los partidos, y de la administración del Estado. Hoy en día, Bolivia vive el momento de una extrema fluidez social porque los movimientos sociales luchan tenazmente contra las estructuras globales impuestas durante diecisiete años de políticas neoliberales. Los acontecimientos más recientes, particularmente la declaración de guerra civil que el movimiento indígena acaba de hacer en el altiplano aymara, son indicación clara de que el Estado no ha podido asimilar los remezones producidos por la sociedad civil; que las fuerzas sociales se siguen desplazando por caminos no agotados. Estos caminos se entrecruzan con las demandas del movimiento aymara, cuya presencia en el escenario político y social boliviano no puede quedar inadvertida. Ocupémonos de él, tanto por su significado social, como por la ruptura epistemológica que el actual pensamiento indio introduce en el conocimiento de la nación boliviana.

El segundo gran movimiento social que surgió en 2000 fue el de las comunidades indígenas de la altiplanicie aymara, organizadas en torno de la Csutcb. Bajo el liderazgo de Felipe Quispe, "el Mallku", este movimiento se dio a conocer por tres grandes bloqueos de carreteras y por el cerco de la ciudad de La Paz durante 2000, 2001 y 2002. Debemos enfatizar en que los acontecimientos cobraron fuerza gracias a la labor política desplegada en importantes comunidades indígenas, como la de Achacachi, por Felipe Quispe. En efecto, el Mallku es una ficha importante en la guerra civil que las comunidades del altiplano norte y de los valles de Sorata declararon recientemente al Estado, en rechazo de la venta del gas a EEUU y a México por puertos chilenos.

Lo importante de estos movimientos indígenas es que las comunidades han comenzado a propagar un discurso de igualdad entre indígenas y criollo-mestizos, de autogobierno y de nuevas políticas de administración indígena del Estado, de acuerdo con los usos y las costumbres locales. Uno de los discursos más eficientes e impactantes es el de "las dos Bolivias", con el cual Felipe Quispe ha producido un duro remezón en la conciencia ciudadana, la cual es fundamentalmente racista y colonialista hasta el día de hoy. En efecto, el movimiento de Felipe Quispe ha removido los cimientos republicanos de un Estado que sólo se acordó de los indios en momentos de pugna electoral, y que los excluyó de la vida ciudadana aún después de la revolución nacional de 1952. Es claro que en ciento setenta y ocho años de vida independiente, el Estado boliviano se olvidó de incorporar las culturas, las lenguas y las prácticas indígenas, en el ámbito de la esfera pública ciudadana; en realidad, jamás pensó que algún día los indígenas se convertirían en actores políticos capaces de definir la estabilidad de los gobiernos criollo-mestizos. En tal sentido, el eslogan de "las dos Bolivia" bloquea hoy en día el "sí, se puede" de la Bolivia modernizada que plantea el MNR de Sánchez de Lozada. Lo interesante es que detrás de "las dos Bolivia" de Felipe Quispe –una es la Bolivia criolla; la otra es la Bolivia de los indios y de sus comunidades– corre una corriente alterna que socava los fundamentos de la nacionalidad boliviana. Ampliemos entonces la

discusión del movimiento indígena al vuelco espistemológico que propugna Felipe Quispe, para quien la nación mestizo-criolla debe ser puesta de cabeza.

Al venir de un pasado violento que incluye la fundación de los "ayllus rojos" y la creación del Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK) al final de la década de los 80, la ideología extremista del movimiento indígena justificó la promoción de un "Estado de trabajadores y la unión socialista de las naciones oprimidas". Con la mezcla del extremismo indígena y de la doctrina marxista de la lucha de clases, el indianismo radical de Felipe Quispe apela hoy a aymaras, a quechuas y a otras naciones indígenas, para la creación de una nueva madre patria, la "Unión de las Naciones Socialistas del Qullasuyu", bajo la égida del colectivismo y del comunitarismo.

Felipe Quispe, quien radicaliza el indigenismo, subvierte el *statu quo* y rearticula el movimiento indígena con una posición ambigua muy astuta, que se ubica tanto "dentro" del sistema político –Felipe Quispe es diputado nacional y jefe de un partido político– como "fuera" de él, promoviendo movimientos populares que tienden a desarticular el sistema institucional. Este posicionamiento le permite al indianismo radical superar la mera formalidad multicultural e incidir, positivamente o negativamente, dependiendo de quién es el que juzga, en la práctica política cotidiana.

Me permito presentar a continuación un aspecto interesante del discurso de Felipe Quispe que está relacionado con su mirada de "las dos Bolivias": su afirmación de que hay que "indianizar al q'ara", y poner de cabeza la construcción criollo-mestiza de la nación. Al afirmar que debemos indianizar a los criollo-mestizos, a los "q'aras", a fin de corregir las injusticias cometidas en contra de las nacionalidades indígenas, Quispe pone de cabeza la construcción simbólica de lo nacional. En efecto, lee negativamente la construcción del mestizaje, una de las narrativas dominantes de la historia boliviana. Así, el Mallku ubica estratégicamente la construcción visual de la Bolivia moderna bajo la idealización mestizo-criolla del indio, y, luego procede con la reubicación de la metáfora corporal (ahora cabeza abajo) a fin de dar la percepción subalterna de la sociedad. En efecto, preguntando sobre si la indianización de los "q'aras" implica repensar el Estado-nación y los logros de la Revolución nacional de 1952, Quispe da una nueva interpretación del problema cuando señala que la reificación cultural de las identidades indígenas no pertenece ni a la revolución del 52, ni a la construcción del "nacionalismo revolucionario". Para el líder indígena, el mestizaje como discurso constructor de la nación se retrotrae a los intentos pedagógicos propuestos por las elites criollo-mestizas durante las primeras décadas del siglo XX.

Si estas elites identificaron la esencia de la nación en la energía corporal del indio, dominada y guiada por la inteligencia mestiza, la que ejercita su función pedagógica sobre el cuerpo indígena (Tamayo, [1910] 1975). Felipe Quispe, quien parece conocer el argumento –Quispe termina la carrera de his-

toria en la Universidad Mayor de San Andrés–, ubica a principios del siglo XX la metáfora corporal con la cual los sectores dominantes ejercieron un protectorado pedagógico sobre los dominados, confiriéndoles una identidad fraguada. Para Quispe, el indio ha estado viviendo "con ropa prestada" desde entonces, y, aunque "use corbata y traje occidental", sigue siendo "indio por debajo". Estas afirmaciones no pueden ser más visuales, y entrañan una percepción conflictiva de la modernización, cuestionando abiertamente la construcción histórica del mestizaje.

Esto me lleva a afirmar que los movimientos indígenas más recientes no pueden ser enmarcados dentro de discursos políticos reconocibles. Ni socialistas, ni indigenistas, estos movimientos hablan desde afuera de la conciencia mestiza y de su tiempo histórico (Sanjinés, 2001). Pero estos movimientos –no olvidemos que el MIP de Felipe Quispe es un partido político– también ven la necesidad de combatir el sistema político desde adentro. De este modo, los movimientos indígenas se mueven estratégicamente en el campo de la radical no permanencia, recordándole constantemente a la gente que las ideas cambian dependiendo de quien sea el interlocutor del momento. Por ello, los movimientos son absolutamente claros en negarse a aceptar el yo centrado del mestizaje como forma perdurable. Así, la respuesta subalterna de "indianizar al q'ara" enfatiza en el hecho de que la sociedad dominante está llamada a reconocer que aymaras, quechuas y otras nacionalidades tienen también sus posiciones y sus modos de manifestar que sí son ciudadanos, y que lo son "ahora", no mañana sino hoy día. Y los movimientos indígenas saben con su proverbial testarudez que las cosas existen bajo el modo constitutivo de la negatividad, por eso son "janiwa" ("no", en aymara). Pero los sectores dominantes parecen no entender ni admitir que el mensaje subalterno tiene su posicionalidad y su lógica. Por eso, el diálogo de sordos lleva a constantes enfrentamientos que, lamentablemente, cobran cientos de víctimas.

4. Las limitaciones de los nuevos movimientos

Los tres movimientos que hemos estudiado revelan que una auténtica transformación social está produciéndose en Bolivia. Sin embargo, somos conscientes de que falta mucho camino por recorrer para que estos movimientos logren una transformación real y efectiva del aparato estatal. De igual modo, nos percatamos de la honda brecha que separa el campo de los procedimientos liberales y el de las costumbres comunitarias.

En lo inmediato, también existe el riesgo de que las instituciones oficiales, junto con sus mecanismos seductores, terminen por atemperar la fuerza de los movimientos, puesto que éstos muestran una serie de limitaciones. Revisémoslas a tiempo de concluir este trabajo.

Uno de los principales problemas de los movimientos sociales aquí descritos es que su fuerza regional, preponderantemente agraria y campesina, se

diluye en los espacios urbanos de las principales ciudades. Sin embargo, este factor parece haber sido superado por los levantamientos populares más recientes, particularmente por el del 12 de octubre de 2003, en la cruenta refriega que tuvo lugar en la ciudad del Alto, de aproximadamente medio millón de habitantes, dominada por migraciones campesinas y de mineros relocalizados. En los últimos acontecimientos, parece haber surgido un movimiento social de carácter nacional, conducido por la así llamada Coordinadora de la Defensa del Gas.

Álvaro García Linera afirma que, aunque el movimiento indígena tiene hoy la propuesta más seria de transformación del Estado colonial republicano, a través de la incorporación estatal de las prácticas organizativas comunales indígenas, esta propuesta sólo podrá avanzar si se la articula con las expectativas urbanas no indígenas. En este sentido, el MAS de Evo Morales, que tiene una amplia representación parlamentaria, lamentablemente falla por su pobre capacidad generadora de nuevas ideas que atraigan a la masa poblacional urbana (García Linera, 2003).

Por último, no podemos dejar de observar el hecho de que los liderazgos son fácilmente sobornables. En este sentido, los propios intelectuales indígenas saben que las posibilidades de que el sistema engulla a quienes quieren abolirlo, son siempre elevadas. Esteban Ticona, uno de los intelectuales indígenas más conocidos en el ambiente académico, señala que la mayoría de los líderes nacionales indígenas y campesinos terminan, tarde o temprano, devorados por la política tradicional de la que forman parte desde el momento en que se alejan de sus comunidades de base (Ticona, entrevista de Rafael Archondo, 2003).

Estas limitaciones, en particular la pobre capacidad de articular la diversidad social y el localismo temático de los movimientos indígenas, se conectan con la incomunicación ancestral que define las dos Bolivias mencionadas por Felipe Quispe; estas limitaciones responden, además, al peso de la situación colonial que se vio tan claramente en la sesión de Congreso de 6 de agosto de 2002. Un año después, seguimos acumulando enfrentamientos que indican que Bolivia no logra superar la "cultura de muerte", del "cerco y acecho".

Bibliografía

Albó, Xavier (1972): "Dinámica de la estructura intercomunitaria de Jesús de Machaca", *América Indígena*, n° 32, México, pp. 773-816.

_____ (2002): *Pueblos indios en la política*, La Paz, Plural editores.

Calderón, Fernando y Roberto Laserna (1994): *Paradojas de la modernidad. Sociedad y cambios en Bolivia*, La Paz, Fundación Milenio.

García Linera, Álvaro (2002): "El ocaso de un ciclo estatal", *Democratizaciones plebeyas*, La Paz, Muela del Diablo, pp. 149-176.

_____ (2003): "Las nuevas izquierdas bolivianas", *Le Monde Diplomatique*, año 1, n° 10, La Paz, julio, pp. 1-4.

García Linera, Álvaro y Raquél Gutiérrez (2002): "El ciclo estatal neoliberal y sus crisis", *Democratizaciones plebeyas*, La Paz, Muela del Diablo, pp.11-24.

Guha, Ranajit (1997): *Dominance Without Hegemony. History and Power in Colonial India*, Cambridge, Mass, Harvard University Press.

Lazarte, Jorge (2000): *Entre dos mundos: la cultura política en Bolivia*, La Paz, Plural editores.

Mayorga, Fernando (2002): "Los desafíos de la nación boliviana: Estado plurinacional y nación multicultural", *Bolivia: visiones de futuro*, La Paz, FES-Ildis, pp. 35-67.

Rojas, Gonzalo (1994): *Democracia en Bolivia hoy y mañana. Enraizando la democracia con la experiencia de los pueblos indígenas*, La Paz, Cipca.

_____ (1999): *De ángeles, demonios y política. Ensayos sobre cultura y ciudadanía*, La Paz, Muela del Diablo.

Sanjinés, Javier (1992): "Entre la cruz y la tribuna del pueblo: relocalización y movimientos populares en Bolivia", *Hermenéuticas de lo popular*, Minneapolis, Mn, Ideologies and Literatures, pp. 341-377.

_____ (2001): "Mestizaje Upside Down: Subaltern Knowledge and the Known", *Nepantla: Views From South*, vol. 3, n° 1, Durham, NC, pp. 39-60.

Tapia, Luis (2001): "Subsuelo político", *Pluriverso. Teoría política boliviana*, La Paz, Muela del Diablo.

_____ (2002): "Movimientos sociales, movimiento societal y los no lugares de la política", *Democratizaciones plebeyas*, La Paz, Muela del Diablo, pp. 29-72.

Tamayo, Franz ([1910] 1975): *La creación de la pedagogía nacional*, La Paz, Biblioteca del Sesquicentenario de la República.

Ticona, Esteban (2003): "Estamos jugando en cancha ajena", *Pulso*, La Paz, 15 de agosto, pp. 18-19.

Toranzo, Carlos y Mario Arrieta (1989): *Nueva derecha y desproletarización en Bolivia*, La Paz, Unitas-Ildis.

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2004, vol. 10, n° 1, (ener.-abr.), pp. 219-239

LA CUT EN LA ENCRUCIJADA: IMPACTOS DEL NEOLIBERALISMO SOBRE EL MOVIMIENTO SINDICAL COMBATIVO*

Andréia Galvão

Introducción

Resulta común afirmar que el sindicalismo brasileño –como el resto del sindicalismo internacional– atravesó un período de crisis a lo largo de los años 90. Al contrario de la curva ascendente registrada en los años 80, tanto en lo que se refiere al número de huelgas como a la capacidad de movilizar las bases sindicales y a la intensidad de los conflictos, en la década siguiente constatamos un movimiento de descenso. La Central Única de Trabajadores (CUT), central sindical brasileña de mayor importancia y principal exponente del movimiento sindical combativo, también resultó afectada por ese proceso, razón por la cual se encuentra hoy a la defensiva.

La ofensiva neoliberal constituyó, indudablemente, el principal elemento para comprender esas dificultades. Las reformas orientadas al mercado, a la privatización de las empresas estatales, a la apertura comercial, al descontrol de los mercados, junto a la reestructuración productiva, afectaron negativamente la base social de los sindicatos, provocando el aumento de la precariedad, de la informalidad y del desempleo. Sin embargo, el neoliberalismo no sólo repercute en el plano político y económico, sino que también produce impactos en el plano ideológico. Es cierto que la crisis del pensamiento de izquierda, luego del derrocamiento del este europeo, contribuyó en gran medida a la pérdida de un referencial teórico crítico, valga decir, anticapitalista.

Este texto se propone analizar la trayectoria de la CUT e intenta mostrar los efectos de las reformas neoliberales sobre su discurso y su práctica. El neoliberalismo afecta a la CUT tanto en el plano objetivo como en el plano subjetivo. A pesar de que no se haya adherido al neoliberalismo, la central vacila entre una posición crítica, de resistencia, y otra de adopción de ciertos aspectos

---

* Traducido al español por Greisy Fernández.

de la ideología neoliberal, manifestando tanto movimientos de adaptación, como movimientos en contra del neoliberalismo.

La trayectoria de la CUT no es lineal, ni homogénea. Es posible desglosarla en diferentes fases. Esas fases reflejan las alteraciones coyunturales y las disputas político-ideológicas en el seno de la central. Por lo tanto, si bien el inicio de los años 90 marca un cambio de rumbo de la CUT hacia un sindicalismo de negociación y de carácter *propositivo*, ese nuevo camino no es una vía única: está lleno de tensiones, de conflictos internos, que permiten pensar en la reactivación de una postura más *combativa*.

1. La gestación del sindicalismo propositivo (1990-1992)

No se puede analizar la CUT sin considerar las diferentes tendencias que la componen. La oposición entre posturas internas distintas obliga a la central a adoptar un discurso generalmente más ofensivo que su práctica. El carácter ofensivo del discurso de la central se revela especialmente en análisis críticos al neoliberalismo y en la adopción de palabras de orden antineoliberal. Sin embargo, a pesar del discurso combativo y de algunas acciones de resistencia, la práctica sindical de la central se ha ido transformando, asumiendo una posición cada vez más propositiva[1].

A grandes rasgos, el sindicalismo propositivo se caracteriza por el predominio de la acción en el plano institucional, de la negociación dentro del orden y por hacer concesiones con el gobierno y con el capital. La negociación se realiza de manera "realista", sin confrontarse con los elementos de las propuestas presentadas por el gobierno y por los patronos. Las críticas son puntuales y no ameritan el cambio de la política dominante, ni la reversión de las formas de gestión de la fuerza de trabajo, aspecto éste que se contrapone al sindicalismo combativo, que se caracteriza por el predominio del trabajo de organización y movilización de las bases sindicales, por la negociación contra el orden (negociación contrapropositiva), por la lucha a favor de la ampliación de derechos (cuando es ofensivo) y por la resistencia a la violación de los mismos (cuando es defensivo).

El incremento del sindicalismo propositivo en el interior de la CUT está relacionado con una serie de factores, entre los que destacamos: la derrota de Lula ante Collor en las elecciones de 1989; las alteraciones de estatutos promovidas por el III Congreso Nacional de la CUT, Concut (1988), que le otorgaron mayor importancia a las directivas en detrimento de las bases y oposiciones sindicales; el surgimiento de la Fuerza Sindical, que se presenta como una alternativa al "radicalismo" y partidismo inconsecuente atribuido a los herede-

---

[1] Esta transformación es protagonizada por la corriente mayoritaria de la central, la Articulación Sindical, y es criticada por las corrientes de izquierda.

ros del "nuevo sindicalismo"; el ascenso de nuevos liderazgos centralistas, dispuestos a ocupar nuevos espacios institucionales y a negociar salidas de emergencia para los problemas económicos que afectaban a determinados sectores industriales. Así, Fuerza Sindical logra legitimarse como interlocutora confiable tanto para los gobiernos como para los patronos.

La lucha de espacios con Fuerza Sindical estimuló la vía de la negociación y debilitó la práctica de la resistencia, dando cabida a la participación de la central en acuerdos tripartita. Esa nueva estrategia dio como resultado la firma del primer acuerdo de la Cámara Sectorial de la Industria Automovilística, en marzo de 1992[2]. La adhesión del sector metalúrgico a la cámara sectorial fue fruto de una decisión unilateral del presidente del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema, Vicente Paulo da Silva (Vicentinho), decisión tomada sin conocimiento de la CUT. A pesar de la polémica que se desencadenó al comienzo, las cámaras sectoriales fueron aceptadas paulatinamente por muchos de sus oponentes en la central, convirtiéndose en una especie de "brújula" que le permite a la central encontrar un nuevo rumbo, participando al lado de representantes del Estado y de los patronos en la definición de políticas públicas, y que le permite a estos últimos resolver sus problemas más urgentes.

La disposición de negociar con gobierno y patronos se revela también en otro icono exaltado por la central desde ese entonces: la implantación de la contratación colectiva laboral[3]. La CUT venía discutiendo sistemáticamente la contratación colectiva desde 1990, cuando se elaboró una propuesta de proyecto de ley para la introducción del referido instrumento. Este se convierte, junto con las cámaras sectoriales, en la expresión máxima del sindicalismo propositivo. No obstante, mientras dicha expresión llegó a ser realidad en algunos sectores de la economía, el contrato colectivo parece ser más la representación de un "ideal" que la orientación de una práctica efectiva[4].

---

[2] El acuerdo redujo en 22%, por 90 días, el precio de los vehículos livianos, mediante el corte en las alícuotas del IPI y el ICMS y en los márgenes de lucro de las ensambladoras, de los proveedores de autopartes y de las concesionarias; también estableció una revisión mensual de los salarios y estabilidad en el empleo en el mismo período para toda la base sindical metalúrgica centralista del estado de São Paulo. Esta última medida abarcó incluso sectores no relacionados a la cadena automotriz. Para un análisis detallado de los términos del acuerdo, ver Arbix, 1995.

[3] La iniciativa de debatir el tema le corresponde igualmente al Sindicato de los Trabajadores Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema y la elaboración de los primeros documentos sobre el tema fue obra de su asesor, José Francisco Siqueira Neto, para la segunda mitad de la década de los 80.

[4] La contratación colectiva a escala nacional existe en pocos sectores de la economía, y en menor proporción en aquellos sectores formados por monopolios u oligopolios, donde las mismas empresas se distribuyen en los diferentes estados, como es el caso del sector bancario y petrolero.

Las corrientes que integran la CUT conciben el contrato colectivo laboral de distintas maneras. O bien aparece como el sustituto de la estructura corporativa (Articulación Sindical), o bien como un instrumento de negociación a ser adicionado a ésta (posición que caracteriza, sobre todo, a la Corriente Sindical Clasista). Es decir, la adopción de la contratación colectiva laboral no necesariamente requiere el rompimiento con la estructura sindical corporativa[5]. A pesar de esa controversia, la propuesta de contrato colectivo que la central presentó al ministro de Trabajo, Walter Barelli, en el "Foro nacional sobre contrato colectivo y relaciones de trabajo en Brasil", en 1993, exhortaba a la eliminación de "todas las restricciones y obstáculos al ejercicio de las libertades sindicales, inscritos en la Constitución Federal y en la legislación ordinaria (CLT), atacando, especialmente, el poder normativo de la Justicia del Trabajo, la unicidad sindical, la contribución sindical, la configuración del sistema confederado y la inadecuación legislativa sobre la negociación colectiva del sector público"[6], pues el fortalecimiento de la negociación colectiva demandaba el fortalecimiento de los sindicatos, lo que sólo podría obtenerse por medio del reconocimiento de la libertad y de la autonomía sindical. Sin embargo, esa propuesta no es consensual. De cualquier modo, a partir de mediados de los 90, el cambio en la organización sindical adquirió una gran relevancia en el debate centralista.

Apartando el tema de la capacidad del contrato colectivo, tal como lo propone la CUT, de imponer o no un cambio sobre la forma de organización sindical, analicemos dicho instrumento bajo la perspectiva de los derechos individuales del trabajo. El contrato colectivo fue concebido para aumentar el espacio de actuación de las centrales sindicales, estimulando la práctica de la negociación colectiva y desarrollándola en el ámbito nacional. Según la central, el estímulo a la negociación requiere que las partes tengan más libertad para definir las reglas de contratación y el uso de la fuerza laboral, así como para resolver sus eventuales conflictos, reduciendo las posibilidades de intervención del Estado en las relaciones laborales. Estas condiciones aproximan el modelo de contrato colectivo defendido por la CUT al discurso neoliberal de la libre negociación entre patronos y empleados, aunque los objetivos de las dos perspectivas son distintos. Mientras la ideología neoliberal combate la legislación laboral y propone la disolución de sus normativas, la propuesta centralista le atribuye al Estado la definición de derechos mínimos, que no podrían ser irrespetados por la contratación colectiva. En el primer caso, se propone que el contrato prevalezca sobre la ley; en el otro, la idea es que el contrato complemente la ley[7].

---

[5] Como lo señala la misma vigencia de la contratación colectiva en los sectores bancario y petrolero.

[6] Boletín del Dieese, mayo de 1993, p. 45.

[7] La ley y el contrato representan dos formas de elaboración de normas que igualmente dificultan la relación entre patrón y empleado. Esas formas coexisten pero poseen una diferencia fundamental: la ley tiene alcance universal, mientras que el contrato sólo

Pero, aun así, consideramos que la defensa del contrato colectivo implica algunos riesgos. En primer lugar, a pesar de que al contrato colectivo se le confiera un carácter nacional, ese contrato más amplio sería complementado por contratos de menor alcance, conforme a las especificaciones regionales y sectoriales. En ese sentido, la CUT se hace eco del argumento patronal en cuanto a que las condiciones entre los sectores industriales y las regiones son distintas, lo que puede inviabilizar la definición de reglas de validez nacional o rebajarlas a un nivel ínfimo, que represente el menor costo para las empresas. En segundo lugar, la CUT defiende que la legislación preserve derechos mínimos (es decir, que nivele las condiciones de trabajo según el nivel inferior), dejando que cada área (o parte de ésta, como en el ejemplo de la cámara sectorial) luche de acuerdo con las condiciones económicas del sector en que está inmersa y de acuerdo con la capacidad organizativa del sindicato al cual pertenece. Dicha posición supone que la desigualdad regional/sectorial no impida que las regiones y sectores más desarrollados y organizados obtengan ganancias superiores a los demás, reflejando un comportamiento corporativo, ya que algunos sectores pueden –al negociar por separado– ganar más que otros sectores[8]. En tercer lugar, la proximidad de la central con el discurso de la libre negociación entre patronos y empleados puede favorecer el alejamiento del Estado de las relaciones laborales justamente en aquello que no les interesa a los trabajadores: la suspensión de la protección laboral. Esto, debido a que la burguesía y los gobiernos neoliberales, exactamente en el aspecto de la protección laboral, menoscaban la defensa de la libre negociación: no se trata de asegurar la libertad y autonomía sindicales, antigua bandera del sindicalismo de la CUT, sino de eliminar o flexibilizar derechos[9].

Es posible identificar algunas diferencias entre la libre negociación que defienden los patrones y la que defiende la CUT: la central se preocupa por asegurar una legislación mínima, los patronos adoptan una perspectiva abiertamente contratista, fundada en el principio de que el contrato es más adecuado que la ley, debido a que es resultado de la "voluntad" de las partes implicadas, y debe,

---

obliga a las partes contratantes, y la negociación se efectúa según los intereses y la correlación de fuerzas que prevalece en cada sector, región, área o empresa.

[8] Aquí el término corporativo se entiende en el sentido gramsciano, o sea, como la defensa exclusiva de intereses sectoriales –sean éstos los intereses de un área profesional, empleados de un grupo de empresas o de una empresa en particular– en detrimento de los intereses de la clase como un todo, y no se percibe como característica de la estructura sindical brasileña, como se había usado hasta el momento.

[9] Con esto, queremos decir que una cosa es la no intervención del Estado en la esfera de los derechos colectivos, ya que esa intervención impide el ejercicio de la libertad y autonomía sindical; y otra cosa es la no intervención del Estado en la esfera de los derechos individuales. Las leyes laborales son fruto de la presión de los trabajadores organizados en sindicatos y reconocen la asimetría de poder entre las partes contratantes, desmitificando la idea burguesa de que el contrato laboral constituye un contrato entre partes "iguales".

por lo tanto, prevalecer sobre la ley; mientras que para los patronos el contrato debe tener el poder de derogar la ley, bajo el alegato de que el exceso de leyes laborales inhibe la negociación colectiva. La CUT no asume una perspectiva contratista en el sentido estricto, pues, para la central, el contrato está consagrado para introducir derechos y garantías adicionales, superiores a los otorgados por la ley. A pesar de estas distinciones, la iniciativa de la CUT se basa en "principios ideológicos semejantes" a los de las formulaciones de los patronos, otorgándole menos importancia a la ley que al contrato[10]. Así, esa iniciativa puede estimular el carácter contractual de las relaciones laborales y el enfrentamiento creciente con la legislación laboral, dificultando la defensa de los derechos que la Constitución y la CLT establecen.

Sin embargo, la disposición a negociar de la CUT no es ilimitada. La central asumió una posición contraria a la privatización de las industrias siderúrgicas y petroquímicas a comienzos de la década de los 90. Por lo tanto, en lo concerniente a ese aspecto, la CUT no hizo concesiones: mantuvo una posición de enfrentamiento. El presidente de la central para ese momento, Jair Meneguelli, dirigió programas políticos y movimientos contra las privatizaciones. La CUT promovía protestas frente a la Bolsa de Valores de Río de Janeiro cada vez que había subastas de privatización, aunque la adhesión a esas protestas era pequeña, probablemente debido al impacto ideológico que el neoliberalismo produjo en los trabajadores[11]. La campaña de Collor contra los empleados públicos (la "cacería de potentados") y la campaña de los medios de comunicación contra las empresas estatales (anticuadas e "ineficientes") surtieron efecto, enalteciendo al sector privado y bloqueando la reacción popular contra la política privatizante. Además del impacto del discurso antiestatal sobre la po-

---

[10] En otras palabras, "la directiva de la central estaba ideológicamente desarmada para oponerse a una medida que provenía de principios ideológicos semejantes a los que ella misma venía defendiendo" (Boito jr., 1999, 156).

[11] Al analizar las elecciones realizadas en el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Volta Redonda en 1992, Graciolli señala las divergencias entre las tendencias centralistas y argumenta: "El raciocinio de la Articulación Sindical asumía la privatización como inevitable y, así, le correspondía a los trabajadores garantizar la máxima capacidad posible de influencia en el proceso. Ya la plancha electoral por la base sindical que reunía la CUT, Convergencia Socialista y PCdoB (Partido Comunista de Brasil), estaba contra la privatización y entendía que la participación de los trabajadores significaba la legitimación de una propuesta inaceptable" (Graciolli, 1999, 125). Para el autor, el cambio de rumbo de la CUT hacia un sindicalismo de negociación y la falta de apoyo de la mayoría de la directiva a las corrientes de izquierda, que aún sustentan un proyecto clasista y de confrontación, debilitaron a la central, permitiendo la victoria de Fuerza Sindical en las elecciones de 1992. No obstante, resulta pertinente considerar que el sector victorioso fue el que defendía claramente la privatización. Nada permite suponer que, si la CUT hubiese actuado firmemente contra la privatización, su plancha hubiese ganado las elecciones, porque los trabajadores creían que esa medida sería, de algún modo, beneficiosa para ellos.

blación, la posibilidad de compra, "a un precio menor y con financiamiento subsidiado", de lotes de acciones de las empresas estatales por los empleados de las propias empresas que serían privatizadas permitió la asociación de empresas estatales. Esa especie de burguesía nacional de Estado, predestinada a desaparecer con la privatización. Igualmente, estos factores permitieron neutralizar la "virtual oposición de los trabajadores" (Boito jr., 1999, 187). También debe considerarse la acción de Fuerza Sindical a favor de las privatizaciones. Esa central logró asegurar que una cuota mínima de las empresas a privatizar fuese destinada a sus trabajadores, organizándolos en "clubes de inversión". Ciertamente este hecho facilitó la incorporación de parte de los trabajadores a la política de privatización.

2. El fortalecimiento del sindicalismo propositivo (1992-1995)

Mientras que en el período de gestación del sindicalismo propositivo los conflictos entre las diferentes tendencias de la central eran más visibles y las resistencias a la política neoliberal eran más significativas, posteriormente el sindicalismo propositivo adquiere mayor amplitud –lo que no significa que no siga existiendo oposición a ese modelo en el interior de la propia central– y las concesiones al neoliberalismo se hacen más frecuentes. Dos iniciativas ilustran el fortalecimiento de ese proceso: las cámaras sectoriales y la actuación de la CUT frente a las reformas neoliberales, especialmente la reforma del Seguro Social.

La CUT, a través de sus sindicatos, federaciones y confederaciones, tuvo una participación activa en la mayor parte de las 23 cámaras sectoriales establecidas entre 1992 y 1995. El entusiasmo hacia ese mecanismo llevó a la central a celebrar, en febrero de 1993, un segundo acuerdo en el sector automotor, válido por dos años. Ese acuerdo establecía una reducción de impuestos y de márgenes de lucro, aumento de la producción, creación de empleos, reajuste mensual de salarios y aumento real, entre otras medidas. Pero, esta vez, las medidas referentes a los trabajadores incluían únicamente a los trabajadores metalúrgicos de la cadena automotriz[12].

La Cámara Sectorial de la Industria Automovilística consolidó el nuevo modelo de acción sindical que fuera prioridad de la CUT en los años 90. Ese nuevo modelo se caracteriza por la sustitución de la práctica de enfrentamiento por una práctica más propositiva, y por el predominio de acuerdos descentralizados sobre los acuerdos sectoriales, en oposición a la negociación predominantemente unificada que había sido el sello del "nuevo sindicalismo" desde

---

[12] En el caso del ABC, los trabajadores metalúrgicos se dividieron en cuatro cámaras sectoriales distintas. Además del sector automotor, se constituyeron cámaras en el sector de bienes de capital, de electrodomésticos y de tractores, máquinas e implementos agrícolas.

su surgimiento a fines de los años 70. Si, por un lado, las negociaciones descentralizadas no definen, por sí mismas, el sindicalismo propositivo, debido a que existen antes de su constitución, por otro lado, el sindicalismo propositivo colabora con el aumento de la descentralización, pues, en su afán de negociar, los sindicatos promueven negociaciones entre sectores, como las de las cámaras sectoriales o empresariales, como las negociaciones del Banco de Horas. De esta manera, al contrario de lo que sucede en los años 80, cuando la CUT intentaba unificar diversos sectores de la clase trabajadora en torno de propuestas amplias, en los años 90 la central acepta participar de la formulación de la política de Estado y de la gestión de las empresas de forma fragmentada, restringiendo esa participación a algunos sectores y áreas profesionales. Así, la búsqueda de salidas para los problemas económicos, en lugar de englobar amplios contingentes de trabajadores, los segrega según los problemas específicos que enfrenta el sector del cual forman parte: la competencia internacional no afecta a los empleados públicos, sino la reforma administrativa; los trabajadores del sector privado se ven afectados de distintas maneras por la apertura comercial y por la reestructuración productiva, entre otras cosas.

Esa variedad de aspectos de la política neoliberal y su impacto diversificado sobre los diferentes sectores de la clase obrera aumentan la tendencia a manifestaciones corporativas, mencionadas anteriormente. Las cámaras sectoriales, por ejemplo, expresan un aspecto corporativo en la medida en que los trabajadores involucrados en ese tipo de acuerdo se concentran en sus intereses específicos, dejando de lado, e incluso contraponiéndose a, la defensa de intereses más amplios en particular y de la clase obrera en general. Es en ese sentido que, para nosotros, la cámara sectorial produce pocos resultados económicos positivos y provoca muchos efectos negativos sobre la acción colectiva, al fragmentar las luchas sindicales e impulsar la descentralización de la negociación colectiva (Galvão, 1998).

La cámara sectorial fue perdiendo importancia gradualmente a partir de la toma de posesión del Ministerio de Hacienda por parte de Fernando Henrique Cardoso, cuando el gobierno comenzó a darle prioridad a la estabilización macroeconómica en detrimento de la política industrial, siendo definitivamente enterrada con la victoria de Cardoso en las elecciones presidenciales de 1994. Para mantener la práctica del sindicalismo de participación, a la CUT le correspondió intervenir en otros espacios institucionales tripartitos, que venían proliferando desde la Constitución de 1988. La central se incorporó al Consejo Nacional de Salud, al Consejo Nacional del Trabajo, al Consejo Nacional de Seguro Social (CNPS), al Consejo Deliberativo del Fondo de Amparo al Trabajador, FAT (Codefat), al Consejo Administrativo del Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio (FGTS) y al Consejo de Administración del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes).

El gobierno de Fernando Henrique Cardoso intensificó la política de privatizaciones y profundizó la apertura comercial, medidas que provocaron protes-

tas entre los sindicatos centralistas. Sin embargo, la adopción de una postura propositiva y participante llevó a la central a intervenir en el debate relativo a las reformas "estructurales" del Estado, dificultando el mantenimiento de una postura de resistencia.

En lo que se refiere a la reforma tributaria, la CUT apoyó, junto con la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp) y Fuerza Sindical, la propuesta elaborada por la Fundación Instituto de Investigaciones Económicas (Fipe/USP), en 1993. Tal propuesta preveía, por un lado, la disminución de la producción, de la inversión y de las exportaciones y, por otra parte, la simplificación del sistema tributario, reduciendo el número de impuestos existentes y eliminando el cobro acumulativo de impuestos[13]. A pesar de que esta propuesta sugería la eliminación de las contribuciones sociales que recaían sobre la nómina con el pretexto de estimular la contratación y el mantenimiento del nivel de empleo, fue dirigida al gobierno con el aval de las centrales, de la Fiesp y del PNBE (Pensamiento Nacional de las Bases Empresariales) (Melo, 2002). Incluso, la CUT se unió a la Fiesp para defender el cambio de pauta de la revisión constitucional, a fin de darle prioridad a la reforma tributaria.

En cuanto a la reforma del Seguro Social, a pesar de que la CUT estaba a favor de la jubilación por tiempo de servicio, se sumó al acuerdo delineado por el gobierno para obtener el apoyo de las centrales sindicales, aceptando la sustitución del tiempo de servicio por tiempo de contribución y la modificación de los criterios para que los empleados públicos tuviesen derecho a la jubilación integral. Muchas corrientes de la CUT criticaron la conducta asumida por la mayoría, considerando la negociación del Seguro Social un "episodio lamentable", que "fue llevado a cabo por la directiva, sin siquiera oír una asamblea sindical, a pesar del llamado de todo un sector de la directiva para que se realizara" (CUT, 1997). Además, la aceptación de la sustitución del tiempo de servicio por tiempo de contribución le restaba derechos a los trabajadores, afectando principalmente "a los trabajadores de bajo rendimiento, que están más expuestos al mercado de trabajo informal" (Boito jr., 1999, 147) y, por lo tanto, tienen dificultades en seguir contribuyendo.

La adhesión de la CUT a la negociación propuesta por el gobierno tuvo efectos nefastos para la central más importante del país, haciendo pública la crisis existente en su interior. Las diversas corrientes de la CUT ya se venían confrontando en virtud de que la Articulación Sindical prefería medidas propositivas y de conciliación con el gobierno y los patrones. Para enfrentar las críticas recibidas, Vicentinho convocó a la directiva nacional de la central para discutir el acuerdo firmado con el gobierno, enfrentando la oposición de la Corriente Sindical Clasista, de la Alternativa Sindical Socialista, del Movimiento

---

[13] En el proyecto original, la central solamente reivindicaba la introducción del impuesto sobre la riqueza.

por una Tendencia Socialista y de El Trabajo. "Al encontrarse políticamente aislado y abandonado por su propio partido, el presidente de la CUT, Vicente Paulo da Silva, rechazó el acuerdo a menos de 24 horas antes de la sesión de votación del proyecto de reforma por la Cámara de los Diputados" (Boito jr., 1999, 147).

A pesar de la derrota del proyecto en la Cámara, los líderes del gobierno realizaron las maniobras necesarias para salvarlo (Figueiredo; Limongi, 2001). Ante tal hecho, la CUT y Fuerza Sindical decidieron convocar una huelga general para el mes de julio. No obstante, sólo una pequeña proporción de la base sindical se sumó a esa huelga. Para las corrientes de izquierda de la central, "la intervención de la CUT en las negociaciones influyó negativamente sobre la movilización de los trabajadores en el primer semestre, perjudicando la preparación de la huelga general" (CUT, 1996).

Silva explica la falta de movilización contra la reforma a partir de la heterogeneidad del sector público, que había producido una división entre las diferentes áreas que lo componen. Tal división es ilustrada por el hecho de que la Apeoesp (Asociación de Sindicatos de Profesores de Enseñanza Pública del Estado de São Paulo), el principal sindicato del sector de la educación pública afiliado a la CUT, defendió, junto al Sindicato de los Trabajadores Metalúrgicos del ABC, "los avances logrados en las negociaciones con el gobierno". Esto, porque "los profesores de 1° y 2° grado lograron garantizar la principal reivindicación del sector, cualquiera que fuese, el mantenimiento de la jubilación especial [a los 25 años] en la Constitución" (Silva, 2001, 140), victoria que se obtuvo "en detrimento de los profesores de 3° grado, organizados en Andes (Sindicato Nacional de los Docentes de las Instituciones de Enseñanza Superior), también afiliado a la CUT, pero sin el mismo poder de influencia de la Apeoesp (...) en el interior del sindicalismo centralista (Silva, 2001, 142-143). Ese ejemplo demuestra, según el autor, cuán frágil era la unidad en el interior del sector educativo y el peso del corporativismo no sólo entre los adversarios sino entre los que estaban a favor de las negociaciones con el gobierno.

Pero ese corporativismo no sólo se debe atribuir a la heterogeneidad del sector público, ya que el mismo sucede también en el interior de algunas áreas (pertenecientes al sector público o privado), como lo ilustra el ejemplo de los profesores (el autor muestra la división entre profesores de primero y segundo grado con los de tercer grado) y del sector metalúrgico (el ejemplo de la Cámara Sectorial de la Industria Automovilística evidencia las diferencias de intereses y capacidades de presión entre trabajadores de las ensambladoras frente a los demás trabajadores metalúrgicos). De este modo, sin desconsiderar el análisis realizado por Silva, nos parece que debemos considerar igualmente la corriente a la cual está unida la Apeoesp: no es un hecho fortuito que João Felício, el presidente del sindicato para ese momento y ex presidente de la CUT, haya participado activamente de las negociaciones de la reforma del Seguro Social. De esta manera, la orientación político-ideológica en el interior de

la central se impone sobre la base social de cada sindicato, pues la disposición de la Articulación Sindical de negociar sectorialmente ha reforzado las manifestaciones de corporativismo entre las diversas áreas y sectores.

A diferencia de la reforma del Seguro Social, la CUT no participó de la negociación de la reforma administrativa –cuyo objetivo era eliminar la estabilidad de los empleados públicos y extinguir el régimen jurídico único– pues la mayoría de los sindicatos de empleados públicos es dirigida por críticos de la Articulación Sindical[14]. Silva observa que "el hecho de que la CUT no presentara propuestas para la reforma administrativa y la reducción del monopolio estatal se interpreta, normalmente, como un indicador de la influencia del sector público en las decisiones políticas de la central. Nótese que entre los sindicatos del sector público predominó el rechazo a las negociaciones y a la presentación de propuestas alternativas para la reforma del Estado" (Silva, 2001, 137). Sin embargo este autor sostiene que la no participación en esa reforma se debió más a las dificultades que la central enfrentó "para movilizar áreas económicas y profesionales que no eran afectadas directamente por políticas específicas de la reforma del Estado" (Silva, 2001, 137) que al peso cuantitativo de los trabajadores del sector público en la CUT. Para Silva, se verifica el predominio de una postura defensiva en las áreas que sólo afectaban a los trabajadores del sector público, mientras que en las áreas que afectaban tanto a los trabajadores del sector público como a los del sector privado prevaleció una postura propositiva. Así, "en el caso de la reforma del Seguro Social, la postura defensiva de los dirigentes sindicales del sector público se contrapuso a la disposición de importantes liderazgos sindicales del sector privado, y evidentemente a la del propio presidente de la CUT, de negociar los rumbos de la reforma con el gobierno" (Silva, 2001, 138)[15].

---

[14] Rodrigues (1999) indica que mientras la Articulación posee una fuerte presencia en el sector privado, la izquierda de la CUT es más patente en el sector público. Para Eduardo Alves, asesor de la Condsef, la mayoría de la directiva de la CUT quería negociar la reforma administrativa y no lo hizo debido a la acción de la Condsef (Confederación Nacional de los Trabajadores del Servicio Público Federal, afiliada a la CUT y a la Cnesf) y de la Cnesf (Coordinación Nacional de Entidades de Servidores Públicos Federales, formada por 10 entidades sindicales, 2 de ellas no están afiliadas a la CUT). Estas entidades se manifestaron contra la negociación de la reforma administrativa propuesta por el gobierno, por considerar que tal hecho perjudicaría la lucha existente entre los empleados federales. Este testimonio evidencia el peso de las disputas político-ideológicas en el interior de la central.

[15] Parece haber una tendencia a despreciar las acciones defensivas, como si éstas sólo revelaran un componente corporativo de defensa de derechos adquiridos. Por otro lado, existe una tendencia a enaltecer el sindicalismo propositivo, como si ésta fuese una práctica ofensiva. Ahora bien, la negativa a negociar medidas que eliminan derechos es, al mismo tiempo, una acción defensiva y una forma de resistencia. La negociación, a su vez, puede constituir una estrategia ofensiva toda vez que no se acepten los límites establecidos por el discurso y por la política dominante, presentando deman-

Exceptuando la reforma administrativa, la CUT aceptó negociar todos los demás puntos de la pauta reformista del gobierno para legitimarse ante sus interlocutores, mostrándose competente y "madura". Pues el rechazo a negociar podría ser interpretado por el gobierno, por la Fuerza Sindical y por los medios de comunicación como una señal del "radicalismo" y de una posición "antidemocrática" por parte de la CUT. Ahora bien, la cuestión no es negociar o no, sino saber qué negociar, cómo hacerlo y en qué contexto. En todo el proceso de negociación de la reforma del Seguro Social, la CUT no se preocupó por proponer alternativas que mostraran una posición propia. Al contrario, se enfocaron primordialmente en la vía de la negociación en una coyuntura adversa y el sindicalismo centralista terminó incorporando elementos del discurso neoliberal. En la defensiva, en vez de formular contrapropuestas capaces de evidenciar el conflicto de intereses que oponen al capital y sus representantes con los trabajadores, la CUT suaviza sus demandas con la finalidad de hacerlas compatibles al pensamiento (y al vocabulario) empresarial.

Ese es, justamente, el límite de la estrategia propositiva: para que las propuestas formuladas sean aceptadas en la mesa de negociación, es necesario que se consideren "realistas", adecuadas a la ideología dominante, de modo que le interesen tanto a los patronos como al gobierno. De lo contrario no hay negociación posible. Así, la "competencia" del negociador se evalúa de acuerdo con la "viabilidad" de la propuesta presentada[16]. En ese proceso el sindicalismo centralista comienza a hacer concesiones al capital, integrándose a la lógica del mercado y asumiendo valores capitalistas reactivados por el neoliberalismo, tales como lucro, productividad, calidad y eficiencia[17]. Tal práctica

---

das contra-propositivas. Este no es el caso del sindicalismo propositivo, que negocia dentro del orden, cede, hace concesiones, sin actuar a la ofensiva.

[16] Veras (2000, 10) evalúa la práctica participacionista y propositiva de una manera distinta a la que presentamos aquí: para este autor, la participación es una forma de resistencia que se ejerce tanto en el contexto de las negociaciones directas con las empresas como con la esfera pública. Esto debido a que los problemas con que el sindicalismo se presenta "exigen una solución *pública*". La visión del autor tiende, a nuestro modo de ver, a ser exageradamente optimista: para Veras, el riesgo de dejarse impregnar por el discurso dominante sólo existe cuando el sindicato restringe la negociación al interior de las empresas. Esta percepción le permite considerar la negociación como una práctica de resistencia porque, si por un lado el sindicato admite algunos elementos del discurso empresarial, por el otro, al proponer alternativas que van más allá del universo de la empresa, busca diferenciarse de dicho discurso. Esa ampliación de la negociación permitiría al sindicalismo establecer una nueva relación con el "espacio público" y modificar su matriz discursiva, escapando de las trampas patronales.

[17] França también señala los efectos del neoliberalismo sobre la práctica de la CUT, que conducen al "apoliticismo de la lucha sindical y la atenuación ideológica de su proyecto, que se expresarían en el cambio del énfasis de la transformación social hacia un proyecto de desarrollo alternativo; de la lucha por acabar con la explotación hacia la promoción de la ciudadanía; del predominio de la negociación y de la participación insti-

presupone la idea de que es posible conciliar los diferentes intereses de clase. No se trata de organizar, movilizar y defender los intereses de clase de los trabajadores, sino de mejorar (o preservar) las condiciones de mercado (la "competitividad") de un determinado sector económico. De ese modo, el sindicalismo actúa como un "socio" (incluso si juega un papel coadyuvante) en la gestión del capital.

El desarrollo de una acción propositiva sectorial aleja a los trabajadores de una noción de clase, estimulando una perspectiva corporativista. Los sindicatos justifican tales prácticas en nombre de la "necesidad" de defender el empleo y los salarios del área (o del sector, e incluso el de la empresa) que representan. La "asociación" entre trabajadores y patronos de un mismo sector frente a su competencia en el mercado nacional e internacional hace que los trabajadores defiendan intereses capitalistas como reducción de la carga tributaria, exoneración de impuestos y crédito subsidiado. Sin embargo, estas medidas no garantizan el nivel de empleo, sino sólo por períodos muy cortos. Al contrario, comprometen la recaudación del Estado y causan un mayor deterioro de los servicios públicos, justificando el enfrentamiento contra empleados y el menoscabo de los derechos sociales. Por lo tanto, ocasionan enfrentamientos entre los mismos trabajadores.

3. Del sindicalismo propositivo al sindicalismo ciudadano (1995-1999)

La elección de Fernando Henrique Cardoso causó problemas significativos al sindicalismo centralista. Además de cerrar los espacios institucionales de negociación existentes para ese momento, como las cámaras sectoriales, invertir en las reformas constitucionales y atacar uno de los baluartes del sindicalismo centralista (los petroleros), el gobierno intensificó el proceso de privatización, colocando en venta las compañías de electricidad y telefonía. Ante esto, y al contrario de lo que venía haciendo hasta entonces, la CUT abandona la lucha antiprivatización. Boito jr. (1999) le atribuye ese cambio a las derrotas sufridas en la lucha contra las privatizaciones promovidas por Collor e Itamar Franco, así como al ascenso de Vicentinho, principal exponente del sindicalismo propositivo, quien ejerce la presidencia de la CUT en 1994, y a las dificultades de involucrar a la clase obrera en la lucha contra la privatización, como ya se ha mencionado[18].

Después de retroceder en la lucha contra uno de los pilares de la política neoliberal, la CUT comienza a actuar en los espacios descuidados por el Estado, no sólo proponiendo políticas, sino también asumiendo la prestación de

---

tucional hacia la movilización y la actuación autónoma del movimiento sindical" (França, 2001, 64).

[18] Según este autor, la central retomaría la lucha contra las privatizaciones en 1997, durante el proceso de venta de Vale do Rio Doce.

servicios relegados por el Estado. Tales servicios adquieren mayor peso y visibilidad en un contexto marcado por el aumento del desempleo, aumento que la ideología dominante atribuye a la falta de calificación profesional del trabajador. La CUT en parte acepta el discurso de la "empleabilidad" –que responsabiliza al desempleado por su propia condición– al invertir en programas de calificación profesional y de generación de empleo y rendimiento, en un intento mancomunado con los trabajadores de minimizar el impacto del desempleo. Al hacerlo, la central disminuye el enfrentamiento con procesos de reestructuración productiva –considerados, a partir de entonces, un fenómeno inevitable– sustituyendo los movimientos de resistencia por la negociación cuantitativa de los puestos de trabajo que serían eliminados. No obstante, la negociación, cuyo principal objetivo consiste en preservar empleos, no basta para impedir que existan despidos. Cuando los sindicatos logran mantener un número de empleos superior al pretendido por la empresa, los despidos son apenas temporalmente evitados[19]. La alternativa de los sindicatos para los trabajadores despedidos consiste en dirigirlos a los programas anteriormente mencionados.

La difusión de servicios de educación y de formación profesional patrocinados por los sindicatos fue posible gracias a la existencia de un fondo destinado a la atención del trabajador en situación de desempleo: el Fondo de Amparo al Trabajador (FAT). Los numerosos recursos del fondo, inicialmente destinados a la concesión de un seguro de desempleo e intermediación de mano de obra, progresivamente comenzaron a destinarse a programas de calificación profesional y generación de empleo y productividad.

Ante esa disponibilidad de recursos, los sindicatos centralistas –que inicialmente se resistieron al uso del fondo– comenzaron a actuar en la intermediación de mano de obra, a través de la creación de agencias de empleo que, entre otros "servicios" ofrecidos al trabajador, proveen el seguro de desempleo (es el caso de la Central de Trabajo y Productividad, que atiende a los trabajadores del gran ABC). Estos sindicatos también actúan en la generación de empleo y productividad, incentivando el autoemprendimiento y la formación de cooperativas, muchas de ellas organizadas con el apoyo de las ONG. Para coordinar esas actividades y diseminar el modelo de economía solidaria, la CUT crea, en 1999, la Agencia de Desarrollo Solidario (ADS), destinada a organizar y asesorar cooperativas, ofreciéndoles capacitación y crédito (Zarpelon, 2002).

Estas medidas forman parte de lo que la propia central denominó sindicalismo "ciudadano". La Articulación Sindical justifica el uso de los recursos del FAT y la prestación de servicios públicos –prácticas criticadas por las corrientes izquierdistas– como una forma mediante la cual el sindicato atienda al trabajador como un ser "integral". Para ello, considera necesario defender las

---

[19] Véase, por ejemplo, Beiguelman (2002).

diversas dimensiones de la vida del trabajador, preocupándose por su subjetividad y no únicamente por la mejoría de su condición económica objetiva. La Articulación Sindical entiende que la CUT debe intervenir para dar un destino adecuado a los recursos del FAT y evitar que sean utilizados por el gobierno, por los empresarios y por asociaciones sindicales que no estén comprometidas con la defensa de los intereses del trabajador, cuyos recursos, además, alimentan al fondo. Según la AS, con esas medidas la CUT no pretende sustituir al Estado, sino construir un proyecto alternativo, propositivo, de políticas públicas (expresión utilizada por los dirigentes sindicales relacionados a esa corriente en un sentido público y no estatal). De esta manera, el sindicalismo ciudadano constituye un desdoblamiento del sindicalismo propositivo, a pesar de presentar diferencias importantes en relación con este: no se trata únicamente de negociar con el gobierno y los patronos, proponiendo soluciones realistas para la crisis, sino de ofrecer también servicios a todos los trabajadores, independientemente de su condición de afiliado.

Estos nuevos frentes de actuación contradicen el discurso centralista que critica a la política neoliberal y al menoscabo de los servicios públicos. Pues, así como cuestionan al gobierno, atribuyéndole la responsabilidad del aumento del desempleo y del deterioro de los servicios sociales, la CUT, por medio de esa práctica, termina legitimando esa misma política que critica, adaptándose al neoliberalismo.

Otro aspecto resultante de esta nueva estrategia es que el énfasis en la concepción de ciudadanía conduce al abandono de la noción de clase social. Al actuar en nombre de todos los ciudadanos, la central se aleja aún más de una práctica clasista, pues el concepto de ciudadanía oscurece las diferencias de clase, unificando a todos bajo una misma entidad abstracta.

Sin embargo, ese cambio no se produce sin conflictos. La disputa interna en la CUT es frenética: el discurso clasista sobrevive y todavía convive con el discurso "ciudadano", a pesar de que este último cada vez es más difundido. Las corrientes de izquierda se oponen a esa rigidez del discurso y critican la práctica conciliadora y de asociación –expresión del sindicalismo propositivo y ciudadano. Condenan la participación de la central en negociaciones engañosas (ilustrado con el ejemplo de la reforma del Seguro Social), al igual que la prioridad asignada a la vía institucional y al uso de recursos del FAT, que crea una dependencia en relación con el gobierno[20]. Parte de esas corrientes también consideran que los foros tripartitos ponen en riesgo la autonomía de la CUT, creando una nueva forma de tutela del Estado sobre los sindicatos.

---

[20] La transferencia de recursos a la CUT pasa de cerca de 3 millones de reales, en 1998, a 35 millones en 2000. Los recursos del FAT han sido un sustituto de las contribuciones de impuestos sindicales obligatorias, que se reducen con el aumento del desempleo.

4. Dilemas de la CUT: ¿resistir o ceder? (1999-2001)

A pesar de las disputas políticas relacionadas con la participación de la central en organismos tripartitos, con el uso de los recursos del FAT, con la adopción de proyectos de economía solidaria, la devaluación del real en enero de 1999 desencadenó un importante movimiento de oposición al gobierno de Cardoso, en el que la CUT participó de forma significativa. Los momentos más importantes de la recuperación de la movilización social fueron la Marcha de los 100 mil (en agosto de 1999), el Grito de los Excluidos (organizado por la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, CNBB, celebrada anualmente desde 1995) y el Grito de la Tierra. Los dos primeros movimientos congregan representantes de la iglesia católica, del movimiento sindical y popular y de partidos de izquierda defensores de los derechos sociales, de la reforma agraria y contra el neoliberalismo. El tercero constituye una iniciativa de la Contag, afiliada a la CUT desde 1995.

A través de la asociación Grito de la Tierra, la CUT intenta organizar al trabajador rural, reivindicando la realización de la reforma agraria, la asignación de créditos al Programa Nacional de la Agricultura Familiar (Pronaf), la renegociación de la deuda de los agricultores familiares y la oferta de infraestructura para la agricultura familiar. La embestida de la CUT en el sector rural debe interpretarse en el contexto del descenso del sindicalismo urbano entre 1995 y 1999. Desde el inicio del gobierno de Cardoso, la escena política estaba siendo protagonizada principalmente por el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que pasó a ser el movimiento social brasileño de mayor relevancia. La actuación de la CUT hacia la Contag[21] constituyó, según nuestro criterio, un intento de disputarse la hegemonía en la organización de los sin tierra con el MST[22].

La actuación de la Contag revela parte de las contradicciones que afectan a la CUT. Al reivindicar más recursos para el Pronaf, la confederación y la central conceden legitimidad a una medida compensatoria y focalizada, típica representante de las políticas sociales contempladas por el modelo neoliberal. Bajo el pretexto de estimular la solidaridad entre trabajadores urbanos y rurales, la central promueve acciones asistenciales, actuando en defensa de los "excluidos", como las víctimas de la sequía en el noreste del país, mediante la recolección de alimentos. En 2001, la Contag participa de reuniones en Was-

---

[21] La recomendación para ampliar y diversificar la base sindical de la CUT en el medio rural, mediante la afiliación de sindicatos y federaciones de la Contag, se remonta a la 9na Asamblea Plenaria de la central, celebrada en 1999.

[22] Para información más detallada sobre el MST, consultar el artículo de Claudinei Coletti, "Ascensão e refluxo do MST e da luta pela terra na década neoliberal" en revista *Ideáis* del Instituto de Filosofía de Ciencias Humanas de Unicamp, año 9, n° 1, 2002, pp. 49-104.

hington con productores rurales norteamericanos, representantes de ONG y del Banco Mundial para propiciar asociaciones para la implantación de su Proyecto Alternativo de Desarrollo Rural Sostenible. De esta forma, la CUT refuerza las mismas políticas que denuncia, en la medida en que las organizaciones afiliadas a ella promueven "asociaciones" con instituciones como el Banco Mundial, ampliamente conocido como institución divulgadora del neoliberalismo.

Al mismo tiempo, el desgaste del neoliberalismo a partir de 1999 parece haber abierto nuevas posibilidades de enfrentamiento para los movimientos sociales, en general, y para el sindicalismo centralista, en particular. En medio de este nuevo escenario, la CUT empieza a adoptar una práctica sindical más ofensiva, recuperando su combatividad, sobre todo en virtud de la presión de las corrientes izquierdistas. Este cambio de rumbo también es un factor relevante, pues, a pesar de que João Felício, presidente de la central entre 2000-2003, también se adhiere a la Articulación Sindical, proviene del sector público, rompiendo con la tradición de que la central fuera dirigida por los trabajadores metalúrgicos del ABC.

En este último período, a pesar del predominio de la concepción mayoritaria a favor del sindicalismo propositivo y ciudadano, los intentos frustrados emprendidos por la CUT para formalizar acuerdos con los gobiernos neoliberales y los efectos antipopulares del neoliberalismo ocasionan el resurgimiento de posiciones más críticas en el interior de la central. La CUT tuvo una actuación destacada en la lucha contra el acuerdo referente a la cancelación de la deuda del gobierno con el FGTS, contra el racionamiento de energía eléctrica y contra el intento de modificar el artículo 618 de la CLT (PL 5.483/01).

La lucha contra el racionamiento de energía culminó en la Marcha Contra el Apagón y la Corrupción, en junio de 2001. La CUT le atribuyó la crisis de energía a la continua disminución de inversiones y a la falta de políticas de largo plazo en las diferentes áreas de actuación del gobierno federal. Para evitar la merma de la economía y el aumento del desempleo, la central elaboró un proyecto de enmienda popular a la Constitución que garantizaba la estabilidad laboral mientras durara el racionamiento. El proyecto contemplaba una serie de medidas que muestran una contraposición a determinados aspectos de la política neoliberal, como *la suspensión y la revisión de las privatizaciones* en el sector eléctrico, la prohibición de horas extra y del funcionamiento del comercio los días domingos. Estas medidas podrían apuntar hacia el inicio de un proceso de reversión del sindicalismo propositivo que dirigió la central en los años 90, ya que su contenido revela un fuerte componente combativo, representando claramente una *contrapropuesta* a la política del gobierno y no algo en conformidad con el pensamiento dominante. No obstante, esta hipótesis se debe analizar cuidadosamente, una vez que la actuación reciente de la central evidencia una *oscilación entre la elaboración de alternativas al neoliberalismo* y *la incorporación de elementos del discurso neoliberal.*

Durante el gobierno de Cardoso, el Poder Ejecutivo asumió el mando del proceso de reforma laboral, responsabilizándose por las principales iniciativas para modificar la legislación. Luego de introducir contratos flexibles[23], el gobierno concibió proyectos destinados a eliminar reglamentos de los artículos 7° y 8° de la Constitución Federal; reducir el papel de la Justicia del Trabajo, promoviendo mecanismos extrajudiciales de conciliación de conflictos[24]; estimular la negociación colectiva y restringir el derecho de realizar huelgas, especialmente del servicio público[25]. El último proyecto gubernamental (PL 5.483/01) tenía como objetivo establecer el predominio de la negociación sobre la ley, facilitando la reducción de derechos por medio de la negociación colectiva. Las manifestaciones realizadas por dirigentes sindicales de la CUT lograron retardar el proceso de votación, mas no impidieron que el proyecto fuese aprobado por la Cámara de Diputados. La apreciación del proyecto, tramitado con carácter de extrema urgencia, se vio interrumpida por el Senado a comienzos de 2002, debido a las dificultades encontradas por el gobierno para aprobar la Contribución Provisional sobre Movimientos Financieros, CPMF, y a la coyuntura electoral. Aun así, la CUT organizó un día de huelga nacional en oposición al proyecto, el 21 de marzo de 2002[26]. Las corrientes izquierdistas, sin embargo, destacan la falta de empeño de la directiva centralista en la preparación de la huelga que, de acuerdo con lo que sucedió el Día Nacional de Paralización y Huelgas en el mes de diciembre de 1999, no aprovechó la disposición de los trabajadores para sumarse a la movilización, e incluso, sustituyó la expresión "huelga general" por "huelga nacional".

A pesar de estas limitaciones, nuestra hipótesis se basa en que las resistencias arriba enumeradas contribuyeron a deslegitimar el neoliberalismo, facilitando la victoria de Lula en las elecciones presidenciales de 2002.

---

[23] Tales como la suspensión temporal del contrato laboral (MP 1.726/98), la ampliación de las posibilidades de contratación en tiempo parcial (MP 1.709-4/98) y la prolongación del contrato laboral por un plazo determinado para cualquier sector o ramo de actividad (Ley 9.601/98). Ver Krein y Oliveira, 1999.

[24] Reflejado en la Ley 9.958/2000, que instauró las comisiones de conciliación previa.

[25] Como el Dec. 4010, 12/11/01, que centraliza el procesamiento de la nómina en manos del ministro de Planificación, Presupuesto y Gestión, estableciendo la autorización del presidente como condición para que el pago sea efectuado; la MP 10/01, que permite la contratación por tiempo determinado para sustituir empleados en huelga por más de 10 días; y PLs para reglamentar el derecho a huelga en los servicios públicos, determinando la ilegalidad de la huelga después de 30 días de paralización y permitiendo la sanción a los trabajadores que se sumaron a la huelga (a través del descuento en los salarios, enjuiciamiento administrativo, etc.). Estas medidas fueron elaboradas en el transcurso de la huelga de empleados públicos de 2001.

[26] CUT reúne un millón contra la modificación de la CLT. *Folha de S. Paulo*, 22-3-2002.

Comentarios finales

Si, por una parte, la ideología neoliberal afecta negativamente a los movimientos sociales en general y al movimiento sindical en particular, y aleja a los trabajadores de sus sindicatos, favoreciendo las asociaciones entre capital y trabajo, distanciando los sindicatos de una perspectiva de clase, por otra parte, los resultados de continuos años de políticas neoliberales abren un espacio para la recuperación de los movimientos sociales, que no se mantienen pasivos ante el aumento del desempleo, del menoscabo de los servicios públicos y de la violación de derechos sociales y laborales.

La intensificación de las luchas sociales a partir de la segunda mitad de la década de los 90 parecía indicar el desgaste del modelo neoliberal, desgaste intensificado por la victoria de Lula en las elecciones presidenciales de 2002. El resultado de las elecciones indicaba que la correlación de fuerzas estaría más a favor del sindicalismo, estimulando la lucha contra el neoliberalismo.

Sin embargo, desde su campaña, la candidatura de Lula ya se presentaba como una perspectiva de adaptación a –y no de ruptura con– el neoliberalismo. Este es, según nuestro parecer, la gran paradoja del nuevo gobierno, pues, al mismo tiempo en que su victoria parecía atestiguar la agonía del neoliberalismo, éste continúa orientando su política macroeconómica en los primeros meses de su mandato. Efectivamente, el neoliberalismo todavía es un pensamiento dominante, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. El Partido de los Trabajadores, PT, parece haber incorporado la máxima neoliberal según la cual "no hay alternativas", continuando por el camino de las reformas orientadas al mercado, restringiendo el espacio para el debate político y deslegitimando las resistencias y críticas a la política del gobierno.

La ideología neoliberal es, por lo tanto, más resistente de lo que pudiera suponerse y ciertamente continuará produciendo impactos negativos sobre el movimiento sindical, incluso más ahora que el partido que se oponía a las reformas orientadas al mercado terminó adoptándolas, valiéndose, en muchos aspectos, del mismo discurso sustentado por el gobierno de FHC (como el carácter imperativo de las reformas, su carácter "técnico" y no político, la necesidad de que los "privilegiados" se sacrifiquen a favor de los "excluidos", etc.).

Esta nueva coyuntura ciertamente afecta a la CUT, central que tiene lazos históricos con el PT. La gran interrogante es ¿cómo mantener la combatividad y la independencia de la central en relación con el gobierno? ¿Cómo defender los derechos de los trabajadores, especialmente de los empleados públicos, de la política dirigida por ex compañeros de lucha?

La situación es bastante compleja. A pesar del apoyo que la central le ha dado a la elección de Lula, la política del gobierno ha generado críticas y protestas por parte de sindicalistas centralistas. La central parece bastante dividi-

da entre la mayoría moderada y la izquierda "radical"[27]. La elección de Luiz Marinho como presidente de la central constituyó un hecho significativo en ese proceso. Ex presidente del Sindicato de los Trabajadores Metalúrgicos del ABC y miembro de la Articulación Sindical, Marinho fue elegido por recomendación del mismo Lula, reforzando la práctica del sindicalismo propositivo.

El sindicalismo propositivo es ventajoso para el gobierno, debido a que rebaja la negociación a aquello que es realista, asimilando el discurso de la "utopía de lo posible". En ese sentido, puede ayudar en la aprobación de las reformas, recomendándole a su base sindical que adopte una posición tolerante y "paciente", minimizando así las reacciones contrarias a la política del gobierno. La aprobación de las reformas promovidas por un gobierno de orígenes en la izquierda, a su vez, puede debilitar el camino del sindicalismo combativo, haciendo que la balanza se incline hacia el lado de la asimilación –y no de la resistencia– al neoliberalismo.

Bibliografía

Arbix, Glauco (1995): "Una apuesta al futuro - Los tres primeros años de la cámara sectorial de la industria automovilística y el surgimiento del meso-corporativismo en Brasil", tesis de doctorado, São Paulo, Fflch/USP.

Beiguelman, Paula (2002): "La nueva embestida de la Volks", *Debate Sindical*, n° 41, dic/ene/feb.

Boito jr., Armando (1999): *Política neoliberal y sindicalismo en Brasil*, São Paulo, Xamã.

CUT (1996): *Resoluciones de la 8ª Asamblea Plenaria Nacional de la CUT*, São Paulo.

_____ (1997): *6° Concut - Textos en debate*, São Paulo.

Figueiredo, Argelina y Fernando Limongi (2001): "Reforma del Seguro Social e instituciones políticas", en *Ejecutivo y Legislativo en el nuevo orden constitucional*, Río de Janeiro, Editora FGV.

---

[27] Ver, por ejemplo, la polémica salarial: los sindicatos de izquierda estaban a favor de la devolución automática de la cantidad equivalente a la inflación cada vez que ésta alcanzara 3%; los de la Articulación defendían un abono, no incorporado a los salarios, bajo el alegato de que la devolución de dinero podría generar inflación. Otra polémica involucra la reforma del Seguro Social: a pesar de que la central presente críticas al proyecto dirigido por el gobierno del PT, la corriente mayoritaria adoptó una posición contra la huelga repentina de los empleados públicos el 8 de julio de 2003. Además de la huelga, otro aspecto divide a la central: la Articulación está a favor de la negociación de los puntos polémicos, mientras que los empleados públicos y algunas corrientes de izquierda luchan por la eliminación del proyecto.

França, Caio Galvão de (2001): "Sindicalismo y negociación colectiva en la contracorriente de los años 90: la experiencia de los trabajadores metalúrgicos de Minas Gerais", Disertación de maestría, Belo Horizonte, UFMG.

Galvão, Andréia (1998): "Los metalúrgicos del ABC y la cámara sectorial de la industria automovilística", *Revista de Sociología y Política*, n° 10/11, Curitiba.

Graciolli, Edilson (1999): "Un laboratorio llamado CSN – huelgas, privatización y sindicalismo de asociación: la trayectoria del Sindicato de los trabajadores Metalúrgicos de Volta Redonda", tesis de doctorado en Ciencias Sociales, Campinas, Unicamp/IFCH.

Krein, José Dari y Marco Antonio de Oliveira (1999): "Cambios institucionales y relaciones laborales: las iniciativas del gobierno de FHC en el período 1995-1998", XXIII Encuentro Anual de la Asociación Nacional de Postgrado en Ciencias Sociales (Anpocs), Caxambu, GT Sindicalismo y Política.

Melo, Marcus André (2002): *Reformas constitucionales en Brasil: instituciones políticas y proceso decisivo*, Río de Janeiro, Revan.

Rodrigues, Iram Jácome (1999): "La trayectoria del nuevo sindicalismo", en I. J. Rodrigues (org.), *El nuevo sindicalismo: veinte años después*, Petrópolis, Vozes.

Silva, Sidney Jard da (2001): "Compañeros empleados: el avance del sindicalismo del sector público en la CUT", *Revista Brasileña de Ciencias Sociales* vol. 16, n° 46, junio.

Veras, Roberto (2000): "Perspectivas del sindicalismo CUT: ¿rupturas o continuidades? El caso del sector metalúrgico en la CUT", XXIV Encuentro Anual de la Anpocs, Caxambu, GT Sindicalismo y Política.

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2004, vol. 10, n° 1, (ener.-abr.), pp. 241-269

MÁS ALLÁ DE LA CRISIS. ACERCA DE LA NATURALEZA DEL CAMBIO POLÍTICO EN ARGENTINA[1]

Ana Cecilia Dinerstein

En diciembre de 2001 Argentina irrumpió en los canales de televisión del mundo por dos motivos: un espectacular colapso financiero y una también espectacular movilización de su sociedad civil. Como es sabido, el 19 y 20 de ese mes, una insurrección popular en Buenos Aires forzó, luego de duras batallas callejeras, la renuncia de las autoridades nacionales en medio de uno de los *default* más importantes de la historia.

Como en todos los casos, la complejidad de los eventos de diciembre de 2001 en Argentina hace difícil una evaluación balanceada entre cuestiones estructurales y de coyuntura, factores externos –internacionales y regionales– y los domésticos, que intervinieron en la crisis, en tanto se trató de la erupción final de una serie de procesos volcánicos de mediano y largo plazo de diversa índole, con algunos elementos desencadenantes de corto plazo.

Profundas crisis económicas y políticas acompañadas por un alto grado de movilización social constituyen la característica regional de los últimos años. En términos generales, las salidas democráticas de los regímenes autoritarios, particularmente en el Cono Sur, no coadyuvaron al crecimiento económico con equidad social ni fortalecieron la democracia, sino que profundizaron las desigualdades sociales y la desilusión con la política. Los Estados nacionales se convirtieron en el *terreno* donde se desplegó la lucha entre las necesidades del capital transnacional, por un lado, y las sociedades civiles de cada país de la región, por el otro. La aplicación de soluciones tecnocráticas, prioritariamente dirigidas a estabilizar la economía y satisfacer las demandas de los organismos de crédito y la banca internacional, no hizo sino agrandar y a la vez poner en evidencia la distancia entre Estado y sociedad civil. En Argentina, mientras el proceso de democratización (1983-1989) abrió un espacio formidable para la movilización popular y la expresión de demandas postergadas y reprimidas de amplios sectores de la población, éstas se fueron convirtiendo

---

[1] Este trabajo es un adelanto del material contenido en el libro *Against the Violence of Stability: On Labour, Crises and the Politics of Resistance in Argentina*, Verso, London – New York, 2004.

progresivamente en una traba para la "consolidación" de la democracia, esta última entendida en términos de procesos de progresiva legitimación del terrorismo del dinero abiertamente desarrollado durante los años 70, encubierto ahora bajo la forma de ajustes económicos destructivos, denominados cínicamente "políticas de estabilidad" (Dinerstein, 2003b). La especulación financiera y el uso indiscriminado de los recursos naturales, productivos y humanos de los países de la región por empresas transnacionales con aliados locales, cuyo accionar ha fomentado sistemáticamente la privatización del Estado nacional, la corrupción de las elites políticas y la socialización del riesgo capitalista y de la deuda externa, han producido verdaderos desastres sociales como el desempleo y pobreza masivos, marginalidad, delito, enfermedad y mortalidad a niveles inusitados.

Como resultado, emergió en los últimos años, en palabras de *The Financial Times* (21-2-2002, 18) un sentido "de injusticia generalizado" indudablemente expresado por el levantamiento zapatista en Chiapas en enero de 1994, el cual impulsó la emergencia de nuevas formas de protesta y movilización social en reclamo ya no del fin de las políticas neoliberales, sino también por el reconocimiento de la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos, económicos y sociales en América Latina. En muchos casos, la protesta social, motivada tanto por razones políticas o económicas, disparó la partida de las cabezas de diferentes gobiernos (Ollier, 2003): "nueve presidentes latinoamericanos finalizaron sus mandatos antes de lo previsto: en Brasil en 1992, en Venezuela y Guatemala en 1993, en Ecuador en 1997 y 2000, en Paraguay en 1999, en Perú en 2000 y dos veces en Argentina en diciembre 2001" (Pérez Liñán en Ollier, 2003, 170, traducción propia)[2]. Al momento de escribir este trabajo (octubre 2003) la movilización popular en Bolivia, en este caso disparada por la exportación de gas, provocó la dimisión del presidente boliviano Sánchez de Losada, luego de una confrontación que ha dejado 74 muertos y cientos de heridos.

La profundidad de ambas, crisis y movilización social en Argentina 2001 en el contexto latinoamericano, puso nuevamente en el tapete la pregunta acerca de cuáles son las mejores herramientas conceptuales y analíticas para comprender el significado del cambio político poscrisis, particularmente luego de que el reclamo radical encerrado en el *¡qué se vayan todos!* encontró al final del camino una recomposición de las elites en el poder.

Analistas interesados en examinar las causas de la crisis financiera, económica y política en Argentina se han preguntado *qué funcionó mal*: "¿cómo pudo este país, que ha sido considerado como la niña mimada de los mercados financieros y de la comunidad internacional y ejemplo de una reforma deseable por más de una década, caer en una recesión tan profunda y prolonga-

[2] Todas las citas del inglés han sido traducidas por la autora de este trabajo.

da? *¿Qué salió mal?*" (Mussa, 2002, VII; énfasis mío)[3]. Una de las figuras predominantes del FMI en América Latina, Anne Krueger, nos dice que, a pesar de que "Argentina aplicó muchas de las lecciones que la comunidad internacional le enseñó (...) *lo que no funcionó* en Argentina (...) fue la debilidad de la política fiscal (...) los *shocks* externos desfavorables; un plan de convertibilidad atrapado en la sobrevaluación del peso que quitaba flexibilidad a la economía doméstica, una dinámica insostenible de la deuda externa (...) Argentina quedó atrapada en un círculo vicioso de actividad débil, sobrevaluación y creciente endeudamiento" (Krueger, 2002, 241, énfasis mío).

Partidarios de las ideologías de mercado opinan que Argentina "es un caso típico de lo que puede funcionar y lo que puede *salir mal* si las políticas macroeconómicas sanas no se aplican consistentemente" (Aguirre-Sacassa, 2002, énfasis mío). Desde una posición política opuesta otros sugieren que Argentina es un ejemplo claro del "*fracaso* de las políticas del FMI para establecer las bases de un crecimiento económico a largo plazo en países de bajo ingreso (...) en ningún lugar del mundo los paquetes estabilizadores del FMI han llevado a la expansión sustentable de la economía sino, más bien, como en el caso argentino, han generado creciente desigualdad" (Maceran, 2002, 2-3, énfasis mío). Weisbrot también sostiene que "el FMI debe reconocer que jugó un papel significativo como causante de la crisis de la economía argentina al apoyar un plan de convertibilidad que *difícilmente podía ser exitoso* en el largo plazo e imponiendo condiciones de austeridad en el país por razones oportunistas e ideológicas" (2002, 2-3, énfasis mío).

Otros analistas resaltan importantes *problemas* estructurales que impiden la estabilización del capitalismo argentino, y que han operado, una vez más, como factores desencadenantes de la crisis. Entre ellos, la avidez de los grupos capitalistas locales y transnacionales inclinados a la valorización financiera y su papel en la destrucción de la capacidad reguladora y distributiva del Estado nacional (Basualdo, 2002a y 2002b); la corrupción de las elites políticas y su papel en el sostenimiento de formas de acumulación asociados a la especulación financiera y la fuga de divisas, que ha llevado al endeudamiento del Estado y al crecimiento y socialización de la deuda (Basualdo y Sulfas, 2002; Llorens y Cafiero, 2002; Lozano y Hourest, 2002), la dependencia de la economía argentina del movimiento de los mercados financieros (varios autores en *Plan Fenix*, 2001) entre otros. Finalmente, cientistas políticos señalan la *debilidad* de las instituciones del Estado democrático como también de la "forma del contrato social que subyace a la percepción de legitimidad del rol democrático del Estado" (Tudesco, 2002b, 477-478); la crisis del sistema de representación política (Botana, 2002); la fragmentación político-institucional (Ollier, 2003, 183) como causantes de la crisis.

---

[3] Del inglés: *What went wrong?*

Aunque desde diferentes perspectivas y con diferentes intenciones políticas, estos análisis comparten un problema fundamental: guiados por la pregunta *qué salió mal* relegan la movilización popular al lugar de *efecto no deseado* de la crisis institucional, tratándola como una variable dependiente (reacción) de los factores desencadenantes de la crisis. La explicación de la crisis de las políticas económicas o financieras se halla tautológicamente en las dinámicas institucionales mismas. Más importante aún, las formas no institucionales de la protesta social y la desobediencia civil son vistas como el *fracaso* de los canales de participación y articulación de intereses. Esta idea es de algún modo desmoralizante porque conduce a pensar en la existencia de una incapacidad intrínseca de los argentinos para desarrollar y sostener una democracia y un capitalismo estables. La crisis y la movilización son evaluadas desde un modelo imaginario de capitalismo democrático con el cual comparar el caso argentino, pudiendo así marcar sus *defectos* y *anormalidades*. Lamentablemente, esta forma de apelación a la realidad a estudiar dificulta el estudio de la relación existente entre el capital global y las demandas y movilización nacionales, cuyas formas de interacción y resultados dependen en gran medida de los procesos de lucha que se desatan sobre el territorio estatal, en un período histórico determinado.

Otros análisis que han intentado dar a la movilización popular el estatus que merece también se preguntan *qué salió mal* en diciembre de 2001, pero desde una perspectiva política diferente a la anterior. La pregunta es, en este caso, por qué se perdió la gran oportunidad revolucionaria ofrecida en diciembre de 2001 por la crisis "hegemónica" del capitalismo. La movilización popular de diciembre es concebida, en este sentido, como un momento fundamental de un proceso revolucionario a largo plazo, en donde el papel del partido es visto como crucial (*Política y Teoría*, n° 48, 2002). En esta lectura de diciembre, la izquierda política encontró una ocasión para reafirmar ideas ortodoxas acerca del cambio social[4]. Así, se sugería en aquellos días que "la lucha por el poder se encuentra objetivamente planteada (...) el puente para la conciencia actual de los trabajadores y la de su completo carácter de clase puede ser desarrollado como consecuencia de la crisis del poder y a partir de la agitación política directa (...) el tiempo necesario de desarrollo de esta transición no es otro que el de la madurez de las masas, lo cual supone una maduración de la crisis internacional y del desenvolvimiento revolucionario en América Latina" (Altamira, 2002, 322).

Desde esta perspectiva, la recomposición del poder en manos de los presidentes Duhalde y Kirchner, así como la paulatina disminución de la movilización popular, llevaron a una profunda desilusión política de la izquierda. Pero

[4] Nótese el uso del término "izquierda" en general para referirme a diversas organizaciones como el Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Partido Comunista (PC) entre otros. Pero existen diferencias importantes entre ellos que deben ser abordadas seriamente y en profundidad.

esta actitud cierra, en lugar de abrir, el debate sobre el significado de la movilización popular para producir un cambio político en Argentina. Esta visión que supuestamente coloca en primer plano la movilización popular, es tan o más desmoralizante que aquella descrita previamente, donde la movilización ocupa el lugar de variable dependiente de la crisis. Pero la desilusión no parece ser producto de la gradual disminución de la movilización social, sino más bien es efecto de una errada intención de subordinar dicha movilización a la estructura, lógica y agenda de los diversos partidos revolucionarios existentes, siguiendo criterios leninistas del marxismo más ortodoxo. Cerrando la pregunta sobre la naturaleza del cambio político, esta postura ignoraba que la insurrección popular de diciembre de 2001 en Argentina cuestionó la dinámica y estrategias de las estructuras políticas estatales y partidistas *incluidas* las de la izquierda política y del movimiento obrero organizado en tanto éstos no escapan a la lógica del poder contra la cual, como veremos más adelante, la movilización de diciembre estuvo dirigida.

Este trabajo explora la naturaleza del cambio político en Argentina y reflexiona brevemente acerca de este nuevo momento en América Latina. El trabajo sugiere en primer lugar que, para evaluar el impacto del cambio político producido por la movilización popular de diciembre y las formas de movilización que le siguieron, es importante investigar la relación existente entre dichas formas de movilización social y la forma específica que adoptó la crisis capitalista. Establecer esta relación mutua nos ayuda a evitar, en primer lugar, explicaciones tautológicas de la crisis donde el análisis de las crisis aparece disociado del análisis de la protesta social y la movilización popular, cuando en realidad estas últimas juegan un papel central en la producción y resolución de la crisis; en segundo lugar, nos ayuda a no aislar y abstraer la movilización popular de las transformaciones y dinámicas institucionales que le dieron vida y la moldearon evitando así forzarla a responder a una realidad que le es ajena a los sujetos involucrados en dicha movilización.

Estos momentos de rebelión y movilización popular *encarnan* y ponen en movimiento complejas y profundas transformaciones en las relaciones sociales del período a considerar. La virtud de una movilización popular como la de diciembre de 2001 en Argentina no reside en su capacidad para "alterar el orden social establecido", sino primordialmente en su capacidad de revelar y poner en evidencia la violencia intrínseca a la imposición del (des)orden capitalista.

Con este marco de análisis, el trabajo sugiere que la profunda crisis institucional donde predominaron aspectos financieros inició un movimiento hacia la recomposición de la subjetividad y la recuperación de la política que pusieron un límite a la violencia del capitalismo. Se inició así un proceso de lucha por "transformar a la sociedad civil en sujeto" (Tischler, 2001), es decir un proceso de crítica fundamental no sólo a la democracia excluyente y a las políticas económicas neoliberales sino, principalmente, a las formas mismas de la democracia y la política subordinadas al nuevo orden impuesto por el capital glo-

bal, los organismos internacionales y el imperialismo norteamericano durante los años 90. Esta crítica se expresó en una recuperación de la capacidad de acción política colectiva y la reinvención de la subjetividad política de ciertos sectores de la sociedad. Si bien las características mismas de la movilización (formas antiinstitucionales, directas, territoriales) no coadyuvaron a una disputa en el plano institucional, constituyen sin embargo la base fundamental para un cambio cualitativo de mayores dimensiones, cuya forma todavía no puede preverse pero que, sin duda, formará parte de un cambio político regional en el largo plazo.

La siguiente sección analiza los hechos de diciembre de 2001 y el significado político de la insurrección popular. La segunda sección explora la relación entre la crisis y la forma de la movilización popular en diciembre de 2001. La tercera presenta las características comunes de los nuevos *territorios* para la acción colectiva que emergieron o se fortalecieron a partir de diciembre de 2001. La cuarta sección presenta la recomposición del poder político y económico posdiciembre. La quinta sección evalúa la naturaleza y el significado del cambio político operado en Argentina en relación con la forma de la crisis y la recomposición del poder estatal político y económico.

I. Hacia diciembre de 2001: crisis y movilización (2000-2001)

La ilusión de que el triunfo, en diciembre de 1999, de la coalición formada por la tradicional Unión Cívica Radical (UCR) y el nuevo Frente País Solidario (Frepaso) liderada por Fernando de la Rúa iba a poner fin al proyecto neoliberal de Carlos Menem (1989-1999) se desvaneció más pronto de lo esperado cuando el nuevo gobierno, siguiendo los pasos de su predecesor, adoptó una posición más que dura hacia la protesta social y más que blanda para con el capital y los organismos de crédito internacional. A sólo cinco días de su nombramiento como tal, el ministro del Interior ordenó la represión de un corte de ruta en la provincia de Corrientes, donde dos trabajadores desocupados fueron brutalmente asesinados por fuerzas policiales, mientras muchos más fueron heridos y encarcelados. Simultáneamente, y a pesar de reconocer públicamente que la situación social era "extremadamente crítica" (*La Nación*, 28-7-2003), el ministro de Economía, José Luis Machinea, aseguraba al FMI en Nueva York a fines de marzo de 2000 que Argentina cumpliría con los compromisos asumidos en las cartas de intención de diciembre de 1997 y enero de 1999, por medio de la implementación de una agenda de reformas estructurales acordadas con dicho organismo (*Argentine Letter of Intent*, 1999).

Entre 1999 y 2001 la tensión entre las expectativas y reclamos populares, y las políticas de ajuste monitoreadas por el FMI, acompañadas por altos grados de corrupción estatal y la fuga de capitales sostenida, produjeron, por un lado, el gradual deterioro político y colapso de la coalición en el poder y, por el otro, la expansión del "mal humor" social y la consecuente intensificación de la movilización popular. Ambos procesos van a confluir en diciembre de 2001.

Entre los más importantes hechos que condujeron al colapso político de la Alianza se encuentran la renuncia del vicepresidente de la nación como consecuencia de la corrupción en el Senado en torno de la votación de la reforma laboral; la dimisión de aquellos miembros del gabinete nacional pertenecientes al Frepaso dentro de la Alianza y el retorno de Domingo Cavallo, el creador de la estabilidad, al Ministerio de Economía como el único aliado del presidente De la Rúa. Sin embargo, la imposibilidad de consolidar poder político en el gobierno no fue simplemente producto de la incapacidad de los personajes involucrados, sino el resultado de la intensificación de dinámicas contradictorias en la conflictiva relación entre capital y organismos internacionales y sociedad civil mediadas por el Estado, iniciadas hace 25 años atrás.

Durante los años 90 la administración Menem legitimó el accionar casi terrorista de los bancos y capitales nacionales y transnacionales que se hallaban detrás de la creación y nacionalización de la deuda externa en las décadas de los 70 y 80, los episodios hiperinflacionarios de 1989 y 1991, la privatización de empresas del Estado, la desregulación de los mercados financieros y laborales, la fuga de capitales, la corrupción. La incertidumbre producida por la estabilidad menemista se expandió a niveles inusitados erosionando derechos laborales, sociales y humanos que se consideraban casi intocables antes de 1976. El Estado nacional subsidiaba la inestabilidad producida por la socialización del riesgo capitalista a través del desempleo, la precarización y flexibilización laborales, el crecimiento de la economía informal, la comercialización de la salud, las jubilaciones y los accidentes de trabajo, la reducción de la contribución de los empleadores a la seguridad social, la destrucción de las instituciones estatales de protección social. La Corte Suprema de Justicia inició el período de mayoría absoluta para legitimar dicho proceso de transformación neoliberal. La ley legitimó también la amnistía política de aquellos que perpetuaron crímenes de lesa humanidad durante el período dictatorial.

La subordinación del Estado nacional a las lógicas del dinero internacional y los organismos internacionales, iniciada en los años 70, no afectó externamente los procesos de toma de decisión política sino que los penetró imponiendo prioridades desde el interior de las estructuras estatales. Los diez años que precedieron a la crisis de 2001 evidenciaron también la progresiva crisis de los partidos políticos tradicionales como el PJ y la UCR, particularmente luego de la desilusión con la democracia en 1983 y la conversión de Menem al neoliberalismo. Se hizo también evidente que ya no era posible para una izquierda política fragmentada recuperarse del período de represión y crisis pos-70. Se comprobó también la crisis de la identidad obrera peronista agudizada por el hecho de que la burocracia sindical colaboró con reformas laborales y económicas que, mientras facilitaban su supervivencia financiera, originaron una ruptura en su capacidad de representación de las bases en un contexto de desindustrialización y desempleo. La descentralización y la dispersión de la protesta dieron lugar a la emergencia de nuevos actores sociales, nuevas identidades y organizaciones con nuevas estrategias de lucha que transformaron la anato-

mía y la geografía de la movilización popular desde una forma organizada, centralizada y predominantemente conducida por sindicatos u organizaciones políticas y de derechos humanos, hacia formas más espontáneas, no institucionales, difusas, plurales, locales. El nuevo sindicalismo movimientista de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) creada en 1992 intentó persistentemente extender la representación y organización sindicales fuera de la fábrica, incorporando a aquellos sectores ahora considerados marginales o profundamente afectados por las reformas neoliberales, tales como los trabajadores estatales provinciales y nacionales, los trabajadores del sector informal, mujeres, desocupados, pobres, niños de la calle.

Sobre este escenario se desenvolvieron, durante el período 1999-2001, los esfuerzos infructuosos del nuevo gobierno por resolver las contradicciones de una fragmentada (pero no por ello menos intensa) lucha entre las "necesidades" del dinero global y las de la mayoría de los argentinos.

La principal forma de manifestación de estas contradicciones insuperables fue la *guerra* desatada a favor y en contra del plan "déficit cero", lanzado por el eterno ministro Cavallo para contrarrestar la caída de reservas en dólares en julio de 2001, y que llevaría a la crisis de diciembre de 2001. Con la manifiesta intención de mantener la convertibilidad dólar-peso a través de una mayor recesión que coartara la demanda y el consumo populares, el nuevo plan de austeridad se basaba en la reducción de 13% de los salarios del sector público y las jubilaciones que estuvieran por encima de los 500 pesos/dólares mensuales. Este descuento salarial, que afectaba a 92% de los empleados públicos y que fuera discutido fervientemente en el Parlamento, fue un factor clave para el inicio de una progresiva incorporación de trabajadores de cuello blanco, y de la clase media en decadencia, a la movilización de los sindicatos y el movimiento de desocupados. Los motivos que subyacen a la movilización social de ese momento no se hallan solamente en cuestiones económicas coyunturales sino en una percepción clara de que el "déficit cero" era un nuevo torniquete del FMI y la banca internacional para forzar a la Argentina a una mayor disciplina social. A pesar de que el gobierno desestimó su importancia, las huelgas de la CTA, la movilización en las calles y la nacionalización de los cortes de ruta (hasta entonces provinciales) en julio y agosto de 2001, fueron *apoyadas* por las capas medias, lo que marcaba un *salto cualitativo* en la movilización popular, hasta el momento liderada por la CTA y el Movimiento de Trabajadores Desocupados de la provincia de Buenos Aires.

La tensión al interior de la estructura estatal, producida por la presión del FMI, el gobierno de EEUU y los bancos para aprobar la ley de "déficit cero" y renegociar la deuda externa, y la movilización popular, que ya contaba con el malestar de la clase media, se volvió prácticamente insostenible a mediados de 2001. Mientras las grandes corporaciones y los poseedores de bonos en el exterior *apostaban* al colapso y la devaluación, el ministro Cavallo intentaba desesperadamente estabilizar las reservas del Banco Central para *evitar* la

devaluación. La ley de "déficit cero" fue finalmente aprobada por el Senado para regocijo de la administración Bush, también festejada por el primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, y el ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso, quienes la consideraron un "gran paso hacia adelante" (*Clarín*, 31-7-2001, 4).

La ley abrió un espacio para negociar otra ayuda del FMI por 1.200 millones de dólares promesa obtenida con la intervención directa del gobierno de Estados Unidos, pero incrementó el malestar social[5]. La movilización popular mostraba ahora no sólo el apoyo de la clase media a la clase trabajadora y los desocupados sino su *participación directa* en cortes de ruta, asambleas barriales, ollas populares, clases públicas y marchas que demandaban en agosto de 2001 el fin del ajuste, mientras las negociaciones entre Daniel Marx y Stanley Fisher se retrasaban.

Sumado a las presiones de la movilización social y su subordinación *política* al FMI, la Alianza recibió un duro golpe electoral en las elecciones legislativas del 14 de octubre de 2001, cuando el Partido Justicialista (PJ) triunfó en 17 de los 24 distritos electorales, obteniendo también mayoría en el Senado de la nación. Sin embargo, el verdadero ganador de las elecciones no fue el PJ, sino el voto en blanco o *voto bronca* que alcanzó a diez millones de personas, llegando a 20% a escala nacional, 30% en Buenos Aires y 40% en Rosario (Rodríguez en Gambina *et al.*, 2002, 23). El hecho de que un alto porcentaje del electorado no votara en un país donde el voto es obligatorio dejaba en claro la desilusión de la ciudadanía con la democracia y la clase política como también la gran marginación social, entre los cuales se hallaban 700.000 jóvenes y nuevos electores.

La apreciación pública de que el FMI estaba abandonando a Argentina a su suerte se hizo real el 2 de noviembre cuando el FMI amenazó al gobierno con no otorgar los 1.260 millones de dólares acordados en Washington si los gobernadores no se ajustaban a la ley de déficit cero.

Enfrentado a la necesidad de ajustar y no emitir, el ministro de Economía introdujo el 3 de diciembre por decreto ministerial 1570/01 una nueva medida financiera conocida popularmente como el "corralito" bancario. El "corralito" restringía las extracciones de los cajeros automáticos a $250 por semana por un período de 90 días como así también limitaba las transferencias de dinero al exterior e imposibilitaba a los dueños de depósitos extraer sus ahorros de

---

[5] El interés de EEUU en ayudar a Argentina era, en primer lugar, económico, dado que las compañías americanas son los inversores más importantes en Argentina. Y, en segundo lugar, político, pues el apoyo de la administración De la Rúa a la implementación del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) en un futuro cercano se volvía imprescindible ante la amenaza de una negativa por parte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

los bancos. De acuerdo con Cavallo, el "corralito" estaba dirigido a frenar la caída de reservas del Banco Central, forzar el uso generalizado de tarjetas de crédito y cheques en lugar de dinero en efectivo, frenando así la evasión fiscal. Sin embargo el "corralito" fue percibido correctamente como una *expropiación* de los ahorristas, entre los que se hallaban no sólo la clase media, sino muchos trabajadores que mantenían sus indemnizaciones por despido, invalidez o accidentes de trabajo en los bancos. El corralito significaba también la falta de circulación de dinero en efectivo del cual depende 40% de la población económicamente activa empleada en el sector informal de la economía, así como a los que sobreviven con limosna y *changas*.

Aunque la implementación del "corralito" no puede considerarse el principal motivo de la insurrección popular del 19 y 20, fue sin duda la gota que colmó el vaso, produciendo una reacción en cadena de las clases medias furiosas, los trabajadores y los sectores marginados de la población. Con el "corralito" bancario, aquellos que poseían ahorros en los bancos o un sueldo fijo se vieron tan afectados como aquellos que no tenían ni ahorros ni sueldos fijos, unidos en una huelga general declarada por la CTA contra el FMI el 13 de diciembre.

Una vez más, la movilización popular no respondía a cuestiones meramente económicas sino más bien políticas, ya que la percepción de que el gobierno había decidido definitivamente favorecer a los grupos de poder económico y la banca internacional, en detrimento de los intereses de la población, se incrementó luego de la implementación del "corralito". Dicha percepción estaba justificada. El argumento gubernamental para aplicar el "corralito" era la necesidad de frenar la caída de reservas en dólares la cual, según el gobierno y el FMI, se debía a la actitud irresponsable de los ahorristas, quienes temerosos de colapso del sistema financiero estaban produciendo una profecía autocumplida al retirar sus ahorros de los bancos (ver Rock, 2002) haciendo caer las reservas del Banco Central.

Sin embargo, la verdadera causa del vaciamiento del sistema financiero no fue la caída de los depósitos individuales, pues casi 60% de los depósitos atrapados en el "corralito" eran menores a $50.000, es decir, pertenecían a personas que no tenían acceso a información sofisticada de los mercados financieros y cuyas pequeñas sumas de dinero quedaron por ese mismo motivo "atrapadas" en el "corralito".

Una investigación parlamentaria publicada en abril de 2002 por Llorens y Cafiero (2001 y 2002) analiza el movimiento y los cambios operados en una sección del informe de instituciones bancarias presentado al Banco Central en 2001 denominado sospechosamente "Otras Obligaciones del Balance de Instituciones Financieras". La investigación demuestra que la caída de las *reservas* (y no depósitos) del Banco Central fue lo que produjo el vaciamiento, y que éste fue producto del movimiento de dinero de grandes corporaciones y ban-

cos, que comenzó meses antes de la crisis como resultado de una estrategia de vaciamiento, es decir, una "prolija y silenciosa retirada" de dinero del sistema financiero por parte de grandes inversores (es decir, los diez primeros bancos más importantes del país, la mayoría extranjeros [Sevares, 2002]) (Llorens y Cafiero, 2001 y 2002).

Es interesante señalar también, en relación con lo anterior, que dicho "vaciamiento" se produjo entre marzo y noviembre de 2001, cuando el ministro Cavallo ya estaba al frente del Ministerio de Economía (Llorens y Cafiero, 2001 y 2002)[6]. Por ende, la llamada *crisis* del sistema financiero o el "golpe de Estado" económico fue más fruto de las instituciones financieras que de los pequeños ahorristas, y más un proceso gradual y planificado que una reacción espontánea de los "mercados" a la crisis institucional.

La percepción popular de que el gobierno estaba atrapado sin salida en la lógica del poder financiero internacional se confirmó nuevamente cuando –a pesar de las promesas que en Washington se le habían hecho al viceministro de economía Daniel Marx, y a pesar de la implementación de medidas económico-financieras impopulares que socavaban la autoridad política del gobierno–, el 5 de diciembre el FMI cambió de opinión y rehusó otorgar el préstamo prometido de 1.260 millones de dólares, sugiriendo ahora que la política apropiada era la *devaluación* y un nuevo plan de ajuste fiscal y presupuestario para 2002.

Por qué el FMI le negó ayuda en diciembre de 2001 cuando la había rescatado en reiteradas oportunidades en 2000 y los primeros seis meses de 2001, aun sin haber logrado el cero déficit, es una pregunta aún sin respuesta. El argumento de que Argentina fracasó en cumplir con el déficit cero y que había aumentado por el contrario el gasto público más allá de lo fijado por el FMI no tiene sustento empírico. Las estadísticas oficiales muestran, siguiendo a Weisbrot y Baker (2002, 7), que "lo que llevó al presupuesto a pasar de tener excedente a ser deficitario fue el incremento de los pagos por intereses de la deuda (...) que aumentaron de 2.500 millones de dólares en 1991 a 9.500 millones de dólares en 2000, o de 1,2% a 3,4% del PBI".

¿Fue la generosidad demostrada en los préstamos financieros de 2000 una estrategia para posponer la crisis? El argumento de que el FMI intentaba favorecer a los bancos americanos no debiera ser descartado. Según Dávalos (2001) la ayuda financiera en 2000 permitió a las grandes corporaciones y bancos protegerse y reponer inversiones. Luego de que esto sucediera, el FMI

---

[6] Es quizás por ello que el retorno del ex ministro Cavallo al gobierno fue celebrado por la banca internacional, es decir, David Rockefeller del Chase Manhattan Bank, David Muldord del Credit Suisse-First Boston, William Rhodes del Citibank y Robert MacNamara, el ex secretario del tesoro americano quien viajó en persona a Buenos Aires para felicitar a De la Rúa.

no tenía ya más interés en frenar el desencadenamiento de una crisis terminal anunciada desde cuatro años antes.

Este argumento se confirma primero con el de Cafiero y Llorens (2002) cuya investigación muestra que el vaciamiento planeado del sistema financiero fue apoyado por el FMI con la intervención directa de Stanley Fisher, el ex funcionario número dos del organismo quien, a la vez, se desempeñaba como vicepresidente del Citigroup cuando la ayuda financiera a Argentina fue implementada en diciembre 2000 (*blindaje*), junio de 2001 (*megacanje*, definido por el diputado Cafiero como el "robo del siglo"), en agosto de 2001 (*salvataje*). Segundo, con el hecho de que las grandes corporaciones con conexiones internacionales apostaron a la devaluación, sugerida por el FMI. En noviembre de 2001, un grupo de compañías poderosas lideradas por el Grupo Techint, y bancos extranjeros liderados por el Citybank y Santander Río, entre otros, sugirió al equipo económico argentino la devaluación del peso y la eliminación de restricciones para que estas instituciones retiraran dinero del país (Nudler en *Página/12 online*, 6-12-2001). Pronto, luego de esta maniobra, el FMI parece haber castigado ejemplarmente a Argentina argumentando que no estaba implementando las sugerencias del FMI apropiadamente.

El 19 de diciembre de 2001 fue un punto de inflexión en dos sentidos. Primero, luego de la negativa del FMI, el gobierno tenía que cubrir 415 millones de pesos en obligaciones de la deuda. Ansiosos, los acreedores esperaban que el pago no se cumpliera para exigir la declaración oficial del *default*, sin la cual no podían iniciar acciones legales contra el gobierno. El 19 de diciembre fue también un día clave para la movilización popular. Mientras el equipo económico se desangraba por llegar al déficit cero, 800 personas en Concordia (Entre Ríos) y 300 más en Mendoza se movilizaron el 16 de diciembre en demanda de comida en los supermercados, produciéndose en algunos casos saqueos de los mismos. Para el 19 los saqueos ya se habían extendido a la ciudad y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. A pesar de que circularon rumores de que la oposición (PJ) había estimulado los saqueos con el objetivo de debilitar al gobierno, queda claro que esta explicación es insuficiente para dar cuenta de casos como la movilización pacifica de 2.000 piqueteros de la Coordinadora de Desocupados Aníbal Verón, quienes reclamaron comida en los supermercados de Quilmes, Buenos Aires, desafiando a la policía e indirectamente al FMI.

No solamente los saqueos generaban aires de movilización popular: más de tres millones de personas votaron voluntariamente en el referéndum organizado entre el 13 y el 16 de diciembre por el Frente Nacional Contra la Pobreza (Frenapo)[7] y la CTA al que asistieron 2.769.831 personas. Entre ellos,

[7] El Frenapo está formado por varias organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Asociación por los Derechos Humanos (APDH), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), diputados

1.742.327 votaron afirmativamente por la propuesta de introducción de un subsidio por desempleo universal de $380 mensuales para todos los padres de familia, así como una jubilación mínima y un beneficio de $60 mensuales por hijo. La masiva asistencia a votar por la propuesta de Frenapo marcaba otro cambio cualitativo en la resistencia popular contra la banca internacional y el FMI, ampliando sus bases, contrastando con la negativa de votar en las elecciones de octubre[8].

Temiendo una situación de revuelta social generalizada, el gobierno nacional utilizó la conocida "política del bombero", tantas veces implementada infructuosamente por los gobernadores provinciales para reprimir la protesta social: envió por un lado 20.000 cajas de comida y por el otro cientos de policías a las áreas donde la pobreza llega a proporciones increíbles y donde por consiguiente los saqueos y movilización eran intensos.

Luego de fracasar en el intento de formar un gobierno de unidad por la negativa de la oposición peronista, el gobierno declaró el estado de sitio por un lapso de 30 días por decreto presidencial 1.678. Según el Presidente, se intentaba así controlar "actos de violencia" provocados por "ciertos grupos de personas" que promovían saqueos "dañando la propiedad privada y poniendo en peligro la vida de las personas". La reacción popular a este mensaje fue unánime. La declaración del estado de sitio desencadenó furia generalizada, la cual devino alegría colectiva cuando la gente salió a las calles para rechazar a una clase política que era sorda a sus reclamos pero completamente atenta al llamado del FMI.

Los primeros cacerolazos se escucharon en los barrios ricos de Buenos Aires: Barrio Norte y Belgrano (Schuster *et al.*, 2002). Pero, luego del discurso presidencial, el ruido de las cacerolas se expandió gradualmente hacia toda la ciudad. Como apelando a otro nivel de comunicación más allá del discurso político o la jerga revolucionaria, los cacerolazos emergían como una respuesta "emocional" a la (ir)racionalidad política. La gente se identificó como *vecinos*. Los cacerolazos despertaron un sentimiento de fiesta callejera y un sentido de estar "haciendo historia", un momento de liberación de fuerzas, de alegría: "todo era emocionante lleno de sorpresas inesperadas", "el ruido era increíble", "se redescubrió el poder colectivo", "la ocupación del espacio público particularmente a la noche fue muy importante". "Lo que realmente unió a la

---

del Frepaso, Asociación por una República de Iguales (ARI), los gremios adheridos a la CTA, jubilados, organizaciones de la Iglesia católica y judía, entre otros.

[8] A diferencia de la políticas fragmentadas, focalizadas y subsidiarias del Estado, la propuesta de la CTA comprende una estrategia más amplia de distribución del ingreso que pueda impactar a nivel de la demanda y del desarrollo del mercado interno como principal reactivador de la economía, forzar al capital a una estrategia de producción más cercana a las necesidades de la población y al Estado a invertir en políticas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables de la población en lugar de subsidiar al capital (IDEP-CTA, 2000 y 2002).

gente que salió a las calles por razones diferentes fue un sentimiento generalizado de '¡ya basta!' "[9].

La rebelión espontánea devino en insurrección popular cuando los cacerolazos demandaron la renuncia del ministro Cavallo y luego, en Plaza de Mayo, la del Presidente de la Nación. La represión brutal en las calles dejó más de 500 heridos y miles de presos, y un total de seis muertos, que se sumaron a los asesinatos policiales producidos durante los saqueos y protestas en el resto del país, totalizando 32. La tasa de riesgo país subió a 4,619 puntos y el presidente De la Rúa, atrapado entre la movilización popular y los mercados financieros, dejó la Casa Rosada en un helicóptero. La insurrección popular forzaba así la renuncia de un presidente democráticamente elegido dos años atrás. La ruidosa demanda popular de diciembre no reclamaba el reemplazo de un gobierno por otro sino que exhibía una crítica casi irrevocable a las instituciones políticas, económicas y legales, y a las formas de la política y la democracia representativa: *¡qué se vayan todos!*

II. Colapso financiero versus pura rebelión: achicando el abismo hacia la recuperación de la política

Si bien *¡qué se vayan todos!* fue dirigido claramente contra la clase política corrupta e incompetente que se había vuelto sorda a las demandas populares, y contra la arrogancia del imperialismo norteamericano, la avidez de la banca internacional y el cinismo del FMI, también puso en evidencia una serie de procesos que venían teniendo lugar en los últimos diez años pero que forman parte de un continuo *hilo* de transformaciones iniciados con el gobierno militar de 1976. Entre otros: (I) valorización financiera del capital subsidiada por un Estado nacional cada vez más endeudado; (II) la dependencia de la economía nacional al movimiento del capital global y las finanzas internacionales, fundamentalmente a partir de la deuda externa y las presiones del FMI y la crisis de dicho paradigma iniciado con el Consenso de Washington; (III) el permanente uso de la ley para legitimar y legalizar la precarización laboral, la violación a los derechos humanos, los negocios ilegítimos para sostener dichas formas de la acumulación; (IV) la crisis del sistema democrático representativo la corrupción de las elites políticas y la crisis de los partidos políticos como efecto de la subordinación de la política a la lógica del dinero y la redefinición de nuevos espacios y formas de participación; (V) cambios significativos en la estructura social como producto del desempleo, pobreza y el progresivo hundimiento de la clase media; (VI) crisis de las identidades laborales fundamentalmente peronistas, y de las organizaciones gremiales burocráticas ligadas al

[9] Comentarios extraídos de la entrevista grupal realizada por la autora en junio de 2002, Buenos Aires, a diez jóvenes participantes en la movilización del 19-20 de diciembre de 2001, colaboradores del Observatorio Social para América Latina (OSAL), Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Buenos Aires.

Estado; (VII) la emergencia de nuevas formas de sindicalismo, movimientos sociales y laborales (de desocupados, barriales y de derechos humanos); (VIII) la progresiva recuperación de la movilización popular en forma fragmentada a través de cortes de ruta, marchas de empleados estatales, huelgas, *escraches*, sin nociones comunes que articularan la lucha de los distintos sectores.

Estas transformaciones *cualitativas* fueron generando un *abismo* creciente entre las condiciones de crecimiento y reproducción social impuestas por el FMI y las posibilidades de rechazo de dichas condiciones, y posibilitó un cambio fruto de la combinación de la intensificación de los aspectos *abstractos* de las relaciones capitalistas de producción (es decir, la globalización, la deuda, el riesgo país, la fuga de capitales, el desempleo) y una crisis de las mediaciones políticas (deterioro de las capacidades fiscales, de definición y aplicación de políticas sociales, legitimidad, corrupción). La crisis financiera es sin duda reflejo de una recomposición del capital global basada en la hegemonía terrorista del dinero internacional (la forma mas abstracta del capital) por sobre la capacidad política de los Estados nacionales. La *despolitización* de la política y la transformación de la democracia en el medio para administrar la miseria social y contener la movilización popular fueron sostenidas por un tiempo por los beneficios a corto plazo de la estabilidad, pero a la vez dicha "despolitización" agudizó procesos menos visibles de frustración, individualismo, destrucción de la redes sociales, crisis de identidad, crisis políticas y organizaciones que salieron a la luz en diciembre de 2001 cuando la lógica del dinero desbordó las posibilidades de su propia reproducción.

La crisis de la desutopía neoliberal no nos habla simplemente de una crisis de ciertas políticas económicas o financieras, sino de una crisis de la subordinación de la política a la lógica del dinero y, con ella, la "desaparición virtual" de los humanos en diversas formas como la represión política, la pobreza y el desempleo, la exclusión social. Como en el resto del mundo en donde "las luchas contra la intensificación de la abstracción del capital contraponen fisicalidad, es decir, buscan visibilidad en un intento por hacerse concretos contra la omnipresente lógica de la abstracción" (Dinerstein y Neary, 2002, 238), la movilización de diciembre de 2001 en Argentina se propuso rematerializar la abstracción del capital, que en Argentina adoptó las formas gráficas de *fuga,* deuda y bancarrota. En otros trabajos denominé este proceso como la "experiencia de la abstracción" (Dinerstein, 1999 y 2003c), es decir, una experiencia colectiva a través de la cual los sujetos resignifican los procesos de exclusión social, económica o política así denominados por el poder, generando formas alternativas de acción colectiva que devuelven materialidad a la separación, en este caso *abismo*, producida entre los sujetos y el capital. En diciembre de 2001 la presión de la banca internacional y el colapso financiero combinados teatralmente con la patética actitud de la clase política, su corrupción, la crisis de la democracia y la ley, terminaron expandiendo esta experiencia de la abstracción desde sectores marginados a toda la sociedad, revelando así la violencia del orden capitalista denominado estabilidad.

Esta experiencia es inevitablemente una experiencia de reinvención de los *territorios de la política.* El primer paso hacia la reinvención ha sido la negación de plano de la política institucional que sustentaba la *irracionalidad* capitalista: *¡qué se vayan todos!* puso un límite a dicha irracionalidad. Diciembre de 2001 se vivió como un momento de volver a estar en posesión de uno mismo, un momento en que los miedos y las dificultades individuales se transformaron en una acción colectiva radical contra el poder del capital y el Estado. Como un acuerdo tácito, la movilización popular no fue guiada por un plan de acción para un recambio de gobierno, ni como una demanda por cuestiones concretas sino que conjugó una multiplicidad de frustraciones, necesidades, deseos y sueños subordinados a la lógica del dinero. La movilización popular encarnó en un momento de *rebelión pura* el rechazo *colectivo* a la violencia de la estabilidad menemista impuesta y celebrada durante los años 90 (ver Dinerstein, 2001 y 2003a).

III. Los nuevos territorios de la movilización popular: hacia la recuperación de la subjetividad política

Al momento de negatividad inicial le siguió inevitablemente un momento de recomposición de las formas de participación y movilización que nacieron del espacio de subjetivación abierto por la crisis institucional. Estas formas son herederas en mayor o menor medida de las formas de la crisis. La recomposición posdiciembre tuvo cuatro características generales:

1. Produjo una reconciliación de la gente con la política, en la forma de la antipolítica (Dinerstein, 2003c). La repolitización de la sociedad a través de nuevas formas de participación, movilización y acción colectiva directa, radical, solidaria y democrática que rechazaban la política institucional, representativa. La práctica y el lenguaje de la antipolítica, el contrapoder, del anticapitalismo, la antiglobalización, se desarrollaron y expandieron territorialmente a través de la acción de asambleas barriales, movilizaciones obreras y sindicales, del movimiento de los trabajadores desocupados, movimiento cooperativo y de fábricas tomadas, y de derechos humanos, de jubilados, de ahorristas, de artistas[10].

2. No surgió un movimiento político centralizado que coordinara la acción de las diversas formas organizacionales, sino que los nuevos territorios de la desobediencia civil constituyeron una red rizomática articulada horizontalmente.

[10] Esta recuperación incluye la emergencia de debates que parecían muertos acerca de reforma o revolución, democracia radical, directa o representativa, la relación de la izquierda con el Estado, resistencia anarquista o institucionalizada, el FMI y la globalización en lugares de trabajo, bares, colegios, universidades, barrios, hogares.

3. Nacieron, en el seno de la acción colectiva misma, nuevas "nociones comunes" tales como dignidad, justicia, autonomía y democracia que, mientras reintroducían el lenguaje y la práctica de la rebelión, a la vez rechazaban el viejo vocabulario de lucha de la izquierda política y del movimiento obrero organizado. Estas nuevas nociones motorizaron la disputa por el *sentido* y significado de la crisis y la insurrección.

4. Se produjo, durante 2002 y 2003, una recomposición del poder económico y político estatal que, si bien puso fin al período menemista, no implicó la renovación de las elites políticas o el cambio en las estructuras institucionales.

Mirando en más detalle tres de estas formas organizacionales de movilización y participación popular emergidas de la crisis, o cuya importancia se incrementó luego de la crisis (las asambleas barriales en el primer caso, y el sector mas autónomo del movimiento de desocupados: la Coordinadora Aníbal Verón, junto al movimiento de fábricas tomadas en el segundo caso), se observan algunas características comunes que, si bien no afectaron a la mayoría de la población, indican un cambio *político* sustantivo.

Primero, la recomposición de las identidades políticas y sociales a través de la acción colectiva misma. Los ciudadanos decepcionados se convirtieron en *vecinos* activos, los desocupados en *piqueteros* con un proyecto social propio, los trabajadores a punto de perder su trabajo en trabajadores autónomos a cargo de la organización de la producción en sus fábricas. Esto significó un rechazo o al menos un debate acerca de las identidades e ideologías existentes de la izquierda tradicional y el movimiento obrero. En el caso de las asambleas barriales, la noción de *vecino* es una identidad negativa que suprime las diferencias de clase y apela a una identificación territorial de los participantes (los que viven en el barrio), actuando en este sentido como un aglutinador homogeneizante para la acción colectiva solidaria. A diferencia de "ciudadano", la identidad del *vecino* es concreta y situacional, es decir, existe en tanto los procesos de movilización y participación tienen lugar, en lugar de estar definidas en abstracto por ideologías o procesos políticos ajenos a los sujetos involucrados. Ser vecino, pero también ser piquetero o trabajador en una fábrica tomada y convertida en cooperativa no es definido *a priori*, sino que es el involucramiento en la acción colectiva lo que da lugar al nacimiento de dichas identidades. La identificación y reconocimiento mutuos de los asambleístas a través de compartir los mismos problemas o inquietudes se convierten así en las bases para la acción.

Segundo, se aprecia una reapropiación física del espacio público. En todos los casos el barrio se convirtió en el *territorio local* para reafirmar identidad y desarrollo organizacional. Esto es verdad también al inicio de las tomas de fábrica, en tanto el apoyo del barrio jugó un papel crucial para el éxito de la toma. El barrio entonces es el lugar de conjunción y encuentro (territorio) desde donde decidir (I) estrategias de supervivencia con alto contenido político

(proyectos económicos productivos, educación popular, toma de casas abandonadas para instalar comedores infantiles, hospitales populares); (II) confrontación con organizaciones locales, el Estado, bancos y empresas de servicios; (III) organización de eventos artísticos, debates políticos y (IV) coordinación de la protesta y articulación de denuncias y expresiones de resistencia contra la represión y la coerción política estatal.

Tercero, se observa en todos los casos la práctica de la democracia directa o radical definida como "la democracia del pueblo" o "la democracia en su forma más existencial" (Esteva, 1999, 155). La *asamblea* es usada por todas estas organizaciones como la manera de deliberar y decidir. En el caso del movimiento piquetero, la asamblea es utilizada para decidir acerca del día y forma de los cortes de ruta, pero también sobre la forma de utilizar los programas de empleo para los proyectos productivos locales como la creación de panaderías, fábricas de ladrillos, escuelas.

Cuarto, la movilización y participación posdiciembre funciona en un *aquí y ahora.* Aunque hay diferencias sustanciales entre ellas, por ejemplo, entre movimiento de desocupados y las asambleas barriales, puede decirse que en general el compromiso político de los vecinos, *piqueteros*, trabajadores en las fábricas tomadas con sus organizaciones es recreado permanentemente en tanto se participa en los encuentros. No se es *piquetero* si no se participa en el movimiento, ni *vecino* si no se asiste a las asambleas. La organización misma existe en tanto los encuentros tienen lugar. Estos nuevos territorios son entonces relativamente flexibles y las identificaciones identitarias que habitan en su interior, como dijimos, se superponen, rotan, desaparecen, en tanto la acción colectiva se desarrolla. Los métodos de protesta son también directos (asambleas, *escraches*[11], cortes de ruta, ocupación de fábricas, marchas) y se sostienen con trabajo comunitario político y social.

Quinto, lo que unifica la acción de estas nuevas o revitalizadas formas organizacionales han sido nuevas *nociones comunes* o ideas adecuadas que permiten entender y por lo tanto volver a estar en posesión de nuestro poder de acción (Deleuze, 1992; también Hardt, 1995). La emergencia de estas nociones comunes tales como dignidad, democracia y autonomía produjo un cambio cualitativo en la movilización popular pues sirvieron simultáneamente

[11] El *escrache* es un término lunfardo que denomina la acción de señalar a una persona para que el resto se entere de sus acciones. Aquí se utiliza el término *escraches* para referirse a una forma de protesta introducida por la organización H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), durante los años 90 e inicios de 2000. El *escrache* se realiza luego de un profundo trabajo barrial frente a la vivienda de ex torturadores, represores y colaboradores de la ultima dictadura militar, quienes se hallan en libertad fruto de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final aprobadas por el Congreso durante la transición democrática. Luego de la crisis de diciembre, el uso del *escrache* se generalizó como método de protesta contra la clase política, empresarios y el FMI.

para recuperar la fuerza histórica de oposición al capital y al Estado sin reproducir el léxico revolucionario ortodoxo del cambio social. En este sentido estas nociones comunes ayudaron a ampliar la definición del campo popular y los términos del "enemigo".

La defensa de la *dignidad* se convirtió, para los piqueteros organizados en la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, no sólo en un valor fundamental del movimiento, sino en el motor de su lucha política, más allá de la demanda por una más justa distribución del ingreso y programas de empleo impulsados por la CTA o la participación en un proceso revolucionario, como el impulsado por las organizaciones piqueteras de la izquierda política. En el mismo sentido, las nociones de *autonomía* obrera, cooperativismo y solidaridad social han guiado el proceso de tomas de 120 fábricas en el cual se involucraron más de 10.000 trabajadores.

Sexto, estos nuevos territorios coordinan la acción a través de estructuras horizontales como asambleas interzonales, interbarriales, mesas, encuentros y conferencias provinciales, regionales y nacionales. La interacción entre distintas formas se desarrolla a través de una red virtual de resistencia. El mejor ejemplo de esto fue el Foro Social Mundial en Argentina: "Otra Argentina es Posible" (22-25 de agosto de 2002, Buenos Aires). Allí, más de 600 organizaciones (asambleas barriales, movimientos sociales, sindicatos, asociaciones profesionales, universidades, derechos humanos, desempleados, y otros, se reunieron para discutir la crisis del neoliberalismo y los desafíos para el movimiento mundial. El "FSM en Argentina" creó un espacio para encuentro, debates, análisis, convergencia, promoción de la movilización contra el ALCA, solidaridad y divulgación, sin ningún atributo de representación o resolución. Estos cuatro días de jornada intensa, que contaron con la participación de activistas políticos y sindicales de América Latina, incluyeron marchas, talleres académicos y políticos, eventos artísticos en los parques de Buenos Aires.

Séptimo, todas estas formas organizacionales plantearon construir un contrapoder para reafirmar así el poder de la sociedad civil ante la crisis del Estado, la democracia representativa, la economía, la ley, como así también las formas de la política de la resistencia previas a la crisis, entendiendo así las posibilidades de cambio social como un cambio "desde abajo" (desde el barrio, la calle o la fabrica). Esta es una nueva característica de la política de resistencia en Argentina, país donde existía un alto grado de institucionalización del conflicto social. La dinámica de construcción del *contrapoder* se basa como vimos en un compromiso cotidiano dirigido a recuperar los espacios públicos locales, desarrollar proyectos comunitarios territoriales, y la capacidad de control y organización ciudadana y obrera, incluidos el diseño de una suerte de "política social desde abajo" y la resistencia a la cooptación, coerción y represión por parte del Estado local y nacional y, en menor grado, por parte de las organizaciones sindicales y políticas de cooptar la autonomía del contrapoder.

Aquí una referencia breve al movimiento *zapatista* se hace inevitable. El zapatismo reintrodujo el problema de la dignidad humana en un mundo del dinero, y el problema del poder del Estado y de cómo concebir el cambio social. Su revolución de la dignidad (Holloway y Peláez, 1998) y su propuesta de "cambiar el mundo sin tomar el poder" (Holloway, 2002a) a partir de la coexistencia de muchos mundos diferentes conviviendo fueron resistidas por la izquierda ortodoxa.

IV. La recomposición del poder político y económico de las elites del Estado

Como dijimos, la intensa movilización popular posdiciembre se desarrolló simultáneamente con la recomposición del poder estatal. En enero de 2002, la administración Duhalde reinició un proceso de estabilización política y económica a través de la devaluación tan querida por los sectores financieros y el FMI. A pesar del claro mensaje de la insurrección popular de diciembre, el gobierno sucumbió una vez más a los mandatos del FMI impulsando (I) la cancelación de la ley de subversión económica que permitía la prosecución legal de los responsables del vaciamiento del sistema financiero; (II) cambios en la ley de quiebras para proteger a las empresas de las demandas de sus acreedores por un cierto período de tiempo para que pudieran reorganizar sus deudas (Cibils *et al.*, 2002); (III) un compromiso con los gobernadores provinciales para reducir déficit en 60%.

Con estos condicionamientos, el nuevo acuerdo con el FMI facilitaría, según el organismo, "destrabar recursos" para programas sociales y ayudaría a "recrear un marco fiscal sano para restablecer la confianza en el sector bancario" (IMF Survey, 2003, 1).

La devaluación del peso junto a la "pesificación" de las deudas previas en dólares, acompañada por la excepción impositiva, favoreció a los grupos más concentrados de poder económico, tales como la poderosa Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) que reúne a 47 miembros de las empresas financieras, industriales y de servicios que son prácticamente los dueños del país[12]. El nuevo plan de rescate implementado por el gobierno en junio de 2002 les permitió a estas empresas, que son los deudores más importantes del sistema financiero, ahorrar más de 6.500 millones de dólares (Basualdo *et al.*, 2002, mimeo).

Mientras el gobierno pesificó las deudas del gran capital, no logró abrir el "corralito" bancario, ya que sólo 6% de los depósitos se hallaban en bancos públicos y por ende las decisión de devolver los ahorros incautados estaba ahora en las manos de la banca extranjera que se negaba a traer fondos de sus casas matrices.

---

[12] Pérez Companc, Techint Group, Loma Negra, Repsol YPF, Laboratorios Bagó, Grupo Clarín, BankBoston, Grupo Roggio, Telecom, Roemmers entre otros.

De acuerdo con la opinión del grupo Economistas de Izquierda (EDI), las medidas económicas de la administración Duhalde no sólo perpetuaban una vez más la transferencia de ingresos de los sectores populares a las clases dominantes, sino que implicaban una expropiación explícita de los primeros en favor de los últimos, esta vez ya sin camuflaje o demagogia alguna (Katz, 2002b, 20)[13]. Según Katz, dicha expropiación se evidenciaba no sólo en la *pesificación* de deudas de los grandes capitales, la continuación del pago de los intereses de la deuda y el "corralito", sino en otros mecanismos como la confiscación de los salarios a través de la inflación, la subida de precios de la canasta familiar y la falta de regulación de las empresas de servicios ahora privatizados.

En efecto, la devaluación produjo también inflación perpetuando así la caída de los ingresos de las clases populares, aumentando la pobreza y el desempleo. La tasa de desempleo en febrero de 2002 era de 21,8% afectando a 3.200.000 trabajadores. Como récord absoluto, se calcula que más de 7.000.000 de personas habían caído bajo la línea de pobreza entre octubre de 2001 y 2002. Hay 21 millones de personas en una población de 37 millones que vive bajo la línea de pobreza, 10 millones de ellos son considerados indigentes. Es decir, 57,5% de los argentinos no reciben el ingreso suficiente para cubrir necesidades básicas. La situación es particularmente terrible en el noroeste (Jujuy, Salta, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán) donde estas cifras ascienden a 69% y en la región de Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis) donde llegan a 61,3% (Indec en *La Nación*, 1-2-2003).

Es importante señalar que 55% de los jóvenes son pobres, especialmente por el impacto del desempleo sobre la pobreza. Es decir, el desempleo es más alto entre los pobres que entre aquellos que no lo son. En octubre de 2001, la tasa de desempleo entre los menores de 24 años era de 31,8%, 39% de los jóvenes habían estado desempleados por más de seis meses y más de un millón de personas entre 15 y 24 años no estudiaban ni trabajaban (Lozano y Hourest, 2002).

Durante la administración Duhalde, el Estado criminalizó aún más la pobreza e intensificó la represión. En sintonía con el espíritu de la "guerra contra el terror" impulsada por los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, y la obsesiva preocupación de la administración Bush con la "volátil región" de Latinoamérica (*La Nación*, 7-2-2003), un nuevo proyecto parlamentario fue enviado al Congreso Nacional para rediscutir la participación de los servicios de inteligencia en la represión del "terrorismo doméstico". Como en los viejos tiempos, el proyecto definía a dicho "terrorismo" como "todas aquellas activida-

---

[13] El EDI fue creado en enero de 2002 por economistas de diferentes tradiciones de izquierda y se ha convertido en un foro de discusión y elaboración de propuestas alternativas a las del poder político, como parte de la movilización popular contra el capitalismo por el socialismo. Ver www.geocities.com/economistas_de_izquierda.

des que tengan lugar dentro del territorio nacional" que involucren a "grupos o individuos que usen la fuerza para lograr objetivos políticos, sociales, religiosos, económicos o culturales" (Verbitzky, 2003; ver Proyecto S-02-2239, HCDN).

Mientras este proyecto impulsado por las fuerzas de seguridad y el propio gobierno era discutido, la represión contra los sectores más autónomos del movimiento de trabajadores desocupados y del movimiento de campesinos de Santiago del Estero, los trabajadores de fábricas ocupadas y participantes en asambleas barriales y derechos humanos se intensificó llegando a situaciones de masacre como el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán de la Coordinadora de Piqueteros Aníbal Verón en manos de la policía de la provincia de Buenos Aires el 26 de junio de 2002 (Dinerstein, 2003c y 2003d).

El momento clave que definió el curso del cambio político y la dicotomía poder y contrapoder fue el llamado a elecciones por parte del gobierno. El problema para la elite política era como mantenerse en el poder y a la vez reflejar en las estructuras políticas y programas de gobierno el espíritu del *¡qué se vayan todos!* El problema para las asambleas barriales, el movimiento piquetero autónomo y otras fuerza sociales era cómo mantener la crítica esgrimida en diciembre de 2001 y la autonomía de las organizaciones desarrollada luego de diciembre.

El movimiento asambleario rechazaba su participación en las elecciones. Votar sería legitimar el orden político y perder así autonomía y capacidad de movilización y resistencia. Aún más, algunos asambleístas planeaban boicotear las elecciones a través de diferentes formas de desobediencia civil que iban desde marchas y actos de protesta hasta graffitti, cacerolazos y boletas impresas con el eslogan *¡qué se vayan todos!* que iban a ser utilizadas para reemplazar las boletas verdaderas (Hauser, 2003a). En discusiones diversas los *asambleístas* argüían que "las elecciones tenían el propósito de lograr el *¡qué se queden todos!* Y que no se podía elegir nada, excepto diferentes variaciones del mismo régimen (...) necesitamos estar unidos para votar juntos por *¡qué se vayan todos!*" (*Página/12*, 24-3-2003).

El llamado a elecciones también produjo fuertes tensiones en el interior del movimiento piquetero. Si bien todos los sectores del mismo acordaban con que las elecciones no reflejarían cambio alguno, y rechazaban la intensificación de la represión de la protesta social por parte del gobierno, que sería en cierta manera ratificada en el voto popular, la actitud frente a las elecciones varió (Dinerstein, 2003e). Los piqueteros cercanos a la CTA (FTV y CCC) así como los ligados a la izquierda política decidieron participar en las elecciones, mientras que los sectores más autónomos como la Coordinadora Aníbal Verón se negaron a votar sosteniendo así la política de construcción de un contrapoder como proceso fundamental de cambio: "Estamos abajo y no queremos ir a ningún lado. Siempre seremos rebeldes" (citados en Colectivo Situaciones, 2001b).

Algunas fuerzas políticas intentaron capturar el espíritu del *¡qué se vayan todos!* en propuestas políticas. En agosto 2002, los líderes de la CTA, junto con los nuevos partidos políticos Asociación por una República de Iguales (ARI), liderado por Elisa Carrió, y Autodeterminación y Libertad, liderado por Luis Zamora, demandaron al gobierno la ampliación del llamado a elecciones hacia *todos* los puestos políticos. Este reclamo cuestionaba la idea de renovar sólo la cabeza del gobierno. Algunas de estas fuerzas consideraban la posibilidad de abstención (que finalmente sólo AyL llevó a cabo) y demandaban que una Asamblea Constituyente se encargara de organizar y controlar las elecciones.

Durante mayo, junio y julio de 2002, la campaña electoral mostró una lucha intensa entre potenciales candidatos presidenciales, el desinterés de la sociedad civil y una gran fragmentación política. Elisa Carrió, del ARI, representaba la propuesta de centro-izquierda con un programa que abogaba por la distribución del ingreso y la reactivación de una economía nacional a través de la reforma del sistema impositivo, la implementación de políticas sociales y el control sobre las empresas privatizadas. Zamora, de AyL, representaba una propuesta radical de ruptura con el FMI, declaración de *default*, renacionalización de las empresas privatizadas, siempre y cuando esto fuera acompañado por amplios sectores de la población movilizada, con los cuales construir nuevas formas de participación democrática y contrapoder. Una tercera fuerza la constituía Rodríguez Saa, quien fuera presidente por el breve período desde la insurrección popular hasta la asunción de Duhalde. Saa proponía un programa populista llamado Bases para la Fundación de la República Argentina que incluía la creación de un millón de empleos y el *default*. Del otro lado del espectro político estaban el ex ministro de De la Rúa, López Murphy, y el ex presidente Menem, quienes representaban una continuidad con las políticas económicas ortodoxas y represivas.

A pesar de que la campaña electoral evidenciaba una gran desilusión política con la democracia representativa y la clase política, es decir, días antes de la elección de abril de 2003, la mitad del electorado pensaba que las elecciones no iban a cambiar nada (*Página/12* online, 17-4-2002), la forma tramposa del sistema electoral puso al pueblo en la encrucijada Menem o Duhalde. Es decir, a medida que pasaba el tiempo, el espíritu antiinstitucional y radical del *¡qué se vayan todos!* se opacaba con la amenaza clara del regreso de Menem al poder. Luis Zamora se retiró de la contienda electoral, Carrió se disputaba los votos con los otros candidatos, y la opción entre Menem y el candidato de Duhalde, Kirchner, se hacía más y más presente.

En una elección en la que 80% del electorado fue a votar cuando más de 60% del mismo estaba eligiendo una opción política que según su opinión no iba a producir cambios radicales, puede explicarse en parte por el hecho de que el voto en blanco hubiera dado ventaja al ex presidente Menem, ya que los votos que cuentan son sólo los afirmativos. El voto del 27 de abril fue un voto netamente antimenemista. Kirchner obtuvo sólo 22% en la primera vuelta

y en segundo lugar se hallaba el presidente Menem. La segunda vuelta no tuvo lugar porque Menem renunció a su candidatura al intuir una derrota. El ganador de la segunda vuelta en mayo de 2003 entonces no fue el *voto en blanco* sino Néstor Kirchner. Kirchner fue designado presidente y, con dicha designación, el menemismo llegaba a su fin.

A pesar de ser el candidato del ex presidente Duhalde, la designación de Kirchner fue celebrada en Buenos Aires por los presidentes Fidel Castro, Lula da Silva y Hugo Chávez. Aunque no ha producido cambios radicales, el estilo "K" de gobierno ha energizado sentimientos populares y nuevos aires de justicia y respeto por los derechos humanos, de reconocimiento de organizaciones sindicales y movimientos sociales como interlocutores válidos, de un mayor control estatal sobre las empresas privadas que proveen servicios públicos y los bancos, de una negociación más dura con el FMI logrando la reestructuración de la deuda externa, la revitalización del Mercosur contra el ALCA.

Sin embargo, no es en la esfera estatal donde encontraremos la respuesta a la pregunta de este trabajo, acerca de la naturaleza del cambio político posdiciembre aunque estos nuevos *aires* no deben desestimarse.

V. La naturaleza del cambio político en Argentina poscrisis

La movilización poscrisis presentó batalla contra el imperialismo, el Estado represor, la ley corrupta y la política económica excluyente, pero también peleó contra las formas previas de la política, incluidas las de la participación y la resistencia que se habían convertido en una traba para expresar la rebelión social frente al mundo del poder.

La movilización popular no demandaba en diciembre la renovación de autoridades sino un cambio en las formas de la política. Este es un salto cualitativo respecto de los años anteriores y lo he descrito como una lucha que rechaza en forma práctica la noción de sociedad civil subsidiaria del Estado (pasiva) para articular una lucha que intenta transformar, en palabras de Tischler (2001), "la sociedad civil en sujeto". Rechazando la idea de sociedad civil como un *objeto* que puede fácilmente manipularse para consensuar, respaldar las políticas del Estado o canalizar la movilización adecuadamente, la movilización popular posdiciembre desarrolló una lucha por transformar la sociedad civil en sujeto, cuestionando las separaciones y mediaciones políticas, económicas y legales. Como sujeto, la sociedad civil no se define ya más como una esfera establecida como contraparte del Estado, sino por "empoderarse ella misma (...) elevar y activar el poder que ya posee" (Esteva, 1999, 159) desarrollando formas del *contrapoder*, reinventando relaciones solidarias dirigidas a la recuperación de espacios territoriales de acción y de la trama social, cuestionando al Estado y a la separación Estado-sociedad civil.

La construcción del contrapoder resultó, como era de esperar, contradictoria y compleja, no debido a una debilidad organizacional o ideológica sino fruto de los condicionamientos que las relaciones sociales capitalistas imponen a la movilización popular. En las sociedades capitalistas, la mediación estatal es difícil de eludir en tanto el Estado es el principal organizador y sostenedor de las relaciones sociales de producción capitalista. El éxito del contrapoder no ha residido en los resultados obtenidos en el terreno institucional sino en la fuerza de atravesar las contradicciones presentadas en y contra el Estado. La lucha de las asambleas barriales con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires alrededor del presupuesto participativo, o la del movimiento piquetero con el Ministerio de Trabajo por la redefinición del uso de los programas de empleo para proyectos productivos solidarios diseñados por el movimiento de desocupados, y la lucha de los trabajadores del movimiento de empresas tomadas por la simultánea autonomía y la necesidad de resolución legal de la toma, son sólo tres ejemplos de la lucha en y contra el poder estatal, económico y legal.

La naturaleza del cambio político en Argentina a partir de diciembre de 2001 se halla, primero, en la recuperación de *la política* y la movilización colectiva como instrumento de cambio político luego de un período de intenso predominio del dinero y la economía por sobre la capacidad política de transformación de la sociedad; segundo, en la recuperación de la *subjetividad política* entendida como la recomposición de identidades, formas organizacionales y estrategias de acción capaces de articular acción colectiva no ya en forma netamente sectorial sino en forma más amplia y universal, articulada por nuevas nociones comunes tales como la defensa de la dignidad, la autonomía, la democracia, la justicia.

A diferencia de otros casos en donde la movilización popular se involucró en una dura disputa alrededor de la defensa o el ataque de un líder político y una política estatal, y que por supuesto incluye la lucha sobre el significado de la sociedad civil misma, como en el caso venezolano, el caso argentino manifestó un rechazo momentáneo pero cualitativamente importante a la política estatal *como un todo*, en favor de un mayor desarrollo y recuperación de las organizaciones del campo popular. Mientras esta actitud coadyuvó sin duda al fortalecimiento de las nuevas formas organizacionales en los ámbitos territorial, local, de la acción solidaria y nuevas redes de resistencia, *la política de la antipolítica* (Dinerstein, 2003a) no disputó el poder estatal, cuya recomposición estuvo en manos de las elites peronistas que se hallaban en el gobierno[14].

Mirando la relación existente entre las formas de la movilización popular y las de la crisis, queda claro que la idea política del antipoder no se debió a una estrategia planificada, que puede juzgarse como equivocada o acertada, sino

[14] Recordemos que el ex presidente Duhalde era senador nacional y fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires bajo la administración Menem. Y el presidente Kirchner era el gobernador de la provincia de Santa Cruz.

fruto de la crisis misma y los límites que ésta impuso a la movilización popular. En este caso, la profundidad de la crisis institucional articulada, y casi total, llevó a un rechazo de las mediaciones políticas, económicas y legales, y la consecuente apertura de nuevos espacios desde donde recomenzar a recuperar la política misma y reinventar la democracia.

¿Implica esto que el cambio político en Argentina ha sido un fracaso, en tanto no se ha reflejado directamente en el cambio del poder estatal? El argumento desarrollado en este trabajo ha sido que la recuperación de la acción colectiva y la reinvención de las subjetividades políticas constituyen la base fundamental para cualquier proceso de cambio político significativo, cuya forma todavía no puede preverse.

Si bien estos nuevos desarrollos se expresan a escala nacional, queda claro que no pueden ser totalmente comprendidos sin considerar recientes progresos en la región latinoamericana, pero también en otras partes del mundo. La recuperación de la política y la renegociación de la subjetividad desarrolladas en estos nuevos o revitalizados *territorios* de la participación y el contrapoder se desarrollan en geografías *locales*, en el marco de procesos *globales* donde la esfera local o territorial se convierte en un verdadero terreno de lucha para lograr la expansión de los procesos llamados de globalización que son sin duda procesos de fragmentación y desarrollo disparejo.

Se trata entonces de formas *glocales* de la lucha, que son a la vez locales y globales, políticas y económicas, por el reconocimiento político y la distribución más justa del ingreso. Las diferentes formas *locales* de demandar por la inserción social, políticas sociales, Estado benefactor, democracia participativa, generación de empleo u obtención de la ciudadanía nacional contra el poder de las corporaciones, relacionadas con procesos nacionales, presentan una característica similar *global* que subyace a las diferencias: una voluntad de recuperar la capacidad de movilización política en forma amplia y articulada que contiene una *voz de alerta* sobre la ausencia de racionalidad de la "globalización capitalista", entendida como la posibilidad de realización humana, y que se está extendiendo más allá de sus propios límites.

Esta movilización popular, que ha tenido en Bolivia su última expresión en octubre de 2003, nos enfrenta a dos preguntas fundamentales que hoy circulan por el mundo entero y que refieren a la posibilidad de reproducción de la sociedad capitalista: ¿Cuáles son los límites a la subordinación de la vida humana al movimiento del capital global?¿Cuáles son las formas políticas y organizacionales capaces de articular acción colectiva alrededor de un proyecto plural que conjugue el reconocimiento universal de la centralidad esencial de la vida *humana* y las particularidades regionales, nacionales y locales en las cuales dicho reconocimiento se expresa?

Las formas institucionales para responder a estas preguntas habían sido en Argentina, hasta diciembre de 2001, la represión, la arrogancia y la indiferencia. Las tres ignoraban que la pobreza, el desempleo, la exclusión, y el hambre pero también la represión y exclusión políticas no fueron los efectos "no deseados" de las reformas neoliberales y las políticas de "estabilidad", sino sus componentes fundamentales. Consecuentemente, se muestran en el presente como la principal forma de expresión de la crisis de la desutopia neoliberal como forma de organización irracional del orden capitalista. El espacio para la *política* se ha abierto nuevamente en Argentina y otros países de la región. No pareciera tratarse esta vez de un espacio para seguir legitimando o "democratizar" el terrorismo del dinero hoy expandido a escala mundial. Se trata, me parece, de un nuevo espacio para repensar la naturaleza de la política y la democracia mismas hacia un cambio político de mayor envergadura.

Bibliografía

Aguirre-Sacassa, Francisco (2002): "Argentina: A Failure in Market Economics?", *Financial Times* on line, FT.com, marzo, tomado de: http://news.ft.com.

Altamira, Jorge (2002): *El argentinazo. El presente como historia*, Buenos Aires, Rumbos.

Basualdo, Eduardo y Matías Kulfas (2002): "Fuga de capitales y endeudamiento externo en la Argentina", *Realidad Económica*, n° 173, IADE, Buenos Aires, pp. 76-103, tomado de: http://www.iade.org.ar.

Basualdo, Eduardo *et al.* (2002): "Las transferencias de recursos a la cúpula económica durante la presidencia Duhalde. El nuevo plan social del gobierno", trabajo presentado en la *Asamblea Nacional del Frenapo*, 2-3-2002, mimeo.

Botana, Natalio (2002): "La democracia en zona de riesgo", *La Nación* online, 28-2-2002.

Cibils, Alan, Mark Weisbrot y Debayani Kar (2002): "Argentina since Default. The IMF and the Depression", *Centre for Economic and Policy Research*, Briefing paper, septiembre 3, tomado de: http://H:\MyDocuments\Argentina%20Since%20default.htm.

Clarke, Simon (1992): "The Global Accumulation of Capital and the Periodisation of the Capitalist State Form", *Open Marxism*, vol. I, pp. 133-179.

Colectivo Situaciones (2001): *MTD Solano,* Buenos Aires, Ediciones de mano en mano.

Dávalos, Pablo (2001): "Argentina y el FMI", *América Latina en Movimiento*, tomado de: http://alainet.org.

Dinerstein, Ana (2003a): "*¡Qué se vayan todos!*, Popular Insurrection and the Asambleas Barriales in Argentina", *Bulletin of Latin American Research*, vol. 22, n° 2, abril.

_____ (2003b): "¡Que se vayan todos! Crisis, insurrección y la reinvención de lo político en Argentina", *Bajo el Volcán*, n° 5, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pp. 11-46.

_____ (2003c): "Recuperando la dignidad: el desempleo como espacio de subjetivación invisible y los piqueteros", *Herramienta* 22, Buenos Aires, pp. 85-102.

_____ (2003d): "A Silent Revolution: The Unemployed Workers Movement in Argentina", *Labour Capital & Society/Travail, Capital & Societé*, CDAS, Montreal, McGill University, vol. 34 (2), pp. 166-183.

_____ (2003e): "Power or Counter Power? The Dilemma of the *Piquetero* Movement in Argentina post-crisis", *Capital & Class*, 81, pp. 1-8.

_____ (2001): "El poder de lo irrealizado. El corte de ruta en Argentina y el potencial subversivo de la mundialización", *Observatorio Social de América Latina (OSAL)*, 5, pp. 11-16.

_____ (1999): "Sujeto y globalización. La experiencia de la abstracción", Buenos Aires, *Doxa* 20, pp. 87-106.

Dinerstein, Ana y Michael Neary (2002): "Anti-Value in Motion: Labour, Real Subsumption and the Struggles against Capitalism" en A. Dinerstein y M. Neary (2002) (comp.), *The Labour Debate. An Investigation into the Theory and Reality of Capitalist Work*, Ashgate, Aldershot, pp. 226-239.

Esteva, Gustavo (1999): "The Zapatistas and the People's Power", *Capital & Class*, 68, pp. 153-182.

Gambina, Julio *et al.* (2002): "Rebeliones y puebladas. Diciembre de 2001 y enero de 2002. Viejos y nuevos desposeídos en Argentina", Buenos Aires, *Cuadernos de la FISyP*, n° 7, serie 2.

Hauser, Irina (2003): "Las Asambleas mantienen el QSVT", *Página/12* online, 24-3-2003, tomado de: http://200.61.159.98/diario/elpais/1-17958-2003-03-24.html.

Holloway, John (2002): *Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy*, Buenos Aires, Herramienta.

Holloway, John y Eloína Peláez (1998): *Zapatista! Reinventing Revolution in México*, Londres, Pluto.

IDEP-CTA (2002): *Shock distributivo, autonomía nacional y democratización*, Buenos Aires, IDEP-y Editorial La Página.

_____ (2000): "Transformar la crisis en una oportunidad: shock redistributivo y profundización democrática", *Mesa de Coyuntura*, Buenos Aires, junio, mimeo.

Imfsurvey (2003): vol. 32, n° 1, 20-01-2003, tomado de: http://www.imf.org /imfsurvey.

Katz, Claudio (2002): "Una expropiación explícita" en IADE 2002, 'Debate: medidas económicas, ganadores y perdedores', *Realidad Económica*, n° 186, 20-28.

Krueger, Anne (2002): "The Lessons to be Learned form the Argentine Crisis and how These Can Be Used to Raise the Effectiveness of IMF Efforts to Prevent and Resolve Financial Crisis", Address to the Last National Bureau

for Economic research conference, *Imfsurvey*, vol. 31, n° 15, agosto 5, tomado de: http://www.imf.org/imfsurvey.

Llorens, Javier y Pablo Cafiero (2002): "¿Qué se hicieron las "cuantiosas" reservas del sistema financiero argentino?", reporte sobre el vaciamiento del sistema financiero argentino, *Cámara de Diputados de la Nación*, tomado de: http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/ari/Principal/principal.htm.

Llorens, Javier y Pablo Cafiero (2001): "¿Por qué se quiere derogar la ley de subversión económica?", Reporte sobre el vaciamiento del sistema financiero argentino, *Cámara de Diputados de la Nación,* tomado de: http://www1. hcdn.gov.ar/dependencias/ari/Principal/principal.htm.

Lozano, Claudio y Hourest Martin (2002): "La democracia y el FMI: entre la mentira y el crimen", *Realidad Económica*, 187, IADE, 36-55.

MacEwan, Arthur (2002): "Economic Debacle in Argentina: the IMF Strikes Again", A Global Affairs Commentary, *Foreign Policy Focus,* tomado de: http://www.fpif.org, enero 2.

Mussa, Michael (2002): *Argentina and the Fund: From Triumph to Tragedy*, Washington D. C, Institute for International, Economics.

Ollier, María Matilde (2003): "Argentina: Up A Blind Alley Once Again", *Bulletin of Latin American Research*, vol. 22, n° 2, pp. 170-186.

Política y Teoría (2002): Revista del comunismo revolucionario de la Argentina, n° 48, Buenos Aires, Ediciones HOY, abril-julio.

Rock, David (2002): "Racking Argentina", *New Left Review*, 17, septiembre-octubre, pp. 55-86.

Schuster, Federico *et al* (2002): *La Trama de la crisis*, Cuaderno de Coyuntura, n° 3, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires.

Sevares, Julio (2002): "La crisis del sistema bancario", *Le Monde Diplomatique*, junio, Buenos Aires, pp. 6-7.

Tedesco, Laura (2002): "Argentina's Turmoil: the Politics of Informality and the Roots of Economic Meltdown", *Cambridge Review of International Affairs*, vol. 15, n° 3, pp. 469-481.

Tischler, Sergio (2001): "La sociedad civil: ¿fetiche? ¿sujeto?", *Bajo el Volcán*, año 2, n° 3, Puebla, pp. 169-181.

Varios Autores (2001): "Hacia el Plan Fénix. Diagnóstico y propuestas. Una estrategia de reconstrucción de la economía argentina para el desarrollo y la equidad", *Realidad Económica*, n° 182, pp. 6-23.

Verbitzky, Horacio (2003): "Al ataque. Preparativos de represión del conflicto social", *Pagina/12* online, 26-1-2003, tomado de: http://www.pagina12web .com.ar/diario/elpais/1-15893-2003-1-26.html.

Weisbrot, Mark (2002): *Hearing on 'the State of Argentine Economic Crisis and the Role of the International Monetary Fund DC*, tomado de: http://www. financialservices.house.gov/media/pdf/030502mw.pdf.

Weisbrot, Mark y Dean Baker (2002): "What Happened to Argentina?", 31-1-2002 en M. Weisbrot, *Hearing on 'the State of Argentine Economic Crisis and the Role of the International Monetary Fund DC*, tomado en 2002 de: http://www. financialservices.house.gov/media/pdf/030502mw.pdf.

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2004, vol. 10, n° 1 (ene.-abr.), pp. 271-272

ÍNDICE ACUMULADO: 2003

Autores y títulos	Nº	Págs.
Arroyo Picard, Alberto. *Promesas y realidades: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su noveno año*	2	167-195
Banko, Catalina. *Redefiniciones del papel del Estado en América Latina*	3	37-55
Romero, Carlos A., María Teresa Romero y Elsa Cardozo de Da Silva. *La política exterior en las Constituciones de 1961 y 1999: una visión comparada de sus principios, procedimientos y temas*	1	163-183
Contreras, Miguel Ángel. *Cambios y discontinuidades del proceso de descentralización en el gobierno de Chávez*	3	255-272
Ellner, Steve. *Tendencias recientes en el movimiento laboral venezolano: autonomía vs control político*	3	157-178
Estay R., Jaime. *El ALCA: su avance y los contenidos de la negociación*	2	99-116
Fuenmayor, Jennifer y Haydée Ochoa Henríquez. *Descentralización y modernización administrativa de las gobernaciones en Venezuela: el caso del estado Zulia*	1	185-210
Gallo, César. *Crecimiento y desigualdad. Actualidad de una vieja paradoja*	3	57-79
Gambina, Julio C. *Experiencias y expectativas de resistencia al ALCA*	2	197-211
Golub, Philip S. *Del neowilsonianismo al militarismo: los patrones movedizos de la política norteamericana*	1	13-28
Gómez, Irey y Luis Alarcón. *Los nudos críticos de la política social venezolana de 1989 a 2001*	2	13-35
Hernández, Eladio y Tibisay Lucena. *Desarrollo institucional del Poder Electoral en Venezuela*	1	117-138
Hurtado, Samuel. *La participación discordante en la familia y los niveles de su transformación simbólica*	1	61-83
Kaiser, Patricia. *Estrategias discursivas antichavistas de los medios de comunicación*	3	231-253
López Maya, Margarita. *Movilización, institucionalidad y legitimidad en Venezuela*	1	211-226
Mallard, Bruno. *Proyectos de desarrollo alternativo en América Latina: ¿una auténtica alternativa?*	1	29-51
Méndez Cegarra, Absalón. *El zigzagueante camino de la reforma segurista en Venezuela*	3	145-156

Müller Rojas, Alberto. *La nueva cara de la Fuerza Armada* 3 179-204
Ornelas, Raúl. *América Latina: territorio de construcción de la hegemonía* 2 117-135
Otálvora, Edgar C. *Frontera en tiempos de globalización. El proyecto ZIF* 1 85-113
Parker, Dick. *¿Representa Chávez una alternativa al neoliberalismo?* 3 83-110
Quijano, Aníbal. *Notas sobre "raza" y democracia en los países andinos* 1 53-59
Rocha Valencia, Alberto. *El posicionamiento débil y disperso ante el ALCA por parte de América Latina y el Caribe* 2 137-166
Rodríguez A., Bárbara C. *Una experiencia de supervivencia económica en zonas mineras: el caso de Las Claritas* 2 37-64
Rojas, Cristina. *Género, identidad y conflicto en Colombia* 2 65-89
Sucre Heredia, Ricardo. *La política militar en la Constitución de 1999 ¿Cambio o continuidad?* 1 139-162
Ungar, Mark. *La policía venezolana: el camino peligroso de la politización* 3 205-229
Vilas, Carlos M. *El mito del "neopopulismo" latinoamericano* 3 13-36
Vila Planes, Enrique. *La economía social del proyecto bolivariano: ideas controversiales* 3 111-143

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2004, vol. 10, n° 1 (ener.-abr.), pp. 273-282

Resúmenes/Abstracts

Movimiento indígena, democracia, Estado y plurinacionalidad en Ecuador

Dávalos, Pablo

Resumen

El presente texto realiza una lectura del proceso político del movimiento indígena ecuatoriano y de su enfrentamiento con el sistema político. Para este propósito trabaja desde varias líneas: primero, parte de una hipótesis general en la cual la política se inscribe dentro de un sistema que la codifica, la estructura, la norma, la regula y le otorga tanto las nociones de sentido como los marcos institucionales de acción, es el sistema político. Es desde este sistema que se interpreta la actuación política del movimiento indígena. Para el efecto se desarrolla la hipótesis de que el movimiento indígena ecuatoriano se transforma de actor social en sujeto político gracias a su propuesta de plurinacionalidad del Estado. En segundo lugar, el texto realiza una lectura del proceso de la Asamblea Constituyente de 1998, proceso que fue realizado desde la demanda de los movimientos sociales y el movimiento indígena. Es necesaria esta lectura porque el sistema político pudo asimilar esas resistencias, esas movilizaciones populares, para finalmente aprobar un texto constitucional muy favorable a sus intereses. La referencia a este proceso ahora aparece como una prioridad por las circunstancias que atraviesan los movimientos sociales y el movimiento indígena en otros contextos, especialmente en Bolivia. Allí, luego de la destitución de Sánchez de Lozada, se ha exigido la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Sería conveniente que los movimientos indígena y social bolivianos estudien procesos similares para no cometer errores y para posicionar de mejor manera su agenda.

Palabras claves: movimiento indígena, sistema político, Constitución, Ecuador, Bolivia.

Indigenous Movement, Democracy, State and Pluri-Nationality in Ecuador

Dávalos, Pablo

Abstract

This article offers a reading of the political process of the Ecuadorian indigenous movement and its confrontation with the prevailing political system, from several angles. First, on the basis of the general hypothesis that politics is exercised within a system that subjects it to codes, with their structures, norms, and regulations, granting both the notions of meaning and the institutional frameworks for action within the political system. This system is the starting-point for interpreting the political actions of the indigenous movement. In this sense, it is argued that the Ecuadorian indigenous movement became a socie-

tal stakeholder thanks to its proposal that the State is pluri-national. Secondly, the author analyses the 1998 Constitutional Assembly, a process that emerged in response to demands by societal movements and the indigenous movement. This analysis is necessary because the political system was able to assimilate these grassroots resistance mobilizations, ending up with a constitutional text that was quite favorable to their interests. An analysis of this process appears urgent, given the emergence of similar confrontations in other countries, especially Bolivia where, after the destitution of Sánchez de Lozada, the people have been calling for a Constitutional Assembly. It would be useful for the Bolivian indigenous and social movement to study similar processes in order to avoid making mistakes and in order to press their own agenda more effectively.

Key Words: Indigenous Movement, Political System, Constitution, Ecuador, Bolivia.

Mas allá de la crisis. Acerca de la naturaleza del cambio político en Argentina

Dinerstein, Ana Cecilia

Resumen
Este trabajo explora la naturaleza del cambio político poscrisis en Argentina. A través de un análisis de la relación entre crisis y movilización popular, y de los nuevos territorios de participación *vis-a-vis* la recomposición del poder estatal durante 2002 y parte de 2003, el trabajo sugiere que la importancia del cambio político en Argentina se halla en (i) la recuperación de la acción colectiva y la política como instrumentos de cambio social luego de un período de intenso predominio del dinero y la economía por sobre la capacidad política de transformación de la sociedad y (ii) la reinvención de la subjetividad política, es decir, identidades, organizaciones y formas de acción democráticas y participativas. Si bien estos cambios no se reflejaron completamente en la recomposición estatal, ambos constituyen las bases fundamentales para un proceso de cambio, cuya forma todavía no puede preverse pero que, sin duda, formará parte de un proceso regional de cambio político de mayor envergadura en el largo plazo.

Palabras claves: cambio político, acción colectiva, participación, crisis, Argentina.

Beyond the Crisis. On the Nature of the Political Changes in Argentina

Dinerstein, Ana Cecilia

Abstract
This article explores the nature of the political change produced in the wake of the crisis in Argentina. By examining the relationship between the crisis and popular mobilization and the new spaces for participation *vis-à-vis* the recomposition of State power in 2002 and part of 2003, the author suggests that the

importance of the political change in Argentina is to found in 1) the recuperation of collective action and of politics as instruments of social change, after a period of intense predominance of money and the economy over the political capacity to transform society and 2) in the reinvention of political subjectivity, that is, of identities, of organizations and of democratic and participative forms of action. While it is true that neither of these changes has been fully reflected in the recomposition of the State, together they undoubtedly constitute the fundamental bases for a process of change, the eventual form of which it is difficult to foresee, but will certainly form part of a wider, regional, process of long-term significance.

Key Words: Political Change, Collective Action, Participation, Argentina.

Hugo Chávez y Alberto Fujimori: análisis comparativo de dos variantes de populismo

Ellner, Steve

Resumen

Este artículo compara Alberto Fujimori (Perú) y Hugo Chávez (Venezuela) e intenta evaluar el impacto a largo plazo de ambos. Su retórica populista, la receptividad por parte de sectores marginados de la población y el ejercicio de poderes presidenciales mucho más amplios que de costumbre, todos apuntan hacia lo que académicos han caracterizado como "neopopulismo". No obstante, hay diferencias importantes. Mientras que Chávez concentra su apoyo en gran parte entre los marginados, las bases de apoyo de Fujimori respondían más a alianzas cambiantes. Además, a diferencia de Fujimori, Chávez cuenta con un movimiento de seguidores comprometidos y no muestra el mismo desprecio por la organización partidista. La comparación tiene como objetivo discutir la viabilidad del neopopulismo y la posibilidad de una reaparición del populismo clásico.

Palabras claves: populismo, neopopulismo, Chávez, Fujimori.

Hugo Chávez and Alberto Fujimori: Comparative Analysis of Two Varieties of Populism

Ellner, Steve

Abstract

This article compares Alberto Fujimori (Peru) and Hugo Chávez (Venezuela) and attempts to assess the long-term influence of both leaderships. Their populist rhetoric, special appeal to marginalized sectors of the population, and assumption of inordinate presidential authority fall under the rubric of what scholars have called "neopopulism". Important differences include Chávez's exclusive appeal to the marginalized sectors in contrast to Fujimori's shifting social alliances. In addition, Fujimori, unlike Chávez, lacked a movement of

hard-core followers and spurned party building. The comparison is designed to shed light on the viability of neopopulism and the possible reemergence of classical populism.

Key Words: Populism, Neopopulism, Fujimori, Chávez.

Protesta popular y cooptación de masas en Guatemala

Figueroa Ibarra, Carlos

Resumen

En este trabajo se hace un esbozo de dos de los rasgos más sobresalientes de la relación Estado/masas en Guatemala. Por un lado la naciente protesta popular, que tiene en el ascenso de las luchas campesinas acaso su rasgo más relevante. Por otro lado, las pretensiones de un partido populista de derecha –que ha hecho gobierno en los últimos años–, de cooptar a buena parte del mundo rural a través de las redes que tejió la contrainsurgencia en los años de la guerra sucia. El contexto en que se dan estos dos últimos hechos es la incipiente rearticulación del movimiento popular después de ser desarticulado en los años del terror. Este último tiene presencia no solamente como un horror del pasado, sino como una creciente realidad actual.

Palabras claves: protesta popular, terrorismo de Estado, luchas campesinas, Guatemala.

Popular Protest and the Cooption of the Masses in Guatemala

Figueroa Ibarra, Carlos

Abstract

In this article, the author attempts an outline of the two main features of the State-masses relationship in Guatemala. First of all, the emerging popular protest, that has as its main characteristic the growing peasant struggles. Secondly, the right wing populist party's aspiration, in government, of controlling the rural areas through the counter insurgent network that was established in the years of the "dirty war". The context of these two important facts is the new articulation of the grass-roots movement after years of terror. However, terror continues to be a current reality in Guatemala.

Key Words: Popular Protest, State Terrorism, Peasant Struggles, Guatemala.

La CUT en la encrucijada: impactos del neoliberalismo sobre el movimiento sindical combativo brasileño

Galvão, Andréia

Resumen

Este artículo trata de los efectos de la ideología y de la política neoliberal sobre el discurso y la práctica sindical de la Central Única de Trabajadores (CUT). El análisis se realizó a partir de una perspectiva dialéctica: se sostiene que el neoliberalismo afecta negativamente al sindicalismo nacional e internacional, dificultando la acción colectiva, y al mismo tiempo las consecuencias de las medidas implementadas por los gobiernos identificados con ese programa provocan la reactivación de los movimientos sociales, que no se mantienen pasivos ante el aumento del desempleo, el deterioro de los servicios públicos y la supresión de derechos sociales. Consideramos que la trayectoria de la CUT brasileña en esa nueva coyuntura se enfrenta a disputas político-ideológicas, ambigüedades y contradicciones, que hacen que la central resista y combata el neoliberalismo a la vez que asimila algunos de sus elementos; además, ese proceso sólo puede explicarse a partir de una confluencia de variables, de orden interno y externo, en el movimiento sindical.

Palabras claves: CUT, Brasil, neoliberalismo, sindicalismo.

The CUT at the Crossroads: The Impact of Neoliberalism on the Combative Trade Union Movement of Brasil

Galvão, Andréia

Abstract

This article analyses the effects of neoliberalism's ideology and politics on the CUT' discourse and practices. The analysis is based on a dialectic perspective: the author argues that neoliberalism affects both national and international unionism, making collective actions more difficult, at the same time that the consequences of the measures implemented by the governments identified with the neoliberal program provoke a reactivation of social movements, which react to the increasing unemployment, to the dismantling of public services and to the suppression of social rights. The author believes that the evolution of Brazil's CUT in these circumstances cannot be adecuately understood with a linear or unicausal interpretation; it is a process related to political and ideological disputes, ambiguities and contradictions, which leads the organization to resist neoliberalism at the same time that it assimilates some of its elements. Moreover, this process embraces a confluence of internal and external variables.

Key Words: CUT, Brazil, Neoliberalism, Trade Unions.

Las luchas sociales en Colombia: resistencia frente a la guerra

García Velandia, Martha Cecilia

Resumen
En Colombia, durante el último quinquenio, las condiciones económicas, sociales y políticas no son las más favorables ni para la paz ni para el desarrollo del país. En medio de la intensificación del conflicto armado, de la pobreza, el desempleo y de reformas en varios ámbitos de la vida social, distintos actores sociales expresan, de manera civilista, pública e intencional, su resistencia frente a las condiciones que viven.

Palabras claves: guerra interna, sociedad civil, pobreza, Colombia.

Social Struggles in Colombia: Resisting the War

García Velandia, Martha Cecilia

Abstract
During recent years, economic, social and political conditions have hardly favored a peaceful resolution of the Colombian conflict, nor the development of the country. Alongside an intensification of the armed struggle, poverty, unemployment and reforms introduced in different ambits of social life, there are a range of actors that opt for expressing their repudiation of the conditions in which they are forced to live, publicly, but in a deliberately civilian style.

Key Words: Internal War, Civil Society, Poverty, Colombia.

Estados Unidos y la doctrina Bush en política exterior. Visión desde América Latina

Molina, Franklin

Resumen
La política exterior de Estados Unidos, luego de la reciente guerra de Irak, es de especial importancia para el "nuevo" esquema de las relaciones internacionales. Esta investigación caracteriza la nueva diplomacia de la Casa Blanca a través de la Doctrina Bush, con sus repercusiones tanto para el Consejo de Seguridad de la ONU como para la ampliación a la Europa del Este y las estrategias revisionistas de Francia y Alemania dentro de la OTAN y la Unión Europea. No obstante, igual de importante, es la visión que se tenga desde Washington sobre la América Latina, y el impacto de una nueva relación interamericana.

Palabras claves: política exterior, Doctrina Bush, ONU, Estados Unidos, América Latina.

The United States and the Bush Doctrine in Foreign Affairs. A View from Latin America

Molina, Franklin

Abstract
United States' foreign policy since the recent war in Iraq is of special importance for the "new scheme" of international relations. This article attempts to characterize the new diplomacy of the White House under the aegis of the Bush Doctrine, its repercussions for the Security Council of the United Nations and for relations with Europe, above in circumstances in which Nato and the European Union have incorporated Eastern Europe while within both bodies France and Germany are promoting revisionist strategies. Equally important is the vision of Washington toward Latin America and the likely impact of a new inter-American relationship.

Key Words: Foreign Policy, Bush Doctrine, United Nations, United States, Latin America.

El silencio como forma de resistencia civil. Análisis del discurso del EZLN, 1997- 2001

Ortiz Pérez, Luisa

Resumen
El trabajo que presento es el resultado de estudios dirigidos a analizar la evolución de los repertorios discursivos desarrollados por el EZLN mexicano en su etapa de maduración (post-San Andrés), así como la habilidad que este movimiento de resistencia indígena ha demostrado en generar nuevas articulaciones discursivas que lo incluyan dentro de un escenario político social global. El análisis se ocupa de 1997 hasta principios del 2001, con el fin de resaltar que el EZLN consolida su capital político en el espacio que la sociedad civil ocupa, y desarrolla nuevas cadenas de significado para su lucha en las que el silencio es un arma y la palabra es la nueva opción de acción democrática en México.

Palabras claves: EZLN, Chiapas, discurso, México.

Silence as a Form of Civil Resistance. An Analysis of the Political Discourse of the EZLN, 1997-2001

Ortiz Pérez, Luisa

Abstract
This article offers an analysis of the evolution of the discursive repertoires developed by the Mexican EZLN, in its mature stage after San Andrés' peace talks in 1997. It also looks at the skilful way in which this indigenous resistance movement has generated new articulations in order to maintain itself in the global political and social scenario. The analysis covers 1997 to 2001, and

aims to demonstrate how the EZLN consolidated its political capital in a space where civil society usually dominates, and how it developed new significant links for its struggle. Links where silence as a discursive practice functions as a weapon for democratic political action in the Mexican arena.

Key Words: EZLN, Chiapas, Discourse, Mexico.

El laberinto de América Latina: ¿hay otras salidas?

Quijano, Aníbal

Resumen
América Latina, tres décadas después del comienzo de la neoliberalización capitalista se mira hoy con su economía estancada, con la más alta tasa de desempleo y con el más alto porcentaje de pobres de su historia, atravesada de revueltas sociales, sumergida en la inestabilidad política y por primera vez en más de un siglo con su integridad territorial y su independencia política explícitamente en cuestión. El autor examina los procesos que conducen y ordenan la actual situación de América Latina, y presenta y discute las vertientes de opinión y las propuestas que han emergido en el actual debate latinoamericano.

Palabras claves: pobreza, resistencia popular, neoliberalismo, Brasil, América Latina.

The Latin American Labyrinth: Is There Another Way Out?

Quijano, Aníbal

Abstract
Three decades after the beginnings of capitalist neoliberalism, Latin America is stagnated, with the highest unemployment rates and the highest percentage of poor in its history; it is plagued by social protests and afflicted with political instability and, for the first time in its history finds its territorial integrity and its political independence explicitly questioned. The author examines the processes that have led to this situation and presents the different proposals that have emerged in the current Latin American debate over the problem.

Key Words: Poverty, Popular Resistance, Neoliberalism, Brazil, Latin America.

¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Entre categorización y estigma. ¿Cómo gestionan sus identidades los venezolanos damnificados?

Revet, Sandrine

Resumen
Después de la catástrofe natural de 1999 en Venezuela, los desplazamientos de población han conducido a una situación repentina de cohabitación de grupos con orígenes social, cultural y geográfico diferentes. Los diversos meca-

nismos utilizados frente a ese contexto de crisis (categorización, estigmatización, rechazo) dejan ver modos de funcionamiento de la sociedad venezolana. El estudio de las diferentes designaciones utilizadas para identificar a los damnificados y desplazados, y su apropiación o no por los actores, revela dispositivos identitarios cambiantes y situacionales que se pueden relacionar con otros contextos de gestión de las identidades.

Palabras claves: catástrofe natural, desplazados, identidad, estado Vargas, Venezuela.

Who am I? Who are We? Between Categorizing and Stigmatizing. How the Venezuelan Disaster Victims Manage their Problems of Identity

Revet, Sandrine

Abstract
After the 1999 natural disaster in Venezuela, the subsequent population displacements involved an abrupt and unexpected experience, which forced groups of very different social, cultural and geographical origin to live closely together. The different mechanisms used to confront this crisis (categorization, stigmatization, rejection) illuminate mechanisms that are deeply rooted in the functioning of Venezuelan society and offer an opportunity to examine changes in the process of self-identification that can be related to other aspects of identity construction.

Key Words: Natural Catastrophe, Displaced Persons, Identity, Vargas State, Venezuela.

Movimientos sociales y cambio político en Bolivia

Sanjinés, Javier

Resumen
Este ensayo ubica los más recientes movimientos sociales de Bolivia dentro de dos claras tendencias: por un lado, la reconstrucción de la capacidad popular para intervenir en la vida pública, capacidad ésta que le había sido negada al pueblo durante casi dos décadas de políticas neoliberales; por otro lado, la pérdida de legitimidad de los partidos políticos, incluido el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido gobernante que impuso el neoliberalismo en 1985. El ensayo afirma que las nuevas fuerzas populares ponen en aprietos el ejercicio tradicional de la política y del poder.

Palabras claves: partidos politicos, legitimidad, neoliberalismo, MNR, Bolivia.

Social Movements and Political Change in Bolivia

Sanjinés, Javier

Abstract
This essay places the more recent Bolivian social movements within two clear tendencies: on the one hand, the reconstruction of civil society's ability to intervene in public life after nearly two decades of neo-liberal policies; and on the other, the loss of legitimacy that political parties are nowadays experiencing, the ruling Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) included. This article argues that the new popular movements are changing drastically the nature of politics and the exercise of political power in Bolivia.

Key Words: Political Parties, Legitimacy, Neoliberalism, MNR, Bolivia.

Exclusión y resistencia: sendas mexicanas

Sosa Elízaga, Raquel

Resumen
La medición de la pobreza se ha vuelto una obsesión para los gobiernos latinoamericanos, y el mexicano no sólo no es excepcional sino que ha buscado hacer aportaciones conceptuales al tema. No obstante, no sólo la pobreza no disminuye sino que el comportamiento de los pobres está muy alejado de "corresponsabilidad" y pasividad consideradas como parámetros de eficacia de la política social del neoliberalismo. La caracterización de los movimientos de protesta en contra del gobierno de Vicente Fox nos permite valorar en su justa dimensión los efectos de una política de combate a la pobreza orientada a restringir, negar u obviar derechos sociales, civiles y políticos a la población.

Palabras claves: pobreza, movimientos sociales, México.

Exclussion and Resistence: Mexico's Tendencies

Sosa Elízaga, Raquel

Abstract
Measuring poverty has become an obsession for Latin American governments, and Mexico is not only not exceptional, but has tried to make its own theoretical contributions to the subject. Notwithstanding, poverty does not diminish, and poor peoples' behaviour is far away from the passivity and corresponsability that are considered efficiency parameters of neoliberal social policies. Characterising protest movements against Vicente Fox's government allows us to value the effects of a poverty combat policy truly oriented to restrict, deny or obviate social, civil and political rights to the population.

Key Words: Poverty, Social Movements, Mexico.

Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, 2004, vol. 10 n° 1 (ener.-abr.), pp. 283-286

COLABORADORES

Dávalos, Pablo pdavalos@hotmail.com

Economista ecuatoriano. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Lovaina, Bélgica. Profesor de la Universidad Católica de Quito, investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos. Coordinador del grupo de trabajo de Clacso: "Movimientos indígenas en América Latina". Publicaciones recientes: "Movimiento indígena ecuatoriano: bitácora de camino", México, 2003. "Movimiento indígena: construcción política y epistémica" en: Daniel Mato (2002), (coord.): *Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder*, Caracas, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) y CEAP, Faces, Universidad Central de Venezuela, y traducido al húngaro.

Dinerstein, Ana Cecilia dinerstein@bath.ac.uk

Politóloga (UBA) y doctora en Sociología, Warwick, Inglaterra. Ex docente de la Universidad de Buenos Aires, actualmente docente de Sociología Política, Teoría Social y Estudios del Trabajo en el Departamento de Ciencias Sociales, Universidad de Bath, Inglaterra. Miembro de la Society of Latin American Studies (SLAS, UK). Editora de *Capital & Class* (Londres). Sus últimas publicaciones incluyen *The Labour Debate*, Ashgate, 2002 (en coautoría con: Mike Neary); "Recuperando la dignidad: el desempleo como espacio de subjetivación invisible y los piqueteros", *Herramienta 22* (Buenos Aires, 2003); "Power or Counter Power. The Dilemma of the Movement of the Unemployed in Argentina Post-crisis", *Capital & Class*, 81, Londres, 2003; " '¡Qué se vayan todos!' the Asambleas Barriales in Argentina", *Bulletin of Latin American Research*, vol. 22, n° 2.

Ellner, Steve esteve74@cantv.net

Historiador norteamericano con doctorado en la Universidad de Nuevo México. Profesor titular de la Universidad de Oriente, Puerto La Cruz. Se dedica a diversos temas sociopolíticos como los problemas de la democracia latinoamericana y el sindicalismo venezolano. Autor de numerosas publicaciones. Entre sus últimas están: "Literatura reciente sobre la democracia latinoamericana", *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (1-2002) y *La política en la era de Chávez*, coeditor (Nueva Sociedad, 2003).

Figueroa Ibarra, Carlos cfiguero@siu.buap.mx

Sociólogo, profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus dos últimos libros son: *Los que siempre estarán en ninguna parte. La desaparición forzada en Guatemala*, México D.F., GAM/ICSI/Ciidh, 1999 y *Paz Tejada. Militar y revolucionario*, Guatemala, Editorial Universitaria, 2001.

Galvão, Andréia andreia_galvao@hotmail.com

Doctora en Ciencias Sociales egresada de la Unicamp e investigadora del Centro de Estudios Marxistas (Cemarx) de la misma universidad. Autora de "Ecos de Francia: repercusiones de la huelga de 1995 en Brasil", *Luchas Sociales*, n° 8, 1er semestre, 2002, pp. 109-20; "El debate sobre la gran huelga francesa de 1995", *Crítica Marxista*, n° 13, octubre de 2001, pp. 95-107; "Del colectivo a un sector, del sector a la empresa: la trayectoria del 'nuevo sindicalismo' metalúrgico en los años 90", en Iram Jácome Rodrigues (org.) *El nuevo sindicalismo veinte años después*, Petrópolis, Vozes/Educ /Unitrabalho, 1999, pp. 113-31.

García Velandia, Martha Cecilia mcgarcia@cinep.org.co

Socióloga con magíster en Urbanismo, de la Universidad Nacional de Colombia. Vinculada al Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep, Bogotá, Colombia) desde 1989, donde ha trabajado en proyectos de acompañamiento a organizaciones sociales urbanas en Bogotá y en el Equipo de Investigación sobre Movimientos Sociales. Coautora de libros como *Descentralización en Bogotá, bajo la lupa, 1992-1996* y *25 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000*, y de varios artículos sobre luchas urbanas, descentralización y planeación urbana.

Molina, Franklin molinaucvenezuela@hotmail.com

Internacionalista egresado de la Universidad Central de Venezuela. Curso de postgrado en Integración Latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires, República Argentina. Investigador de la sección de Estructuras Internacionales del Instituto de Estudios Políticos, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV. Profesor en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCV. Profesor visitante en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual en las cátedras de Política Internacional y Relaciones Internacionales. Profesor investigador en la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV.

Ortiz Pérez, Luisa luortiz@claustro.urosario.edu.co

Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana, México, maestra en Teoría Política, de la Universidad de Essex, Reino Unido y candidata a PhD del programa de Ideología y Análisis del Discurso también de la Universidad de Essex en el Reino Unido. Se interesa en la investigación teórica y práctica de temas relacionados con el pensamiento político moderno y contemporáneo en América Latina, en particular aquellos relacionados por la escuela posestructuralista y posmoderna del pensamiento político. En los últimos años ha seguido de cerca la gestión y el desarrollo de ideologías en pro y en contra de la globalización en Europa y en América Latina. Actualmente es profesora e investigadora a tiempo completo en la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia.

Quijano, Aníbal anibalqui@hotmail.com

Doctor en Letras en la Universidad Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Director del Centro de Investigaciones Sociales de Lima. Fue profesor principal de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de San Marcos hasta 1995. Actualmente es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Binghamton en el estado de Nueva York. Invitado permanente de universidades europeas, norteamericanas y latinoamericanas. Recibió en 1993 el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Central de Venezuela. Entre sus publicaciones más recientes: *Perú hoy: Toledo a un año de gobierno* (2002), Lima, Desco. "El fujimorismo del gobierno Toledo", *Observatorio Social de América Latina*, Buenos Aires, Clacso, n° 7, junio, 2002.

Revet, Sandrine s.revet@wanadoo.fr

Socio-antropóloga, Instituto de Altos Estudios de América Latina (Iheal-Paris 3, Sorbonne). Preparación de la tesis de doctorado en Antropología Social en curso, bajo la dirección de Michel Agier: "Impactos y consecuencias sociales del desastre de 1999 en Venezuela". Investigadora participante del proyecto: "Poblaciones desplazadas, entre refugiados temporales y nuevos asentamientos. Biopolítica de una catástrofe" enmarcado dentro del convenio de cooperación internacional Fonacit-Ecos Nord, asociando el Cresp (Paris) y la Escuela de Antropología de la UCV (Caracas). Campos de investigación: construcciones de identidades, sociología de desastres, desplazamientos, redes transnacionales y mundialización. Publicaciones recientes: "La pyramide mise à mal: quelle place pour les réseaux? Satratégies d'acteurs au Chili entre dictature et transition", 2002.

Sanjinés C., Javier sanjines@s.imap.itd.umich.edu

Doctor en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Minnesota, es profesor asociado de Literatura y de Estudios Culturales en el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Michigan, con sede en Ann Arbor. Fue profesor visitante de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, y actualmente dicta cátedra en el Doctorado de Estudios Culturales de la Universidad Andina "Simón Bolívar", sede Quito, Ecuador. Tiene escritos más de cincuenta artículos en revistas de prestigio internacional (*Nepantla*, *Third Text*, *Dispositio*, *Revista Iberoamericana*, entre otras). Ha publicado *Estética y carnaval. Ensayos de sociología de la cultura* (La Paz, Altiplano, 1984) y *Literatura contemporánea y grotesco social en Bolivia* (La Paz, BHN-Ildis, 1992). Está por salir su libro *Mestizaje Upside Down: Aesthetic Politics in Modern Bolivia* (Pittsburgh, University of Pittsburgh Press).

Sosa Elízaga, Raquel rsosa@servidor.unam.mx

Doctora en Historia, Profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestra en Estudios Latinoamericanos, licenciada en Sociología. Ex presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Miembro del Comité de Programa y del comité ejecutivo de la Asociación Internacional de Sociología. Autora de *Los códigos ocultos del cardenismo*, 1996.

REVISTA VENEZOLANA DE ECONOMIA Y CIENCIAS SOCIALES
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE MANUSCRITOS

1. Los artículos sometidos a la consideración del Comité Editorial deben ser inéditos. Se presentarán escritos en un procesador de palabras (preferentemente Word for Windows) para su lectura en una computadora IBM o compatible, con la identificación del programa utilizado. En caso de incluir gráficos o tablas preparados con otro programa, se agradece su identificación. También se requiere dos copias a doble espacio en papel tamaño carta.

2. En el texto los subtítulos, así como la ubicación de cuadros o tablas, deben ser claramente indicados. Cada cuadro o tabla debe presentarse en hoja aparte colocado con su debida identificación al final del texto.

3. Las notas deben aparecer debidamente enumeradas al pie de página y deben ser lo más breve posible. Las referencias bibliográficas se incorporan al texto y entre paréntesis se coloca el apellido del autor, coma, el año de publicación, coma, el número de página. Las referencias completas se incluyen en la bibliografía, después del texto, organizadas alfabéticamente según el apellido del autor. Las referencias bibliográficas se registran de la siguiente manera: PARA LIBROS, apellido(s), coma, nombre(s), año de publicación (entre paréntesis), dos puntos, título (en cursivas), coma, lugar de publicación, coma, casa editora, punto. Ejemplo: Rudé, George (1978): *Protesta popular y revolución en el siglo XVIII*, Barcelona, Ariel. PARA ARTICULOS, apellido(s), coma, nombre(s), año de publicación (entre paréntesis), dos puntos, título (entrecomillado), coma, nombre de la revista (en cursivas), coma, volumen, coma, número, coma, lugar de publicación, coma, mes de publicación, coma, páginas. Ejemplo: Tedesco, Juan Carlos (1972): "Universidad y clases sociales: el caso argentino", *Revista Latinoamericana de Ciencias Políticas*, vol. 3, nº 2, Buenos Aires, abr-jun., pp. 197-227. La bibliografía colocada al final del texto debe ser exclusivamente de referencias que aparecen en el texto. Para referencia de entrevistas en el texto debe aparecer entre paréntesis el apellido, coma, entrevista, coma, año. Ejemplo: (Rodríguez, entrevista, 2000). En la bibliografía al final del artículo, en un aparte para entrevistas se coloca: apellido (s), coma, nombre (s), coma, lugar de la entrevista, coma, fecha. Ejemplo: Rodríguez Araque, Alí, Caracas, 4 de marzo de 2000.

4. La extensión de los artículos no debe exceder las 30 cuartillas, aunque el Comité Editorial podría admitir flexibilidad en caso de que el interés del tema lo amerite.

5. Los autores deberán enviar, junto con sus artículos, un resumen, en español y en ingles, de 6 a 10 líneas del artículo y otro de 6 a 8 líneas de sus datos personales incluyendo: (1) título(s) académico(s), (2) lugar o lugares donde está destacado, (3) breve lista de sus obras más importantes.

6. Los manuscritos que el Comité Editorial considera potencialmente apropiados para su publicación serán sometidos al arbitraje de especialistas en el tema; los comentarios al respecto serán remitidos al autor junto con cualquier sugerencia de la Dirección de la Revista.

7. El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o rechazar los artículos sometidos o a condicionar su aceptación a la introducción de modificaciones.

8. Los autores de los artículos publicados recibirán 2 ejemplares del número en que aparecen, diez separatas y una suscripción a la revista por un año.

PUBLICACIONES FACES-UCV
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN

112 OSWALDO LÓPEZ
El FIDES y su impacto en los niveles de gobiernos estadales de Venezuela.

114 KENNETH RAMÍREZ DOMÍNGUEZ
Venezuela y la reforma de la organización de las Naciones Unidas.

115 FRANKLIN MOLINA
Los mecanismos de solución de controversias comerciales de los países andinos bajo el esquema de integración de la Comunidad Andina de Naciones.

116 GREGORIO VIEIRA Y OTROS AUTORES
Reflexiones sobre el proceso de reforma curricular en la escuela de Trabajo Social UCV.

118 JHON HILL ESCOBAR, ROJYAR SEYEDDI
El rol de la masonería en la emancipación de Venezuela.

119 ABSALÓN MÉNDEZ CEGARRA
Comentarios generales al Proyecto de Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social.

120 FRANKLIN MOLINA
México y Estados Unidos en el TLC de América del Norte. ¿Interdependencia asimétrica o cooperación subregional?

121 ADELINA RODRÍGUEZ
La España de Felipe V.

123 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE ESTUDIOS DEL CARIBE AVECA
Ponencias realizadas en el marco del XVIII simposio anual de la Asociación Venezolana de Estudios del Caribe AVECA 20 al 24 de noviembre de 2000.

124 MÓNICA VENEGAS
Derechos humanos y técnicas de intervención en salud.

NUEVA SOCIEDAD

nov. – dic. 2003

www.nuevasoc.org.ve

188

Director: Dietmar Dirmoser
Jefe de Redacción: S. Chejfec

CONTENIDO

Mercado, Trabajo y Medio Ambiente

COYUNTURA: **Roberto Laserna**. Bolivia: entre populismo y democracia. **Eduardo Gudynas**. Conferencia de Cancún. Jugando con el comercio global.

APORTES: **John Saxe-Fernández**. La presidencia imperial en México. Globalización y seguridad. **Paz V. Milet**. El Grupo de Río en el escenario internacional.

TEMA CENTRAL: **Sérgio Costa**. Derechos humanos en el mundo posnacional. **Diego López**. ¿Derecho del trabajo o derecho del empleo? La nueva función de la legislación laboral y la reducción de los derechos en el trabajo. **Henri Acselrad**. Cuatro tesis sobre políticas ambientales ante las coacciones de la globalización. **Ingo Gentes**. La gestión ambiental. ¿Imperativo ecológico o propiedad privada? Algunas experiencias del caso chileno. **Miriam Alfie**. El debate inconcluso entre libre comercio y cuidado ambiental. A 10 años de la firma del Tlcan. **José Sánchez Parga**. Razón de Estado, razón de mercado.

SUMMARIES.

SUSCRIPCIONES (Incluido flete aéreo)	**ANUAL (6 núms.)**	**BIENAL (12 núms.)**
América Latina	US$ 56	US$ 97
Resto del mundo	US$ 86	US$ 157

PAGOS: Las suscripciones desde América Latina y el resto del mundo únicamente se pueden efectuar con transferencias bancarias. Solicitar los datos para la transferencia. Dirección: Apartado 61712, Chacao-Caracas 1060-A. Venezuela. Telfs.: (58-212) 267.31.89 / 265.99.75 / 265.53.21 / 266.16.48 / 265.18.49, Fax: 267.33.97; @: nuso@nuevasoc.org.ve; nusoven@nuevasoc.org.ve.

IEP Instituto de Estudios Políticos

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Politeia

Politeia es una publicación semestral arbitrada, publicada por el Instituto de Estudios Políticos y esta abierta a todas las corrientes de pensamiento, especialmente en el área de las Ciencias Políticas y sobre aspectos relativos a América Latina.

En cada numero se publican los resultados de los trabajos de los investigadores asociados a este centro de investigaciones, así como también contribuciones, ensayos, artículos e informaciones referidas principalmente a las Ciencias Políticas, y en general a las Ciencias Sociales.

Politeia goza de reconocimiento por parte de los estudiosos de la realidad política, gracias a su larga trayectoria y amplio prestigio. En sus páginas han escrito distintas personalidades como Manuel García-Pelayo, Juan Carlos Rey, Humberto Njaim, Ricardo Combellas y muchos otros que han aportado por medio de sus investigaciones, distintos conocimientos que enriquecen la Teoría Política Venezolana.

Información sobre **Politeia** se incluye anualmente en: CLASE, de la Universidad Nacional Autónoma de México/ "International Political Science Abstracts" del International Political Science Association/ "REDINSE"" de la Universidad Central de Venezuela.

Subcripciones año 2002 (2 ejemplares):

	INDIVIDUAL	INSTITUCIONAL
Venezuela	Bs. 10.000	Bs. 10.000
Resto del Mundo	US$ 25	US$ 25

Favor emitir cheque de gerencia no endosable a nombre de: **Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la U.C.V.**

DIRECCIÓN

Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Instituto de Estudios Políticos. Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos. Caracas, Venezuela.
Telefax: 58-2-6052382 / 6052365
e-mail: politeia@mail.com

Publicaciones 2002 / 2003
CDCH/UCV

Bravo, Francisco
TEORÍA PLATÓNICA DE LA DEFINICIÓN (2da. edición)
Coedición con la Facultad de Humanidades y Educación

Croce P., Nelson
EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR SALUD Y LA MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA EN VENEZUELA

De Venanzi, Augusto
LA SOCIOLOGÍA DE LAS PROFESIONES Y LA SOCIOLOGÍA COMO PROFESIÓN (2da. Edición)

Esteva-Grillet, Roldán (Compilador)
FUENTES DOCUMENTALES Y CRÍTICAS DE LAS ARTES PLÁSTICAS VENEZOLANAS: SIGLOS XIX Y XX. Vol. I y Vol. II.

Dembo, Nancy
LA RELACIÓN FORMA-FUNCIÓN EN EL LENGUAJE ESTRUCTURAL DEL SIGLO XX

González Abreu, Manuel
AUGE Y CAÍDA DEL PEREZJIMENISMO: el papel del empresariado (2da. edición)

Hernández M., Dimas E.
LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH): estudio descriptivo y experimental del compromiso de órganos y sistemas, infecciones y neoplasias

Marcano, Deanna y Masahisa Hasegawa
FITOQUÍMICA ORGÁNICA (2da. Edición)

Mato, Daniel
CRÍTICA DE LA MODERNIDAD, GLOBALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES (1ra. Reimpresión)

Puigbó, Juan José
LA FRAGUA DE LA MEDICINA CLÍNICA Y DE LA CARDIOLOGÍA
Patrocinado por la Fundación Polar

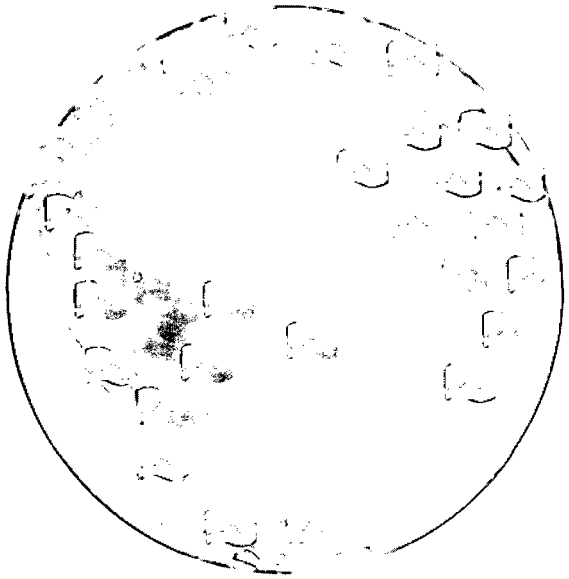
Sato, Alberto
ARQUITECTO GALIA
Coedición con el Instituto de Urbanismo y la Comisión de Estudios de Postgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Torres Fernández, Alfredo
ANATOMÍA DE LA MÉDULA ESPINAL, DEL TRONCO DEL ENCÉFALO Y DEL CEREBELO

Wertheim de Romero, Ute
GUÍA DE PROGRAMACIÓN Y DISEÑO PARA EDIFICACIONES PREESCOLARES

• ***Las versiones electrónicas de las Publicaciones Periódicas financiadas por el CDCH, pueden ser consultadas en: http://revele.ing.ucv.ve***

Nuestras publicaciones pueden ser adquiridas en el Departamento de Relaciones y Publicaciones del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, ubicado en la Av. Principal de La Floresta, Quinta Silenia, La Floresta. Caracas.
Teléfonos: 284-7222 - 2847077 - 284-7666. Fax: 285-9457.
E-mail: publicac@telcel.net.ve



¡Un mundo de mercados para Venezuela!

A la hora de exportar, hay muchas maneras de ver el mundo. Hay quienes lo ven grande e inalcanzable, hay otros que ni siquiera lo ven y hay quienes no sólo lo ven sino lo entienden y lo quieren conquistar. Así lo vemos en **Bancoex**, y queremos que usted lo comparta con nosotros.

Si desea profundizar en detalles utilice ya nuestro número **0800-exporte (3976783)** y póngase al día en todo lo referente al comercio exterior y las maravillosas oportunidades de negocios que le esperan a su producto en cualquier parte del mundo. Además, **Bancoex** le ofrece las mejores tasas del mercado, tasas que sólo pueden ser superadas por nosotros mismos.

¡Hecho en VENEZUELA para el mundo!

Para información más detallada al respecto, visite nuestro portal en internet:
www.bancoex.com o llámenos por el 0-800-exporte, 0-800-3976783
y venga compartir nuestra visión del mundo.

www.bancoex.com

Banco de Comercio Exterior - Venezuela

¡Un mundo de mercados para Venezuela!

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
REVISTA VENEZOLANA DE ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES

SUSCRIPCIÓN

Nombres y apellidos: _____

Institución: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ País: _____

Código postal: _____ Teléfono: _____ Fax: _____

Correo electrónico: _____

Tipo de suscripción: Institucional: _____ Individual: _____

Fecha: _____ de _____ de 2003

Firma: _____

EN VENEZUELA: cheques y depósitos a nombre de Luis E. Lander, cuenta de ahorro, Banco Provincial, Caracas, Nº 0108 0030 00 0200189187.

EN EL EXTERIOR: transferencias bancarias a nombre de Luis E. Lander, cuenta de ahorro, Banco Provincial, Caracas, Nº 0108 0030 00 0200189187.

Manuscritos, correspondencias, solicitud de suscripciones, etc., deben dirigirse a: RVECS, Edificio FACES-UCV, Piso 6, oficina Nº 635, Ciudad Universitaria, Caracas, Venezuela o Módulo UCV, Código Postal 1053-A Caracas, Venezuela.

reveciso@faces.ucv.ve

Suscripción institucional	$ 60	Bs. 45 000
Suscripción individual	$ 40	Bs. 30 000
Ejemplar suelto	$ 15	Bs. 10 000

ESTE LIBRO SE IMPRIMIÓ DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CUATRO, EN LOS TALLERES TIPOGRÁFICOS DE MIGUEL ÁNGEL GARCÍA E HIJO, EN LA CIUDAD DE CARACAS

Próximo número

Nº 2, mayo-agosto 2004

Tema central:
Representaciones e imaginarios políticos hoy en Venezuela: de la exclusión a la polarización

De venta en las mejores librerías del país

ARTÍCULOS

STEVE ELLNER	HUGO CHÁVEZ Y ALBERTO FUJIMORI: ÁNALISIS COMPARATIVO DE DOS VARIANTES DE POPULISMO
SANDRINE REVET	¿QUIÉN SOY? ¿QUIÉNES SOMOS? ENTRE CATEGORIZACIÓN Y ESTIGMA. ¿CÓMO GESTIONAN SUS IDENTIDADES LOS VENEZOLANOS DAMNIFICADOS?
FRANKLIN MOLINA	ESTADOS UNIDOS Y LA DOCTRINA BUSH EN POLÍTICA EXTERIOR. VISIÓN DESDE AMÉRICA LATINA

TEMA CENTRAL: RESISTENCIA POPULAR Y CAMBIO POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA

ANIBAL QUIJANO	EL LABERINTO DE AMÉRICA LATINA: ¿HAY OTRAS SALIDAS?
RAQUEL SOSA ELÍZAGA	EXCLUSIÓN Y RESISTENCIA: SENDAS MEXICANAS
LUISA ORTIZ PÉREZ	EL SILENCIO COMO FORMA DE RESISTENCIA CIVIL. ANÁLISIS DEL DISCURSO DEL EZLN, 1997-2001
CARLOS FIGUEROA IBARRA	PROTESTA POPULAR Y COOPTACIÓN DE MASAS EN GUATEMALA
MARTHA CECILIA GARCÍA VELANDIA	LAS LUCHAS SOCIALES EN COLOMBIA: RESISTENCIA FRENTE A LA GUERRA
PABLO DÁVALOS	MOVIMIENTO INDÍGENA, DEMOCRACIA, ESTADO Y PLURINACIONALIDAD EN ECUADOR
JAVIER SANJINÉS C.	MOVIMIENTOS SOCIALES Y CAMBIO POLÍTICO EN BOLIVIA
ANDRÉIA GALVÃO	LA CUT EN LA ENCRUCIJADA: IMPACTOS DEL NEOLIBERALISMO EN EL MOVIMIENTO SINDICAL COMBATIVO BRASILEÑO
ANA CECILIA DINERSTEIN	MÁS ALLÁ DE LA CRISIS. ACERCA DE LA NATURALEZA DEL CAMBI POLÍTICO EN ARGENTINA

RESÚMENES/ABSTRACTS